



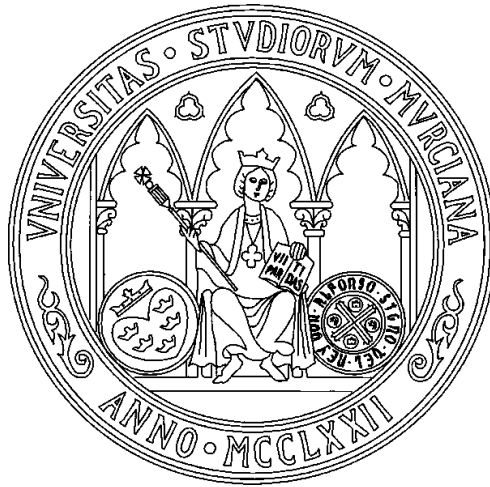
UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Uma Perspetiva Psicológica-Jurídica da Violência de
Género

Una Perspectiva Psicológico-Jurídica de la Violencia
de Género

Dña. Maria da Conceição Cunha Louro
2017



UNIVERSIDAD DE MURCIA

Facultad de Biología

Uma perspetiva psicológica-jurídica da violência de género

Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

Maria da Conceição Cunha Louro

2016

Maria da Conceição Cunha Louro

Uma perspectiva psicológica-jurídica da violência de género

Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

Universidad de Murcia

Murcia 2016

© 2016

Maria da Conceição Cunha Louro

“TODOS OS DIREITOS RESERVADOS”

Maria da Conceição Cunha Louro

Uma perspectiva psicológica-jurídica da violência de género

Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

Tese apresentada à Universidad de Murcia para obtenção do grau de Doctorado em Ciencias Forenses, sob a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Poiares e la tutela do Professor Doutor Bartolomé Llor Esteban

RESUMEN

MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA LOURO: Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

(Sob a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Poiares y la tutela do Professor Doutor Bartolomé Llor Esteban)

El objeto de esta investigación erige es la indagación sobre la severidad punitiva de las decisiones judiciales, tomando como referencia nuclear la violencia contra las mujeres en relaciones de la pareja y los discursos judiciales manifestados en las decisiones pronunciadas por los juzgados y tribunales. Al enjuiciador le cabe siempre optar entre el abanico de proposiciones jurídicas, desvelando si son, o no, aplicables a la factualidad y, en caso afirmativo, cuáles son las consecuencias que se derivan de ellas (Larenz, 1978).

La violencia de la pareja es un problema históricamente recurrente y un problema de género, las mujeres son las principales víctimas, que no sólo en Portugal, sino en la generalidad de los países y culturas, que ha reclamado la atención particular de juristas, psicólogos, sociólogos, políticos y, naturalmente, de las comunidades. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo, sino antes bien de una compleja e intrincada cuestión social, que atraviesa todas las épocas, aunque presentemente ocupe tal vez un protagonismo mayor en los debates y en las preocupaciones humanas, una vez que el devenir social y la creciente consciencia colectiva sobre la dimensión y efectividad de los derechos humanos vienen suscitando la formulación de otros mecanismos de control, presumiblemente adecuados. Esta es la razón por la que, en las últimas décadas, se han traído a colación interrogaciones, derivadas de los choques y contradicciones que van surgiendo a nivel de las representaciones sociales, de las tradiciones y de la cultura, a muchos títulos aún dominantes en nuestra sociedad; no obstante, por todos lados ha ido sedimentando –por lo menos a nivel de las intenciones– la idea de la tolerancia cero en relación a este tipo de violencia.

El espacio inaugural donde todas estas cuestiones asumen un papel determinante, de resultas del cual se procede a la construcción de una arquitectura normativa, de definiciones uniformizadas, es el proceso de criminalización. El Derecho es, por lo tanto, un regulador de relaciones interpersonales que, fijando patrones de comportamiento, procura encontrar formas de colmar el desorden y promover el bienestar de una sociedad (Hart,1995). Para ello, opera en la regulación de las situaciones, que divergen de un país a otro, como sucede en las diversas etapas de la criminalización, en especial en sus fases primarias (producción legislativa) y secundaria (aplicación judicial), cada una de ellas organizada según una gramática específica, aunque interconectada, reflejando una lógica propia, emergente de sus tiempos histórico-culturales y político-sociales (Debuyst & Digneffe,1998). Dichas lógicas emanan de los titulares del Poder y de quienes dirigen el sistema, de sus intereses e ideologías, partiendo de estos para emitir juicios de valor; según Larenz (1978), estos juicios constituyen expresiones de una toma de posición personal del Legislador y, posteriormente, del Aplicador, realizadas en el respeto por valores que se reconocen como tales; para fundamentarlos, el juez no está limitado tan solo a la intuición axiológica, debiendo aplicar criterios que gestionan los valores (positivos y negativos) considerados vinculantes en la comunidad sociopolítica y jurídica, y por ella. Los dilemas de la justicia tienen origen en el funcionamiento actual y global de la sociedad; las representaciones individuales nacen de procesos más amplios y, en muchas ocasiones, ajenos al propio individuo, es decir, la relación entre la autonomía individual y social está en juego cuando las reglas de una comunidad precisan ser determinadas (Wagner, 2011; Dias, 2010).

La violencia conyugal es un fenómeno bastante complejo y compuesto por diversos factores, de cariz social, cultural, psicológico, ideológico, económico, entre otros (Costa, 2003). Actualmente, el Código Penal portugués ya consagra expresamente (en su artículo 152) el delito de violencia doméstica. Más allá de este artículo específico, la ley también criminaliza, por ejemplo, las amenazas, la coacción, la difamación, las injurias, la sustracción de menor, el incumplimiento de la obligación de manutención, la violación, el abuso sexual y el homicidio o tentativa de homicidio (APAV, 2014). Las penas criminales, a nivel de marco central, van desde 1 a 5 años de prisión, lo que

permite que el juez pueda suspender la pena, dado que su límite máximo no supera los 5 años. Éste es precisamente el eje del problema, pues el propio Legislador abrió la puerta al expediente de la suspensión. La tipificación de la violencia doméstica (malos tratos físicos o psíquicos, incluyendo privaciones de libertad y ofensas sexuales) comprende, como víctimas, a las siguientes personas: cónyuge o ex-cónyuge; uniones de hecho heterosexuales y homosexuales (incluso sin cohabitación); progenitor de descendiente común en 1er grado; persona particularmente indefensa en virtud de la edad, deficiencia, enfermedad, embarazo o los dependientes económicos que con él cohabiten (se exige la cohabitación). En el caso previsto, si el agente practica el acto contra menor, en presencia de menor, en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, es castigado con pena de prisión de 2 a 5 años (artículo 152).

En cuanto a las penas accesorias, la ley penal establece las siguientes: a) prohibición de contacto con la víctima, en particular el alejamiento de la residencia, el alejamiento del lugar de trabajo y supervisión por medios técnicos de control a distancia; b) prohibición de uso y porte de armas y, c) obligación de asistencia a programas de prevención de la violencia doméstica.

En el presente trabajo nos ceñimos a la violencia conyugal, entre personas heterosexuales, que mantengan vida en común, en una relación análoga a la de los cónyuges.

Diversos estudios han mostrado que, a pesar de que la violencia contra las mujeres no se circunscribe a los espacios domésticos, pudiendo también producirse en la calle o en el lugar de trabajo, lo cierto es que gran parte de este tipo de violencia tiene lugar sobre todo en casa. En Portugal, la vivienda es el espacio privilegiado donde ocurre esta violencia (43%), como quedó demostrado en el informe de la APAV (2014) recientemente publicado, siendo en ese espacio familiar donde los maridos actúan como los principales ofensores de las mujeres. En ese mismo estudio se comprobó que la violencia contra las mujeres es sobre todo física y psicológica, cuando ocurre en el espacio doméstico; discriminación sociocultural, cuando se produce en el lugar de trabajo, mientras que la violencia sexual tiene lugar sobre todo en la calle. ¿Tendremos que preguntarnos si en Portugal la violencia sexual cometida en el interior de las

familias y, por lo tanto, la que sucede en los espacios domésticos, tiene una relevancia menor que la violencia sexual que se produce en la calle, o si las mujeres no la valoran de igual forma y, por eso mismo, no denuncian a los ofensores sexuales con los que viven, dejando que una vez más la tradición se sobreponga a lo que la ley ya contempla? ¿Será que la ideación de los antes denominados deberes conyugales, incluyendo el débito sexual, aún permanece en las creencias de los ciudadanos?

La experiencia de la APAV, en sus diversos Gabinetes de Apoyo a la Víctima, que reciben y actúan con mujeres víctimas de violencia conyugal, tal como los múltiples estudios que han sido realizados, confirma que la violencia es practicada en el seno de la relación conyugal (entre personas que viven en situación conyugal, casadas o no). Se trata de un sistema circular, que surge, se desarrolla y termina, iniciándose nuevamente, de forma semejante, por lo que se lo denomina ciclo de la violencia conyugal o doméstica, dado que puede ser entendido, en este sentido, como un círculo, en el cual las dinámicas de la relación de la pareja se manifiestan sistemáticamente, pasando siempre por determinadas fases. Así, en este ciclo pueden identificarse las siguientes fases: a) la fase de construcción de la tensión; b) la fase de la violencia; y c) la fase del apaciguamiento o “luna de miel”. El ciclo de la violencia conyugal dificulta mucho las tomas de decisión de la mujer víctima, pues experimenta fases muy dramáticas (la tensión y el ataque violento), pero que terminan en una fase considerada gratificante (el apaciguamiento), en la cual se reanima la esperanza de tener una relación conyugal sin violencia, que implica creer e intentar nuevamente el proyecto de vida soñado o evitar la compleja y en ocasiones dramática salida del hogar. Entre otros aspectos, la relación con el ofensor, la historia de vida anterior, los apoyos de los que dispone (o de los que carece), la violencia implicada y todos los actos que la constituyen, el impacto que tienen –y, sobre todo, el significado que ella atribuye a cada uno de esos actos– determinan la singularidad de su reacción (APAV, 2013).

La revisión de varios estudios interculturales y antropológicos indica que la violencia conyugal es indisociable de la cuestión del género (Dias & Machado, 2008). La relación entre el género y la violencia conyugal ha generado, no obstante, bastante discusión y controversia (Miller & White, 2003), habiendo autores que defienden la neutralidad/simetría de género (Moffit, Robins & Caspi, 2001) y otros que afirman que

el género y el poder suponen el proceso clave de la violencia conyugal, sin reducirse a ser un mero componente de ésta. A pesar de que la creciente superposición de los papeles en la relación conyugal lleve a la dilución de los papeles sexuales en la familia, las diferencias de género normalmente existen en todas las sociedades, como indica Giddens (2010). Dichas diferencias de género se expresan, aunque de forma diferente, a todos los niveles de la estratificación social, reflejándose en las diversas partes de la vida social, a nivel de las oportunidades y presunciones que desempeñan en ella, desde la familia al Estado. Según el mismo autor, a pesar de que en algunos países las mujeres hayan progresado de forma significativa, las diferencias de género aún son notables, y la violencia doméstica se ha ido perpetuando en silencio (Dias, 2004); las mujeres siguen asumiendo la responsabilidad de educar a los hijos y cuidar de la casa y los hombres la de sustentar a la familia, prevaleciendo la desigualdad de roles a nivel de «[...] poder, prestigio y riqueza» (Giddens, 2010, p. 114). Como dice provocadoramente Foucault (1980), en la obra *Power/knowledge*, donde hay poder hay resistencia y, no obstante, o tal vez por eso mismo, ésta nunca está en una posición de exterioridad en relación al poder. Así, si es verdad que la igualdad declarada e incluso promovida en la ley encuentra numerosos obstáculos en su aplicación práctica, el Derecho no controla definitivamente o aisladamente la vida social y sus valores, pero no se limita, al contrario de los más escépticos, a plasmar en letra de ley las concepciones socialmente dominantes. El Derecho –las leyes, la jurisprudencia, las prácticas jurídicas y judiciales– ha tenido un papel constitutivo importante en la segregación discursiva de grupos de personas, especialmente las mujeres. Se entroncará ahí, quizás, la función correctora del Derecho, pasando a contribuir en la búsqueda de formas de deshacer esa segregación, no sólo prohibiendo tratamientos discriminatorios, sino obligando a las oportunas instancias a tomar medidas que contraríen la real situación de inferioridad socio-familiar de algunas personas: transmitir, por ejemplo, a la sociedad que la violencia doméstica es realmente un delito que se produce en su seno a causa de las desigualdades de género e incluso de la apatía judicial que en ocasiones se revela.

Como ya mencionamos anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivos averiguar: (i) ¿cómo absorbe el Aplicador el mensaje dimanado del Legislador, entidad política? Es decir: ¿el Aplicador adopta el racional legislativo o se apropia de él, por

ejemplo a través de la memorización de su dimensión legislativa, produciendo otros (o diferentes) enunciados aplicativos? Y, (ii) ¿de verificarse semejante distorsión aplicativa, al existir una severidad menor, el transgresor ya se ha percatado de ese hecho? Es decir: ¿el delincuente doméstico presenta una cierta impunidad? De donde se deduce la cuestión crucial: (iii) ¿podrán los tribunales convertirse en entes susceptibles de contribuir a desculpabilizar el delito de violencia de la pareja? Cual la credibilidad del testimonio de las víctimas?

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio y los recursos disponibles para la investigación, optamos por un tipo de estudio exploratorio, descriptivo-correlacional. Lo clasificamos como exploratorio porque se desconoce la existencia de estudios de esta índole; asume también carácter descriptivo-correlacional una vez que pretendemos describir el universo de una determinada problemática o fenómeno (violencia conyugal) y establecer relación entre variables (entre otras variables, la dependencia económica de las víctimas en relación al acusado), “en el estudio descriptivo-correlacional, el investigador intenta explorar y determinar la existencia de relaciones entre variables, con miras a describir esas relaciones. El principal objetivo del estudio descriptivo-correlacional es el hallazgo de factores relacionados con un fenómeno.” (Fortin, 2003, p.174)

La parte práctica se apoya en una recogida de datos de procedimientos archivados referentes al delito de violencia conyugal y su análisis ius psicológico, utilizando, con ese fin, el instrumento Índice de Severidad Penalizadora y Psicologización (Criminalización Secundaria) – (ISPP-CS) (Poiars, 2009).

Como el Índice fue construido para el análisis de procedimientos penales sin especificación del tipo legal, fue necesario, de acuerdo con la literatura, del estudio de procedimientos, por la propia especificidad del delito de violencia conyugal, teniendo como base el ISPP-CS, añadir más variables, que son las siguientes: relación con el acusado; dependencia económica de las víctimas en relación al acusado; dependencia económica de los acusados en relación a la víctima; posesión de arma; otros procedimientos relacionados con violencia conyugal; número de procedimientos de violencia conyugal; información de los procedimientos de violencia conyugal a nivel de

los hijos y menores de edad (número de hijos de ambos, de la víctima y del agresor; si el caso fue presenciado por menores hasta los 18 años; si se contactó la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes en Peligro ; datos de los procedimientos sobre el historial de los episodios de violencia (tipos de violencia, consecuencias físicas para la víctima; víctima observada en el hospital, víctima en internamiento; el acusado suele exhibir armas o hacer alusión a ellas durante las amenazas o agresiones; casos anteriores por agresiones a la víctima y/o a otro familiar, practicadas por el mismo acusado); solicitud de informe social/evaluación psicológica; medida de coacción; género del magistrado que dirigió el juicio, así como tiempo transcurrido entre la queja y la sentencia. Estos datos tuvieron un tratamiento estadístico en Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

El Índice de Severidad Penalizadora y Psicologización (Criminalización Secundaria) - ISPP-CS) tiene como objetivo general analizar la severidad penalizadora, así como permite verificar el grado de psicologización del procedimiento judicial, o sea, la utilización de información y conocimiento científico proporcionado por la Psicología Forense y su recepción a la hora de juzgar. En la vertiente severidad, el índice pretende evaluar cuál es el grado de penalización, oscilando entre un grado nulo y un grado elevado, pudiendo aplicarse a cualquier delito, una vez que el estudio se basa en los patrones de la dosimetría penal (= marco de la pena para cada tipo criminal), siendo el resultado expresado en porcentaje.

Considera tres ejes: Acusado, Procedimiento Actual y Medida Final Adoptada. El primero proporciona diversa información sobre cada acusado en el procedimiento, en particular en las dimensiones socio-demográfica, cultural, clínica y forense. El segundo, tal como su propio nombre indica, remite al procedimiento actual del individuo: delitos en los que se encuentra pronunciado y medidas de coacción. Por último, la Medida Final Adoptada sugiere lo que fue determinado en tribunal y si se tuvieron en consideración la evaluación psicológica o la peritaje de personalidad, en el agravamiento o atenuación de la pena.

El tipo de respuesta de los ítems varía entre las de respuesta múltiple o respuesta específica y directa. Se aplica a procedimientos ya archivados y el tiempo de duración de la aplicación del procedimiento es variable con la dimensión del procedimiento.

El primer eje, el Acusado, está compuesto por las dimensiones socio-demográfica, cultural y por la anamnesis judicial, diferenciada por las sub-dimensiones clínica y forense.

El segundo eje, el Procedimiento Actual, referencia el (1) delito(s) que se le imputa (respuesta específica); en relación a los delitos imputados: (2) Tipo (respuesta específica); (3) Precepto Incriminador (respuesta específica); (4) Dosimetría penal (colocar el valor mínimo y el valor máximo).

Por último, el tercer eje, “Medida Penal Adoptada”, se refiere a: (1) Medida aplicada a cada delito (respuesta específica); (2) Acumulación jurídica (sí o no) (b) Medida aplicada en acumulación (respuesta específica); (3) La decisión refirió la realización de evaluación psicológica (sí o no); (4) La decisión refirió la realización de peritaje de personalidad (sí o no); (5) La evaluación psicológica fue utilizada para fundamentar la atenuación de la medida (sí o no); (6) El peritaje de personalidad sirvió de fundamento a la atenuación de la medida (sí o no); (7) La evaluación psicológica determinó el agravamiento de la medida (sí o no); (8). El peritaje determinó el agravamiento de la medida (sí o no); (9) En la decisión se invocaron razones para la atenuación de la medida (respuesta específica, cuáles); (10) Observaciones (respuesta específica). Este eje termina con una sinopsis general, que se aplicará a todos los delitos por los que haya sido condenado el sujeto. Referencia la dosimetría, diferenciando todos los delitos del individuo; (11) Medida aplicada (respuesta específica); (12) Medida aplicada en acumulación (respuesta específica); (13) Puntuación total (respuesta específica).

La hoja de puntuación está constituida por ítems de cumplimentación referentes a los límites mínimo y máximo de la medida penal aplicable y a la pena concreta, en meses. Tal hoja de puntuación contiene asimismo una tabla formada por cinco columnas, cada una de ellas conteniendo cuatro puntos de escala referentes a la evolución del agravamiento de la pena; y una línea de cumplimentación, por acusado (Anexo II).

En alternativa, se puede utilizar una plataforma informática construida por Branco (2013), destinada exclusivamente a facilitar el tratamiento de la información obtenida por este instrumento, transformando los resultados en una escala de 0-100%.

En cuanto a los ítems relativos con el tipo de tribunal (singular o colectivo), número convencional, número de acusados, decisión (absolutoria o condenatoria), pena aplicada por acusado, fecha e identificación del asistente de investigación, debiendo éste indicar con una cruz cuál es el tipo de tribunal y de decisión; en lo que concierne al número convencional (número del procedimiento en la investigación), número de acusado y penas aplicadas, el asistente de investigación apunta objetivamente la información relativa a esos ítems, información recogida en el procedimiento analizado. La fecha y la identificación del asistente también deben ser indicadas.

En lo tocante a la primera sección, correspondiente al Acusado, en su dimensión socio-demográfica, debe indicarse únicamente uno de los ítems relativos a la naturalidad (urbana/rural) y tan sólo uno de los ítems referentes al estado civil, así como a la situación profesional (empleado; desempleado; jubilado); deben ser indicadas, por escrito, las informaciones recogidas acerca del distrito municipal, municipio y edad; profesión; y la relativa al tiempo que hace que el sujeto está desempleado, si fuere el caso. En la dimensión cultural, el asistente debe indicar por escrito la etnia e indicar uno de los puntos referentes a la categoría formación académica, indicando si está completo o incompleto, siempre que sea el caso. Si, en el procedimiento analizado, otro fuere el ítem adecuado, especificarlo, indicando cuál, siempre que se haya facilitado dicha información. Con respecto a la categoría residencia urbana/rural, indicar tan sólo uno de los ítems e indicar por escrito el distrito municipal, municipio y tipo de alojamiento. Igualmente, indicar por escrito cuál es la relación afectiva o de parentesco entre los diversos acusados, siempre que exista.

Con respecto a la Anamnesis Judicial, más específicamente a la dimensión clínica, en lo que concierne a la salud mental, indicar referencia de diagnóstico y cuál, así como indicar la existencia, o no, de acompañamiento; el mismo procedimiento en lo que se refiere a las adicciones; en este caso, el asistente debe indicar cuál es la sustancia e indicar debidamente si el sujeto es toxicómano o consumidor. En lo que atañe a las

patologías físicas, indicar por escrito una referencia de diagnóstico, indicar la existencia o no de discapacidad, señalando cuál. En la dimensión forense, indicar si existió realización de evaluación psicológica o de peritaje de personalidad, indicando el tipo de institución responsable de su elaboración; indicar por escrito cuáles son las conclusiones, tanto de la evaluación como del peritaje; de la misma forma, indicar si existió, o no, decisión sobre inimputabilidad e indicar cuáles fueron las conclusiones. Aún en referencia a la decisión anterior, indicar si fue fundamentada por peritaje de personalidad o por evaluación psicológica forense. El asistente de investigación debe indicar la existencia, o no, de antecedentes criminales, registrando los delitos anteriormente cometidos y las medidas de coacción sufridas. Igualmente, debe indicarse con sí o no la existencia de prisión preventiva, mencionándose en su caso su duración; en lo que concierne a las medidas aplicadas, deben apuntarse las verificadas, tales como suspensión del procedimiento, multa, prisión, multa con pena suspendida, prisión con pena suspendida, prestación de trabajo a favor de la comunidad (PTFC), u otros; para todas las medidas verificadas, deberá ser indicado el delito. Deben ser anotadas cuáles son las medidas de coacción en el presente procedimiento y si se verificó o no prisión preventiva y cuál fue su tiempo de duración. Debe señalarse la existencia de acompañamiento terapéutico durante el procedimiento (sí/no), indicando cuál y si tal fue o no cumplido. En relación a la revocación de la suspensión de la pena, debe ser registrado si tuvo lugar, y, en caso afirmativo, indicarse la razón. Obedeciendo al mismo criterio, debe indicarse el cumplimiento o no de la pena y el tiempo de reclusión cumplido; con respecto a la libertad condicional, debe ser apuntada su verificación, o no, así como la revocación, o no, debiendo ser indicado cuál fue el motivo. En lo que concierne al procedimiento actual, indicar con sí o no la verificación de acompañamiento terapéutico, especificando cuál. En la segunda sección, relativa al Procedimiento Actual, especificar los delitos por los cuales el acusado se encuentra pronunciado, indicando la medida de coacción: prisión preventiva (sí/no); si se aplica otra medida, indicar cuál. En el caso de que el acusado haya cumplido prisión preventiva, indicar sí o no, en función de si se produjo desde el inicio del procedimiento o especificar desde cuándo y hasta cuándo se mantuvo. Para los delitos imputados, especificar el tipo, el precepto incriminador (artículo del CP o de ley suelta) y la

dosimetría penal (medida de la pena), indicando la presencia de pena de multa y su valor, en el caso de que haya sido aplicada.

En lo tocante a la tercera sección, Medida Penal Adoptada, especificar la pena aplicada a cada delito, la existencia o inexistencia de acumulación jurídica y cuál es la pena correspondiente a dicha acumulación; indicar si hubo o no decisión de prisión efectiva, especificando cuál es la medida penal efectivamente decretada. En lo que se refiere a la evaluación psicológica forense y al peritaje de personalidad, indicar con sí o no la referencia a su realización, su utilización para proceder a atenuación o agravamiento de la pena; indicar si fueron invocadas razones para atenuación de pena y, en caso afirmativo, cuáles. Con respecto a la sinopsis general, tomar en cuenta todos los delitos por los cuales el acusado fue condenado e indicar la dosimetría de cada uno; indicar con sí o no la aplicación de la Ley de los Jóvenes Imputables; especificar cuál es la pena aplicada, referente a cada delito; y cuál es la pena aplicada en acumulación jurídica.

En relación a la interpretación del Índice de Psicologización, este indica el grado de exigencia y el grado de importancia atribuida a las evaluaciones psicológicas forenses y a los peritajes de personalidad en la decisión que culmina con la atribución de una medida penal, eventual agravamiento o atenuación: tal importancia se basa en la puntuación de los ítems relativos a la decisión integrada en la sección Medida Penal Adoptada. En el presente caso, cuanto mayor sea el índice, mayor relieve tuvo la presencia del trabajo llevado a cabo por los técnicos de Psicología Forense en contexto judicial.

La población comprende todos los elementos que comparten características comunes, definidas por los criterios establecidos para el estudio: procedimientos de violencia conyugal, con nacionalidad portuguesa. Se optó por una muestra del tipo no probabilístico por juicio. Es el tipo de muestra en que los elementos que componen el subgrupo son escogidos en razón de su presencia en un lugar en determinado momento. Este tipo de muestreo es ideal cuando el tamaño de la población es pequeño y en estudios exploratorios (Fortin, 2003). La recogida de datos se realizó en el Partido Judicial de Lisboa, Instancia Local Criminal - 1ª Sección Central de Instrucción Criminal. La muestra está formada por treinta y cinco procedimientos (n= 35), todos en

el ámbito de la violencia doméstica (artículo 15), en lo que atañe al cónyuge o ex-cónyuge o personas en una relación análoga a la de los cónyuges.

El análisis de resultados al que procedimos nos permite concluir que el déficit de la lucha contra la violencia conyugal se sitúa en dos fases del procedimiento criminalizador: en la primaria, porque las penas aplicadas tienen una dosimetría correspondiente en el requisito de duración para suspensión de la pena (artículo 50 del CP); y en la secundaria, dado que, como se deduce de la investigación empírica, los jueces usan de forma casi perdularia la suspensión de la pena, conjugándose ambos niveles para la transmisión de un mensaje de impunidad que es el principal amigo de la reproducción de los comportamientos violentos. En la vertiente de la violencia en contexto de relación conyugal, con y sin vínculos jurídicos, importa viabilizar medidas de castigo y de ayuda psicológica, que puedan reprogramar el sujeto delincuente - este es el espacio de la criminalización terciaria (donde se consagran la ejecución de la pena y la reinserción); y el tiempo de castigo debe, en este como en las otras expresiones de la criminalidad, coincidir con el tiempo resocializador, dejando bien clara la ilicitud del comportamiento y posibilitando la interiorización de las interdicciones.

El análisis de los resultados demuestra la incoherencia entre el Derecho dicho y el Derecho hecho y, del mismo paso, la línea de incoherencia entre la psicologización que se impone, tanto en relación al agresor como en lo que toca a la víctima, y la psicologización efectivamente practicada.

Uno de los objetivos del instrumento que aplicamos reside en la indagación de la contribución que la Psicología aporta al espacio judicial: se detectó una incidencia mínima, incluso si consideramos los llamados informes sociales, cuya dimensión psicológica es con frecuencia exigua.

Los resultados, aunque meramente indicativos, demuestran una baja severidad punitiva en el ámbito de la violencia conyugal, lo que parece indicar la necesidad de reestructurar el contexto punitivo en delitos de esta naturaleza, tanto en la criminalización primaria como en la secundaria, reclamando un enfoque ius psicológico de esta problemática.

Palabras clave: Violencia de género ; violencia conyugal severidad punitiva; credibilidad del testimonio; Psicología Forense; intervención ius psicológica.

RESUMO

MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA LOURO: Uma perspetiva psicológica-jurídica da
violência de género

(Sob a orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Poiares e tutela do Professor
Doutor Bartolomé Llor Esteban)

A pretensão deste trabalho reside na indagação da severidade punitiva das decisões judiciais, erigindo como crime a violência conjugal. Para tanto, recorreu-se à utilização de um instrumento - o Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização secundária - ISPP-CS) (Poiares, 2009) - cujo objetivo passa por analisar a severidade das medidas penais, assim como o grau em que a Psicologia influencia a escolha do tipo de pena aplicada.

A amostra é constituída por 35 processos, recolhida na comarca de Lisboa: Instância Local Criminal - 1ª Secção Central de Instrução Criminal. Os resultados, ainda que meramente indicativos, demonstram uma baixa severidade punitiva no âmbito da violência conjugal, o que pode indiciar a necessidade de se reestruturar o contexto punitivo em crimes desta natureza, quer na criminalização primária quer na secundária, reclamando uma abordagem jus psicológica desta problemática.

Palavras-chave: Violência de Género; violência conjugal; credibilidade do testemunho; severidade punitiva; Psicologia Forense; intervenção jus psicológica.

ABSTRACT

MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA LOURO: A psychological and legal perspective
on gender violence

(Oriented by Professor Doutor Carlos Alberto Poiares and guardianship by Professor
Doutor Bartolomé Llor Esteban)

The intention of this work lies in the question of punitive severity of judicial decisions, erecting domestic violence as crime.

To do so, was adopted the use of an instrument - the Punitive and Psychologizing Severity Index (Secondary Criminalization - ISPP-CS) (Poiares, 2009) - whose purpose involves analyzing the severity of criminal measures and the extent to which psychology influences the choice of the type of sentence imposed.

The sample consists of 35 case, gathered in the region of Lisbon: Local Criminal Court - 1st Section Central Criminal Procedure. The results, even if merely indicative, demonstrate a low punitive severity within the conjugal violence, which may indicate the need to restructure the punitive context in such crimes, whether in primary or in secondary criminalization, demanding a judicial psychological approach to the problem.

Keywords: Gender violence; domestic violence; credibility of the testimony; punitive severity; Forensic Psychology; judicial psychological intervention.

“Dormir! Adormecer! Sossegar! Ser uma consciência abstracta de respirar sossegadamente, sem mundo, sem astros, sem alma – mar morto de emoção reflectindo uma ausência de estrelas!” (Soares, B. 2001, p.154)

ÍNDICE

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	XXV
LISTA DE FIGURAS	XXVII
Introdução	1
Parte A – Fundamentação & Legitimação	
Capítulo I: Fundamentação teórica	
1. Comportamento transgressivo: a normatividade e o desvio	12
2. Processo de (des)criminalização	23
2.1.Criminalização secundária – Aplicação da lei: Reflexão crítica.....	34
3. O comportamento violento: uma perspetiva jus psicológica	41
3.1. A emergência e a necessidade da Psicologia Forense	47
4. Violência conjugal: fenómeno social e objeto de criminalização	53
Capítulo II: Legitimação	
1. Enquadramento teórico do comportamento violento	59
2. O género <i>versus</i> processo de criminalização	62
3. Evolução e enquadramento jurídico-social da violência conjugal	71
4. Violência doméstica e os dispositivos de controlo (in)formal..	85
5. Criminalização secundária: Aplicação da lei <i>versus</i> violência conjugal	93

6. Intervenção jus psicológica no âmbito da violência conjugal	111
7. Severidade punitiva e a psicologização na violência conjugal	114
Parte B – Estudo Empírico: Método e Resultados	
1. Método	
1.1 Objeto e objetivos	118
1.2 Tipo de estudo	122
1.3 Procedimento de recolha	123
1.4 Amostra	128
2. Resultados	
2.1. Apresentação dos resultados	130
2.2. Discussão dos resultados	134
Conclusão geral	163
Referências bibliográficas	172
Apêndices	I
Anexos	LXIII

Índice de Abreviaturas:

APA: *American Psychiatric Association*

APAV: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

CEPEJ: Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça

CC: Código Civil

CIDM/CIG: Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

CP: Código Penal

CPP: Código de Processo Penal

CRP: Constituição da República Portuguesa

DAPHNE: Programa europeu de Luta contra a violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres

DGAI: Direção-Geral da Administração Interna

DSM-V: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V*

HMCPsi: *Without Consent: A Report on the Joint Review of the Investigation and Prosecution of Rape Offences*

ISPP – (CS): Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização – (Criminalização Secundária)

PTFC: Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade

SBM: Síndrome de Mulher Batida

TIR: Termo de Identidade e Residência

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

TRE: Tribunal da Relação de Évora

TRL: Tribunal da Relação de Lisboa

TRP: Tribunal da Relação do Porto

Lista de Figuras:

Gráfico 1: Género da vítima	135
Gráfico 2: Relação com o/a denunciada/o	136
Gráfico 3: Habilitações literárias da vítima	138
Gráfico 4: Situação profissional da vítima	138
Gráfico 5: Dependência económica da vítima em relação ao agressor	139
Gráfico 6: Género do agressor	140
Gráfico 7: Estado civil do arguido	141
Gráfico 8: Habilitações literárias do arguido	142
Gráfico 9: Situação profissional do arguido	143
Gráfico 10: Dependência económica do arguido em relação à vítima	144
Gráfico 11: Consumo de álcool do arguido	145
Gráfico 12: Consumo de estupefacientes do arguido	145
Gráfico 13: Outros processos por violência conjugal	146
Gráfico 14: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo foi contactada	149
Gráfico 15: Tipo de violência	151
Gráfico 16: Ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar praticadas pelo(a) mesmo(a) denunciante(a)	152
Gráfico 17: Consequências físicas para a vítima	153
Gráfico 18: Pedido relatório social/Avaliação psicológica	155
Gráfico 19: Medida de coação	156
Gráfico 20: Sentença	158

Gráfico 21: Índice de Severidade Penalizadora	158
---	-----

INTRODUÇÃO

1. O comportamento humano tem sido alvo de várias interpelações ao longo dos séculos; procuram-se as razões e as justificações para as mais diversas manifestações comportamentais, o que leva os sujeitos a adotá-las. Neste percurso de busca sobre a descodificação das razões que estão na base da monitorização da motivação individual e coletiva, sabe-se hoje que o ser humano é um complexo sistema, em que a exatidão das Ciências não é compaginável com as determinações matemáticas: as pessoas são pequenas narrativas determinadas pela estória da vida, na qual os acontecimentos que decorrem levam aos acontecidos de cada história.

Não há sociedade onde não existem narrativas maiores que se contam, se repetem e se fazem variar; fórmulas, textos, discursos ritualizados, ao sabor de circunstâncias e de acordo com o contexto eco temporal, conforme situações bem determinadas, ditos que se preservam. Uma (quase) liturgia que se reproduz e auto-reproduz, perpetuando-se, amálgama de atos desconexos que se ligam em nome de um princípio, de uma quase vida. As sociedades que apreendem, constroem e reconstroem a realidade num pensamento revestido de signos e significados, tornados visíveis nos dispositivos e no sistema, produzindo um efeito de sentido. O Direito aparece enquanto definidor de modos e padrões de comportamentos, ou seja, no exercício da função disciplinadora a que se refere Foucault (1997, 1999). A vida é normativizada, situando-se entre os eixos balizadores do lícito e do ilícito: e, afinal, o que é esta dicotomia para além de uma estipulação do modo de agir (padrões de comportamento)? Regras e modos padronizados de comportamento são recorrentes no conteúdo jurídico (Hart, 1995); mas estas definições institucionais e sociais das condutas são, no fundamental, socialmente securizantes, reconduzindo atores e objetos aos seus papéis pré-determinados no enredo das vidas quotidianas, visando docilizá-los (Foucault, 1999), colocando-os nas malhas da quadriculatura social ou amestrando-os, através da utilização das normas jurídico-institucionais e dos mandamentos da convivência social (Poiars, 1999). A sanção faz-se normalizadora e vem atuar no momento em que a lei foi violada, sendo a sua reação natural enquanto lei infringida e furiosa (Foucault, 1997); ou pela repressão ou pela correção ortopédica, acontece o momento da reposição das normatividades.

O mundo – bem como o espaço que rodeia cada indivíduo – é representado sempre com uma perspectiva não isenta de preconceitos e condicionado por ordenações de princípios, pensamentos, ações, sustentados em concepções filosóficas, modos de observar o real e vontade política de o conservar ou transformar. A deserção social é tão-só o seu resultado extremo; esta ideia está presente em “A Era do Vazio”: chama a atenção para a fragmentação da sociedade e dos seus costumes, o consumo, o hedonismo, o individualismo e a urgência de um novo paradigma social. A apatia não é uma ausência de socialização, mas uma nova socialização flexível e económica, uma descrispação necessária ao funcionamento de um sistema experimental célere e sistemático (Lipovetsky, 1983); passamos a ser uma sociedade em que interessa o *ter* e não o *ser*. A pós-modernidade é definida por muitos autores como a época das incertezas, das desintegrações, das desconstruções, da troca de valores. Há na busca de uma nova racionalidade a constante procura de respostas, principalmente no âmbito do comportamento do ser humano, isto é, o que determina as suas ações e atitudes, o que influencia e manipula; todos os indivíduos são motivados, todos potenciam o comportamento e, deste modo, orientam o que fazem, veem e sentem.

Existem vários dispositivos de controlo formal e informal que são os responsáveis para a determinação do que é normativo, transformando-se no barómetro social; o modelo forjado por Poiares (1996, 1999) apresenta outros atores, nomeadamente, os Técnicos, a Opinião Pública, a Opinião Política, os *Media*, a Opinião Cooperativa e a Comunidade Científica, o que se consubstancia nas triangulações sucessivas, em que os vértices são preenchidos por recém-chegados atores. Ora, entre todos existe a circulação de informação e a troca recíproca de mensagens, sendo que cada um destes atores, na relação que estabelece com os demais, é suscetível de produzir mutações na configuração geral do sistema. Entre outros, a comunicação social que tem vindo a assumir uma papel de grande relevância: se há uns anos era um veículo de informação, neste momento é muito mais que isso, tendo-se transformado num dispositivo (in)formal, exemplo de um sistema que vive numa constante mutação, o qual tem o poder de alterar e, é o veículo globalizador que permite ao indivíduo estar informado e atualizado, altercando ideias e ideais, promovendo ora a concórdia, ora a discórdia,

ritualizando costumes e desvinculando outros, moldando a experiência dos factos e a conduta, impondo as suas leis e as suas verdades, ou seja, orquestrando a melodia da aldeia global, promovendo a exclusão daqueles que recusam o seu funcionamento; é o dispositivo mais forte e influente na sociedade contemporânea, moldando em virtude da maleabilidade de uma (re)configuração cultural. O território dos *media*, enquanto plataforma de ligação dos vários campos sociais, tem sido muitas vezes determinante para o estabelecimento do que é o socialmente correto, determinando o *modus operandi* dos quotidianos sociais e individuais. O campo dos *media* é, assim, cada vez mais um espaço de cruzamento de poderes económicos, políticos, corporativos, mais ou menos visíveis, mais ou menos assumidos. A realidade mediática substitui-se muitas vezes às instituições representativas, acentua a personalização e espetaculariza o acontecimento. Será que os *media* ocupam mesmo um lugar de “quarto poder” – ao lado do legislativo, executivo e judicial? (Mesquita, 2003). Assim como do movimento dialético das categorias simples nasce o grupo, também do movimento dialético dos grupos nasce a série, e do movimento dialético das séries nasce o sistema no seu conjunto (Marx, 1847-1991).

Importa questionar a racionalidade presente e os valores que convoca, sejam os do hedonismo, os dos dispositivos de controlo, sejam os valores de uma nova ideia de justiça que despontam sob o signo da solidariedade. Numa sociedade de democracia política, assente em bases essencialmente formais e de um justiça de índole disciplinar, a normatividade pode constituir um desafio, em particular se tivermos em conta que o espaço público contemporâneo, por ação conjugada das novas tecnologias da informação e da progressiva expansão do modelo liberal de democracia, no qual se ultrapassou já o plano da estrita imputação legal da responsabilidade para acedermos a um outro nível de imputação e de responsabilidade (Borges, 2005).

Os atores sociais inserem-se numa sociedade e é esta que delimita e modela os comportamentos destes, reforçando determinadas respostas ou desencorajando, outras através de punições. A socialização define-se, então, como um processo de identificação crescente com os papéis sociais, funcionando como uma forma de os indivíduos se organizarem dentro da própria sociedade (Walgrave, 1992). O indivíduo participa

ativamente no processo de socialização, pois deseja integrar-se na coletividade humana, sujeitando-se a respeitar as normas e os valores do seu grupo ou de toda a comunidade a que deseja e tem que pertencer. Adota, então, uma conduta de forma a que esta seja aceite pela sociedade, apreendendo assim os hábitos, os costumes, os papéis, as convenções sociais, e a respeitar os outros, atuando não somente como os elementos do seu grupo, mas também, a sentir e a pensar como eles (Rodrigues, 1987). Assim, para se ser apto na sociedade é necessário adquirir-se através da socialização o conhecimento, as habilidades e as motivações, concedendo aos indivíduos o estatuto social de que necessitam para coabitarem entre si (Kendler, 1989).

Relativamente à noção de norma, Poiares (2001, p.26) define-a como sendo um “transferidor social ou jurídico”, balizando assim os comportamentos e impondo que estes sejam normativos. As normas estabelecem as linhas de orientação no estabelecimento de padrões de comportamento aceitáveis para um determinado contexto; a compreensão e definição do conceito de desvio requer, como sugere Dinitz (1975), que se atenda a três dimensões: em primeiro lugar, a da normatividade de uma sociedade que torna impreterível a noção dos atos que aí são identificados como desviantes e quais os que se consentem como admissíveis; em segundo lugar, em função da frequência com que os primeiros são detectados, o recurso às teorias explicativas deve ser considerado no aprofundamento do seu conhecimento; por último, em terceiro lugar, não parece credível definir-se e compreender-se o desvio sem ter em conta as sanções que pretendem deter, corrigir, prevenir e/ou punir atos desta natureza, pois cada sociedade define, explica e age em função do que definiu por desvio. Cusson (2006) refere que o teor das normas sociais tem tendência a diversificar-se conforme as épocas e os países. Contudo, para o cumprimento das regras impostas, estas devem ser do conhecimento de todos e congruentes com os valores das pessoas.

O crime e os atores que nele se inserem têm sido perspetivados de várias formas. Tem-se assistido, ao longo dos tempos, a vicissitudes e avanços na compreensão do fenómeno criminal, nas suas plúrimas vertentes, que se intersetam, residindo este mesmo objeto de Saber numa encruzilhada, onde a linearidade do conhecimento se transforma num complexo labirinto científico. Cada época tem vivenciado os

comportamentos criminosos de acordo com os modelos sócio-políticos-jurídicos que se enquadram em cada comunidade (Foucault, 1975-2007). O comportamento desviante pode ser visto como uma inconformidade em relação a determinado conjunto de normas aceites por um número significativo de indivíduos de uma sociedade. Onde há uma norma instituída, existe sempre a tentativa de superação dessa mesma norma; a transgressão faz parte da condição do sujeito, inscrevendo-se no seu código genético, por vezes enquanto forma de afirmação da autonomia do *self* face ao Poder; segundo Durkheim (1895-2007), o crime existe em todas as sociedades e não seria normal a sua omissão; é necessário e está ligado às condições fundamentais de toda a vida social, sendo indispensável à evolução da norma e do Direito. Para discutir o crime é necessário pôr em causa e interpelar as formações sociais vigentes e os fundamentos do Poder político. A definição do crime tem sido determinada pelo que, em cada momento, se quer saber sobre ele. É necessário redimensionar a extensão e a compreensão deste conceito, de modo a reconduzi-lo a uma unidade de sentido real e pragmático (Dias e Andrade, 1997).

A questão criminal, na contemporaneidade, está imersa nas teias visíveis e ocultas de redes de ação e informação, funcionando num registo de «troca de mercadorias» entre os atores envolvidos. Por vezes, essas mesmas redes são codificadas e encriptadas para vedar ou dificultar o acesso às pessoas, ou seja, àqueles que não habitam o edifício do combate ao crime. O controlo social restrito consiste em duas tarefas clássicas: a de vigiar e a de punir ou recompensar. Há uma ação de monitorização da esfera individual, recorrendo quando necessário a sanções positivas ou negativas que agem como reforço ao comportamento praticado. Foucault, na sua obra *Vigiar e Punir* (1975), referenciou a importância de uma ação de vigilância e punição dos organismos estatais. O desenvolvimento na forma de punir e de disciplinar nos séculos XVIII e XIX levou à afirmação da prisão como forma generalizada de sanção para todo o crime; no entanto, era necessário ter em consideração os detalhes dos corpos de cada indivíduo, assim como individualizar cada sujeito segundo as suas características, de forma a facilitar o seu ensinamento, observação e controlo. Foi o criar de uma nova visão do indivíduo que permitiu preencher o dever nas formas de organizações económicas, políticas e militares

que emergiram na Idade Moderna e que prevalecem até hoje. Segundo Foucault (1975), a disciplina deveria impor-se sem uma força excessiva, através de uma atenta observação que comporia os corpos de forma correta. Agra e Matos (1997) defendem que é necessário considerar a variabilidade percecional de norma e desvio em cada sociedade e época em que se encontram, exaltando a importância de circunscrever a problemática de um modo claro para constituir como objeto de estudo numa investigação. Para Manita (2001), o crime apresenta-se de diferentes formas, diferenciando-se sob o aspeto psicológico, social e jurídico, na medida em que cada ato pode ser visto como uma violação a uma norma essencial, reprovável e danoso sob o ponto de vista social e moral, e não ser punível pela lei. Convoca aqui um apelo às várias ciências e técnicas; a ausência de uma intercontribuição concertada e eficaz nos seus objetivos pode levar a um aumento da criminalidade, em que o ato ilícito não se deve sobrepor ao ator que o cometeu.

A problemática que abrange a justiça e o crime tem sido o palco principal da teatralização dos quotidianos onde os vários quadrantes da vida se cruzam, habitam, agitam. A noção de crime e do indivíduo que o comete foi sofrendo alterações com o decorrer das centúrias: logo, não devemos falar na definição formal de crime, mas antes na alteração das várias gramáticas sobre o criminoso e sobre o exercício do direito de punir. O indivíduo que comete crimes, como qualquer outro sujeito, está inserido em determinados contexto e temporalidade, comporta vários sentimentos, construtor de trajetos e de projetos, produto e produtor de um percurso e de uma história de vida que, progressivamente, vai construindo e revestindo de intencionalidades, isto é, as suas ações, incluindo as transgressivas, adquirem um sentido e uma lógica (Debuyst, 1998). Os comportamentos transgressivos devem ser analisados como modalidades de ação ativamente definidas e desenhadas pelos seus atores, na relação com o mundo e com os outros (Da Agra, 1990).

Os agentes de comportamentos desviantes foram marcados por duras penas e pesados tratamentos. O ato criminoso exigiu investigações, culminando em descobertas de caminhos científicos e novas perspectivas no campo do Direito. O comportamento criminal exige, pelas suas características multidimensionais, o trilhar constante de novos

caminhos de estudo; há séculos que se estuda este fenómeno e continuamos sem possuir uma resposta objetiva e clara para a explicação da razão do crime. Para tal, é necessário evidenciar pontos que estão relacionados com a necessidade e os fins da pena, a sua função social, tendo como ponto de partida a evolução histórica da penalidade. A História do Direito Penal está dividida em vários momentos distintos, com uma lógica que caracteriza, de forma muito particular, cada época no contexto jurídico-social. A literatura histórico-jurídica, que aborda os aspetos genealógicos do Direito Penal, refere que a questão da aplicação da penalidade evoluiu sem obedecer a qualquer linearidade temporal ou geográfica, visto que é um fenómeno complexo e influenciado por diversas razões, desde as origens místicas até à forma de organização política das sociedades. Podem distinguir-se diversas fases de evolução da vingança penal, tais como: a vingança privada, a vingança divina e a vingança pública. Estas fases não se sucedem umas às outras: uma fase convive com a outra por largos períodos, a divisão cronológica do ponto de vista jurídico é meramente secundária, já que a separação é feita por conglomerados de ideias. A evolução da criminalidade acompanha sempre a evolução da sociedade, as suas regras sociais e jurídicas, os seus valores morais e éticos, os seus princípios. Se a sociedade é fria e calculista, o crime cada vez mais será frio e calculista. Se somos desconhecidos uns dos outros, facilmente o crime passa despercebido e desconhecido das entidades oficiais de controlo e de prevenção (Robert, 2007). Larenz (1978, p. 33) afirma que “ a lei vale para todos os tempos históricos, mas em cada momento da forma como este a entende e desimplica, de acordo com a consciência jurídica”.

2. Face ao crime, as sociedades visionam sempre a sua punição; mais tarde, porém, a correção, como se patenteou, em particular, no início do pretérito século. Constituíram-se, pois, as teorias correcionalistas, de que Rhoder foi um exemplo (Correia, 2008). Para a consecução da penalização, torna-se necessária a indagação da verdade, o que ocorre em fase de criminalização secundária, que pressupõe escutar e valorar depoimentos judiciais. Busca-se, então, a verdade; e, por arrasto, a lógica de cada testemunho, na economia da construção decisória. A tomada de decisão em tribunal é consumada pelo juiz; é sobre ele que recai a responsabilidade de decidir sobre

os factos e os depoimentos apresentados, valorando-os com um inevitável grau de subjetividade. A administração da lei penal consiste em saber recolher informação sobre os que são processados e em saber escolher, para estes, a sanção conveniente (Louro, 2008).

A aplicação da lei torna-se ainda mais importante perceber em crimes que colocam em causa a dignidade, o respeito e a liberdade do ser humano; entre outros, o crime de violência doméstica é um deles. É um fenómeno social e criminal que, pela sua complexidade e consequências psicossociais, se converte em objeto de saber.

A violência doméstica é um tema atual, não apenas em Portugal, mas em todos os países, objeto de particular atenção de juristas, sociólogos, psicólogos, entre outros. Apesar disso, não se trata de um problema novo, antes de uma complexa questão social, de todos os tempos, que o dever comunitário e a crescente consciência coletiva sobre a dimensão e efetividade dos direitos vêm impondo. Esta a razão por que, ao longo das pregressas décadas, têm sido trazidas à colação novas interrogações, emergentes dos choques e contradições que vão surgindo ao nível das representações sociais, das tradições e da cultura, a muitos títulos ainda dominantes na nossa sociedade. Não obstante, por todo o lado tem-se vindo a sedimentar a ideia da tolerância zero – pelo menos no plano das intenções.

A presente tese erige como objetivo a indagação sobre a severidade punitiva no âmbito da violência doméstica, ou seja, procura averiguar qual o tipo de severidade punitiva que, em sede de criminalização secundária, existe em Portugal, no que concerne a este ilícito criminal. Por outras palavras: face a uma amostra de processos judiciais decorrentes da violência contra cônjuges - *de jure* e *de facto* – pretendemos produzir conhecimento científico sobre o grau da penalização.

Para uma adequada apreensão desta realidade, proceder-se-á a um breve percurso sobre a evolução legislativa e sobre os modos como esta contribuiu, ou não, para o aumento dos sujeitos condenados por exercerem este tipo de crime; esta investigação visa também determinar da prevalência da psicologização dos casos levados aos tribunais, isto é, se o Saber psicológico se tornou – e com que densidade – tributário dos

exercícios de aplicação do Direito. Vai incidir, pois, sobre a relação entre violência doméstica e justiça, identificando algumas respostas, mas também os desafios que este problema social coloca ao sistema jurídico-judicial, bem como se existe causalidade entre as necessidades dissuasoras do crime e a severidade penal aplicada.

Para a recolha de informação, aplicar-se-á um instrumento psicológico construído para o efeito: o Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária - ISPP-CS) (Poiares, 2009), cujo objetivo passa por analisar a severidade das medidas penais, assim como o grau em que a Psicologia influencia a escolha do tipo de pena aplicada. Em resposta às necessidades atuais, referentes ao uso de instrumentos criados e meticulosamente direcionados para a área psicoforense, este instrumento pretende fomentar uma complexa, porém alcançável, investigação sobre a severidade das medidas penais e penetrar nas teias relacionais entre a Psicologia Forense e a justiça.

Parte A – Fundamentação & Legitimação

Uma perspectiva psicológica-jurídica da violência de género

Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

11

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. Comportamento transgressivo: a normatividade e o desvio

O ser humano é naturalmente transgressivo, existindo nele a necessidade de se suplantar em vários domínios da vida, contribuindo para o desenvolvimento individual e social. Isto é: o comportamento desviante e a superação da norma fazem parte dos quotidianos vividos, alavancando e favorecendo a evolução da comunidade e dos seus membros. Tocam-se aqui o sentido e a diferenciação das normas sociais e jurídicas, ainda que intimamente ligadas, mas que são diferentes nos seus objetivos.

As normas sociais são prescrições de comportamento, correspondendo às expectativas sociais acerca do que é um comportamento adequado ou correcto. A interação entre os indivíduos não obedece ao acaso; é nas normas sociais que se encontra a base necessária à influência e à ação, assumindo a coerência e o significado dos comportamentos, como referência a um sistema de normas coletivas. A pluralidade de modelos culturais existentes limita a coerência e a significância dos atos aos contextos para os quais eles são válidos. Todos os sujeitos seguem normas definidas, sempre reforçadas por sanções de várias ordens, de sentido positivo ou negativo, podendo ser desde a recompensa até à desaprovação informal (grupo de pares, por exemplo) ou à punição formal (pena).

A realidade social é um cenário de ordem e uma forma de vida. Não existe independentemente das estruturas ordenadoras – o mesmo é dizer, sem normas – e representa qualquer coisa de muito diferente de uma simples unidade de agregação (em que o conjunto mais não é do que a simples soma das partes, sem que haja, portanto, qualquer coesão e articulação intrínseca entre esta realidade. Uma sociedade, para ser definida enquanto tal, é necessariamente uma verdadeira unidade de ordem, cimentada por normas que lhe dão coerência e coesão na estrutura interna, de tal forma que o resultado final seja sempre algo de diferente da simples soma ou agregação das partes; mais do que adição, é de integração e articulação que se fala. Segue-se a necessidade de localizar esta realidade na estrutura estratificada do mundo, isto é, dizer em que esfera da realidade se situa o contexto social – e, com ela, a realidade jurídica (Machado,

2007). O Direito e as suas instâncias alicerçam-se nas normas jurídicas e nos dispositivos de controlo social; são mutáveis e modificáveis, consoante um conjunto de fatores que convocam e decidem o que se deve considerar como o dever ser num determinado momento: há um constante processo histórico-evolutivo, de que a Pessoa é, em simultâneo, sujeito e objeto, sujeito e projeto.

A normatividade de uma sociedade alicerça-se em dois tipos (principais) de regras, ainda que distintas, que se cruzam e interligam: as normas jurídicas e as normas sociais; as primeiras têm como fim a defesa das últimas, ou seja, o mundo jurídico tem como finalidade a defesa social. É frequente, quando se faz referência à normatividade, que haja uma associação direta ao funcionalismo sistémico (Jakobs,2003). A norma jurídica é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico, que a constrói politicamente, alicerçando-se no espaço social. Norma e lei são usadas como expressões equivalentes, mas as normas abrangem também o costume e os princípios gerais do Direito.

O Direito é um conceito que não reúne consenso e muitos autores têm suscitado várias questões sobre esta temática, embora obtenha unanimidade a ideia que representa, ainda que de uma forma generalista, um conjunto de regras que são estabelecidas numa sociedade, visando regê-la e assegurar o controlo social: trata-se de uma realidade permanente em todas as comunidades políticas. O Direito constitui, na verdade, uma modalidade específica da realização da função política, caracterizando-se pela especificidade dos elementos estruturais que o sustentam: a prática política e a prática jurídica têm por objeto a transformação-manutenção das relações sociais, sendo de acrescentar que estes modelos são determinados, em última instância, pela estruturação do político e pelo lugar que este ocupa na lógica global da formação social, ou seja, a prática política pode ser caracterizada como a que incide sobre a conjuntura social (Hespanha, 1978, 2007).

O Direito, com todas as suas vicissitudes, foi o primeiro sistema a estudar (ou, pelo menos, a dispor sobre) o indivíduo enquanto responsável pelos seus atos, erigindo o conceito de personalidade jurídica em entidade institucional, que tem a pessoa –

unidade biológica, psicológica e social – como base: a personalidade jurídica traduz-se precisamente na suscetibilidade de ser titular de direitos e se estar adstrito a vinculações (art. 66º, nº1, Código Civil), ou seja, entende-se por personalidade a faculdade para exprimir a qualidade ou condição jurídica do ente em causa. Fala-se de capacidade jurídica para exprimir a aptidão para ser titular de um círculo, com mais ou menos restrições, de relações jurídicas – pode por isso ter-se uma medida maior ou menor de capacidade, segundo certas condições ou situações, sendo-se sempre pessoa, seja qual for a medida da capacidade, sendo inerente a de gozo de direitos (art. 67º CC), o que pode ser limitada na capacidade de exercício; quando se fala em capacidade esta divide-se em capacidade de gozo, é a medida de direitos e vinculações de que uma pessoa pode ser titular e a que pode estar adstrita; e capacidade de exercício, que consiste na medida de direitos e de vinculações que uma pessoa pode exercer por si só, pessoal e livremente. Para a Psicologia, a personalidade é muito mais abrangente e complexa, supera a “capacidade jurídica”; segundo Carver e Scheier (2000), a personalidade é uma organização interna e dinâmica dos sistemas psicofísicos que criam os padrões de comportar-se, de pensar e de sentir característicos de uma pessoa. Esta definição evidencia que a personalidade é uma organização e não uma aglomeração de partes soltas, sendo dinâmica e não estática, imutável; é um conceito psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e seus processos psicológicos e cognitivos, é uma força ativa que ajuda a determinar o relacionamento da pessoa com o mundo externo; mostra-se em padrões, isto é, através de características recorrentes e consistentes, expressas de diferentes maneiras - comportamento, pensamento e emoções; são as particularidades pessoais duradouras, não patológicas e relevantes para o comportamento de um indivíduo em uma determinada população (Asendorpf, 2004).

Questões como personalidade, capacidade, responsabilidade e liberdade de um sujeito assumem especial relevância quando estas características colocam em causa ou impossibilitam a livre apreciação e decisão, os direitos de outrem, consubstanciando-se num crime. Entende-se por crime qualquer violação muito grave de ordem moral, religiosa ou civil, punida pelas leis, todo o delito previsto e punido pela lei penal (Correia, 2008).

A definição de crime tem sido determinada pelo que, em cada momento, se quer saber e os interesses que se querem proteger sobre o comportamento. Para se discutir o comportamento delitual é necessário pôr em causa as formações sociais, culturais vigentes e os fundamentos do(s) Poder(es) como instância(s) do que é e do que deve ser (Dias & Andrade, 1997); a demonstração da permanência do crime em todas as sociedades constituiu o factor determinante da sua integração no pensamento sociológico sistemático, cujo contributo mais significativo se deve a Durkheim, em três das suas obras fundamentais: *De la Division du Travail Social* (1893), *Les Règles de la Méthode Sociologique* (1895) e *Le Suicide* (1897). Mas é efetivamente com os trabalhos de Lacassagne (1913), Tarde (1890) e Durkheim que a Sociologia Criminal adquire o seu estatuto de ciência, especialmente a partir do 3.º Congresso de Antropologia Criminal, realizado em Bruxelas, em 1892, que marca a viragem das explicações da escola positiva em favor das teorias sociológicas. Por outro lado, o fenómeno criminal não é apenas estudado como uma componente social, é muito mais complexo, sendo também necessário perspectivá-lo à luz da manifestação comportamental que ele representa.

A associação entre a personalidade e o crime surge com o nascimento das ancoragens positivistas, nomeadamente as considerações atávicas entre o crime e as características físicas, encetando-se uma nova lógica, em que a definição de uma pena passou a entrar em linha de conta com a avaliação à personalidade do ofensor (Machado, 2005; Nunes, 2010); o crime deixa de ter o epicentro apenas no ato, passando o ator desse mesmo comportamento a ser a figura principal da estória criminal.

Em termos jurídico-penais, por tipo legal de crime utiliza-se o conceito de crime que consta da descrição legal dos elementos essenciais daquele (previsão e estatuição). Ou seja, é a descrição das situações hipotéticas que violam os interesses jurídico-criminais. O tipo legal de crime pode ter duas aceções: o tipo legal objetivo (onde se incluem as circunstâncias exteriores à pessoa do agente); e o tipo legal subjetivo (onde se incluem os quadros que se referem à intenção da pessoa do agente) (Correia, 2008). Segundo o princípio da legalidade, só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado

passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática; a medida de segurança só pode ser aplicada a estados de perigosidade cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior ao seu preenchimento; não é permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhes corresponde. (art. 1º, Código Penal).

O crime é todo o comportamento – mas só aquele – que a lei penal tipifica como tal. Todo o ato, por mais terrível que seja, desde que não esteja contemplado na lei, não é considerado um ato delincente. Mas tal assunção não é intemporal, isto é, o que hoje é considerado crime pode não ser amanhã. Segundo Enke (1942), o crime é um ato cujo âmbito é definido e delimitado por leis e normas estaduais, espacial e temporalmente mutáveis. Ao definir crime estamos perante a teoria da infração, mas é necessário colocar igualmente a tónica na política criminal, uma vez que é a partir desta que se define que atos são considerados crime. É no Código Penal e nas leis penais avulsas que se encontra a tipificação criminal. O Código de 1982 já não tem o mesmo catálogo do Código anterior (1886), os códigos penais variam consoante o país e o tempo (Dias & Andrade, 1997). A autoridade das leis não é alheia aos indivíduos; pelo contrário, estes são testemunhas da própria essência, na qual há a percepção da individualidade e na qual vive como em seu próprio elemento, que não é distinto dele mesmo (Hegel, 1820-2000); o Direito é um prolongamento do sujeito, novamente é o espelho em que as pessoas se projetam. Inversamente, o sujeito é também o segmento, o átomo que dá vida ao Direito, diluindo-se nas entrelinhas da discursividade e das malhas legais, como frisou Santos (1948-1986); e o Direito é, ainda, parte do universo, aqui se compreendendo o caleidoscópio macrossocial (a ordem social de que a ordem jurídica é parte), mas parte que, como já referimos pela impositividade normativa se reconduz ao todo (Poiars, 1999).

A questão do conteúdo material do conceito do crime tem como epicentro a determinação material do seu objeto, o comportamento criminal, bem como pelas suas específicas consequências jurídicas: as penas e as medidas de segurança. Fundando-se nesta permissa, situa-se o Direito Penal, cuja função assenta no sistema dos meios de

controlo social e na ordem jurídica. Contudo, há várias lógicas no tocante ao comportamento criminal e à sua definição, e que são: a) a positivista-legalista, em que o crime será tudo aquilo que o legislador considerar como tal. Esta perspectiva recebeu críticas, nomeadamente da Criminologia, que sempre recusou um conceito de crime que resultasse acriticamente de um certo ordenamento positivo jurídico-penal, não evidenciando a questão do comportamento desviante e a sua autonomização no âmbito científico, levando assim a uma outra abordagem; b) a positivista-sociológica que teve como objetivo ultrapassar as limitações da racionalidade anterior, tentando-se encontrar uma noção sociológica para as manifestações legais do crime. Isto é, tendo em conta a multiplicidade do comportamento criminal, procurou-se encontrar aquilo que em termos de objetividade e universalidade pudesse, à luz da realidade social, ser como tal considerado. Esta tentativa de definição do crime como uma unidade de sentido sociológico, autónoma e anterior à qualificação jurídico-penal legal passou a constituir, durante muito tempo, uma ideia básica da dogmática do Direito Penal. No entanto, esta conceção também recebeu várias críticas devido à imprecisão no tocante ao conteúdo material do conceito do crime, não conseguindo determinar com objetividade em que consistiria a danosidade ou a ofensividade sociais que subjazem à “essência” do crime, pedra basilar para erigir um padrão crítico na criminalização; c) linha moral (ético) - social, consiste na ideia que o Direito Penal constituiria a tradução, no mundo terreno, das noções de pecado e de castigo vigentes na ordem religiosa, ou de imoralidade e de censura da consciência vigentes na ordem moral, conferindo ao Direito uma função de conservação das racionalidades morais-sociais vigentes, contribuindo para a promoção de valores sociais, culturais e económicos do Estado de Direito social. Ora, tal construção não é compatível com a multiculturalidade e pluridade da sociedade - a (des)promoção de valores sociais deve ser reservada, primordialmente, a meios não penais de política social, sendo muito limitado o papel que legitimamente se pode aí atribuir ao Direito Penal. Já na obra *Summa Theologica*, no século XIII, Tomás de Aquino afirmava que o legislador não deve deixar-se seduzir pela tentação de tutelar com o meios penais todas as infrações à moral; d) a perspectiva racional, que coloca a tónica, também devido à controvérsia da construção anterior, na temática teleológico-

funcional e racional, ou seja, o conceito material do crime não deve, nem pode ser deduzido das ideias vigentes a partir de qualquer ordem extra-jurídica e extra-penal, havendo a necessidade de se encontrar no horizonte de compreensão imposto ou permitido pela própria função que ao Direito Penal se adscrevesse no sistema jurídico-social, importando, neste enquadramento, a questão da tutela subsidiária de bens jurídicos dotados de dignidade penal, isto é, bens jurídicos cuja lesão se revela digna de pena. Mas também nesta visão ficam por esclarecer vários pontos, como é o caso da noção de “bem jurídico” (Dias, 2001).

Tal reflexão coloca-nos algumas questões, levantando-se aqui uma em particular: quando é legítimo, quando é possível, quando é aconselhável que o Direito Penal determine um certo ato e o qualifique como crime? Tenderá a proteger um certo tipo de interesses que não quer ver postos em causa, de certa maneira, mais ou menos indescritíveis? Por exemplo, o incesto foi crime em Portugal nas Ordenações, deixou de o ser no Código de 1852 e mantém-se ausente do código atual. Como tal, tem-se vindo a assumir, por vários autores, inclusive em Portugal, que o Direito Penal só deve intervir, querer aplicar-se e tomar conta de um certo tipo de atuação ou de atos quando for eficaz e necessário, tendo uma intervenção mínima, subsidiária e não deve atuar em questões morais (Beccaria 1763-2003).

Para Foucault (1993, p. 105):

« [...] na ordem da norma, os valores não podem ser definidos a priori, mas apenas através de um processo de comparação incessante que a normalização tem por finalidade tornar possível. O processo de normalização pode ser interpretado como uma transformação na problemática dos valores, como o momento em que o valor já retira o seu próprio valor da respetiva relação com um ideal, mas do facto de ser a expressão das solidariedades relativas de um grupo [...]. Normalizar pressupõe a instituição de associações em que o conjunto dos atores interessados – juristas, comunidade científica, entre outros – poderão negociar a medida comum das respetivas exigências, havendo uma democracia específica da normalização. Normalizar não é legislar, não se normaliza por decretos».

A questão da normatividade e a discussão que esta convoca não se limita a uma reflexão, meramente jurídica. A necessidade de encontrar respostas adequadas para o bom convívio social remete-nos para as pluralidades do comportamento humano, logo uma visão mais alargada, e a necessidade de uma multidisciplinaridade torna-se evidente. Sabemos que a colocação de normas será sempre um desafio para quem sobre estes assuntos se debruça. A abordagem da problemática das ações desviantes apela, desde o momento inicial, a uma perspectiva de apreciação em que o Direito aparece apenas como um sistema valorativo utilizável: esta questão deverá ser analisada à luz de uma conceção pluridisciplinar (Poiares, 1992). Esta é uma problemática que existe há muito e que tem suscitado interesse nas diversas Ciências, mas que ainda hoje carece de respostas, advindo do facto de o Direito continuar introspetivo e reticente na partilha de informação com outras áreas do Saber: a Psicologia é o exemplo mais flagrante deste isolamento, já que ambos partilham o mesmo objeto de estudo, o comportamento humano, ainda que com pressupostos diferentes (Popper, 1986). O indivíduo articula-se no seio da vida, da sociedade, dos quotidianos, num jogo de luz e sombras, numa teia de comunicação e discursividades, percorrendo os caminhos das trocas recíprocas, na expressão de Lipovetsky (1989). A noção de bem jurídico, tal como a preservação das condições fundamentais da mais livre realização possível da personalidade de cada ser humano na comunidade não pôde, até ao momento, ser determinada – e talvez jamais o venha a ser – com uma objetividade e clareza que permitam convertê-la num conceito fechado e apto à subsunção, capaz de traçar, para além da dúvida razoável, a fronteira entre o que legitimamente pode ou não ser criminalizado (Dias, 2001).

A normatividade, (im)posta na sociedade onde vigora, é o resultado de vários mecanismos e dispositivos formais e informais, sendo na conjectura destes que se determina o que é considerado um comportamento desviante. Isto é, a penalidade resulta, em primeiro lugar do que é determinado de forma (in)formal pela comunidade; jamais o Direito pode decidir o que é certo ou errado, o Direito, antes de o ser, é feito por pessoas que já se encontram formatadas por idealizações, representações e preconceitos oriundos da (de)formação de que estiveram imbuídos no seu processo psicossocial, resultando na normatividade social. A norma, ou a normalização, mais não

é que a hibridação de valores, de interesses, de poderes daqueles que transformam e ditam o que deve ser numa determinada comunidade. Regras de comportamento e modos padrão de comportamento são recorrentes no conteúdo jurídico (Hart, 1995); mas estas definições institucionais e sociais das condutas são, no fundamental, socialmente securizantes, reconduzindo atores e objetos aos seus papéis pré-determinados no enredo das vidas quotidianas, visando docilizá-los (Foucault, 1999). O Ser humano é tão complexo quanto a sociedade onde está inserido. Não podemos querer, nem atribuir aos indivíduos, uma causalidade aleatória. Tal questão assume maior relevância em fenómenos que contribuem para oscilações sociais, nomeadamente o crime.

Se o crime não passa de uma conduta que é proibida por leis penais, forçoso será reconhecer que a lei criminal constitui a causa formal do crime; o que significa que é o Direito Penal que confere ao comportamento a sua natureza ilícita (Adler, 1975). Esta tipificação do comportamento mais não é do que a necessidade de existirem níveis e formas de explicação, sendo uma tentativa de classificação, dada a extrema diversidade de teorias. Para Blumer (2007), é o processo social em grupo que cria e suporta as normas e não as normas que criam e suportam a vida em sociedade. Nem sempre se pode equacionar a significação de uma conduta em função de normas pré-existentes. É a norma que aparece, analiticamente depois do comportamento, não é tanto o comportamento que viola as normas que é decisivo, mas a reação social. Segundo Eysenck (1970), mais do que as consequências que podem advir de uma ação reprovável institucionalmente, a proporcionalidade da intensidade das reações sociais, bem como a sequência temporal destas, têm um maior impacto no comportamento do sujeito. Tal assunção deriva do inacabamento e da plasticidade das ações: as leis só conhecem a sua cristalização definitiva no ato de aplicação ao caso concreto. Para Quinney e Wildeman (1957), o crime é uma palavra que possui significados diferentes para pessoas diferentes, que nem sequer encontrou os contornos do seu significado.

Segundo Durkheim (1890-2007), são as sociedades anómicas, em que existe um esbatimento das normas e o enfraquecimento dos laços sociais, que contribuem para o

aumento do crime, levando a que o comportamento criminal não seja apenas definido pelas suas qualidades intrínsecas, mas pelas definições que lhe são atribuídas pelo coletivo social, convocando aqui uma perspectiva sociológica do crime, como um fenómeno a ser analisado à luz da cultura em que se insere (Giddens, 1998; Mannheim, 1984). Coloca-se em evidência que a tentativa de definição do crime deve ser entendida como uma unidade de sentido sociológico, autónoma e anterior à qualificação jurídico-penal. O que determinou que a definição de *déviance* seja distinta do conceito positivado de crime, tanto na sua compreensão como no seu enquadramento. Giddens (1998) defende que os indivíduos desviados seriam aqueles que não se enquadrariam no que a maioria dos sujeitos, pertencentes à sociedade, define como padrões normais de aceitabilidade. Serão aqueles que não seguem as regras apropriadas num determinado contexto. O conceito de desvio refere-se a ações individuais ou coletivas que, de alguma forma, são consideradas transgressões às normas de um determinado grupo ou sociedade. Aplicam-se a situações de ausência ou falha de conformidade relativamente às normas ou obrigações sociais. Um comportamento só pode ser considerado desviante quando inserido nas normas da sociedade em que surge. “Entalada entre o inconsciente de Freud, as forças económicas de Marx e a vontade de Nietzsche, a normalidade tem má fama na filosofia contemporânea. Prefere-se o perverso ao santo, o anormal ao normal, o louco ao banal. A normalidade parece fazer referência à ordem existente, não tem, em suma, nem os atractivos da desobediência nem as virtudes criativas da inovação” (Descamps, 1994, p. 379).

A história da vida individual de cada pessoa é acima de tudo uma acomodação aos padrões de forma e de medida tradicionalmente transmitidos na sua comunidade, de geração em geração, e quando estes não são adquiridos e há o desvio ao que predominantemente é aceite, é ativado um conjunto de dispositivos ao serviço do sistema (Direito/Justiça), ávidos de reporem a ordem social. Os dispositivos visam garantir o Poder – e a sucessão histórico-política das macroestruturas que aquele define. Todo o Poder aparece coberto também por dogmas, estabelecidos em função de interesses (políticos, económicos, culturais) e de acordo com contextos ecotemporais, liturgicamente protegidos. Contudo, esses dogmas podem surgir ancilosados face aos

movimentos sócio-culturais: não se pode parar a História nem reconduzi-la a guetos. O desfasamento entre a comunidade e os dispositivos gera confrontos, que podem abrir crise nos princípios da liberdade humana. A gestão da normatividade *versus* transgressão passa por aqui e, naturalmente, por todo o herdo cultural enraizado nas populações como marca genética. O *status* do crime varia de acordo com as sociedades e o seu *modus operandi*. Os traços comuns das condutas criminosas são a tipificação e a ameaça de penalização que o Direito impõe a quem possa cometê-las e traduzem-se no comportamento humano (Robert, 2007).

O crime é cada vez menos um produto legal, embora seja cada vez mais uma construção jurídica, no sentido em que a interpretação do crime se realiza por obra de um sistema de controlo formal, cujo funcionamento é normativamente comandado e que, apesar de tudo, atua sempre por referência à lei. As contendas suscitadas nos quotidianos sociais remetem para o processo de criminalização, que se pode definir como o corpo ordenado e complexo de atos, sucessivamente encadeados, que se inicia com a proscricção, ou ideação da proscricção, de um comportamento, fixando-se-lhe a aplicação de uma pena, implicando a intervenção de diversos atores sociais, que atuam em momentos específicos e pré-determinados desse processo (Poiares, 2003). Pretende-se, mediante essa processologia, anular a ausência de normas, a anomia, como lhe chamou Durkheim (1897-1996), bem como a violação dessas regras. A normalidade não é um simples estado de conformidade com uma média detentora da lei-norma ditada pela comunidade e pelas suas condições: é um estado de resignação para com os ditames sócio-institucionais; o esquema do indivíduo-sociedade não é mais o cenário onde as forças sócio-económicas e políticas vêm exhibir os seus efeitos, por vezes patológicos, mas um espaço totalizador onde o jogo das interações e das relações vem revelar a verdadeira natureza humana nos meios que atravessa ou a sua incapacidade de se (re)inventar na existência sócio-cultural; o comportamento desviante é uma maneira de adaptar a cultura à mudança social, como refere Coser (1956).

Para a prosseguição da explicação-compreensão do crime não nos podemos limitar à formulação em termos sociológicos, é necessário problematizar a ordem social e os seus

dispositivos de controlo social, numa perspectiva globalizadora, ou seja, para além e antes da sua explicação no plano do acontecer e dos dados sociológicos, há que tentar explicá-lo e percebê-lo ao nível da própria realidade (ordem) social (Dias & Andrade, 1997). O ser humano é incapaz de (con)viver fora de uma existência significativa, isolado das construções nómicas (normativas) da sociedade, está intrínseca e inseparavelmente ligado à sua sociabilidade. O desaparecimento súbito das instituições de controlo poderia deixar o ser humano desorientado, prisioneiro do terror e do caos anómico, em crise de desrealização de identidade psico-social (Machado, 2007). Na vida de todos os dias, o Direito é uma parte integrante da conjectura social, em que a justiça se institucionaliza no papel do juiz, no aparelho judiciário, no *corpus* das leis.

2. Processo de (des)criminalização – Reflexão crítica

O crime constitui uma das disfunções sociais que melhor ilustra a (des)coordenação entre a realidade social e os programas de ação, sendo necessário (re)equacionar os pressupostos políticos-criminais, sendo urgente aprofundar tais pressupostos tanto em sede legislativa como interpretativa, que permitam mitigar os efeitos da atual política criminal no contexto português.

O fenómeno delinquencial tem adquirido muitos significados, porém tem sempre uma incidência social e individual; como tal tem sido submetido a mecanismos de controlo social e individuais. Esta componente leva-nos, conseqüentemente, à questão de como devemos enfrentar estas condutas: por outras palavras: que dispositivos de controlo social são mais idóneos? Como (re)conhecido, o Estado tem optado, quase exclusivamente, por um modelo de intervenção penal, intervenção que se tem intensificado, tanto em sede substantiva quanto processual ou penitenciária. Coloca-se em evidência o processo de criminalização, isto é, o mapa que determina a conduta normativa de uma sociedade.

A criminalização tende a ser interpretada como a concetualização normativa regente numa determinada sociedade. Deve ser analisada numa tripla funcionalidade:

legislativa, aplicativa e de reinserção. Todas são mutáveis e influenciadoras nas suas dimensões, estando diretamente ligadas ao barómetro social do quadro jurídico vigente. A criminalização ante-primária e primária são o ponto de iniciação para a ritualidade normativa, são a pedra inaugural de uma estrutura, o alicerce de um conjunto de regras e estratégias que pretendem promover e garantir a inserção do indivíduo aos modelos e normas comunitários. O controlo social contempla dois grandes dispositivos: os formais e os informais. O que os distingue, entre outras coisas, é a coercibilidade. Mas se a criminalização tem como objetivo estabelecer a ordem social, há uma questão que se impõe: quem estabelece, afinal, esta ordem? As pessoas que dela fazem parte? Ou o poder instituído? São os indivíduos que fazem a criminalização ou é a criminalização que define o comportamento dos sujeitos?

A resposta mais imediata às perguntas interpostas residirá no bem-estar da sociedade, a harmonia social, onde ambas as espécies de dispositivos, formais e informais, são apenas figurantes principais de um cenário composto por atores sociais, que evolui num dado contexto sócio-cultural, em que as interações se multiplicam e se interligam, permitindo aos indivíduos situarem-se socialmente e culturalmente; mas, para tal, é necessário acatarem as normas e a condução do Poder instituído, sob pena de serem banidos e marginalizados. O Poder é a noção chave na análise dos comportamentos dos atores sociais. As leis são elaboradas no sentido de valorizar o comportamento e estabelecer a ordem social; portanto, as leis procuram refletir a situação social e o tipo de ideologia vigente no momento da sua elaboração. As leis representam atos de valoração/padronização disciplinar, de natureza ético-política (Landreville, 1990). A definição do que é um comportamento desviante, um crime ou outro ato definido como ilícito é determinado de acordo com uma geometria sociocultural, onde a esquadria se desenha no Poder Político e Legislativo. Segundo Debuyst (1986), a definição dos comportamentos normativos ou transgressivos não pode ser abordada fora da sociedade na qual tem lugar e, mais ainda, não podem sê-lo fora do funcionamento do sistema que os define.

Pode afirmar-se que a lei penal e a lei processual penal são termos que designam, respetivamente, as principais fontes da penalidade, especialmente no que concerne às primeiras, das normas incriminadoras, em face do princípio do *nullum crimen, nulla poena, sine lege*. A este propósito, Beccaria (1764-2003) é enfático ao dizer que só as leis podem fixar as penas de cada delito e que o direito de fazer leis penais não pode residir senão na pessoa do Legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social. A sociedade a que assistimos, no dealbar do terceiro milénio, apreende, constrói e reconstrói a realidade num pensamento revestido de signos e significados, tornados visíveis no sistema e nos dispositivos, produzindo um sentido normativo: o crime e os delinquentes, por exemplo, mais não são do que as construções ideológicas e humanas, principalmente sociais, fatores de ruturas e hibridações, que acontecem no processo evolutivo, fatores e, ao mesmo tempo, causas e consequências; é necessário aceder à gramática do objeto, permitindo desta forma desconstruí-lo, dissecá-lo, para depois o reorganizar nas sucessivas metamorfoses das estações e desenvolvimentos. Porque nenhum objeto no que aos comportamentos tange – e, por maioria de razão no domínio da penalidade - existe no vácuo: a Psicologia integra-se nesse espaço, na busca da leitura compreensiva das atitudes e das reações institucionais que suscitam.

Perante estas realidades espera-se que a justiça intervenha, atue, como se as leis e os seus fabricantes e aplicadores dispusessem de poderes infalíveis de solução das conflitualidades e assimetrias. Os fracassos, pequenos ou grandes, as vulnerabilidades e as fragilizações do sistema (e do corpo social) são assumidos como erros e omissões do modelo disciplinar, logo do Direito e da Justiça. Kant [1781/1997] defende que o Ser humano, como ser autónomo, é responsável por todas as suas ações: no entanto, para este autor, a autonomia não significa liberdade absoluta, pois a independência é executada pelo dever; o indivíduo escolhe o que é suposto eleger de acordo com as normas e as leis da sociedade a que pertence, escolhe por respeito à lei moral, sendo sempre livre de agir ou não conforme esses princípios: mas, se não o fizer, não age moralmente; Sartre (1960), em *Crítica da Razão Dialética*, concebia uma liberdade absoluta, onde as ações dependem exclusivamente do indivíduo. Nos tempos que decorrem, feitos de pluri-sistemas e de um macropoder, a liberdade a que se assiste e se

vive é mais próxima de Kant, em 1788, com a *Crítica da Razão Prática*, em que não agimos apenas pela vontade própria, havendo uma adaptação desta às regras que nos rodeiam: dir-se-á que a liberdade consiste em saber escolher a prisão. À luz do que foi referido, na emergência e, também, na necessidade de interpretar tudo aquilo que surge, há necessidade de contextualizar os factos, os acontecimentos e os acontecidos deles resultantes.

Quando se aborda a criminalização ante-primária e primária, é importante contextualizá-las na fabricação das leis, isto é, incorporar nesta fase a legislação, alicercando-se e edificando-se quais os comportamentos tipificados como crime (Poiars, 1999). Constrói-se a nosologia punitiva, sendo esta estabelecida por instâncias de poder, bem como assegurada pelos vários princípios limitadores da função punitiva do Estado, e que são: o princípio da legalidade; o princípio da fragmentariedade; o princípio da intervenção mínima; princípio da humanidade; princípio da insignificância e o princípio da culpabilidade.

No entanto, esta tipificação acontece em abstrato, isto é, ao nível da norma jurídica geral; norma que constitui o regime-regra do tipo de relações que regula, designado-se assim todo o comando valorativo destinado a regular relações inter-subjetivas que assumem importância na vida social ou económica, emanado dos órgãos ou enunciadas pelos meios considerados competentes para definir o Direito e dotados das características de generalidade; permanece sempre num certo nível de abstração porque, na verdade, os agentes políticos que elaboram as normas nunca sabem a quem caberá de facto, individualmente, a seleção seriadora que habilitam (Zaffaroni 2003). Há um intercruzamento com normas de valoração, ou seja, o critério de valoração de um dado comportamento subjacente ao tipo legal, que indica o carácter proibido da conduta valorada. O tipo incriminador procede, literalmente, à descrição da conduta qualificada como crime. A norma de valoração está implícita no tipo, já que a lei apenas prevê como crimes os comportamentos que considera desvalores sociais relevantes, por conseguinte proscritos, logo interditos e, quando cometidos, objetos de penalização. A proibição subjaz à descrição do ilícito. Tais pressupostos assentam em dois princípios

basilares: o princípio da legalidade e o princípio da tipicidade, sendo que o primeiro estatui que um indivíduo só pode ser julgado criminalmente em virtude da lei anterior que declare punível a ação ou omissão, e não pode sofrer medidas de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior (art. 29º, nº1, da Constituição da República); o segundo, decorrente do primeiro, atesta que só é crime o facto legalmente tipificado como tal, só sendo possível a aplicação das penas legalmente previstas (Prata e Vilalonga, 2009). Ora, a criminalização primária vive em dois momentos temporais, o passado e o futuro; a emergência duma regra jurídica limita-se às expectativas do Legislador, que dispõe apenas da experiência do passado para construir as previsões do futuro (Robert, 1939-2007).

A criação da norma penal não pode ser desenquadrada do contexto político emergente; tal concetualização não implica a negação da especificidade do Direito. É o Poder instituído que detém a batuta da orquestra jurisdicional, encontrando-se nestes terrenos vários fatores que contribuem para a (des)criminalização dos comportamentos, desde compromissos internacionais, interesses económicos, sociais e políticos e a dinâmica da processologia histórica. No entanto, há regras no procedimento legislativo consagradas na Constituição.

«Designa-se por procedimento legislativo a sucessão de série de atos (ou fases, consoante a posição doutrinal respeitante à natureza de procedimento) necessários para produzir um ato legislativo. As várias fases procedimentais, disciplinadas com maior ou menor particularização nos vários ordenamentos, estão pré-ordenadas à produção de um ato final, a que se chama lei formal de Assembleia. É um complexo de atos, qualitativa e funcionalmente heterogéneos e autónomos, praticados por sujeitos diversos e dirigidos à produção de uma lei do Parlamento» (Canotilho, 1997, p. 807).

As fases e os atos instrumentais constitutivos sucedem-se através de uma série de fases procedimentais e que são: a fase de iniciativa; a fase constitutiva e, por último, a fase de ativação ou de integração de eficácia. O momento da iniciativa corresponde, como o próprio nome indica, ao início do poder legislativo, dando-lhe a alavancagem jurídica necessária para a sequência procedimental, manifestando-se através da apresentação à Assembleia da República de um texto articulado de preceitos normativos denominados,

conforme os casos, por projetos de lei e por proposta da lei. Este sistema de iniciativa configura-se como uma iniciativa pluralista, uma vez que o ponto de partida legislativo é atribuído a vários órgãos (sujeitos constitucionais), aos quais é concedido um poder jurídico, atribuído diretamente pela Constituição para a realização do interesse público (exercício da função legislativa), tendo em conta a sua posição jurídica no ordenamento constitucional. Este poder é atribuído aos deputados, ao governo, aos grupos parlamentares e às assembleias legislativas regionais. O fundamento para o exercício do direito de iniciativa legislativa é o dever no sentido de as entidades legiferantes adotarem determinadas medidas legislativas concretizadoras das normas constitucionais. Esta fase não se limita apenas a uma simples aprovação ou rejeição, antes pressupõe uma fase de discussão e elaboração (fase ante-primária), e, não se restringe à iniciativa primária ou originária, existe também a iniciativa secundária ou derivada, que consiste na apresentação de propostas de alteração a projetos ou propostas de lei ou em textos de substituição (Canotilho, 1997).

Segundo Miranda (2012), há diferença entre a iniciativa e a competência legislativa, a primeira, significa propor a lei e a segunda, respetivamente, decretá-la. A fase da iniciativa não é propriamente uma fase do trajeto legislativo, é antes o ponto que o desencadeia, é o ato que propõe novas formas de lei, sendo uma declaração de vontade, que deve ser formulada por escrito e articuladamente, que se manifesta, por exemplo, através de um projecto, o qual é entregue às entidades competentes.

Para Meirelles (2003a, p.640), “[...] a iniciativa é o impulso original da lei, que se faz através do projecto”; consagra-se nesta iniciativa o poder de estabelecer a formação do Direito objetivo, bem como o do poder de escolha dos interesses de várias ordens (financeiro, político, entre outros) a serem tutelados pela ordem jurídica. Passando-se, depois para a fase constitutiva ou fase de decisão, na qual se produz o ato principal e ao qual se reportam os efeitos jurídicos essenciais. Esta fase não é cronologicamente a última: a seguir, a promulgação da lei pelo Presidente da República, a referenda do Governo e a publicação, mas é aquela em que se determina o conteúdo do ato. Subsequentemente, há a fase de controlo, destinada a permitir a avaliação do mérito e da

conformidade constitucional do ato legislativo. Para tal, há também a fase de integração de eficácia que abrange os atos destinados a tornarem eficaz o ato legislativo (requisitos de eficácia), que são: o primeiro, o princípio da publicidade, o qual implica que todos os atos tenham que ser do conhecimento dos cidadãos (art. 119º, CRP); o segundo, a publicidade e a publicação; deve distinguir-se estes dois atos: a publicação é a forma de publicidade dos atos normativos feita no *Diário da República*, a publicidade é em sentido amplo, ou seja, qualquer forma de comunicação dos atos dos poderes públicos dotados de eficácia externa (ordens de serviço, editais, etc) (art. 119º, nº2, CRP). A falta de publicidade implica a ineficácia jurídica do ato; o terceiro, e último, a determinação da caracterização de publicação, isto é, o ato da comunicação, um requisito para a eficácia do ato. A lei torna-se eficaz com a publicação (Canotilho, 1997).

A fabricação da lei é um momento essencial e de grande relevância para a sociedade: é onde se determina o barómetro da vida, o que é um comportamento desviante, qual a pena a ser aplicada, estabelecendo-se a malha do tecido social e judicial, o pendor criminal, isto é, a manifestação de um comportamento na vida social só se converte em transgressão na medida que é qualificado enquanto tal; a componente jurídica é essencial e necessária ao conceito do crime. Como tal, não nos podemos esquecer da vital importância que a criminalização primária assume: primeiro, porque é um mecanismo de seleção com poder para imputar responsabilidades e atribuir sentido ao exercício da discricionariedade das instâncias do controlo formal. O Direito aparece como uma estrutura do sistema social, a qual se origina a partir da seleção de expectativas congruentemente generalizáveis, protegendo-se estas contra possíveis deceções por meio da concessão da qualidade de dever coercivo.

O processo de criminalização tem como objetivo último a reabilitação e reintegração social do delinquente, consubstanciando-se este objetivo na terceira fase do processo de criminalização, a criminalização terciária. Esta fase dá-se durante a execução da pena; “ [...] é o tempo da pós-sentença condenatória e pós-pena – a fase da execução da pena, da reinserção social, cujos atores principais são os juizes de execução de penas e os técnicos de reinserção social (Poiars, 2000, p. 12).

A finalidade da pena e das medidas de segurança visa a protecção dos bens jurídicos fundamentais e a reintegração do agente na sociedade (Código Penal, art. 40º), sendo que a execução da pena de prisão, servindo a defesa da sociedade e prevenção da prática de crimes, deve orientar-se no sentido da reintegração social do recluso (art. 43º).

«No sentido penal, a prisão constitui instrumento coercitivo estatal decorrente da aplicação de uma sanção penal transitada em julgado. E no sentido processual, a prisão constitui instrumento cautelar de que se vale o juiz no processo para impedir novos delitos pelo acusado, aplicar a sanção penal ou para evitar a fuga do arguido, além de outros motivos e circunstâncias ocorrentes em cada caso concreto». (Canto, 2000 p. 12).

A fatualidade social está intimamente associada com a intervenção penal, algumas vezes com a vantagem de obstar a alterações graves nos processos de mercado, o que aconteceria inevitavelmente por força do recurso a regras administrativas e civilistas (Delmas-Marty, 1984). Como refere Tulkens (1986): «O Direito é a formulação da ordem social estabelecida e não a representação de uma ordem futura, a defesa do presente e não a antecipação do futuro» (p. 117). O Direito (e a justiça) é o que existe; não reside no futuro, porque se constrói (e adapta) no presente. As normas penais encontram-se inseridas num vasto conjunto de regulações e sanções, designado por “ordem jurídica”, que tem como objetivo: «[...] Contribuir para a manutenção da paz pública, interditando, através da ameaça e, se necessário, por meio da aplicação da força coactiva do Estado e das sanções, os atentados contra bens jurídicos dignos de particular protecção devido ao seu valor ideal ou material.” (Agra & Kuhn, 2010, p. 30).

Deve haver uma contextualização entre os meios disponíveis pelo sistema e as características individuais do sujeito que se pretende ressocializar, uma vez que cada individuo tem um percurso e uma história de vida únicos: ainda que a tipologia do crime seja a mesma, não há pessoas iguais e é também neste sentido que é necessário olhar para que os objetivos sejam atingidos de forma eficaz. Ainda nos tempos de hoje há a ideia enraizada que a sanção aplicada ao sujeito é suficiente na prevenção de novos comportamentos desviantes, o que se revela errado, principalmente no tocante a carreiras criminais. O discurso da prevenção baseada apenas na sanção passa, então, a ser questionado. Nas palavras do Carrillo (2002, 42):

«El propósito de la prevención delictiva, de acuerdo con este enfoque, sería desalentar, por medio del efecto motivador de la representación de la sanción o por el valor de los bienes protegidos con las obligaciones impuestas, la conducta tipificada en la ley penal. Se trata de motivar cierta conducta con la representación del castigo o con la bondad del mandato. La tradición en la teoría del derecho, y en particular en derecho penal, ha sido la de considerar ese sistema normativo como una técnica específica de control social, mediante la cual se pretende lograr los objetivos determinados por los órganos estatales, con la amenaza de la sanción y de la aplicación de la misma cuando se presenta la conducta opuesta a la deseada por las autoridades estatales o por el contenido valioso de las normas jurídicas. Esta técnica de control social es preventiva en esos términos. Las teorías sobre la prevención en sus diferentes expresiones y desarrollos durante largo tiempo se apegaron a esta tradición jurídica hasta llegar a justificar la pena de muerte» .

A reinserção social visa a reintegração do sujeito excluído na sociedade, promovendo a reconstrução (ou criação) de laços com os que rodeiam o indivíduo em situação de exclusão social. De forma a (re)competenciar o sujeito numa perspectiva psico-inclusiva, “reparando-o” de forma a que o objetivo da pena seja atingido, que o transgressor não voltará a realizar os mesmos comportamentos: é a ressocialização que, pelo menos, deve acontecer. Há nesta fase uma duplicidade de objetivos que concorrem e se inter cruzam: isto é, por um lado temos a prevenção e por outro o controlo. A prevenção e o controlo associam-se usualmente com posições opostas à solução do crime. A primeira, procura uma solução no combate aos comportamentos desviantes – as soluções “brandas” - e a segunda visa promover a consciencialização por parte do ator delincente, mas também pela sociedade, que os dispositivos de controlo funcionam e são eficazes. Na realidade, a prevenção e o controlo inscrevem-se em um registo de ato contínuo, onde o castigo efectivo, uma solução “dura” por natureza, pode ser um factor dissuasivo eficaz, de prevenção de alguns tipos de conduta violenta. As ações de prevenção devem-se definir não pelo tipo de solução que implicam, mas pelos seus efeitos observáveis em futuras condutas (Sherman, 1998 *et al.*).

O crime, os seus atores e os dispositivos pertencem a uma determinada lógica cultural-institucional, sendo este o pano de fundo na articulação e construção do processo criminalizador. Os movimentos que ocorrem na criminalização, bem como na

descriminalização, acontecem com objetivos determinados e bem definidos, havendo uma grande variabilidade e maleabilidade de estratégias.

A decisão de (des)criminalização opera sempre num espaço de grande densidade política e sob a concorrência de alternativas. As reformas orientadas no sentido da descriminalização, mais do que expressões de programas sistematicamente prosseguidos, acabam por obedecer a uma lógica de compromisso e ecletismo. Uma vez que os movimentos de criminalização (ou não) dos comportamentos não acontecem sempre com a mesma intensidade, nem em relação às mesmas áreas do penalmente controlado: os períodos de distensão e optimismo sobre as possibilidades de mudar e controlar a sociedade, sem recurso às instituições penais, alternam ciclicamente com outros de mais acentuado proselitismo moral e de maior pressão no sentido da repressão penal (Dias & Figueiredo, 1997); problemáticas que ilustram esta situação são o aborto, a droga, a violência doméstica. Tendencialmente, o Estado tende a adotar legislações de interdição, o que nalguns casos se tem demonstrado contraproducente, como, por exemplo, no caso das drogas; em que a implementação dos dispositivos repressivos levaram a um acentuado incremento do consumo nos países ocidentais (Quintas, 2011). Dias (2007) aponta tal doutrina como não podendo ser considerada uma verdadeira estratégia penal no direito português, visto que sendo um direito positivo, tem por finalidade a reabilitação e reintegração social do indivíduo delincente.

Nos tempos que correm, feitos de plurisistemas e de um macropoder, vivemos na era da globalização e a liberdade não se limita à vontade, havendo uma adaptação desta às regras que nos rodeiam; no entanto, apesar da acomodação, o ser humano e a sociedade onde está inserido são feitos de transformações culturais, sociais e psicológicas, o que determina, quase sempre, os processos de criminalização e de descriminalização, havendo a necessidade de se adaptar às peculiaridades da época, abrangendo novos domínios e novas fronteiras entre o lícito e o ilícito. A História do Direito Penal é também acompanhada de constantes e sucessivos movimentos de neocriminalização. No entanto é necessário ter em linha de conta como critério decisivo no processo neocriminalizador;

«[...]se se trata de fenómenos sociais novos, ou em todo o caso anteriormente raros, que desencadeiam consequências insuportáveis e contra as quais só o direito penal é capaz de proporcionar protecção suficiente. [...] Também aqui pois – e sobretudo perante fenómenos sociais ainda mal conhecidos na sua estrutura e nas suas consequências – se deverá evitar uma intervenção prematura da tutela penal, em detrimento de um paulatino desenvolvimento de estratégias não criminais de controlo social.» (Dias & Figueiredo, 1997, p. 441).

Segundo o paradigma proposto por Agra (2000), quer se parta da verticalidade quer da horizontalidade, torna-se viável a descodificação do universo criminalizador, em especial se se tiver em conta que não existem coincidências nem acasos e se se adotar como metodologia a indagação dos discursos dos atores sociais envolvidos, captando-lhes as mensagens, compreendendo os seus discursos e intradiscursos, numa ancoragem que radica no fluxo comunicacional e informacional; só a interpretação e compreensão dos fenómenos permite conhecê-los na sua verdadeira aceção. A necessidade de uma aproximação à realidade, tanto do ponto vista social como científico, é importante para que haja uma adequação não só política mas também fatural.

Para Baratta (1999), o Direito Penal apresentaria uma tendência para privilegiar os interesses das classes dominantes e preservá-las dos processos de criminalização, quando estas, através dos indivíduos que as constituíam que estariam ligados funcionalmente à existência de uma acumulação capitalista, apresentavam comportamentos socialmente prejudiciais, sendo também visível a tendência para dirigir o processo de criminalização para formas de desvio típicas das classes dominadas. Esta forma de tratamento diferencial da criminalidade ocorreria tanto na fase de criminalização primária, como na de criminalização secundária.

O Direito está ao serviço do Poder, criando sistemas e, por arrasto, dispositivos para controlar comportamentos, que cataloga como desviantes e criminosos, ao ritmo das épocas e conveniências; se assim não fosse, não assistiríamos à constante (des)(re)penalização de comportamentos, numa valsa de interesses vários, destacando-se os económicos, políticos e sociais, alteráveis quando os titulares do Poder mudam ou têm outras conveniências; há, portanto, uma constante coreografia normativa, sendo um

recente exemplo (revivido) a questão da violência doméstica, que ao longo de vários anos, tem vindo a sofrer alterações legislativas.

É, necessário deslocar o conceito de prevenção do crime para outras esferas que não se relacionem, necessariamente, com a aplicação da lei penal. A prevenção da criminalidade e da violência deve operar em esferas múltiplas que dialoguem. O Direito é uma produção de instrumentos necessários ao funcionamento e à reprodução de uma sociedade normativa, dependente de outras produções, entre as quais a realizada por instituições políticas e pelas económicas (Miaille, 1979). As Ciências Sociais, em especial a Psicologia Forense, assumem um papel de relevo nestes domínios; denota-se que as mudanças de modelos vigentes na penalidade, por exemplo ao nível da culpa, foram causa e efeito da emergência da Psicologia Forense e do Direito psicologizado, pelo menos implicitamente. A Psicologia Forense, na sua versão criminal, procura também captar o ator na sua dinâmica, na dialética entre o ato, a causalidade e o sujeito que o sofreu: procura aceder aos discursos dos atores do processo de criminalização, descodificá-los, compreendê-los e explicá-los, numa trajetória de conhecimento e de busca de âncoras decifradoras e intelecto-explicativas, isto é, a vertente jus psicológica. Esta busca não visa a cura do sujeito, mas lançar a luz sobre ele, fazendo a diagnose e, a partir daí, conjugar o Homem ou a Mulher (personalidade e comportamentos) com o ato e o ator na sua génese psico-afectivo-emocional, mas também com o cenário (Poiares, 2001).

O Direito pretende a uniformização de comportamentos (Santos, 1948-1986): a lei visa o geral e institui a característica da generalidade como meio de garantir a igualdade formal (que é uma pseudoigualdade), na esteira do preconizado por Beccaria (1764) (Beleza, 1985). Remete-se para o juiz, na fase de concretização, a interpretação diferenciadora, isto é, o diagnóstico diferencial da justiça, deixando-se ao magistrado a árdua tarefa de decifrar duas componentes essenciais para a boa prossecução do processo: a primeira, o que o Legislador pretende com determinada lei, o que esta pode contemplar e a que casos concretos poderá ser aplicada, com vista à boa aplicabilidade da mesma e que a prevenção seja sinónimo de intervenção; a segunda componente

procura decifrar o ato cometido pelo ator, ao qual terá que imputar responsabilidades da ação praticada e, em seguida, enquadrar esses mesmos factos nas leis constituídas e instituídas nos códigos, aplicando as regras a cada caso.

2.1 Criminalização secundária – Aplicação da lei: Reflexão crítica

A sociedade analisa-se numa estrutura cultural e social (Merton, 1938), onde os objetivos culturais propostos definem e prescrevem os meios legítimos e socialmente aceites (normas institucionalizadas) (Dias & Andrade, 1997). O juiz, que se ocupa da interpretação aplicativa de disposições legais, tem que indagar “que conteúdo e que delimitações o legislador” deu ao conceito, “em geral, mas em particular à lei especial a aplicar” e, por último, à norma singular aplicável (Santos, 1948-1986; Larenz, 1997). O Aplicador da lei age em conformidade com o instituído pelo Legislador, mas esta concordância resulta de uma subjetividade, ou seja, há um hiato entre o momento em que são formuladas as leis e o momento em que são aplicadas, há um raciocínio dedutivo e indutivo, isto é, o juiz tem que deduzir a partir do que lhe é apresentado, partindo de si a descodificação – das leis e das condutas - e, por inerência, a interpretação (Beleza, 1985); esta a racionalidade plasmada no artigo 9º do Código Civil, relativo às normas da hermenêutica jurídica. Há pluralismo no Direito; no entanto, não nos força a ser sociologicamente ingénuos. Todas as normas são portadoras de interesses, mais ou menos legítimos do ponto de vista do interesse geral, mais ou menos objeto de um consenso generalizado. É, por isso, normal que o próprio juízo sobre se estas ou aquelas normas são recebidas pela ordem jurídica, longe de implicar apenas uma leitura superficial e ingénua “do que acontece de facto” (vigência), envolva também uma observação reflexiva e crítica sobre se essa vigência é compatível com os princípios do Estado democrático (validade) (Hespanha, 2007). O Direito concretiza-se no momento da sua aplicação, onde conhece o ato ilícito cometido, havendo vários fatores (externos e internos) que contribuem para a tomada da decisão.

A aplicação da lei é o momento em que se concretiza o processo de criminalização, para o qual ele emergiu e foi estabelecido: a punição do ator que cometeu o crime. No entanto, para que a sua finalidade seja alcançada é necessário assegurar não só o acontecimento exterior (ato tipificado como crime), mas também a necessidade de ter em conta a censurabilidade da personalidade do ator. Desenvolve-se, nesta fase, uma triangulação, em que cada um dos vértices é composto pelo Aplicador, o Transgressor e o Legislador. Todos estes atores se interpelam, em que a ação de um tem consequências no(s) outro(s), havendo movimentos e trocas de informação que têm consequências e alterações nos vértices, bem como na área triangular e no perímetro que os comporta (Poiars, 2001). Esta dialética relacional ou, como refere Agra (1986), informacional – comunicacional, que interage com os indivíduos, não é determinada apenas por regras e normas instituídas.

A decisão judicial é um processo que não é linear, dependo de vários fatores, principalmente no tocante ao Direito Penal, em que mais que julgar um ato, é necessário analisar o caso concreto, questões do passado que terão consequências significativas no futuro do sujeito que cometeu o crime, indivíduos que têm uma história que os torna únicos. É pedido ao juiz que seja uma espécie de oráculo, em que tem nas mãos a responsabilidade de determinar a hipoteca e os juros de pagamento da vida de um ser humano.

O processo penal não acontece no vazio: poderá ser influenciado por vários fatores sociais (extralegais), que têm impacto sobre outros cidadãos e instituições, o que evidencia que os juizes, enquanto cidadãos, partilham dos estereótipos, crenças, preconceitos da comunidade onde estão inseridos (Johnston & Alozie, 2001; Pratt, 1998). Na intersubjetividade que surge na polaridade testemunha /sentenciador, há a captação de uma significância de atitudes, nas quais se exercem efeitos de vários fatores, de que é contribuinte a carga experiencial do juiz, sendo o lugar por onde passam os intermináveis fluxos de informação, que circulam no espaço da infoesfera. É, pois, importante interrogar a posição de cada ator neste espaço, interpelá-lo e analisar a forma como interage com os demais. Relembre-se que os objetos do conhecimento não

são mudos, falam, agitam-se e respondem quando interpelados (Agra, 1994); e o Direito e a Aplicação das leis são exemplo disso, pois constituem realidades dinâmicas, vivas, dialéticas.

Quando se penetra na criminalização secundária, ou seja, a efetivação das leis, pode perspetivar-se e analisar-se a realidade jurídica de uma determinada sociedade; o Direito é feito por pessoas, dirigido aos sujeitos e, quando necessário, aplicado aos mesmos e de nada serviria ter um sistema que apenas existisse no abstrato, sem significado e sem significância, ignorado e sem atingir o fim a que se propôs; porque, como refere Hart (2001), as leis só se convertem em algo real quando aplicadas aos casos concretos, pois de nada servem estarem legisladas se, na prática dos quotidianos judiciais, não são aplicadas: é como se não existissem; é no tribunal que o Direito se singulariza, existindo discricionariedade judicial que, segundo este autor, é diferente de uma interpretação arbitrária; o poder judicial é limitado e insterstitial.

O processo judicial revela como uma sociedade se representa a si própria, como concebe e organiza a coexistência humana, sendo um espaço de inteligibilidade que se distingue dos demais através de um sistema de formalização social (Garapon, 1997). Os comportamentos não são repetições, mas réplicas; participando da mesma lógica, o Poder, o sistema e os dispositivos devem ter a capacidade de mudança, adaptação, invenção e criação de novas normas. A normatividade não é um simples estado de conformidade, é tensional e tendencial.

O magistrado judicial, ator principal desta fase, é o receptor de toda a informação recebida em fase de julgamento, estando influenciado por vários fatores, como a opinião pública, os *mass media*, entre outros, não lhes ficando indiferente, procurando situar-se entre o que a comunidade em que se insere espera dele e o que o Direito lhe impõe (Poiães, 2008). A aplicação coerciva nem sempre resulta como elemento estabilizador da ordem social. Pretende-se que, com a punição do comportamento desviante, este não se volte a repetir na vida do indivíduo, nem na sociedade em geral, uma vez que a punição não serve só para castigar, mas é também um ato ilustrativo e um exercício intimidatório do que pode acontecer a quem cometer uma transgressão perante a lei.

Segundo a teoria dialética dos fins das penas, de Roxin (1993), há três fases no que concerne à justificação da punição do ato criminoso: 1) fase da ameaça penal: a formulação de um preceito legal, abstratamente definido na lei, em que existe a tipificação do comportamento como criminoso e o estabelecimento da sanção correspondente; os fins das penas seriam predominantemente de prevenção geral; 2) fase da condenação, em que o indivíduo que cometeu um crime vai ser julgado e em que o juiz lhe comunica a pena aplicável, momento da retribuição; 3) fase da execução da pena: em que a finalidade do castigo estaria aqui numa ótica de prevenção especial, de recuperação ou ressocialização do delinquente.

Todos os que têm contato com o Direito, seja de forma direta ou indireta, esperam que este desempenhe um papel securizante, credível e contingente. A sociedade apreende, constrói e reconstrói a realidade num pensamento revestido de signos e significados tornados visíveis no sistema e onde os dispositivos produzem um efeito de sentido normativo. Segundo Lúcio (1986), a decisão judicial resulta das leis praticadas pelo Direito, contendo as representações sociais vivenciadas pelo decisor que, de alguma forma, diligencia um ponto de consonância entre ambas, falando deste modo, da unidade cindível entre o Direito e a vida.

Julgar alguém que cometeu um ato ilícito não é apenas uma mera questão jurídica; no tocante à aplicação da lei, há a contribuição de várias *nuances* a ter em conta e várias vontades a analisar; e, como interpela Engisch (2004, p.184 e 185): «[...] Que significado tem a conexão lógico-sistemática segundo as intenções do legislador, ou que significado resulta dessa conexão dentro da própria lei? Qual o fim que persegue o legislador histórico ou qual o fim imanente à lei? [...] Haverá que ter em conta que o subjectivismo e o objectivismo, só por si, não caracterizam os métodos da interpretação e da compreensão.». Principalmente, quando falamos de leis criminais e na sua aplicação, não raras vezes o crime constitui o porta-estandarte de vários interesses, principalmente do Poder, que gosta de invocar as sanções criminais a propósito dos mais variados problemas sociais, até para declinar o seu fervor moral e as virtudes políticas - daí o recurso à “guerra ao crime” como expediente de capitalização política sobre o medo e a

insegurança e, como tal, a legitimação de formas mais agressivas de poder e uma maior severidade punitiva (Dias & Andrade, 1997). Para Beccaria (1764-2003) o legislador deve ser um hábil arquiteto, que saiba igualmente utilizar todas as forças que podem colaborar para consolidar o edifício e enfraquecer todas as que possam arruiná-lo. Segundo Neves (2003), o objeto problemático da interpretação jurídica não é a norma como objetivação cultural, mas o ato/pessoa que é julgado, o concreto problema prático que convoca normativo-interpretativamente a norma como critério judicativo. O caso não é apenas a condição histórico-situacional da compreensão da norma, o fator situacionalmente hermenêutico dessa compreensão, mas a própria determinante problemática da intenção interpretativa. A tomada de decisão em tribunal é consumada pelo juiz, sobre ele recaindo a responsabilidade de decidir sobre os factos e os depoimentos apresentados, valorando-os com um inevitável grau de subjetividade. A administração da lei consiste em saber recolher informação sobre os que são processados e em saber escolher, para estes, a sanção conveniente – ou a não sanção, porquanto a acusação pelo Ministério Público (ou pela acusação particular) não é uma garantia de culpabilidade.

O sistema jurídico não poderá apresentar contradições ou, pelo menos, não deveria, na sua ótica, uma vez que só há espaço para uma única verdade, ou seja, a verdade provada em tribunal, que consiste na transformação dos acontecimentos narrados e convincentes em verdade formal e provada. Com efeito, provado um facto, em verdade (formal) se converte, embora possa não ser coincidente com a verdade material – objetivo prosseguido pela justiça, apesar de nem sempre alcançado. Na observância desta lógica judicial e nas imediações de uma outra lógica, que não a do Direito, há um afastamento, existindo (ou procurando-se que exista), a dissociação do conteúdo que dá forma à lógica ajurídica. Cumulam-se duas lógicas: a jurídica, que importa ao Aplicador, fundada em regras e pressupostos fático-legais, e a ajurídica, que se dispersa por aqueles atores que, vertendo as suas parcelas de verdade, debitam uma outra leitura (ou diversas leituras), criando uma lógica fática mas não jurídica. Estas constituições, isto é, as lógicas ajurídicas, concorrem para a institucionalização da verdade formal, assente na lógica judicial (Larenz, 1978).

A antinomia é um problema no âmbito das questões jurídicas, que encerram em si mesmas a necessidade da não contradição entre os factos apresentados e as normas aplicadas; impõe-se, então, a lógica material-jurídica, que pode não acompanhar as narrativas. Para dirimir os litígios, assegurando a obtenção da melhor verdade, instituiu-se o princípio do contraditório, e, com ele, o da presunção da inocência e o ónus da prova (artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa, 1976, e artigo 342.º do Código Civil, 1967). Aquele princípio impõe que cada uma das partes exponha os seus argumentos para que assim se estabeleça a harmonia da informação e a coerência dos factos seja reposta na qualidade de verdade fática. O Direito só seria representativo e objetivo se fosse erradicada a subjetividade da qual se revestem todos os acontecimentos da vida, o que só no plano utópico se conceberia; na tentativa de suprimir tal dificuldade, o Direito vai-se alterando de acordo com as necessidades apresentadas pela sociedade – o Direito e, por consequência, a justiça devem eleger como eixo central da aplicação a objetividade diferenciadora, nos casos e nas personagens que têm de julgar.

Segundo Herpin (1978), a autoridade de que são investidos os magistrados não deriva do cargo que exercem, mas reside na capacidade efetiva que cada juiz tem para impor o seu ponto de vista nos casos que lhe são confiados; no entanto, este poder não é nem deve ser pessoal. E o jogo ou o potencial desta validação recíproca está no fundamento do poder judicial.

«Como garantir a fidelidade da palavra reportada à palavra confiada? Do representante ao representado? O enigma do juiz leva ao da representação. Sem mediação, sem a intermediação de um terceiro, não existe julgamento, mas a simples lei de talião, a *vendetta* e o golpe por golpe.» (Bensaid, 2000, p. 215)

Sacau, Jólluskin, Sani, Rodrigues & Gonçalves (2012) acentuam a necessidade de uma teoria consensual, a necessidade que se depreende de perceber o porquê das regras legais e de, em algumas ocasiões, aquelas terem uma influência determinante e noutras serem relativamente inconsequentes. Mas as normas, como é consabido, não brotam do

acaso, antes decorrem da correlação de forças entre o económico, o político, o social e o cultural.

O tribunal, enquanto cenário e os atores nele participantes (juiz ou juízes, testemunhas, vítimas, arguidos ...) desenham movimentos de comunicação, seja comunicacional seja, porventura, descomunicacional (Poiares, 2005) – aqui se entronca e se desenvolve a Psicologia do Testemunho. A verdade e a mentira são objetos construídos em função das componentes cognitivas e comportamentais. A testemunha relata, quase sempre, o que apreendeu do real assistido, colocando, não raramente, no discurso testemunhal as suas crenças e estereótipos, que advêm da componente afectivoemocional (Alonso-Quecuty, 1993): até que ponto o juiz pode ter acesso e descodificar se esta é devaneada ou não? Como pode ele diferenciar a verdade da fantasia? Que instrumento ou que especialidade tem para averiguar tal questão?

A Psicologia Forense, devido à sua especialidade e formação, tem por função obter uma visão radioscópica, revelando a face subterrânea dos comportamentos e as suas internalidades, podendo contribuir para uma maior aproximação à verdade, captando para além do visível (Poiares, 2001). A complexidade deste fenómeno não impede, porém, que se procure detetar a forma como se organizam, para a justiça, as redes destas solidariedades intermitentes. O ato de julgar não pode ser reduzido a uma operação meramente ou estritamente jurídica, quanto mais não seja pelo facto de os julgamentos envolverem seres humanos e porque todos aqueles que fazem parte do cenário judicial criminal são indivíduos, isto é, pessoas em sentido jurídico (artigo 66º do Código Civil).

3. O comportamento violento: uma perspectiva jus psicológica

O Direito assume o epicentro nos quotidianos vividos, sendo o ponto de partida para a gestão dos comportamentos a partir da normatividade instituída, onde se determina e define o que é crime e quais as consequências que advêm dos atos que transgridem as leis. Mas sendo estas uma abstração para aplicação ao caso concreto, quais os caminhos a percorrer, desde logo, na sua fabricação e, posterior aplicação?

É nesta dialética entre o futuro e o passado que se situa a construção entre o Direito e a Psicologia: o domínio jus psicológico (Poiares, 2001). Podem-se esperar-se três finalidades da penalidade: uma função preventiva virada para o futuro, uma reparadora, centrada no presente e, por fim, uma funcionalidade de retribuição estribada no passado (Tulkens & Kerchove, 1996). É sempre no facto consumado que o sujeito toma consciência da anterioridade da regra.

«A ordem jurídica não se edifica apenas numa base fundadora de carácter público; não são só as mitologias colectivas que ela mobiliza na origem. Também precisa de se reproduzir em ponto pequeno, à escala de cada indivíduo que importa instituir sujeito de direito. É aqui que a genealogia privada toma o lugar da fundação pública, reproduzindo os seus mecanismos e, finalmente – isto é o essencial –, relativizando a própria distinção entre o público e o privado. O sujeito transforma-se em indivíduo de direito e torna-se, por sua vez, intermediário da lei» (Ost, 1990, p. 78).

O ser humano nasce dentro de um contexto macro, que o define enquanto Pessoa titular de direitos, deveres e representações sociais, tendo a sua identidade social alicerçada no ambiente cultural onde se insere, para se transformar em identidade individual, com características próprias, únicas, que o transformam numa unidade indivisível de si próprio. É o resultado e a resultante de um princípio cronológico e genealógico, inscrito na perenidade de um tempo histórico concreto e insubstituível, ou seja, o ato é apenas um meio de manifestação do comportamento; como tal, o Direito deve ter a preocupação de situar o indivíduo entre o ato cometido e o comportamento manifestado, à luz do campo normativo onde este se encontra situado.

Para a ordem jurídica, como referido anteriormente, a personalidade serve para elevar o indivíduo ao estatuto de ente participante, em maior ou menor escala, nos circuitos sócio-políticos e para a objetivação daqueles que eram desprovidos de personalidade; ser-se pessoa, para o Direito, implica(va) a suscetibilidade de se ser titular de direitos (subjctivos) e obrigações, o que determina uma função nos processos sociais, como ator, o que distingue as pessoas de Direito dos seres humanos desprovidos de personalidade jurídica, como eram os escravos. Todavia, antes de se ocupar dos atores, o Direito preocupa(va)-se com os atos. A trajetória de vida do Direito remete, durante séculos,

para a observação e catalogação de atos, com menor intenção relativamente aos atores. Do ato fez-se o ator: Debuyst (1986) situa neste cruzamento a nascença da Criminologia clínica; e, depois, fez-se também o cenário: surgiu a eco-temporalidade e, também, o interacionismo dialético (Poiars, 1999), tendo como matriz a cultura de cada sociedade, naquilo que de maior especificidade contém e é marcante – por vezes, fraturante – para os cidadãos (Gilissen, 1995).

O Direito não pode, nem deve, preocupar-se apenas com o ato que infringiu a lei; deve compreender que, além deste, há o ator e a motivação que o levou a determinada ilicitude, sendo sempre demasiado redutora uma observação meramente jurídica, enquadrada numa moldura penal, onde a abstração se perde nos labirintos da vida, atendendo, desta forma, o seu objetivo principal de regulamentação de comportamentos e de prevenção; a objetivação das leis torna-se subjetivação na aplicação das mesmas. Porque, ao contrário do que proclamavam os liberais de Setecentos, o Direito aplicado tem de ser sempre subjetivo (Beleza, 1985). Cabe à interpretação jurídica a promoção de reflexão do Direito sobre si próprio, pondo num plano de visibilidade o caráter dito transcendental do plano jurídico. Fá-lo no cumprimento de uma exigência lógica de ligar os vários direitos que o precedem e no qual se funda (Foucault, 1993). A autoridade das leis não pode ser alheia aos sujeitos, uma vez que o ser humano é o ponto de partida e de chegada para a realização e consumação do Direito, havendo uma projeção e uma introjeção de e para o indivíduo, fonte da disciplina social e da sua gestão. Ora, nesta abrangência deparamos com um traço de união estabelecido entre o Direito e as pessoas, consistente nos comportamentos, eixo fulcral das previsões normativas; com efeito, o Direito desde sempre se interessou pelas condutas, dentro da lógica de apreciação e de valoração dos atos – aqui olhava a externalidade -, mas evoluiu, depois, para a internalidade – o sujeito, além dos atos; o que significa a necessidade de quebrar com a tradição dogmática e substituí-la por uma tradição de debate crítico, de pluralismo, em que muitas Ciências concorrentes tentam aproximar-se de uma verdade única.

O conceito de desvio alude às condutas que transgridem as normas de uma determinada sociedade e à ausência ou falha de conformidade face às normas ou obrigações sociais que outros estabelecem como válidas (Giddens, 1998). Para Cusson (2006), o desvio é a transgressão de uma norma social. Becker (1963) refere que o desvio varia com o tempo e com o espaço, sendo que, na lógica interacionista, defende que o desvio resulta da ligação a um determinado grupo e da rejeição de outro, ocorrendo a interação social e simbólica, que consiste no reconhecimento pelos outros. Esta interação permite a instalação do desvio e é através desta que se constroem as normas que regem as sociedades. Ainda segundo esta linha de pensamento, o desviante é definido pela etiquetagem e o desvio é considerado como o produto da transação entre um grupo e um indivíduo que, aos olhos desse grupo, transgrediu as normas. Assim, é a própria sociedade que define e classifica os comportamentos socialmente aceitáveis e os desviantes. O indivíduo que não vive segundo as regras impostas pela sociedade e que é suspeito de ter infringido uma norma em vigor é considerado como um estranho ao grupo, que Becker (1963) denominou como *outsider*; um sujeito assim rotulado pode recusar a norma pela qual o julgam ou pode negar a essa mesma sociedade a competência ou legitimidade para o fazerem, revertendo-se a esfera individual do sujeito e passando este a considerar os outros como desviantes. Ainda segundo este autor, os grupos sociais é que criam o desvio e instituem as normas cuja transgressão constitui o desvio, ao aplicarem essas normas a determinados indivíduos e ao etiquetá-los de desviantes. Poiares (2008) define desvio como sendo a oposição e o lado negativo da norma, jurídica ou social ou grupal, definido a compasso e esquadro por quem detém o poder regulador, sendo o desvio medido com um transferidor jurídico ou social. O desvio não é uma qualidade ou característica do ato cometido ou do sujeito que o comete, mas é uma consequência da aplicação, pela sociedade, de normas e sanções a um indivíduo que transgride e padrões de comportamento pré-determinados.

Pensar o justo como equidade, numa sociedade de democracia política, assente em bases essencialmente formais e de uma justiça de índole retributiva, pode constituir um desafio, em particular se tivermos em conta que o espaço público contemporâneo, por ação conjugada das novas tecnologias da informação e da progressiva expansão do

modelo liberal de democracia (formal), se viu alargado a uma escala sem precedentes e, por isso ampliadas, no qual se ultrapassou já o plano da estrita imputação legal da responsabilidade para acedermos a um outro nível de imputação e de responsabilidade, porventura capaz de reabilitar a tão esquecida quanto difícil realização do justo como equidade e a coexistir com o Direito na temporalidade (Borges, 2005). Perante esta contextualização, à justiça compete, como preconizava, no século das Luzes, Voltaire, deixar cair a venda que os liberais de Setecentos e Oitocentos, em nome da igualdade formal, haviam colocado sobre os olhos dos juizes; Santos (1948/1986) defendia que era tempo de se passar à análise do ator em situação, deste modo se produzindo uma administração da justiça adequada e perceptível pelo ser humano. A Psicologia tem muito que ensinar ao jurista no conhecimento do ser humano, de compreender para poder julgar. Ser jurista escudado na Psicologia errónea da vulgaridade é incorrer no perigo de realizar mau Direito, e, possivelmente, cometer injustiça a cobro de articulados legais que não vão ao encontro da justiça que se pretende representada pelo Direito (Santos, 1977).

«[...]Se não for assim, a imagem mitológica da justiça representada como cega deveria ser transformada numa imagem olhando para outro lado corroborando o ditado que afirma que não há maior cego que aquele que não quer ver [...] No meio desta reflexão, não deveremos deixar de assinalar que uma total uniformidade das sentenças, para além de impossível, não será desejável ao ser necessário ter em consideração o ator por trás e para além do ato, tal como, aliás, está contemplado no quadro penal que nos rege.» (Sacau & Rodrigues, 2006, p. 159).

Surge a necessidade de trilhar novos caminhos de conhecimento numa plataforma cooperativa e de ratificação; tempo de emergência, no plano da ação, da intervenção jus psicológica: e aqui residem a interação e a interferência entre Psicologia e justiça, espraiando-se por vários momentos, áreas e formas de exercitação, o que constitui, pelo menos desde há quatro décadas, o sentido do trabalho de muitos cientistas (Da Agra, 1982; Diges & Alonso-Quecuty, 1993; Sobral, Arce & Prieto, 1994; Clemente & Rios, 1995; Clemente, 1998; Urra, 2002). Faz-se, neste domínios, o tempo da intervenção jus psicológica, na qual o Direito e a Psicologia se interligam entre si, unindo-se em territórios de complementaridade; segundo Poiares (2001), há uma plataforma comum

entre estas duas formas de apreciação, a técnica do Direito e a ciência da Psicologia: o comportamento humano, embora observado diferentemente por cada um dos modelos. Uma vez que a Psicologia e o Direito têm como objeto de estudo as pessoas, as suas personalidades e os comportamentos, e sem embargo de cada um possuir uma perspectiva diferente, há condições privilegiadas – e necessidades constatadas – de aproximação em vez de distanciamento. Este conceito nasce da necessidade de hibridação entre o Direito e a Psicologia, num espaço de confluência, onde não há sobreposições nem vassalagens, mas a regência, a conjugação de duas áreas que convocam o mesmo objeto de intervenção: o comportamento humano. Ainda que de perspectivas diferentes, o jurídico visa o ato e o Saber psicológico o ator, nas plúrimas vertentes por que se espraiam; para que o Direito alcance o objetivo a que se propõe, a justiça, é necessário estabelecer a comunicação e a congregação das Ciências Sociais, para que desta forma haja uma justiça justa e não apenas uma justiça política, onde imperam os meios desatualizados e desconfigurados da realidade existente. Aprendemos com Marx a relevância do processo histórico, no que toca à vida dos povos; mas podemos aprender também a significância de que se reveste a vida de cada Pessoa, sujeito sempre aparentemente livre, porém condicionado por aquilo que já foi designado como condicionadores (Poiars, 2004), que conduzem à eventual reprogramação do indivíduo. Este conceito de reprogramação, cuja gênese é foucauldiana, perpassando toda a obra deste cientista (Foucault, 1999), foi retrabalhado por Agra (1982; 1986); louvando-nos em Touraine (1982), importa sublinhar que o sujeito de todo o processo possui o estatuto de ator social, dado que é portador de uma mensagem e partícipe da processologia histórico-político-eco-económico-sócio-cultural: dir-se-á que cada pessoa é sujeito-ator da sua própria história ou, como refere Agra (1990), inventor de si.

As comunidades e os Homens e Mulheres que as integram estabelecem redes relacionais e comunicacionais, havendo uma interação, implicando uma influência mútua de comportamentos, o que pressupõe a adoção de condutas e expressões linguísticas próprias, que auferem dimensão no grupo (Monteiro & Santos, 1998); um grupo não é um somatório de pessoas, mas uma totalidade dinâmica, isto é, um conjunto de indivíduos interdependentes que estabelecem entre si relações ativas (Lewin, 1952).

Mas cada grupo social, cada comunidade política, são construídos em redor de uma dimensão histórico-cultural, que gera as interações, existindo vínculos, por vezes sólidos, entre as pessoas, desde logo a religiosidade (do latim, *religare*, unir), os interesses económicos, a partilha de objetivos. Tal como no teatro, o indivíduo, ator social, na designação de Touraine (1982), representa o papel segundo as regras definidas pelo cenário em que se encontra, isto é, cada ator desempenha vários papéis, adota comportamentos diversos nas diferentes situações; podemos, então, definir papel social como um conjunto de comportamentos que o indivíduo apresenta/ representa como membro da sociedade e que os outros esperam dele, tendo em conta a sua posição no grupo. O indivíduo articula-se no seio da vida, da sociedade, dos quotidianos, num jogo de luz e sombras, numa teia de comunicação e discursividades, percorrendo os caminhos das *trocas recíprocas*, na expressão de Lipovetsky (1989).

O conhecimento do sujeito traduz a pedra angular da intervenção, que naquele se legitima; a captação do que o sujeito é – quem para além do quê – constrói-se na casuística e na singularização, tentando adjuntar diversas fontes de informação, *e.g.* a entrevista – que não segue os parâmetros da clínica, recaindo em modelo jus psicológico -, a anamnese, em diversas dimensões, incluindo a forense, a informação proveniente de pares ou do grupo de pertença, ou do(a) parceiro(a) ou descendentes, a comunicação verbal, mas também a comunicação não-verbal, os instrumentos de avaliação – necessários e nunca reduzidos nem a um procedimento nem àqueles que não avaliem o que foi pedido -, preferencialmente aferidos para a população portuguesa, tendo-se sempre em conta que a avaliação forense, é qualitativamente diferenciada da clínica e que prossegue outros objetivos – o que, por vezes, ainda passa ao lado das práticas (Simões, 2005; Oliveira, 2001, Poiares, 2001).

A intervenção jus psicológica aparece, deste modo, no cerne da Psicologia Forense e da Psicologia Criminal: traduz a motivação da Psicologia na Justiça (criminal e não criminal) e, pelo mesmo caminho, a sua legitimação, procedendo à aglutinação, ou justaposição, entre o Saber e o Poder: novamente Foucault (1999), na sua vertente arqueológico-genealógica das disciplinas e das práticas.

3.1. A emergência e a necessidade da Psicologia Forense no contexto jurídico

A análise do processo volitivo é importante para compreender o modo concreto do funcionamento do sujeito: todo o ato tem subjacente um fundamento, que parte de um ator que, intrinsecamente, tem uma estrutura de personalidade que o difere de todos os outros indivíduos, tornando-o individualizado, com personalidade jurídica, como tal um ser uno, em sala de audiência como na vida; conseqüentemente, o seu julgamento e *a posteriori*, a sua pena, deverão estar em consonância com a estrutura de personalidade do sujeito ao qual for aplicada.

A personalidade não existe do mesmo modo que uma pele ou uma pessoa; não é diretamente visível, sendo uma construção hipotética, inferida a partir do que diz (ou não diz) e faz (ou não faz) um ser humano, para nele se perceber uma estrutura relativamente estável de elementos que lhe são caraterísticos, que fazem com que o indivíduo não seja confundido com qualquer outro e se possa prever o seu comportamento numa dada situação (Leyens, 1986); a personalidade é constituída pelos modelos de comportamento distintos, incluindo os pensamentos e as emoções, que caraterizam a adaptação de uma pessoa às exigências da vida. A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo da vida, alicerçada no processo e na trajetória de vividos do indivíduo, sendo também fruto de uma elaboração da sua própria história, sentimentos, representações e da forma de integração das experiências (Bergeret, 2006).

Cada pessoa tem um funcionamento psíquico próprio; mas estas diferenças não se esgotam no quotidiano ou em situações não jurídicas, elas transportam e interferem na sala de audiência; é necessária, então, uma abordagem mais específica a cada indivíduo, além da descodificação do comportamento verbal e não-verbal, revelando-se também necessária uma aproximação e uma visão radioscópica à sua estrutura de personalidade, não só no sentido de perceber o indivíduo nas plúrimas vertentes que o integram, como também atribuir uma sanção adequada ao ator social, psicológico e jurídico. Essa a razão porque deve-se prover a conseqüências normativas concretas, que devem ser

acompanhadas por uma racionalidade comunicativa, harmoniosa, pragmática, no sentido em que a lei se propõe alcançar os fins sociais propostos pela maioria: isto é, o Poder instalado e os valores éticos prevalecentes (Sobral *et al.*, 1994).

O ator judicial de maior relevo e que denomina toda a ação é o arguido, ao qual a justiça se propõe reintegrar, e é também nele que deve recair uma análise que se pretende cuidadosa e rigorosa, para que este não volte a reincidir. A aplicação coerciva nem sempre resulta como elemento estabilizador da ordem social. Espera-se que, com a punição do comportamento desviante, este não se volte a repetir: por isso o Direito Penal cumula prevenção geral e especial (Beleza, 1985) e a justiça procura minimizar cada ato como episódico (Lima, 1958).

Na confluência desta realidade há que proceder a uma análise do geral para o particular, não se podendo generalizar, havendo que dissecar cada caso, numa casuística do detalhe e da meticulosidade (Santos, 1986; Foucault, 1997). Na intersubjetividade que surge desta confluência há que conceber uma significância de métodos; para tal, tendo em conta a desejabilidade social do arguido e a possibilidade de mentir, o que é um seu direito processual, é necessário, ou pelo menos adequado, realizar uma avaliação que delimite e inviabilize o mais possível essa oportunidade, o despiste de várias patologias, economizando tempo, patenteando respostas eficazes e mais rápidas, as quais todos os tribunais ambicionam, incidindo similarmente na personalidade, permitindo confirmar ou infirmar um determinado perfil ou estrutura, que representa essencialmente a noção de unidade integrativa do indivíduo, com todo o conjunto das suas características diferenciais permanentes e as suas modalidades próprias de comportamento (Pieron, 1974).

Considerando que os factos que se declaram provados em sala de audiência correspondem a um ato ilícito, há que aplicar a sanção respetiva. A questão que se coloca consiste em saber qual a razão por que, depois de ter sido aplicada, enquadrada na moldura penal correspondente ao crime, tendo em conta que esta tem como objetivo a prevenção, ou seja, que tal ato não volte a acontecer por ação daquele indivíduo, como

é possível que haja uma taxa tão alta de reincidência em alguns crimes? Este é o problema que se coloca e que convoca a reflexão.

A avaliação psicológica forense consubstancia o eixo vital da intervenção jus psicológica, construção operativa da Psicologia Forense nos meandros judiciais, que se traduz na penetração do saber, dos discursos, das práticas, técnicas e metodologias da Psicologia nos territórios jurídico-judiciais, construção esta que é operativa, como referimos, mas que se fundamenta em visão especulativa e epistemológica da Psicologia Forense, destinando-se ao melhor trabalho e ao mais perfeito e justo exercício dos atores do Direito. A Psicologia Forense na versão criminal, procura captar o ator na sua dinâmica, na dialética entre o ato, a causalidade e o sujeito que o sofreu: procura aceder ao discurso dos atores do processo de criminalização, descodificá-los, compreendê-los e explicá-los, numa trajetória de conhecimento e de busca de âncoras decifradoras e intelecto-explicativas. Esta busca não visa a cura do sujeito, mas lançar a luz sobre ele, fazendo a diagnose e, a partir daí, conjugar o indivíduo (personalidade e comportamento) com o ato (Poiars, 1999, 2001).

Atualmente, a Psicologia Forense assenta, inevitavelmente, nos discursos das personagens envolvidas no circuito judiciário; mas também no conhecimento do sujeito, além da sua discursividade, o que requer outra abordagem, em registo de complementaridade com aquela: é à avaliação psicológica. Mas esta avaliação deve partir sempre da observação:

«[...] Un psychologue qui travaille dans la justice est bien souvent celui auquel on demande de faire une “observation” des sujets délinquants et cela, généralement, pour répondre à une demande de diagnostic faite bien souvent par une instance officielle» (Debuyst, 2001, p.7)

A Psicologia Forense emerge nos domínios do Direito como a Ciência que pode contribuir para uma melhor compreensão do comportamento do sujeito que se encontra na quadriculatura jurídica; é necessário basear a penalidade (e a sua doutrina) em experiências reais da vida, não se devendo interpretar o comportamento criminal apenas com base em juízos penalistas teóricos, postulados *a priori*, sem o contributo dos

técnicos e das várias Ciências que abordam esta problemática, nomeadamente a Psicologia, emergindo a necessidade de análise num método empírico rigoroso sobre as causas e vicissitudes da criminalidade, em que a experiência científica substitui as tradições dogmáticas do Direito (Herrero, 2001). A penalidade deve priorizar a abordagem do ator, enquanto produtor do ato; nesta asserção, arrasta-se a apreciação da motivação do comportamento, das razões por que o sujeito realizou determinada conduta – o que pressupõe a valoração “clínica” de cada situação, naturalmente, inspirada no saber psicológico, informados e enquadrados na lógica jurídico-penal. Daí o surgimento da Psicologia Forense (ou Jurídica, ou Judiciária, ou Criminal, consoante os autores ou países) que se constituiu em aporte da aplicação da Lei (Rodríguez, 2000; Clemente, 1998; Clemente & Rios, 2000), estabelecendo-se um quadro técnico (do Direito)-científico (da Psicologia), comunicacional e abrangente; esta área foi concebida a partir da constatação da necessidade de o Direito se apoiar numa racionalidade científica, que lhe permita captar e compreender as pessoas e os seus comportamentos, mas resultando ainda – diríamos que predominantemente – da verificação das insuficiências do Jurídico ao nível da criação e da aplicação do Direito, especialmente dos depoimentos judiciais. Esta a razão por que, segundo alguns autores, a Psicologia Forense foi gerada pela Psicologia do Testemunho, a qual faz parte desta edificação; Binet (1886), com a publicação da obra *Sugestionabilidad*, deu os primeiros passos no sentido de atribuir cientificidade ao estudo do testemunho, através do método experimental, alertando de forma empírica para a falta de exatidão das memórias e os efeitos da sugestão na memória visual (Pessoa, 1913; Erostarbe, 2000). Gross (1898), juiz austríaco, publicou a obra *Criminal Psychology*, dirigida a juizes, advogados e estudantes, onde referia a importância das testemunhas e do comportamento não-verbal, uma vez que são a fonte do conhecimento a que o magistrado pode recorrer para obter a verdade dos factos (Carpintero, 2006). Stern (1939), psicólogo alemão e investigador das diferenças individuais de personalidade e da inteligência, foi pioneiro na análise experimental do testemunho (Diges & Quecuty, 1993). Münsterberg (1908) referiu as necessidades que a lei tem de conhecer e aplicar os conhecimentos psicológicos, em particular na Psicologia do Testemunho. Este autor explicou como se originam

múltiplas percepções a partir do discurso verbal. Fiore (1914) enunciou a importância da Psicologia Judiciária no contexto judicial, para que se tenha acesso ao psiquismo do indivíduo, bem como a importância deste facto para a descoberta da verdade, visando não só o ato mas também o ator. Em Portugal, as primeiras viagens pelos caminhos da Psicologia do Testemunho foram feitas por Pessoa (1913), que descreveu o estado da arte em França, pondo em prática simulações de julgamentos com o propósito de demonstrar que os testemunhos de indivíduos que observam o mesmo acontecimento podem diferir de forma significativa, condicionando inevitavelmente o julgamento; o método de produção e valor psicológico da prova testemunhal assume uma grande relevância na averiguação da verdade (Costa, 1954). Altavilla (1924-2003) foi outro dos autores a elaborar uma tentativa de autonomização de um segmento da Psicologia, vocacionado para a gestão disciplinar; a sua obra, *Psicologia Judiciária*, publicada, em primeira edição, em 1924, posteriormente revista, até 1955, constitui uma referência fundamental na matéria, incidindo, em especial, sobre a Psicologia dos personagens do processo penal e sobre a Psicologia do Testemunho. Curiosamente, este autor chegou à Psicologia através da observação do trabalho forense e dos seus participantes, para o que foi tributária a actividade profissional que desempenhava; Mira y Lopez (1932), no livro *Manual da Psicologia Judiciária*, dedicou um importante capítulo aos problemas relacionados com a Psicologia do Testemunho; neste caso, tratou-se de um psiquiatra que se apercebeu da necessidade da confluência entre a Justiça e as Ciências do psiquismo, construindo-se uma base sólida de suporte para a Psicologia da Justiça (Rodríguez e Gómez-Jarabo, 2000).

O ponto de partida da Psicologia e do Direito, como vimos, é o comportamento humano, embora a observação seja ancorada de maneira diferente por cada um dos modelos, o que não deve ser motivo de afastamento, antes de uma crescente aproximação (Poiares, 2001). Atendendo ao objeto de estudo que a Psicologia e o Direito têm, ainda que aparentemente divergente: destaca-se a relevância da hibridação dos saberes, para que o Direito seja mais justo e a Ciência mais sábia (Agra, 2000). Verifica-se que o aumento do conhecimento progride à medida que se adquire mais informação e se exploram as consequências das suas explicações (Santos, 1986). É de

extrema importância que as fronteiras se diluam e que se convoque a interdisciplinaridade; em pleno século XXI há um longo caminho a percorrer na busca da partilha do conhecimento e o percurso deve ser efetivado entre a solidariedade de Saberes, porquanto as técnicas e as ciências devem ter, como razão de existência, o melhoramento dos vividos e das vivências do ser humano e, como refere Ricoeur (1995), é essencial que o Direito seja sinónimo de justiça – o que, por vezes, não é mais que uma ideiação. Aplicada e realizada a justiça, efetiva-se o equilíbrio necessário à harmonia universal, em que a essência pura do fenómeno jurídico reside neste equilíbrio: balança das condições de existência, das prerrogativas e das inibições do indivíduo, fundamentando-se, neste pressuposto, o Direito (Borges, 2005).

O crime, enquanto fenómeno social, torna-se objeto de conhecimento das várias áreas e saberes sociais, uma vez que é inerente à condição humana e à sua vivência em sociedade. Como se sabe, o crime é um ato que pressupõe sempre um ator, alguém que permite dar um sentido ao comportamento cometido, a quem o Direito pode imputar a responsabilidade. O Legislador penal afirma o valor de determinado bem jurídico, incriminando a conduta que o lesa ou coloca em perigo. E, como escreveu Pasukanis (1972), o Direito Penal é o mais brutal dos Direitos, que se abate sobre o ser humano, que existe para repor a ordem desordenada – e para gerir interesses políticos e económicos.

Segundo Radbruch (1979):

«[...]a sua verdadeira reforma [do Direito Penal] virá consistir, não tanto na criação dum direito penal melhor do que o atual, mas na dum direito de melhoria e de conservação da sociedade: alguma coisa de melhor que o direito penal e, simultaneamente, de mais inteligente e mais humano que ele» (p. 324).

Ser criminoso não é uma propriedade intrínseca ao indivíduo, mas algo que lhe é atribuído, por referência a um ordenamento jurídico-penal e à necessária reação social face ao potencial crédito violado e das próprias características do Transgressor; como tal, a mulher criminosa tipo não existe, tal como o seu homólogo masculino, não só pela

especificidade do elemento objetivo da variedade de tipos de crime classificados na lei, como pelas características e capacidades intrínsecas e subjetivas necessárias e indispensáveis para poderem ser cometidos. A definição de crime e dos seus participantes tem sido determinada pelo que, em cada momento, se quer saber sobre o delito: assim, a contraposição, que fez carreira, entre um conceito jurídico e um conceito sociológico ou natural corresponde a um determinado tipo de problema criminológico. Como noutros domínios, as raiais entre disciplinas e profissões mudam à medida que se registam novos avanços científicos, assim como quando o sistema de justiça se vê confrontado com novos problemas, aos quais não consegue dar resposta (Fonseca, 2006).

4. Violência conjugal: fenómeno social e objeto de criminalização

Importa questionar: afinal o que falha no processo de criminalização? Poderíamos observar o problema sob vários prismas, optamos, no entanto, por circunscrever a apreciação à violência conjugal.

Segundo Duarte (2011), esse fracasso verifica-se em decisões judiciais que nem sempre valorizam a violência exercida sobre as mulheres; em medidas de coação que não protegem as vítimas; em sanções que se traduzem em sentimento de impunidade dos agressores; em processos demasiadamente morosos e em indemnizações insuficientes atribuídas às vítimas. Mas, se a legislação e a formação vão pontualmente procurando minimizar os problemas enunciados, o caminho mais difícil de desbravar parece ser o de combater os mitos e estereótipos sobre a violência doméstica existentes na sociedade e, logo também, no seio da comunidade jurídica, mormente nos tribunais.

Face a esta controvérsia, o debate sobre a violência conjugal tem sido centrado exclusivamente na definição e avaliação do fenómeno, negligenciando um aspeto central – a concetualização da severidade punitiva no âmbito deste crime. A questão epicentral no debate acerca das penas na violência é teórica e não suportada em estudos empíricos, que urge desenvolver. Dada a controvérsia, é necessário colocar em prática e

aplicar instrumentos científicos para a avaliação da severidade punitiva face a estes crimes, no contexto português.

A violência conjugal, enquanto fenómeno social, torna-se objeto de conhecimento das várias áreas e saberes sociais, uma vez que é inerente à condição humana e à sua vivência em sociedade. O crime é um ato que pressupõe sempre um ator, alguém que permite dar um sentido ao comportamento cometido, a quem o Direito pode imputar a responsabilidade, caso se encontre na investigação criminal um agente responsável. O Legislador penal afirma o valor de determinado bem jurídico, incriminando a conduta que o lesa ou coloca em perigo. Mas o delito, bem como a forma como é perspectivado, é mutável, dependendo do olhar da sociedade e dos costumes que predominam na época em que o tipo de ilícito é preenchido. Definir crime resulta de uma análise sobre a sociedade onde ocorreu, ou seja, o comportamento desviante varia em função do tempo e das normas que mudam consoante os contextos e estão longe de constituir códigos igualmente partilhados por todos. Os mesmos factos são apreendidos e julgados de forma diferente, em razão das coordenadas de espaço e tempo em que ocorreram – é a ecotemporalidade.

Não sendo o crime um objeto abstrato, uma vez que é perpetrado por pessoas que são concretas contra outras pessoas, e que desenvolvem condutas específicas e enquadradas numa ambiência sócio-cultural, seria um erro valorá-lo como uma singularidade, sendo antes um complexo e multifacetado ato, que se interliga em diferentes aspetos, desde os psicológicos, sociais, comportamentais, afetivos, culturais e e se desenrola num contexto amplo, povoado por atores que ocupam diferentes qualidades. Desta diversidade emerge uma unidade, dado que todas essas variantes se conjugam em função do indivíduo e do respetivo campo de ação; destarte, as componentes psicológicas e afetivas aparecem em registo de articulação, o mesmo podendo acontecer com as vertentes sociais, demográficas, económicas, culturais. O mundo de cada sujeito é um micro-caleidoscópio em que se entrelaçam plúrimas valências aportáveis às pessoas, aos cenários em que se agitam, aos outros com que se relacionam, aos discursos a que assistem e, inevitavelmente, às atitudes, positivas ou negativas, que

corporizam. É necessário ter uma conceção não apenas do resultado, mas também das parcelas que originaram o produto, conduzindo a uma panóplia de ancoragens e interpelando os cientistas na abordagem dos comportamentos criminais, e, também, da responsabilidade do ilícito. Mais do que traçar fronteiras, num domínio multidisciplinar, importa que os técnicos que trabalham na área penal, como os juristas e os psicólogos forenses, tenham formação e treino específicos e conheçam a realidade vivida e não apenas as narrativas indiretas. Importa captar e descodificar os relatos na primeira pessoa.

A principal premissa neste trabalho é a violência conjugal e os atores que a representam; não se pretende perceber as razões que levaram o agente a praticar o crime, aspirando-se compreender como o Direito representa o delito segundo quem o protagoniza e como as Ciências Sociais têm contribuído para a formulação da fase secundária do processo de criminalização. Como refere Agra (2005), sem uma boa sistematização teórica do conhecimento, sem a produção da análise daquilo que é necessário conhecer, a intervenção sobre o fenómeno criminal, nas suas pluralidades, é operada na mais profunda cegueira.

A problematização da violência, principalmente quanto à definição sociojurídica, é ainda confusa e recheada de pré-conceitos, crenças e estereótipos, não se podendo apagar de um momento para o outro o que se estabeleceu e viveu nos precedentes séculos. Há uma memória social que nos mantém ligados com o passado, que nos limita na apreciação dos factos. A própria Ciência revela dificuldades em definir o conceito de violência conjugal, pelo que tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo, adequando-se a Ciência ao que a sociedade vai vivenciado e à forma como o faz. Estamos, naturalmente, a falar de raízes culturais que se estabelecem no plano macrossocial, resultando em derivações em cada contexto microssocial.

Cabe, pois, criar uma metodologia para analisar as ligações existentes entre a criminalização primária e a criminalização secundária, mediante a qual se pretende definir o tipo de relação que a Psicologia Forense, também a Psicologia do Testemunho, estabelecem com a normatividade e o Poder. Arrancamos do pressuposto que entre as

fases primária e secundária do processo de criminalização existe mais do que a ponte que é lançada pelo comportamento transgressivo: coexistem, com efeito, quadros representacionais que preenchem um e outro dos patamares criminalizadores, consistindo, antes de tudo, nos seguintes aspetos: (i) que conceção faz o legislador deste crime? E a resposta a esta questão deve assentar não só na lógica política subjacente como na dinâmica entre a sociedade e o Direito ou, na expressão de Lúcio (1986), no fenómeno de acertar o Direito com a vida ou seja: tornar o Direito concreto, útil e preventivo em lugar de um mero reproduzidor de modos-de-produção políticos e, económicos; (ii) Como absorve o Aplicador a mensagem dimanada do Legislador, entidade política? Isto é: o Aplicador adota o racional legislativo ou apropria-o, por exemplo através da memorização da sua dimensão legislativa, produzindo outros (ou diferentes) enunciados aplicativos?; e, (iii) A verificar-se tal distorção aplicativa, por menor severização, o transgressor já captou tal facto? Ou seja: o delinquent doméstico já presente uma certa impunidade? Donde, a questão epicentral: poderão os tribunais converter-se em entes desculpabilizadores do crime de violência doméstica?

Podemos, eventualmente, encontrarmo-nos perante dois problemas distintos. Por um lado, a questão da severidade da pena como factor dissuasor do crime de violência doméstica ou, até mesmo, como um factor de prevenção a uma possível reincidência. Para tal, torna-se necessário perceber que tipo de penas existem em Portugal, se essas sentenças se encontram enquadradas nos delitos (não na perspectiva do Direito, mas na psicológica), nomeadamente se se verifica uma pena ou se, por outro lado, regem-se pela regra, "cada caso é um caso", havendo para cada caso uma pena específica. Procura-se, assim, perceber se as medidas mais elevadas e/ou mais severas promovem uma justiça mais justa. Os tribunais têm sido rotulados como uma das organizações que menos evoluíram nas últimas décadas devido, em larga medida, ao princípio da separação dos poderes e ao afastamento do sistema judicial enquanto objeto de estudo das Ciências (Raine, 2001). A necessidade de uma aproximação à realidade, tanto do ponto vista social como científico, é importante para que haja uma adequação, não só política mas também fatural, para que a realidade material se torne na verdade formal.

Uma perspectiva psicológica-jurídica da violência de género

Una perspectiva psicológico-jurídica de la violencia de género

CAPÍTULO II: LEGITIMAÇÃO

1. Enquadramento teórico do comportamento violento

As questões criminais e os estudos decorrentes desta temática têm sofrido grandes alterações ao longo dos tempos. Os comportamentos desviantes, de uma forma geral, nunca foram unânimes, surgindo sempre uma vasta panóplia de teses, correntes e

perspetivas distintas sobre a explicação da transgressão, por vezes até diametralmente opostas, o que levou a progressos e retrocessos nos domínios criminais.

O Direito Penal tem como eixo central o crime e a consequente sanção, que resulta de um complexo de normas jurídicas que, em cada momento histórico, enuncia, de forma geral e abstrata, os factos e condutas humanas suscetíveis de pôr em causa os valores e os interesses de uma sociedade (Santos & Henriques, 2009). Se cada momento histórico determina a norma e o desvio, o que é aceite como normativo na determinação dos papéis sociais, suscita-se a necessidade de perceber como são consumadas a fabricação legislativa e o tempo aplicativo do Direito, uma vez que são estes que determinam formalmente o que é aceite ou não, isto é, o que é lícito e ilícito na comunidade. Mais: o que é legal ou ilegal, porquanto o conceito de (i)licitude remete para o juízo ético, ao passo que a (i)legalidade se dá pela confirmidade à lei, que é, por vezes, anti-ética. Ao Direito não compete(ia) estabelecer padrões éticos de conduta, mas garantir a liberdade que, justamente, possibilita(ss) uma avaliação ética as ações (Hespanha, 1978).

A criminalização desponta com a fabricação legislativa, da competência do Legislador, que emite um discurso para a toda a comunidade, tendo como um dos princípios fundamentais a prevenção geral, discurso esse mais técnica e especificamente dirigido ao Aplicador da Lei. A duplicidade, por vezes duplicação de conhecimento, resulta, no âmbito criminalizador, em formas diferentes de cada ator interpretar o seu papel: para uns é o ato-fenómeno, enquanto para outro é o ato objeto, encontrando-se nesta procura do conhecimento a necessidade e a lógica de desconstruir o sentido e o molde, de forma a definir as correspondentes racionalidades (Poiares, 2003), na medida em que não há ninguém que veja o mundo com uma visão pura de preconceitos: todos o observamos condicionados por um conjunto definido de hábitos, e instituições, e modos de pensar: nem mesmo as conceções filosóficas conseguem subtrair-se a esses estereótipos e até os conceitos de verdadeiro e de falso são ainda definidos por referência aos particulares costumes tradicionais. A deserção social é tão-só o seu resultado extremo: a apatia não é uma ausência de socialização, mas uma nova socialização, flexível e económica, uma descripação necessária ao funcionamento de um sistema experimental célere e

sistemático (Lipovetsky, 1983). Os *mass media*, outro dispositivo (in)formal, são exemplo de um sistema que vive numa constante mutação, que tem o poder de alterar, é o veículo globalizador que permite ao indivíduo estar informado e atualizado, altercando ideias e ideais, promovendo ora a concórdia, ora a discórdia, ritualizando costumes e desvinculando outros, moldando a experiência dos factos e a conduta, impondo as suas leis e as suas verdades, ou seja, orquestrando a filarmónica da aldeia global, promovendo a exclusão daqueles que recusam o seu funcionamento; é o dispositivo mais forte e influente na sociedade contemporânea que em virtude da maleabilidade de uma (re)configuração cultural modifica os formatos do pensamento institucional, logo da legalidade.

Para Habermas (1998), nem todas as mensagens, provenientes dos mais variados segmentos sociais conseguem alcançar os centros de decisão e poder, existindo um conjunto de obstáculos à sua efetiva consecução e legitimação social, uma vez que os influxos comunicativos para que adquiram pregnância e, destarte, reconhecimento no plano do Poder, devem alcançar um patamar suficiente para suplantar a barreira que os separam de um mero desejo de reconhecimento de uma parte da comunidade, rumo à verdadeira ação estatal legitimadora. Por outras palavras: há mensagens da comunidade (e dos seus vários setores) que se perdem e não chegam ao poder, diluídas nas teias do não-poder dos grupos. O papel do Direito, neste contexto, é o de mediador, como um verdadeiro filtro, separando as pretensões sociais legítimas das patológicas; sendo o critério utilizado para a realização da respetiva “filtragem”, o consenso estabelecido com base em valores essenciais orientados ao bem comum dentro de um Estado democrático de Direito. O Direito Criminal estabelece, por forma geral e abstrata, quais os factos que devem ser considerados crimes e quais as penas que lhes correspondem; saber, porém, se, num dado caso, um certo agente praticou um facto e qual a pena que lhe corresponde, importa uma actividade concreta que, de modo nenhum, pode ser arbitrária, antes exige garantias que defendam o indivíduo de arbítrios e permitam uma verdadeira realização da justiça criminal. O valor de uma explicação causal do crime tem antes de tudo o interesse de nos fazer conhecer o mecanismo natural desse fenómeno (Correia, 2008). A realidade do crime não deriva exclusivamente da

qualidade ontológica de certos comportamentos, mas da combinação de determinadas qualidades materiais do comportamento com o processo de reação social conducente à estigmatização dos seus agentes como criminosos (Dias, 2007). Na conceção de Becker (1963), são os grupos sociais que conceberam a desviante ao elaborar as normas cuja violação constitui o desvio. A lei estipula os interditos, os atos proscritos que se situam no terreno da disfuncionalidade; contudo, o que se pode apelidar de disfuncional? Szabo (1988) assinalou que o disfuncional, isto é, o problemático em face dos valores dominantes é apenas o que supera os limites de uma cultura. A culturalidade revela-se como cenário determinante e condicionante da norma e do desvio, das suas intercomunicações, da padronização. Novamente Hart (1995) e os padrões de comportamento. E também Kundera (1986), na proclamação de que o que torna uma coisa boa ou má (leia-se normal ou desviante) é a sua inserção na ordem das coisas.

Como é consabido, a linearidade com que os problemas sociais mais emergentes se tornam objeto de uma intervenção (des)criminalizadora não depende apenas dos influxos comunicacionais que se estabelecem entre os vários dispositivos de controlo, havendo igualmente um conjunto de interesses, com maior ou menor impacto na transformação e afirmação de tais problematizações. Interesses que são sempre também de natureza económica, desde que o poder se afirma mais na ordem do económico que do político. Com efeito, a ordem de Economia emerge em constelações onde o capitalismo liberal se afirma (Moreira, 1978), aparentemente servindo o Poder, de que se alimenta: daí o carácter reprodutor de exclusão, determinado e emanado do chamado poder político (e legislativo, e aplicativo). A democracia é, cada vez mais, um conjunto de interesses de várias ordens, em que a proteção da comunidade não está livre de uma hierarquização social, havendo uma edificação vertical em detrimento de uma construção horizontal. A importância que assume depende do momento, da situação e dos vários contextos onde os interesses sociais são inseridos; mas depende também da forma e da dimensão, gravosa ou não, que pode atingir no plano macrossocial, podendo tornar-se determinantes, ou não, no percurso social; a síntese entre o que é proscrito como crime e o que não o é realiza-se na elaboração legislativa e nos tribunais, que determinam, isto é, reprogramam todos os dias a vida de várias pessoas. A constatação

de que existem dois pontos de vista de aproximação ao Direito é fundamental para o método descritivo empírico de Hart (1995). Primeiro, no que diz respeito à noção de ordenamento jurídico, concebido como um conjunto de normas, pois a admissão de um discurso descritivo externo possibilita que as normas sejam observadas como causas de comportamento e, em consequência, em termos de eficácia (aceitação e seguimento das normas). Por outras palavras: ocorre aqui o apelo à História comunitária e à história de cada sujeito, de cada Homem e Mulher, pontos primordiais do conhecimento.

2. O género *versus* processo de criminalização

Há, então, que perspetivar o Homem e a Mulher no espaço da averiguação criminal, procurando os tribunais alcançar a verdade dos factos e aplicar a lei ao transgressor. Trata-se do Homem e da Mulher, da sua dupla realidade – a intrínseca e a extrínseca -, das razões por que – isto é, as motivações para o ato delinquencial ou, como refere Debuyst (1986), o significado do crime. Poiares (1999) salienta, arrancando do conceito de Debuyst (1986), a noção de significância do ato no tempo em que foi cometido, quer dizer, integrado e posicionado à luz dos seus complementos circunstanciais de tempo, de modo e de lugar – a ecotemporalidade, a que já nos reportámos. Como refere Baratta (1999), o crime também é ato do sistema, com que se reproduz a exclusão, centrifugando-se as pessoas, categorizando-as criminalmente é também uma forma política de seriação de adversários. Criminalizar é um meio de excluir (Poiares, 2008).

No entanto, a literatura jurídica que aborda a questão dos aspetos históricos do Direito Criminal refere que o processo de criminalização evolui sem obedecer a qualquer linearidade temporal ou geográfica, sendo um fenómeno complexo e influenciado por diversas razões, desde questões sociais, políticas, económicas. Discordamos: criminalizar é um ato ético, mas também político, como referiu, em 1990, P. Landreville; e tem os seus calendários e coordenadas geo-políticas. A concetualização do circuito judicial enquanto sistema, no qual operam três atores principais (Legislador; Aplicador e Transgressor), triangularmente dispersos, trocando mensagens entre si e

processando essa informação em regime de captação, envio e reenvio, compreensão e *feedback*, remete para uma construção plural do circuito criminalizador, em que a triangulação se desdobra e recompõe. Paralelamente ao sistema de interações discursivas, surgem outros atores, que são a Vítima, as Testemunhas, os Técnicos, a Opinião Pública, a Opinião Política, os *Media* e a Comunidade Científica, a Opinião Cooperativa o que se consubstancia em redes de triangulações sucessivas, em que os vértices são preenchidos por constantes e diferentes atores. Ora, entre todos existe a circulação de informação e a troca recíproca de mensagens, que densificam aquela movimentação, sendo que cada um destes atores, na relação que estabelece com os demais, é suscetível de produzir modificações na configuração geral do sistema, através da inter-influenciação que os anima (Poiares, 1996, 1999, 2005).

Embora a ordem jurídica precise de assentar em conceitos claros e sistematizados, para que sejam asseguradas a certeza e a segurança jurídicas, a evolução do processo de criminalização acompanha sempre as alterações e as regras sociais, os seus valores morais e éticos, os seus princípios. A censurabilidade do comportamento depende do que é definido como o que tem que ser e o que deve ser, isto é, o que é determinado como crime e pode ser perspectivado como um ato que é atípico num determinado espaço e temporalidade, havendo sempre uma validade sócio-jurídica: ultrapassado o comportamento antes designado como transgressivo, pode passar a ser considerado lícito. Como refere Larenz (1978), a lei vale para todos os tempos históricos, mas em cada momento varia a forma como este a entende e interpreta, de acordo com a consciência jurídica.

Segundo Machado (1982-2007), podemos distinguir no ordenamento jurídico conceitos suscetíveis de serem considerados como determinados, por exemplo, personalidade jurídica, prescrição, entre outros, que formam as estruturas arquitetónicas consolidadas da ordem jurídica; por outro lado, conceitos indeterminados e cláusulas gerais que constituem a parte movediça e absorvente do mesmo ordenamento, que servem para ajustar e fazer evoluir a lei no sentido de a levar ao encontro das mudanças e das particularidades dos quotidianos. O Aplicador é menos estritamente vinculado à lei,

tanto no caso de a regra jurídica a aplicar conter conceitos indeterminados, no qual domina o poder discricionário.

«[...]Noutros casos, porém, vigora o princípio da oportunidade, exercendo o órgão um verdadeiro poder discricionário; o que acontece quando o legislador, para viabilizar uma adaptação acertada e oportuna da decisão às particularidades do caso concreto e às decisões e orientações políticas do Governo ou da administração, se limita a autorizar o tribunal ou agente a adoptar certas condutas, a conceder ou a denegar autorizações ou até a praticar determinadas intervenções, indicando apenas o escopo ou finalidade da decisão a adoptar, mas sem vincular o sentenciador a uma obrigação determinada» (Herpin, 1978, p. 115 e 116).

O espaço de manobra do Aplicador da lei encontra-se nos artigos 6º e 9º do Código Civil. O ato de julgar e, por conseguinte, o ato de sentenciar estão no contexto de enunciados, no sentido foucauldiano, naquilo em que se reporta ao «[...] elemento último, indecomponível, suscetível de ser isolado em si próprio e capaz de entrar num jogo de relações com outros elementos semelhantes» (Foucault, 2005, p. 118). Podemos, então considerar, ainda que hipoteticamente, e indo ao encontro da ideia de Hart (1995), que o verdadeiro poder no processo de criminalização se encontra na criminalização secundária, uma vez que se as leis apenas existirem no abstrato e não forem aplicadas ao caso concreto, de nada servem. É na aplicação da lei que o Legislador encontra a assunção do verdadeiro espírito da lei. A generalidade abstrata dos tecidos normativos destina-se a tornar as leis aplicáveis a casos concretos, a sujeitos com um percurso de vida, podendo fazer justiça, uma vez que, como refere Ricoeur (1995), o Direito não é sinónimo de justiça; de nada servem as leis (Direito) se não forem utilizadas de forma correta e adequada ao caso, se a verdadeira vítima não for ressarcida e o agressor punido; é necessário o diálogo humano (justiça) com a realidade. É importante reconhecer a culpa e fazer jus às vítimas pela narrativa da sentença. Porém, de forma justa e sem o espírito de ajuste de contas, que por vezes se vislumbra.

Devemos deixar-nos guiar pela complexidade inerente a uma sociedade cada vez mais multifacetada e plural, onde o que já foi diferente pode não o ser agora, onde o que era tido como axioma hoje não o é mais, onde o novo avanço tecnológico, muitas vezes,

representa um factor de altíssimo risco social. Somente através do desenvolvimento dos mecanismos adequados, viabilizadores da discussão democrática, é que alcançaremos o ideal de justiça e igualdade, visado por esse importante espaço de mediação e discussão que é o Direito. A análise do crime além de ser interdisciplinar, terá de ser interprofissional e jus psicológica – aqui radica o mistério, chama-se-lhe assim, na Psicologia Forense.

O Legislador deve pautar a sua intervenção penal com o maior rigor profissional, procurando obedecer aos princípios legislativos, desde logo a ideia de a intervenção penal dever ser a *ultima ratio*. No entanto, os movimentos de (des)criminalizar determinados comportamentos/atos são o reflexo do pendor social, cultural e económico, quer despenalizando-os (ex: aborto), quer descriminalizando-os em sentido técnico ou restrito, ou seja, mantendo a sua proibição como ilícito de mera-ordenação social, como aconteceu com a descriminalização do consumo das drogas pela Lei nº 30/2000, de 29 de Novembro, quer criminalizando-os, como por exemplo, a violência doméstica.

A fabricação da lei é um momento essencial e de grande relevância para a sociedade, onde se determina o barómetro da vida, o que é um comportamento desviante, qual a pena a ser aplicada, estabelecendo-se a malha do tecido social e judicial, o pendor criminal; a manifestação de um comportamento na vida social só se converte em transgressão na medida que é qualificada enquanto tal: a componente jurídica é essencial e necessária ao conceito do crime, em louvor dos princípios da tipicidade e da legalidade.

Analisar o crime é, então, desvendar e acentuar o ator que o realizou, mas também o ator que foi vitimado; é captar as invisibilidades a partir das visibilidades, como já referimos, citando Franck (1983), assentando em lógicas e sistemas comunicacionais, onde o(s) discurso(s) (Miaille, 1979)– mas também os intradiscursos, na conceção definida por Poiars (1999), consubstanciando os ditos, os não ditos, os interditos, os entreditos e os sobreditos – assumem sentido próprio e fundamental. O discurso, objeto de leitura interpretativa da justiça penal (a hermenêutica), por vezes alvo da reescrita, é

também objeto da interpretação psicológica: já não apenas o trabalho do ator judiciário (advogado ou magistrado), mas ainda o do psicólogo forense, já não apenas como ortopedista do espírito (Foucault, 1999), mas enquanto intérprete para o tribunal e leitor-explicativo de motivações e significâncias. O crime deixa de ser explicado em razão da sua etiologia, cessando o paradigma etiológico-explicativo (Agra, 1982; 1986; Dias & Andrade, 1997), evoluindo-se para uma centralização nos processos de construção social do delito. O crime é, com efeito uma construção humana, social e científica, sendo que a lógica social se articula com a judicial – os tribunais são parte do regime.

Como tal, não nos podemos esquecer da vital importância que a criminalização primária assume: primeiro, porque é um mecanismo de seleção com poder para imputar responsabilidades e atribuir sentido ao exercício da discricionariedade das instâncias do controlo formal. No entanto, devemos reinseri-la no contexto político da sua emergência, bem como na necessidade de abstrair o aparecimento da legislação penal da sucessão histórica para compreendê-la: deve-se recolocá-la no contexto do momento da sua génese (Robert, 1939-2007).

Ora, a violência conjugal e o Direito interligam-se num exercício dialético assinalado por trocas recíprocas, do qual também resulta a história da construção social das categorias do masculino e do feminino através dos discursos e práticas. A evolução legislativa para padrões igualitários tem sido vasta e diferente. Em certos momentos e lugares, o seu desenvolvimento acompanhou processos políticos revolucionários de democratização e correspondeu a uma deliberada opção do Legislador no sentido de alterar profundamente o sistema jurídico, como foi o caso de Portugal.

Como se inscreve a modificação do discurso jurídico na mudança cultural e social, no século XXI, no que concerne à violência entre cônjuges? A alteração da lei pode ter tido também um efeito de alter(c)ação na significância psicossocial nesta questão? Será possível teorizar as (des)conexões punitivas na violência entre o sexo masculino e sexo feminino na lei portuguesa, como uma (des)regulação?

Assume-se neste trabalho a violência doméstica ao nível da criminalização secundária, embora não se aspire a decompor os elementos objetivos ou descritivos, nem os princípios normativos do tipo de crime na arquitetura jurídica - pretende-se analisar os elementos subjetivos do delito, ou seja, o que se ambiciona descodificar é a severidade punitiva e como a Psicologia contribuiu para a ótica judiciária.

Todos os sujeitos são influenciados e motivados, todos potenciam o comportamento e as ações e, deste modo, orientam o que fazem. O Legislador não é diferente, possui um quadro de referências, uma bússola social e profissional que fazem parte de si e vão influenciar a construção das leis. A criminalização primária não é somente uma tarefa de elaboração e gestão, bem ou mal desenvolvida, mas uma aplicação de um conjunto de critérios morais, éticos, jurídicos, sociais, pelo que o legislador, ao enfrentar-se com a necessidade de tomar a deliberação, irá por tudo em jogo (Landreville, 1990). A criminalização primária corresponde à criação normativa, que tem como ator principal o Legislador; a criminalização secundária corresponde à fase da aplicação da lei, cujo ator principal é o Aplicador; e, por fim, a criminalização terciária, que corresponde efetivamente à execução da pena e à reinserção social, na qual o ator principal é o Transgressor, apoiado por técnicos de comportamento e de reinserção social. Este modelo esquematiza-se numa relação triangular, na qual se verifica um estabelecimento de troca e partilha de informação entre os três atores principais, ocorrendo uma intercomunicação discursiva, em que o movimento de um destes atores pode provocar o movimento dos outros, em que o discurso de qualquer deles vai influenciar o discurso dos demais e a configuração geral do próprio sistema, tratando-se de um sistema que pretende captar e descodificar as interações discursivas, isto é, os reflexos e repercussões desses movimentos e os efeitos *feedback*. A troca de informação de um para os outros atores processa-se num registo de tensionalidade, existindo em cada mensagem o efeito que ela produz no seu emissor e o efeito que, eventualmente, vai produzir no recetor. Estabeleceu-se uma circularidade que vai necessariamente condicionar e modificar as racionalidades dos três principais atores (Legislador, Aplicador e Transgressor). Todavia, outros atores estão presentes neste sistema, repercutindo-se também na fase da aplicação da lei e no trabalho do sentenciador, em

especial a vítima e as testemunhas, se, bem entendido, o(s) julgador(es) (juiz ou juízes). Este modelo incide na fase de criminalização secundária. Assentando na análise do modelo proposto por Poiares (1999), que articula os personagens presentes em julgamento, estabelece-se um novo modelo para aplicar no domínio da Psicologia do Testemunho e das motivações ajurídicas, ou seja, na aplicação da lei, cujo ator é o aplicador da lei. No que tange à fase secundária, que surge por força do transgressor, já que é este que estabelece a ponte entre a criação normativa e a aplicação da lei, existe uma dialética que se cria e que é tensional, entre o Aplicador e o Transgressor e, lateralmente, entre o Aplicador e as Testemunhas/Vítima.

A compreensão do crime, por referência ao quadro normativo, expande-se ao processo de reação social suscitado pelo delito e à definição subjetiva do delincente, surgindo a terceira configuração, a construtivista, na qual o agente do crime assumia a qualidade de criminoso na interrelação com o significado que o ato adquire na consciência dos outros, em obediência aos processos normativos dominantes; o agir do delincente é apenas um elemento numa constelação de outros traços comportamentais que estão associados a um determinismo biológico, psíquico e social (abordagem biopsicossocial), como forma de explicar o crime e o ator que comete o ilícito, ou a ação e o seu autor, alcançando o significado último ato criminal. O crime, como conceito e fenómeno, depende essencialmente da manifestação de um juízo de valor, enquanto expressão da referência a um sistema normativo, que categoriza de uma forma diferencial e gradual a natureza do facto tipificado como crime (Leal, 2007).

A violência conjugal é um fenómeno social que faz parte da existência humana, face ao qual a sociedade tem sido branda. Ora legitimada por dogmas religiosos e políticos, ora pela ideologia patriarcal, a violência integra a história das sociedades contemporâneas (Gelles, 1993). A enorme tolerância sociocultural face à violência doméstica terá contribuído para a propagação e proliferação do fenómeno até se tornar alvo de investigação e intervenção legal (Dias, 2010). Tem sido considerada, aliás, por muitos como um flagelo social; segundo alguns dispositivos informais, como a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), e formais, como CIDM (Comissão para a

Igualdade e para os Direitos das Mulheres), as vítimas ainda não estão suficientemente protegidas em Portugal, sendo que a demorada justiça continua a prejudicar a mulher visto ser esta o principal alvo em violência doméstica. Ou seja, os próprios dispositivos perpetuam o drama; pretendendo atenuá-lo, não erradicá-lo, o que só o Legislador e o Aplicador podem lograr alcançar. Por um lado, sendo as mulheres apontadas como o número de vítimas mais prováveis, não podemos deixar de referir outras vítimas muito comuns neste tipo de violência, nomeadamente as crianças, os idosos e os deficientes. O tipo de violência exercida perante estes grupos sociais (crianças, idosos e deficientes) assume várias formas, que vão de maus tratos e espancamentos até ao abuso sexual, violação, ameaças, intimidação, violência psicológica e simbólica e económico-financeira. No entanto, não podemos ignorar que a maioria dos casos de violência doméstica é exercida para com as mulheres, agredidas pelos maridos e companheiros; vários estudos, tanto a nível nacional como internacional, revelam que este tipo de violência tem lugar *in domo*, isto é, na intimidade. Segundo Matos (2011), é necessário também refletir sobre esta problemática na ótica da violência de género, reflexo de uma desigualdade social, económica e política, perpetuada por uma sociedade que reforça ideologias sexistas. A questão do género é entendida com um binómio, ou seja, a problematização da criminalidade feminina é abordada dentro da dualidade normal *versus* desvio; no entanto, tem como referência o comportamento masculino, a natureza *versus* cultura e o público *versus* privado. Tornar notório aquilo que fica oculto na subjetividade, ou recluso nas invisibilidades da vida quotidiana, institui uma proposta de construção de uma nova identidade da mulher, não apenas como uma perspetiva individual, mas também como projeto coletivo, aqui se inscrevendo uma das bases do movimento social (Aguar, 1997). A definição e as alterações que decorreram a partir do positivismo em relação ao papel feminino continuaram a sofrer alterações, resultantes de vicissitudes várias. O Direito Penal também acompanhou estas estações de mudança com as modificações que surgiram, em 1886, na novel redação do Código Penal de 1852. É incontestável o facto de o género feminino ter vindo a assumir um papel de relevo ao longo da História, como autor activo na globalidade da construção social, deixando de ser apenas um prolongamento do homem, erigido já em parte independente

e participe, embora a edificação tenha tido sempre como alicerces a perspectiva de cada época, determinando qual o papel do género na sociedade contemporânea. O género feminino e o Direito interligam-se num exercício dialético, assinalado por trocas recíprocas, do qual também resulta a história da construção social das categorias do masculino e do feminino através dos discursos e práticas. A evolução legislativa para padrões igualitários tem sido vasta e diferente. Em certos momentos e lugares, o seu desenvolvimento acompanhou processos políticos revolucionários de democratização e correspondeu a uma deliberada opção do Legislador no sentido de alterar profundamente o sistema jurídico, como foi o caso de Portugal, após 1974, e, em outra medida, de Espanha (Rodríguez-Piñero & Lopez, 1986). A igualdade legal, ainda que apostada numa equiparação material e não meramente formal é, em grande medida, danificada por desigualdades sociais estruturais, as ações positivas, nas suas formas mais drásticas – como é o exemplo das quotas de acesso à Assembleia da República e lugares eletivos –, podendo colidir com alguns sentidos interpretativos dos limites constitucionais claramente pensados em termos igualitários. A igualdade como moldura conceitual e legislativa é particularmente insatisfatória, como parece evidente, na área penal: Santos (1948/1986) equacionou esta questão num texto antológico sobre o Direito e os mecanismos de igualdade formal *versus* igualdade material. Não se veja aqui o feminismo como assunto, obra ou interesse “só” de mulheres, da mesma forma que ser anti-terrorista não deve ser feudo das vítimas de terrorismo. É necessária uma elaboração paralela, por vezes aparentemente contraditória, que é a desconstrução dos conceitos teóricos e legais (Beleza, 1990).

Para se poder interpretar o sistema jurídico e a forma como a violência contra as mulheres é hoje representada e abordada nos vários quadrantes políticos-jurídicos-sociais, é necessária uma arqueologia das culturas e dos modos de vida do passado.

3. Evolução e enquadramento jurídico-social da violência conjugal

O papel da mulher tem sido determinado por óticas biológicas e sociais, as quais têm contribuído para a desigualdade de género, originando assimetrias sob a égide de um discurso discriminatório, levando a desfasamentos de várias ordens. Por exemplo, em Roma as mulheres não eram consideradas cidadãs de pleno direito, como tal, não podiam exercer cargos públicos; a exclusão social, jurídica e política colocava a mulher no mesmo patamar das crianças e dos escravos; temos nos tempos atuais exemplos como nos países orientais, em que a mulher é subjugada à vontade do homem. Foi o que aconteceu em Portugal até à reforma que Almeida Santos aplicou ao Código Civil de 1967 (em 1977). Esta exclusão das mulheres no tocante, por exemplo, à vida política ainda hoje é motivo de reflexão e de como estas são colocadas à margem dos órgãos decisores. Foi necessário formular a Lei da Paridade (Lei Orgânica nº 3/2006, de 21 de Agosto), uma proposta elaborada pelo Partido Socialista (Projecto de Lei 224/X, que deu entrada no Parlamento a 8 de Março de 2006) para que houvesse assento paritário do género feminino da Assembleia da República. Nas eleições legislativas de 2009, apesar de a Lei da Paridade já estar em vigor, as mudanças em termos de representação feminina não se fizeram sentir. Apenas 27% dos deputados eleitos eram mulheres. Aquela lei, no seu artigo 2.º, nº 2, impede mais do que dois candidatos do mesmo sexo seguidos nas listas de candidatos a deputados. Os partidos com lugar no Parlamento cumpriram a regra, mas quase sempre as mulheres foram colocadas depois dos homens, correndo o risco de não serem eleitas. Esta lei vem evidenciar a discriminação que ainda hoje existe por parte de uma comunidade que tenta mascarar os designios do machismo. A cultura judaico-cristã também contribuiu para a subjugação das mulheres, uma vez que o cristianismo retratou, e ainda hoje retrata, a mulher como sendo pecadora, devendo por isso ser obediente, passiva e ser submissa ao género masculino. Contribuindo para as condutas e inculcando uma consciência de culpa que permite a manutenção da relação de subserviência e dependência. Como refere a Bíblia "As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido.....".

Uma visão naturalista imperou até ao final do século XVIII, a que ao género feminino cabia apenas cuidar do marido e executar as lides domésticas, enquanto os homens deviam dedicar-se a actividades políticas e académicas; tal ideia é patenteada na obra de Rousseau (1754), designada como *O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre Homens*. Ainda hoje estas questões pairam nos interstícios da parentalidade, como, por exemplo, a licença de maternidade e paternidade, em que a mulher trabalhadora tem direito a uma licença por maternidade de 120 dias consecutivos, 90 dos quais necessariamente a seguir ao parto, podendo os restantes ser gozados, total ou parcialmente, antes ou depois do parto, enquanto o pai tem direito a uma licença de cinco dias úteis, seguidos ou interpolados, no primeiro mês a seguir ao nascimento do filho. Pode-se, pois, mais uma vez verificar a desigualdade que continua a existir no tocante às chamadas questões domésticas.

Só houve uma efetiva mudança do papel da mulher na vida pública activa com a Revolução Francesa, em 1789, na qual as mulheres participaram ativamente no processo revolucionário, conjuntamente com os homens, tendo como pilares e ideais a Liberdade, Igualdade e a Fraternidade. A Revolução Francesa mudou a condição feminina, não só porque mudou a condição de toda a França, mas também porque, a partir desse momento, passou-se a questionar-se o papel da mulher. É através do período revolucionário que as mulheres começam a perceber que não precisavam ser submissas aos homens, começaram a ver que eram seres humanos completos, tais como seus pais e maridos. Também conquistaram direitos sobre o estado civil e o divórcio (1792) e estabeleceram-se os mesmos direitos de autoridade paternal para o pai e para a mãe (1793). A conquista desses direitos representa a abertura da visão machista em prol dos direitos feministas. Traduz-se no caminho para a conquista dos direitos civis.

No século XIX, para além da emergência de várias Ciências, como a Psicologia, há a consolidação do sistema capitalista, levando a profundas mudanças na sociedade. Com a alteração do modo de produção, houve também uma afetação no trabalho feminino, levando um grande contingente de mulheres para as fábricas. A mulher sai do *locus* que até então lhe era reservado e permitido – o espaço privado – para a esfera pública. Neste

processo, contestam a visão de que são inferiores aos homens e articulam-se para provar que podem fazer as mesmas coisas que eles, iniciando assim a trajetória do movimento feminista. Ao questionar a construção social da diferença entre os sexos e os campos de articulação de poder, as feministas criaram o conceito de género, abrindo portas para se analisar o binómio dominação-exploração construído ao longo dos tempos.

A violência contra as mulheres no início do século XX, em Portugal, era ignorada e aceite naturalmente, estando ainda bastante enraizados os princípios das Ordenações Filipinas, onde se consagrava o direito de o marido castigar a mulher, um verdadeiro direito de correção, dizia-se. A técnica legislativa começava por igualizar e acabava por especializar, isto é, discriminar. «O ordenamento jurídico-penal não estava insento de preconceitos de género, encarando a violência entre cônjuges com benevolência, perspetivando-a como a natural extensão de um direito paternal que assentava sobre a necessidade (e obrigação) do chefe de família corrigir os que estavam a seu cargo, ainda que recorrendo a meios violentos. Logo, um marido que batia na mulher parecia ser a ordem natural das coisas. [...] de um modo implícito ou explícito, justificava-se este tipo de violência com o argumento de que a mulher, de algum modo, o merecera, ou de que o correctivo físico era, afinal, prova de afecto.» (Beleza, 1990). Durante muito tempo, o Código Penal, apresentou graves lacunas em relação a este crime. Até 1852, a lei portuguesa autorizou o marido a bater na mulher, e o Código Penal de 1886 considerava o adultério da mulher como atenuante de homicídio, não sendo reconhecido à mulher a mesma atenuante (Lourenço, Lisboa & Pais, 1997).

A violência contra as mulheres evidencia uma estreita relação com as categorias de género, classe e etnia, e suas relações de poder. Tais relações estão mediadas por uma ordem patriarcal saliente, a qual atribui aos homens o direito a dominar e controlar as mulheres, podendo, em certos casos, atingir os limites da violência.

O despertar dos profissionais e da comunidade científica e da opinião pública para este fenómeno veio beneficiar, no final da década de 60 e início dos anos 70 do século passado, o processo de reconhecimento de outras formas de violência na família, nomeadamente a que é praticada contra as mulheres. A identificação da “síndrome da

mulher batida”, nos anos 60, época em que a comunidade científica começou a equacionar esta problemática, primeiro no tocante aos abusos parentais, com a publicação do artigo *The Battered Child Syndrom*, de Kempes (1962), levando depois a uma maior abrangência para outras populações: a publicação, em Inglaterra, da obra de Pizzey (1974), *Scream quitly or the neighbors will hear*; e a ação do movimento feminista, a par de tantas outras iniciativas, chamam a atenção para as inúmeras formas de violência e opressão vividas pelas mulheres nos seus próprios lares. Nos anos 80, o interesse público, legislativo, científico e profissional centra-se nesta questão. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida como a Lei Internacional dos Direitos da Mulher, visando a promoção do seu acervo de direitos da mulher na busca da igualdade de género, bem como a repressão de quaisquer discriminações.

É necessário mencionar que, se por um lado Dias (2004) e outros autores interligam a violência doméstica com as questões de género, outros argumentam que este é um problema humano e não de género, pois as mulheres cometem tanta violência nas relações íntimas como os homens (Hines, Brown & Dunning, 2007). Porém, no sentido da análise da violência doméstica, é aqui realizada uma abordagem ao factor histórico da mesma e da família tendo em conta as questões de género, tendo em conta o legado da perspectiva feminista, dominante até cerca da década de 70, que permitiu aumentar a visibilidade da violência doméstica, dando lugar à investigação das ciências sociais e humanas nesta área (Casimiro, 2008).

A violência intrafamiliar começa ser objeto de estudo científico e social, nos anos 60, uma vez que esta década foi o ponto de ruptura com as décadas anteriores e pode ser a primeira, de 1960 a 1965, marcada por manifestações sócio-culturais, e no âmbito da política, é evidente o idealismo e o entusiasmo no espírito de luta do povo. A segunda, de 1966 a 1969, revela as experiências com drogas, a perda da inocência, a revolução sexual e os protestos juvenis contra a ameaça de endurecimento dos governos. Nesta época teve início uma grande revolução comportamental, com o surgimento do

feminismo e os movimentos civis em favor dos negros e homossexuais. O Papa João XXIII abriu o Concílio Vaticano II e revolucionou a Igreja Católica. Surgem movimentos de comportamento como os hippies, com seus protestos contrários à Guerra Fria e à Guerra do Vietname e o racionalismo. Esse movimento foi também chamado de contracultura, ultrapassando o moralismo rígido dos anos 50 da família perfeita. Começa nos anos 60 uma nova fase política, implode um conjunto de manifestações e lutas que vão ser determinantes para uma alteração profunda do ponto vista social e político: as lutas dos estudantes em Portugal, em 1961/1962, e 1968/1969, o Maio de 68, em França. A década de 70 surge com a defesa do meio ambiente, e houve também um crescimento das revoluções comportamentais da década anterior; que muitos consideram a "era do individualismo". Enquanto isso, na Europa, também em meados da década de 70, uma nova conjuntura contribuiu, entre outros fatores, para pôr fim a velhas ditaduras fascistas como as de Portugal, Espanha e Grécia. Começa, principalmente em Portugal, a emergir uma nova configuração de família, diminuindo a tolerância sociocultural face à violência na família, abandonando-se progressivamente os princípios defendidos pela ideologia do Estado Novo: "Deus, Pátria e Família". A identificação do fenómeno da violência doméstica remonta a 1960 e 1970, não tendo tido os primeiros reflexos em sede da criminalização; na década de 70 assistiu-se a uma proliferação de bibliografia sobre a violência sobre as mulheres e a violação em particular, evidenciando os resíduos de um sistema penal de cunho patriarcal ou como extensão do regime jurídico da propriedade estabelecido em benefício dos homens (Dias & Andrade, 1997); sendo que, em Portugal, a partir da década, de 80, tornou-se alvo de diligências científicas e da criação de medidas de política social (Dias, 2004). O atraso de mais vinte anos, comparativamente a outros países europeus, face às respostas necessárias para combater a violência de género deveu-se, igualmente, a um feminismo fragilizado pelo contexto social e político que o remeteu durante demasiado tempo para a *clandestinidade* e à incompreensão pelos movimentos sociais emergentes após a democratização, de que as contradições de classe estavam também ligadas às contradições de género; e, ainda, ao facto de o centro das lutas feministas em Portugal, durante três décadas, estar centrado na despenalização do aborto. Como consequência, e

apesar de a violência contra as mulheres começar, na década de 80, a emergir na própria agenda de algumas associações (feministas e não feministas) como uma prioridade, esta reivindicação só teve eco público nos finais da década de 1990, por pressão de associações que continuaram a batalhar nesta causa e pela agenda europeia institucional da igualdade de género, que influenciou o governo a elaborar os primeiros planos nacionais para a igualdade e contra a violência doméstica (Tavares, 2011).

A Constituição de 1976 consagra a dignidade da pessoa humana como valor estruturante da jovem democracia que então se erguia; e daí decorreu, entre o mais, a consagração de princípios (como o da igualdade, que fez ascender a mulher à condição de cidadã de pleno direito), alguns dos quais vieram impor todo um outro modelo de sociedade. Desenvolvendo aqueles princípios, a legislação ordinária foi sequente e progressivamente afirmou direitos e regulou o novo modelo social. No domínio penal, a especificidade, que ainda é por vezes negada, justificou que logo no texto inicial do Código Penal, de 1982, que veio substituir o velho código de 1886, se tenha inserido um novo tipo de ilícito, de natureza pública, então designado de «maus-tratos». A redação do artigo 153º do Código Penal de 1982, que consagrou o crime de maus-tratos a cônjuge na ordem jurídica portuguesa, nunca satisfez totalmente as organizações feministas, por ser uma versão adaptada de uma proposta inicial onde esta problemática não era sequer considerada. Efetivamente, a autonomização do crime de maus-tratos foi proposta pela primeira vez por Correia, em 1966, no ante-projecto para a revisão do Código Penal. Mas a «novidade», aliada a uma certa incompreensão acerca da sua origem e justificação, veio a determinar uma deficiente interpretação jurisprudencial, que considerava tratar-se este de um crime específico de ofensas corporais e, logo por isso, de natureza semi-pública, exceto nos casos em que se provasse que a conduta seria «devida a malvadez ou egoísmo» (elemento estes que tinham por referência os maus-tratos a menores dependentes). Tal significou que a nova incriminação não teve a relevância que dela se esperava; devido ao “cuidado” com que este padrão de comportamento foi criminalizado, exigindo um dolo específico de intencionalidade maldosa (Mota & Nunes, 2010).

Em termos legais, no que toca a questões legislativas em Portugal, surge a primeira lei, a Lei n.º 23/80, de 26 de julho, que ratifica a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979. Só em 1995 se alterou o primitivo texto deste tipo de ilícito, procurando-se então corrigir o caminho que a prática vinha trilhando. Aproveitou-se para agravar as penas, desse modo também se distinguindo o que estava em causa, e, numa cedência à prática, tornou-se o procedimento dependente de queixa, ou seja, com a reforma penal de 1995, o crime de maus tratos perdeu a natureza de crime público, dependendo, agora, o procedimento criminal da apresentação da queixa; houve também um agravamento da moldura penal e desapareceu a referência de malvadez ou egoísmo na lei em detrimento de maus tratos físicos e/ou psicológicos (Duarte, 2011).

As críticas que foram surgindo, sobretudo quanto à natureza semi-pública do crime, bem como no ímpeto que começou a haver na opinião pública sobre as notícias que os maus tratos no seio familiar vieram a determinar que, na reforma de 1998 (operada pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro) se começasse a inverter o caminho, no sentido em que o Ministério Público se tivesse habilitado a iniciar o processo, desde que não contra a vontade da vítima. Na verdade, a possibilidade de desistência de queixa por parte da vítima fazia com que uma grande parte dos ilícitos relativos à violência conjugal ficasse impune, em razão justamente dos constrangimentos, com receio de represálias ou a dependência económica provocavam na vítima a ausência de queixa ou a desistência do processo. Tornou-se, então, o procedimento independente de queixa, embora deixando à vítima a última palavra quanto ao prosseguimento do processo. Em 1999, a Lei nº107 de 3 de Agosto, estabelece o regime geral da rede pública das casas de apoio a mulheres vítimas de violência, sendo do Estado a competência do seu funcionamento e manutenção; já em 2009, a lei nº 112, de 16 de Setembro, institui o regime jurídico a aplicar na prevenção da violência doméstica e na proteção às vítimas deste crime (revogando a lei nº 107/99, de 3 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro que a regulamenta). Embora na lei nº 112/2009 a vítima seja definida como qualquer pessoa que sofra um abuso, indo de encontro ao artigo 152º do Código Penal

as medidas protectivas, nomeadamente as casas abrigo, redireccionam-se novamente para as mulheres vítimas deste mesmo crime.

Dois anos depois (Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio) o Legislador retornou à matriz e o crime de maus-tratos passou a ser público, o que foi um marco muito importante no tocante à questão jurídica repressiva atribuída pela justiça portuguesa a esta problemática (Ferreira, 2005). Pretendeu-se, desta maneira, superar o grande número de arquivamentos de processos por vontade expressa (embora com questionável liberdade) da vítima. Aproveitou-se para se alargar o âmbito de tutela, passando a previsão a abranger os progenitores de descendente comum e introduziu-se a possibilidade de ser aplicada a pena acessória de proibição de contato com a vítima, por um período máximo de dois anos, incluindo a obrigação de afastamento da residência desta.

Na reforma de 2007 o Legislador procedeu a uma separação de matérias que até então estavam sob a mesma epígrafe, tendo deixado no novo artigo 152.º, agora epigrafado de «violência doméstica» (terminologia importada da Sociologia, numa escolha infeliz, por não haver uma rigorosa coincidência com o objeto da norma), o crime de maus-tratos sobre o cônjuge ou pessoa com que se mantenha relação análoga, ainda que sem coabitação, a progenitor de descendente comum e às pessoas particularmente indefesas com quem se coabite. E remeteu para o novo artigo 152.º-A, denominado «maus-tratos», as demais condutas relativas a menores e pessoas particularmente indefesas. Também se alargou o universo de situações de tutela, nomeadamente ao dispensar quanto a algumas relações pessoais, expressamente, a existência de coabitação. E no que concerne ao universo das penas acessórias específicas, prevê-se agora a possibilidade de o condenado frequentar programas de prevenção da violência doméstica (intervenção de cariz educacional e ressocializador) e alarga-se o âmbito de protecção da pena acessória de afastamento (que pode passar a incluir o local de trabalho da vítima e a fiscalizar-se o cumprimento da mesma através de meios técnicos).

Sinal evidente na reforma do Código Penal de 2007 foi, no que à violência doméstica respeita, o reforço da vertente penal enquanto vetor essencial no combate a este flagelo social. Nessa ocasião, procedeu-se à separação em três distintos artigos, das condutas

anteriormente constantes do mesmo quadro. Os maus tratos conjugais ou equiparados (152.º) estão agora separados dos maus tratos sobre menores ou sobre pessoas particularmente indefesas (152.º-A), e da violação das regras de segurança (152.º-B), sendo deste modo mais clara a respetiva delimitação. O novo preceito dedicado à epigrafada «violência doméstica» veio agora prever expressamente que o mau trato pode ocorrer «de modo reiterado ou não». Na sequência da reforma de 2007, o Legislador entendeu vincar as vertentes de prevenção, proteção e assistência às vítimas, através de institutos e vários expedientes, num regime jurídico integrado, que veio a ser a Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro. Uma significativa parte do articulado respeita ao tratamento judiciário das questões penais, estabelecendo-se regras especiais, com enorme relevância ao nível das práticas e implicações no sucesso do procedimento penal. É o que acontece, por exemplo, com a consagração da natureza urgente do processo (28.º), com o regime da detenção (30.º), com a ponderação obrigatória de determinadas medidas de coação (31.º), com a regra especial relativa a declarações para memória futura (33.º), do regime do direito à indemnização (21.º, n.º 2) e da mediação penal (39.º). Há ainda outras regras que, não sendo novas, o Legislador entendeu, ainda assim, referi-las, desse modo alertando o intérprete para a possibilidade da sua utilização (como acontece, por exemplo, com o regime especial da proteção de testemunhas). Com efeito, havendo flagrante delito a detenção mantém-se até o detido ser apresentado ao Ministério Público – não lhe sendo aplicável o regime do artigo 385.º CPP (notificação para comparecer à autoridade judiciária); e é o Ministério Público que depois decide se apresenta o detido para julgamento em processo sumário. E, fora de flagrante delito, nos casos em que exista perigo de continuação da atividade criminosa, ou em caso de necessidade de proteção da vítima, o juiz ou o Ministério Público podem determinar a detenção do agressor, o mesmo podendo acontecer por banda das autoridades policiais nos casos de urgência (30.º, n.ºs 2 e 3). Relembre-se que no regime geral do Código de Processo Penal, fora de flagrante delito, não havendo perigo de fuga, nem o Ministério Público nem o juiz podem impor a detenção, mesmo quando exista perigo de continuação da atividade criminosa, perigo de perturbação do inquérito ou perigo para a ordem pública. Não obstante, vem-se constatando que as medidas de

coação concretamente aplicadas pelos juizes não diferem das que já vinham sendo aplicadas anteriormente (Neves, 2010). Ainda se verificou um agravamento das penas quando o agressor praticar o ato de violência na presença de menores, no domicílio comum ou no domicílio da vítima. Quem for condenado por praticar este crime, pode ser inibido do exercício da responsabilidade parental, da tutela ou da curatela por um período de um a dez anos. A relevância estratégica desta lei é já notória, sobretudo na promoção e efetivação de equipas especializadas nas áreas de apoio social, nas polícias e no Ministério Público (incluindo, nalguns casos, a protocolarização da respetiva atuação em rede).

No que concerne à inibição da responsabilidade parental, atenta a concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, contemplada no referido artigo 152º, alínea c), coloca uma questão que merece reflexão: é a falta de articulação entre as várias jurisdições, nomeadamente, entre o tribunal de família, penal e cível. É necessária uma maior articulação entre todos para que haja celeridade no processo e, principalmente, que as outras vítimas, os filhos, não sofram e não tenham consequências nefastas, físicas e psicológicas, no seu desenvolvimento. De modo a que seja cumprida a Lei nº61/2008, de 31 de Outubro ([...]em última análise, a construção de um cidadão adulto que se desenvolva em condições de harmonia.) Como é sabido, há muitas vezes decisões dificilmente compatíveis entre si, por o juiz da jurisdição de família não conhecer o que se passou e decidiu no processo penal, e *vice-versa*. Existem mães que viveram histórias de violência doméstica, conseguiram “fugir”, mas continuam em perigo porque há uma lei que obriga as vítimas a encontrarem-se com o agressor, quando este é o pai dos filhos. O alerta é lançado pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC) e pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), que pedem alterações legislativas urgentes ao regime de regulação das responsabilidades parentais para proteger as vítimas. A solução que perpassa em alguns discursos propõe a criação de uma jurisdição especializada em «violência doméstica», para que o mesmo juiz defina toda a situação (penal, família e/ou cível). Há mesmo quem proponha a «solução espanhola», que tem tribunais especiais para a violência sobre as mulheres (Cisneros, 2010). Outros defendem que seja o Ministério Público o principal “interlocutor” entre as

várias jurisdições; este órgão do Estado está contido presente em todas as jurisdições, junto das quais lhe compete promover determinados interesses público ou coletivos previstos na lei. E tem serviços próprios que lhe permitem funcionar e articular os seus agentes nas várias jurisdições, pelo deverá passar mais pela articulação que pela «especialização» (Neves, 2010).

Outras limitações ou problemáticas se colocam, como é o caso do divórcio, que assume geralmente nestes casos de violência conjugal o carácter litigioso. À semelhança do que acontece para a atribuição das responsabilidades parentais, o processo de divórcio é outra etapa, outra ação independente do caso das responsabilidades parentais e, no âmbito da violência conjugal, é o próprio sistema judicial o promotor da vitimação secundária. A discussão em torno dos requisitos e dos efeitos do divórcio não pode ser feita, colocando à margem a violência doméstica. Pelo contrário, esta forma de violência está no centro da questão e as mulheres vítimas são as principais interessadas no regime jurídico do divórcio e das responsabilidades parentais. A formulação encontrada para integrar a violência doméstica como causa de divórcio [art. 1781.º, alínea d)] – um facto que, independentemente de culpa, determina uma rutura definitiva da vida em comum – não é tecnicamente adequada. A violência doméstica constitui um facto ilícito praticado com culpa civil e penal, refletindo um particular desvalor, devido à gravidade dos danos psicológicos provocados às vítimas. Esta fição de que não há culpa no divórcio serve para promover a crença num divórcio limpo e assético, mas a mensagem que passa para as mulheres é a de que os casamentos em que viram, durante anos, a sua integridade violada, se desfazem sem culpa de ninguém, “por incompatibilidades de feitios”. A facilitação do divórcio pretendida com esta reforma, que permitiria um divórcio rápido às mulheres, também não é atingida: os factos têm de ser provados, com todas as dificuldades e conflitos inerentes, e o juiz fará recair sobre os factos provados o seu juízo de valor discricionário sobre a questão de saber se há ou não uma rutura definitiva da vida em comum, podendo não decretar o divórcio. Quanto às consequências patrimoniais do divórcio, as normas sobre alimentos foram pensadas para uma sociedade em que mulheres e homens ocupam posições iguais e não têm em conta que o trabalho das mulheres na família não tem transferência para o mercado do

trabalho (Sottomayor, s/d). A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que a nova lei do divórcio deixa desprotegidas as mulheres vítimas de violência doméstica, por não prever "expressamente" que aquele crime seja causa de divórcio "sem o consentimento do outro cônjuge"; é de extrema importância que os tribunais de família reconheçam o sofrimento da vítima e a culpa do agressor. Muito há a fazer neste domínio, como adiantaremos na proposta final, suportada em reflexão promovida pela PSIJUS – Associação para a Intervenção Jus psicológica. Na opinião da associação, um sistema que suprima o divórcio litigioso por violação culposa dos deveres conjugais não pode deixar de prever expressamente a violência doméstica contra as mulheres e os maus-tratos às crianças como causas de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge; ao contrário, a lei está a contribuir para a invisibilidade do fenómeno da violência e para a perpetuação da discriminação das mulheres e das crianças, continuando o Código Civil a refletir a conceção tradicional de família como santuário e a imunidade do agressor. Portugal continua a optar frequentemente pela política de avestruz no que à família tange. O herdo salazarento, que colocava a família em local sacralizado, estabelecendo metáforas anquilosadas entre o *pater familias* e o chefe (Salazar) parece não ter sido ainda varrido do discurso conservador e hiper liberal, esquecendo-se que a família (também) é o sítio mais perigoso do mundo, onde medram todas as violências, verticais (de pais para filhos e vice-versa) e horizontal (entre fratrias), mas com incidências várias (económica, sexual, física e, recorrentemente, psicológica). A direita converte a família em instrumento político e, de certa maneira, fez a esquerda refém dessa discursividade, dando a imagem da vida familiar enquanto espaço de afeto e solidariedade – o que falha, muitas vezes: basta observar as cifras de violência familiar (contra cônjuges, particularmente mulheres, idosos e crianças, abusos sexuais incluídos).

A Lei n.º 112/2009, de 18 de Dezembro, prevê a mediação penal em matéria de violência doméstica, mas a operar apenas depois da decisão de suspensão provisória do processo ou em fase pós-sentencial, em linha com a delimitação restritiva feita na própria lei da mediação penal (Lei n.º 21/2007, de 12 de junho), que reserva a sua aplicação para os crimes semipúblicos e particulares. Nem por isso, no entanto, deixa

aquele «encontro restaurativo» de ser mediação penal (Neves, 2010); no entanto, a mediação, no caso da violência doméstica, não faz sentido e até pode ser contraproducente, uma vez que falamos de uma crime com uma grande componente agressiva e de coação; é, aliás, a base da pirâmide da violência psicológica (coação), o que leva a que um processo destes seja uma mera formalidade da justiça, com graves consequências para a vítima, favorecendo e promovendo a continuação da violência do agressor no contacto com a vítima. Ora, se o artigo 152º define como ator de violência “quem, de modo intenso ou reiterado, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais” e sendo o pressuposto da mediação penal as partes serem os atores principais, tomando as decisões com que resolverão o seu diferendo, sendo a autodeterminação o elemento chave para que as pessoas giram os seus próprios conflitos, responsabilizando-se pelas suas ações e pelas consequências das mesmas, em si e nos outros (Bernal, 2002), como poderá alguém (vítima) que foi subjugado a outro (agressor) ter autodeterminação para iniciar um processo de mediação? Sendo a violência um crime relacional, psicologicamente abusivo, e porque a mediação pressupõe informalidade, lógica dialogal, sentido de impunidade, levará a qualquer resultado que não seja efémero? Será um processo justo e restaurativo para a vítima? Ou será mais um bónus para o agressor estar com a vítima e poder aterrorizá-la? Dutton (1995) adverte que a violência doméstica não deve ser entendida simplesmente como uma lista de episódios ou um elenco de comportamentos agressivos que podem ser somados; pelo contrário, é um padrão de interação que influencia a dinâmica do relacionamento íntimo.

A violência doméstica ainda está desprotegida para que se lhe ofereça a ilusão da mediação: o poder e o controlo estarão sempre desequilibrados, a vítima poderá ser um fantoche num jogo de poder no qual ela será preterida para o papel secundário, seguindo as “deixas” do agressor, segundo a conveniência deste; Salem & Milne (1995) alertam que a mediação não é apropriada quando há abuso contínuo ou o agressor usa ou ameaça de uso de arma; a força mais poderosa na relação é o medo da vítima face ao agressor. Ao utilizar-se a mediação nos casos de violência conjugal é partir do princípio que o abuso está relacionado com a falta de comunicação; se fosse esse o problema, há

muito que a maioria das situações de violência doméstica estaria resolvida. A mediação assume que ambas as partes irão cooperar para fazer acordos para o futuro: mas, como estabelecer acordo entre a vítima e o agressor? A vítima sempre "cooperou" com o agressor; este é que nunca cooperou. Para que a mediação cumpra os objetivos e não tenha um efeito de revitimização, as partes envolvidas devem ter igualdade de poder e devem partilhar uma visão comum da resolução. Estes pressupostos não estão, claramente, presentes numa relação violenta (Garrity, 1998). Alguém que foi aterrorizado e abusado durante anos não é livre para participar num processo de mediação penal que versa esta temática: a liberdade e a igualdade jamais estarão presentes neste tipo de resolução de conflitos. A mediação penal não pode ser uma panaceia; em violência doméstica servirá apenas para perpetuar o registo violento e a opressão da vítima: por isso, há muito que defendemos que a mediação não pode – nem deve – existir no campo da violência familiar. A mediação penal não deve ser representada como meio de substituição dos tribunais apenas para suavizar a reação institucional ao crime; substitui a versão clássica de aplicação da lei pela vertente qualitativa, ou seja, é uma outra realidade, dotada de uma nova lógica. Se ao sujeito transgressor não for sinalizado o desvalor que realizou – com a consequente perniciosidade social e a necessidade reparadora – e se não interiorizar o interdito, dificilmente aceitará a necessidade de se adequar às normatividades sociais. A mediação penal deve funcionar como justiça restaurativa e, fundamentalmente, como justiça retemperadora, apta a compensar a vítima e a convencer o agente do crime que o comportamento que assumiu é censurável e merecedor de penalização (Poiars & Louro, 2009).

No que concerne à violência conjugal, onde as mulheres são as principais vítimas, como referido anteriormente, a crescente consciencialização pública tem proporcionado a evolução da consciência (e perceção) jurídica e da fixação de apoios psicossociais. Ao longo do tempo, particularmente nos países mais desenvolvidos, as mulheres têm vindo a ser formalmente mais protegidas. Foram assim criadas inúmeras associações que lutam em prol dos direitos das mulheres. Como exemplos nacionais temos, a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), a UMAR (União de Mulheres Alternativa

e Resposta) e a CIDM (Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres), que é um dispositivo formal, dependendo do governo (criado pelo Lei n.º 37/99, de 26 de Maio, que sucedeu à Comissão da Condição Feminina, institucionalizada pelo Decreto-Lei n.º 485/77, de 17 de Novembro) (CIDM, 2003).

4. Violência doméstica e os dispositivos de controlo (in)formal

No que concerne à violência conjugal, onde as mulheres são as principais vítimas, como referido anteriormente, a crescente consciencialização pública tem proporcionado a evolução jurídica e de apoios psicossociais. Ao longo do tempo, particularmente nos países mais desenvolvidos, as mulheres têm vindo a ser formalmente mais protegidas. Foram assim criadas inúmeras associações que lutam em prol dos direitos das mulheres. Como exemplo nacional temos a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) e a CIDM (Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres), que é um dispositivo formal, dependendo do governo (criado pelo Lei n.º 37/99, de 26 de Maio, que sucedeu à Comissão da Condição Feminina, institucionalizada pelo Decreto-Lei n.º 485/77, de 17 de Novembro (CIDM, 2003).

O Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, identificou, até ao final do mês de Novembro de 2014, 40 homicídios de mulheres por companheiros, ex-companheiros e familiares próximos e 46 tentativas que não resultaram na morte da vítima. O número aumentou face a 2013, ano em que se verificaram 37 homicídios. Este observatório estima que, desde 2012, 229 crianças foram afetadas devido à violência contra as suas mães, ficando 122 filhos ou filhas órfãos de mãe. Quatro mulheres foram assassinadas por mês, vítimas de violência doméstica, por parte de companheiros ou maridos, ex-companheiros ou familiares próximos. Estes números são estimativas, já que o observatório analisa apenas as

ocorrências reportadas pela comunicação social, não havendo dados oficiais nesta matéria. 83% destes crimes foram cometidos por pessoas com quem estas mulheres mantinham relações de intimidade e mais de metade já tinha anteriormente sido vítima por violência doméstica por parte dos maridos ou companheiros. Três quartos dos crimes contra mulheres aconteceram nas suas casas: *home sweet home?*

Considerando o vasto leque de crimes que estão incluídos nesta categoria, é de realçar a percentagem significativa que assumem os maus tratos psíquicos (37,3%) e os maus tratos físicos (25,3%), cuja soma perfaz 62,6% dos crimes de violência doméstica, em sentido estrito. Nas relações entre o autor do crime e a vítima, algumas delas sobressaem, designadamente as relações de conjugalidade: casadas (32,8%); solteiras (22,7%); união de facto (10,6%), pertenciam, sobretudo, a um tipo de família nuclear com filhos em 39,4 % dos casos (APAV, 2014).

Das pessoas atendidas, 82,3% eram sobretudo vítimas do sexo feminino com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos de idade (37,1%); os níveis de ensino superior (7,6%) e o nível de ensino básico do 3º ciclo (4,8%), destacaram-se face aos restantes. Já no que diz respeito à principal atividade económica, 29,6% dos utentes que tiveram contacto com a APAV encontravam-se empregados/as. No entanto, é importante ressaltar os 19,4% de pessoas desempregadas. O perfil da vítima é do sexo feminino (82,3%), com idades entre os 25 e os 54 anos (37,1%), casada (39,4%) e com filhos (39,4%), com habilitação de ensino superior (7,6%), empregadas (29,6%) e tem uma relação de conjugalidade com o autor do crime (28,4%).

No tocante ao agressor: do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos de idade (30%). Caracterizado, em termos de estado civil, como casado (35,6%) e em 31,7% dos casos tinham uma atividade profissional regular. O perfil do agressor é do sexo masculino (81,9%); com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos (29,9%); casado (35,6%); encontra-se empregado (31,7%) (APAV, 2014).

Só um terço do total de casos de violência doméstica chega às autoridades policiais e poucos são os agressores condenados, de acordo com estimativas da Comissão para a

Cidadania e a Igualdade de Género. Tal constatação convoca-nos para uma profunda reflexão sobre estas questões, principalmente, no tocante ao sistema judicial. O que está a falhar? Se as leis existem, qual a razão para não serem aplicadas? Como continuamos com uma taxa tão elevada deste tipo de crime?

Independentemente das discussões teóricas geradas entre os defensores desta perspectiva *family violence researchers* e as lógicas feministas, parece que o sistema jurídico-legal e criminal continua a trivializar o problema da violência doméstica. Embora se tenha procedido a algumas reformas recentes ao nível da legislação sobre a violência doméstica, nomeadamente no que se reporta à implementação de ações de formação/sensibilização dos agentes da justiça e das forças de segurança pública, à criação de linhas de apoio e de assessoria legal às vítimas, entre outras medidas de intervenção, as respostas do referido sistema ainda estão longe de ser completas. Tal pode estar associado às dificuldades de resposta por parte do sistema jurídico-legal e criminal face ao avolumar da criminalidade em geral, e não só da violência doméstica; à complexidade do fenómeno, ou mesmo à negação, pela sociedade, de existência de violência entre indivíduos que fazem parte da mesma família, pondo em causa o mito desta enquanto lugar seguro e dos afectos (McKie, 2005).

Manita (2004) definiu este fenómeno como uma conduta violenta exercida de forma contínua ou uma atitude controladora que age coercivamente, de forma direta ou indireta, sobre um membro do mesmo agregado doméstico, englobando avós, cônjuges ou ex-cônjuges, filhos, pais, ou que, embora não coabitem, detenham uma relação afectiva e/ou conjugal. Mas é sempre um registo assimétrico de exercício de poder, mediante o qual se determina alguém a adotar atitudes que, livremente, nunca assumiria (Poiars, 2012). Segundo contempla o Código Penal Português (artigo 152º), é considerada violência doméstica a execução de maus-tratos psíquicos ou físicos, integrando nestes “castigos corporais, privação de liberdade e ofensas sexuais”, realizados intencionalmente às seguintes pessoas: a) ao cônjuge ou ex-cônjuge; b) a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação; c) o progenitor de

descendente comum em 1.º grau; d) a pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite. As penas são fixadas entre um a cinco anos. No entanto, o crime de violência doméstica não é contemplado quando concorre com crimes de maior moldura penal como, por exemplo, sequestro qualificado ou ofensa à integridade física, em que se aplicarão as penas relativas a estes crimes, não sendo considerado o crime de violência doméstica. A revisão penal de 2007 alargou as possibilidades de aplicação de penas acessórias no caso do crime de violência doméstica, com a proibição de contacto com a vítima, incluindo a de afastamento da residência desta, já prevista na revisão de 2000; o Legislador prevê ainda o afastamento do local de trabalho da vítima, a possibilidade de tal pena acessória ser objeto de recurso a meios técnicos de controlo à distância, a possibilidade de aplicação de pena acessória de proibição de uso e porte de armas e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção, aumentando a moldura destas penas acessórias, que passa a ser de 6 meses a 5 anos, e prevê a possibilidade de aplicação de uma nova pena acessória: a inibição do exercício do poder paternal por um período de um a dez anos. Finalmente, refira-se a Lei nº112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas e que ampliou as possibilidades de aplicação das medidas de coação, nomeadamente recorrendo a meios técnicos de controlo à distância e introduzindo o carácter de urgência na aplicação das medidas.

A violência doméstica é um comportamento ainda enraizado na cultura social, provinda de outros tempos, que aceitavam a violência no seio familiar com normalidade. Hoje, essa atuação repugna ao Estado Social de Direito democrático, que definiu a incriminação da violência doméstica como defesa do bem jurídico saúde (física, psíquica e sexual), e contrária à dignidade humana, traduzindo-se em crime. Porém, têm de se provar as sequelas do ato violento como elemento objetivo do tipo, sob pena de não se subsumir no crime de violência doméstica (Feitor, 2012).

No entanto, e tal como refere Manita (2004), no âmbito conjugal a violência doméstica é um fenómeno transversal, que não se reporta apenas à violência do homem para com a

mulher, mas também a situação inversa, estando presente também em casais homossexuais, tanto femininos como masculinos. Hines, Brown & Dunning (2007) ressalvam este factor de transversalidade da violência nas relações íntimas. Os autores afirmam que o início do estudo da violência entre parceiros íntimos se baseava na tese de a mulher ser a única vítima deste; porém, embora os relatórios médicos, estatísticas, entre outros, mostrem que estas são as principais vítimas da violência doméstica, o homem também pode ser uma vítima deste tipo de crime – porém, mais auto-silenciada, por pudor em assumir a alteração dos estereótipos.

É possível observar que a violência doméstica é um fenómeno que suscita diversas (in)definições; no entanto, a partir das propostas de definição de violência doméstica mencionadas, questiona-se o ideal de família. Na família, as referidas “acomodações” encontram-se imbuídas de pressupostos normativos e ideológicos acerca do género, idade, dependência, cuidados, intimidade e identidades e podem ser conseguidas através da conversação ou do silêncio (McKie, 2005). Tais pressupostos não têm apenas implicação ao nível dos papéis socialmente esperados de cada um na família, mas em todos os domínios da vida social, e são base de sustentação e legitimação das desigualdades de género, da intolerância face às relações conjugais homossexuais e de certas omissões relativamente à violência doméstica. As noções idealizadas da família não só têm conduzido à ocultação das suas dimensões mais problemáticas (*e.g.*, violência, delinquência, toxicodependência), como à negação, por parte dos ditos profissionais, que a família pode ser para muitas pessoas um lugar de opressão, de violência e de infelicidade; têm ainda levado à persistência do carácter normativo dos papéis sociais, o que conduz a uma maior tolerância de certo tipo de crimes (*e.g.*, maus tratos), quando as suas vítimas não desempenham os papéis conjugais e parentais tal como são socialmente construídos e representados (*e.g.*, “boa” esposa, “boa” mãe) (Blackman, 1989). Mas permanecem aqui as estereotipações: o que é ser “boa mulher”? A submissa, a que se deixa subjugar?

Segundo Rodrigues (2007), durante muito tempo o conceito de violência baseava-se nos atos de violência física, descurando outras dimensões, como a violência psicológica,

sexual, negligência, entre outras. No entanto, os critérios e representações da violência foram sendo alterados, daí a atual diversidade do termo violência. Assim, atualmente, a violência, é tida como:

«[...]qualquer ato que, consciente ou inconscientemente, ignore, impeça ou atente contra os direitos humanos e de cidadania; qualquer ato que vise constranger uma pessoa a fazer o que não deseja, ou o que não é aceite dentro dos padrões sociais, seja por uma questão de sobrevivência, seja para atender aos fortes apelos sociais, como, por exemplo, o consumo” (Alves,1997, citado por Rodrigues,2007, p.42).

Em relação à violência conjugal, segundo Costa e Duarte (2000), grande parte dos autores arranca do princípio que na violência conjugal os homens são agressores e as mulheres vítimas. Este é um problema que afecta sobretudo as mulheres, seja em relações de namoro, casamento ou união de facto.

Como já referido anteriormente, até ao final do século XIX, não existiam leis, em Inglaterra e nos Estados Unidos da América, que proibissem os homens de maltratarem as mulheres, exceto no caso de haver danos graves ou homicídio (Giddens, 2004; Dias, 2004). Tradicionalmente, a lei também isenta os homens do crime de violação no contexto da conjugalidade. A noção de que o contrato de casamento legitima todo o tipo de atos sexuais, inclusive os que são violentos e fisicamente forçados, ainda continua a estar presente no universo representacional e legal dos nossos dias. “Não só é verdade que ao casar o homem obtém uma espécie de imunidade à acusação de violação, como também parece ser verdade que as pessoas têm menos tendência para condenar os comportamentos sexualmente violentos se eles forem praticados contra a mulher com quem se está casado e não contra outra mulher qualquer” (Finkelhor & Yllo, 1983, p.129). Para muitas mulheres, o consentimento que é conferido aos homens para terem relações sexuais com elas no casamento só é revogado através do divórcio. Em suma, a percepção de que as mulheres têm um tratamento diferente perante a lei, não se sentindo totalmente protegidas, continua a estar presente nos debates feministas e da jurisprudência dos nossos dias. Um acórdão do Tribunal da Relação do Porto (2009), é peremptório ao afirmar que a “recusa meramente verbal ou a ausência de vontade, de adesão ou de consentimento da ofendida são, por si só, insuficientes para se julgar

verificado o crime de violação”¹. A violência sexual cometida nestes contextos relacionais poderá também dever-se à aceitação de um conjunto de direitos e deveres na relação, diferenciados em função do género, isto é, de diferenças naquilo que é esperado ao nível do comportamento (sobretudo sexual) de um homem e de uma mulher numa relação de namoro. Estas expectativas em relação aos papéis de género resultam de uma socialização segundo os valores patriarcais, que reforçam a submissão feminina, a dominação masculina e as desigualdades de género na relação íntima. Estes valores, que são interiorizados desde a infância, contribuem para que os atos sexualmente forçados que ocorrem no domínio íntimo não sejam reconhecidos pela vítima como uma forma de violência. Naturalmente que esta dificuldade em identificar e enquadrar os comportamentos sexuais não consentidos no campo da violência também limita as hipóteses de ocorrer um pedido de ajuda ou a denúncia da situação, aumentando, por sua vez, a probabilidade de a violência sexual assumir uma natureza continuada (APAV, 2013).

Nos tribunais, a evidência acerca da “síndrome da mulher batida” geralmente é apresentada por especialistas (*e.g.*, médicos legistas, psicólogos, psiquiatras, etc.), que sustentam muito as suas análises e testemunhos na teoria de Walker (1989). Salientam o designado ciclo de violência a que as mulheres estão sujeitas, bem como os seus traços psicológicos (*e.g.*, fraca auto-estima, sentimento de culpa pelo fracasso da relação conjugal, tendência para se responsabilizarem pela violência que as vitima, etc.), o que as conduz a verem a violência como inevitável e para sempre. O medo que elas sentem, inclusivamente pelos filhos e familiares próximos, a ausência de recursos financeiros são, de igual modo, fatores que se inscrevem no referida síndrome e que conduzem à explicação do sentimento de incapacidade da mulher pôr termo a uma relação violenta.

Para além dos aspetos acima referidos, há outras questões que parecem tornarem-se relevantes, quiçá determinantes, para as mulheres vítimas de violência, na sua grande

¹ Ac. TRP de 13 de Abril de 2011, Rel. Eduarda Lobo, disponível em www.dgsi.pt.

maioria, não colocarem fim a uma relação violenta e não apresentarem a denúncia às autoridades competentes: a representação que as vítimas têm do sistema judicial e da eficácia que este possui para colmatar o problema. A maioria das pessoas que vivencia esta situação de perigo tende a sentir-se em isolamento, quer ao nível dos suportes afetivos quer no tocante aos dispositivos formais (da lei dos tribunais). A grande maioria dos cidadãos tem uma opinião desfavorável, em especial neste domínio, dos dispositivos de controlo formal; a vítima sente-se desprotegida e o agressor vivencia a impunidade dos seus atos violentos. Se assim não fosse, talvez este crime tivesse uma menor (re)incidência. Vejamos o acórdão do STJ (2008) “ [...] no sentido de que verificada e provada a violência física reiterada, com antecedentes de condenação e reincidência, não tendo sido possível apurar com rigor os eventuais danos físicos ou psíquicos da vítima, a conduta não se subsumia no crime de violência doméstica”. Acentuava o dito acórdão o seguinte: “[...]o arguido havia estado preso e voltara a viver com a mulher e as filhas [...] agrediu aquela com bofetadas e com frequência era chamada a Polícia àquela residência [...] sempre se impunha concluir que a escassa matéria de facto provada analisada à luz das considerações antecedentes, não integra a prática pelo arguido do crime de maus-tratos a cônjuge, pelo art.º 152.º [redação anterior à revisão de 2007, fazendo aplicação da lei mais favorável ao arguido], uma vez que, por um lado, da mesma não se pode aferir da intensidade da ofensa corporal, o que impede que se considere violado o bem jurídico protegido pela norma em causa e, por outro, não se provaram as consequências, diretas ou indiretas, da conduta do arguido, não resultando demonstradas quaisquer lesões corporais ou danos psíquicos para a ofendida, nem que aquele comportamento se repercutiu, de alguma forma, na saúde física, psíquica, emocional e moral” (Feitor, 2012, p. 4). Se os tribunais tivessem o mesmo “olhar” para outro tipo de crimes, por exemplo tráfico de estupefacientes, roubo, talvez a (re) incidência desse crimes fosse muito maior. Mas quando se fala de um crime de violência doméstica ainda imperam pré-conceitos, esteréotipos, ou mesmo o ditado popular “entre marido e mulher não se mete a colher”. No fundo e para sermos claros: os tribunais, mesmo os superiores, não levam a sério a violência doméstica e deixam que se desenvolva e floresça. Diga-se a verdade: os tribunais convertem-se em

coautores morais, por cumplicidade e omissão, das recidivas de violência doméstica. Mesmo o supremo.

Assim, a origem da violência situa-se na estrutura social e no complexo conjunto de valores, tradições, costumes, hábitos e crenças que estão intimamente ligados à desigualdade sexual, e que os juizes permitem que se reproduzam, sendo eles mesmos, em vários casos, os reprodutores. Por outras palavras: os tribunais são co responsáveis pela violência conjugal. A vítima da violência é, quase sempre, a mulher e o agressor é, quase sempre, o homem, servindo as estruturas da sociedade de confirmação desta desigualdade. A violência contra as mulheres é resultado da crença, fomentada em muitas culturas, de que o homem é superior e de que a mulher que com ele vive é um objeto de posse que ele tratará como muito bem quiser. Oliveira *et al.* (2009) referem que, segundo vários estudos, é a interação de diversos fatores pessoais, situacionais e socioculturais a causa da violência. As razões geralmente imputáveis às vítimas para explicar este fenómeno são: medo de retaliação, vergonha, falta de recursos financeiros, vontade de manter a relação com o agressor, necessidade de realizar acordos sobre as crianças (Gill, 2004); e a satisfação com a resposta policial inicial, tendo em conta o seu poder dissuasor e protectorio (HMCPSI, 2004); a interiorização da submissão e a falta de rede pessoal e psicoafetiva de apoio.

Além de este assunto ter vindo a sofrer várias alterações, tanto legislativas como sociais; no entanto, mesmo assim, não tem existido uma taxa de sucesso como pretendido: basta constatar as taxas oficiais da vitimação, bem como as mulheres mortas resultante da violência doméstica, O Parlamento Europeu, consciente das lacunas e omissões dos Estados membros nesta matéria, em 2011, constituiu um conjunto de regras mínimas que têm como intenção contribuir para o reforço da confiança nos sistemas de justiça penal, tendo como objetivo uma cooperação judiciária mais eficaz, promovendo a cultura de direitos fundamentais na União Europeia, em especial a proteção dos direitos de todas as vítimas, nomeadamente, vítimas de violência doméstica. Trata-se de uma prioridade da Estratégia 2010-2015 para a igualdade entre homens e mulheres, estando contempladas no programa DAPHNE.

5. Criminalização secundária: Aplicação da lei *versus* violência conjugal

O espaço inaugural onde todas estas questões assumem um papel determinante, resultando na construção de um espaço normativo, de definições uniformizadas, é o processo de criminalização. O Direito opera na regulamentação das leis, que divergem de país para país, como acontece com os julgamentos e as suas diferentes concepções. Decorrem dos agentes do Poder e de quem comanda o sistema, dos seus interesses e ideologias, partindo destes para emitir juízos de valor; segundo Larenz (1978), estes são expressões de uma tomada de posição pessoal do Legislador e, posteriormente, do Aplicador, realizada no respeito por um valor que se reconhece enquanto tal; para fundamentá-los, o juiz não está limitado apenas à intuição axiológica, devendo aplicar critérios que gerem os valores e desvalores considerados vinculativos na e pela comunidade político-jurídica. Segundo Wagner (2011), os dilemas da justiça têm origem no funcionamento atual e global da sociedade; as representações individuais nascem de processos mais abrangentes e, muitas vezes, alheios ao próprio indivíduo, isto é, a relação entre a autonomia individual e social está em jogo quando as regras de uma comunidade precisam de ser determinadas. O Estado é permeável a estas tensionalidades, e no seu papel legislativo reflecte mitos e idealizações sobre a família (Dias, 2010). “O Direito (...) faz parte da produção de consenso acerca de assuntos como sejam a importância da lei e da ordem, da santidade da propriedade privada e da natureza sagrada da família. (...) O Direito pode então ser entendido como um modo de reprodução da ordem patriarcal existente minimizando a mudança social e evitando simultaneamente os problemas de conflito aberto. (...) Eu diria que a legislação não cria relações patriarcais, mas que, através de uma maneira complexa e frequentemente contraditória, reproduz as condições materiais e ideológicas sob as quais estas relações podem sobreviver” (Smart, 1999, p.144).

A criminalização tende a ser interpretada como a conceptualização normativa regente numa determinada sociedade. Deve ser perspectivada numa tripla funcionalidade:

legislativa; aplicativa e de reinserção, todas mutáveis e influenciadoras nas suas dimensões, estando diretamente ligadas ao barómetro social do quadro jurídico vigente.

A criminalização primária é o ponto de iniciação para a ritualidade normativa, a pedra inaugural de uma estrutura, o alicerce de um conjunto de regras e estratégias que pretendem promover e garantir a inserção do indivíduo aos modelos e normas comunitários. Ou como escreveu Foucault (1999), socializar os corpos e os espíritos. Porém, o controlo social mais não representa que o desejo de amansar ou amestrar os cidadãos, vencê-los se não os puder convencer, torná-los conformistas e resignados (Poiars, 1999) – a receita para se fazer um conformista existe há muito e perspectiva-se (Oliverio, 1986). Todo o controlo pressupõe vontade de submeter, de molde a reproduzir as regras e os mandamentos do sistema (Baratta, 1999). Podemos dividir o controlo social em dois dispositivos: os dispositivos formais e os informais. O que os distingue, entre outras coisas, é a coercibilidade que desempenham na vida das pessoas, ou melhor: a tutela, pública ou privada, da coercibilidade, já que os dispositivos formais têm o poder coercivo do Estado como suporte. Todavia, como já escrevemos em outro local (Louro, 2008), os dispositivos formais, submetidos ao poder económico de alguns dispositivos informais, são meros fantoches destes, manipulados que manipulam. Mas se a criminalização tem como objetivo estabelecer a ordem social, há uma questão que se impõe: quem estabelece, afinal, esta ordem? As pessoas que dela fazem parte? Ou os poderes instituídos? São os indivíduos que fazem a criminalização ou é a criminalização que define o comportamento dos sujeitos? A definição do que é um comportamento desviante, um crime ou outro ato definido como ilícito, é determinado de acordo com uma geometria sociocultural, onde a esquadria se desenha no Poder Político e Legislativo. Teorias surgem, ressurgem e se insurgem, mostrando um processo dinâmico de análise da sociedade.

Não nos podemos esquecer da vital importância que a criminalização primária assume: primeiro, porque é um mecanismo de seleção com poder para imputar responsabilidades e atribuir sentido ao exercício da discricionariedade das instâncias do controlo formal. No entanto, devemos reinseri-la no contexto político da sua emergência, bem como a

necessidade de abstrair o aparecimento da legislação penal da sucessão histórica para compreendê-la: deve-se recolocá-la no contexto do momento da sua génese (Robert, 2007; Landreville, 1990).

É quando se efectua a criminalização secundária, ou seja, a efetivação das leis, que se pode perspetivar e analisar a realidade jurídica de uma determinada sociedade. O Direito é feito por pessoas, dirigido aos sujeitos e aplicado aos mesmos quando necessário: de nada serviria ter um sistema que apenas existisse no abstrato, sem significado e sem significância, ignorado e sem atingir o fim a que se propôs; é nos meandros judiciais que se discute também a democracia de um país; porque, como refere Hart (2001), as leis só se convertem em algo real quando aplicadas aos casos concretos. Para a consecução da penalização torna-se necessária a indagação da verdade, o que ocorre em fase de criminalização secundária, que pressupõe escutar e valorar depoimentos judiciais. Busca-se, então, a verdade; e, por arrasto, a lógica de cada testemunho, na economia da construção decisória. Uma vez que os movimentos de criminalização, ou não, dos comportamentos não acontecem sempre com a mesma intensidade, nem em relação às mesmas áreas do comportamento penalmente controlado, os períodos de distensão e optimismo sobre as possibilidades de mudar e controlar a sociedade, sem recurso às instituições penais, alteram ciclicamente com outros de mais acentuado proselitismo moral e de maior pressão no sentido da repressão penal (Dias & Figueiredo, 1997); problemáticas que ilustram esta situação são, nomeadamente, a violência conjugal. As flutuações do eixo criminalizador de condicionantes várias – económicas, políticas, sociais, culturais – e observam interesses diferenciados e têm calendários próprios e circunstancialismos específicos – de tempo, modo e lugar: é a eco-temporalidade, que expurga e cria novos (des)valores inseridos na gramática criminalizadora (Poiars, 1993, 1999).

Todos os sujeitos são influenciados e motivados, todos potenciam o comportamento e as ações e, deste modo, orientam o que fazem. A criminalização primária não é somente uma tarefa de elaboração e gestão, bem ou mal desenvolvida mas uma aplicação de um conjunto de critérios morais, éticos, jurídicos, sociais, pelo que o Legislador, ao

enfrentar-se com a necessidade de tomar a deliberação, irá pôr em jogo o “xadrez” da vida real, passando do abstrato para o concreto, onde não há duas estórias iguais, com vicissitudes e motivos que importam na boa aplicação da lei. Na inferência do que é dito, tal como na descodificação do não dito, há um canal intercomunicativo, pois tal permite, para Campus (1992), uma afirmação da individualidade pelo reconhecimento da subjetividade que, na comunicação está presente. Interessam todos os depoimentos dos quais possam resultar elementos para a decisão judicial que, pela sua frequência e significância, se assumem como relevantes; privilegia-se, ordinariamente, o depoimento das testemunhas, incluindo a vítima, pedra de toque na formação da convicção do sentenciador (Poiares, 2003), residindo aqui o ponto de consonância que existe entre os depoimentos e o juiz, ponte de ligação com as leis estabelecidas no Código Penal. O magistrado, na averiguação dos factos que corporiza, na busca da verdade, tenta captar a ligação daquilo que ouve com os factos, já conhecidos ou, pelo menos, já descritos pelas partes. Nesta transformação fazem parte não só as motivações jurídicas mas também, e principalmente, as ajurídicas, aquelas que não se encontram estipuladas na lei, mas que são intrínsecas a todo o ser humano, abrangendo, conseqüentemente, o sentenciador e o Legislador.

Então, como se constrói a verdade? Que verdade? Qual a configuração do verdadeiro e do falso? Novamente, ocorre que a verdade judicial é apenas o que resulta provado em tribunal – até que outra verdade desta faça mentira.

Entroncando-se nas questões suscitadas da racionalidade judicial emergem outros problemas, que têm a ver com a severidade punitiva, no tocante às motivações do sentenciador. Uma das componentes do leque motivacional situa-se na esfera jurídica e, bem entendido, trata-se de uma área de pensamento e interpretação estritamente jurídicos, funcionando nos eixos da subsunção e da hermenêutica. A decisão do Aplicador da Lei está dependente de um Poder estrutural, que impõe e limita esse mesmo exercício de Poder (Landreville, 1990). Dir-se-á: há o Direito jurídico, a matéria-de-Direito, e o Direito fáctico, isto é, o Direito que cria e permite motivacionalidades ajurídicas (Louro, 2008). Na trilha deste entendimento, entre a

aplicação da lei e a severidade que daí resulta, utilizaremos como analisador epistêmico a violência conjugal, de molde a desvendar os mecanismos processuais do pensamento do sentenciador. Interessa-nos averiguar, no contexto português, a severidade punitiva na violência conjugal.

Para tal e como já referenciado, o que se entende por violência não é linear e a responsabilidade que é imputada ao agressor difere de situação para situação mas, de modo geral, assiste-se a uma benevolência por parte do sistema penal nestas temáticas, fruto talvez, da herança patrimonial e patriarcal atribuída às relações conjugais. Ora, logo se afigura a questão de como os juizes exercem a função de zeladores da ordem pública, isto é: que, a quem pratica atos tipificados como crimes, lhe seja aplicada uma sanção proporcional e adequada ao caso concreto, para que desta forma o arguido não volte a praticar o mesmo ato ilícito, destarte se promovendo a prevenção especial e, por inerência, a prevenção geral. Sabemos que no caso da violência há, como as estatísticas oficiais o demonstram, um aumento de casos, nas suas várias dimensões, bem como uma acentuada reincidência. Estarão os juizes a desempenhar bem o seu papel de aplicador da lei? Estará a vítima salvaguardada pelo sistema? Ou serão, o julgamento e posterior sentença, apenas mais um momento para reforçar positivamente o comportamento violento do sujeito que o pratica? Pretende-se definir o tipo de relação que a Psicologia Forense (mas, também, a Psicologia do Testemunho) estabelece com a normatividade e o Poder aplicativo, em especial a severidade punitiva. À Psicologia Forense cabe também uma função compreensiva da etiologia das decisões do sistema judiciário em todos os seus níveis, abrangendo, naturalmente, as fases ante-primária, primária, secundária e terciária. A Psicologia Forense ilumina, com o saber que a constitui, a panóplia de decisões, permitindo captar as teias de interesses e investimento produzidos no processo criminalizador – que nunca é assético nem completamente transparente, por vezes nem sequer translúcido, nele se jogando o xadrez das conveniências. Criminalizar, nos três níveis que integram, numa das óticas defendidas, aquele conceito, além de estadio ante-primário (Poiars, 1999), traduz um conjunto de opções entre valores e desvalores; mas, ao mesmo tempo, criminalizar equivale à prevenção nos territórios da saúde, vertendo-se para o plano jus institucional - a

prevenção geral e a prevenção especial (Baratta, 1999, Correia, 2008, Beleza, 1985). Na prevenção especial, as penas atuam sobre o agente num sentido: segregador, quando o afasta e elimina da sociedade, de forma a evitar que este cometa futuras infrações; reeducativo, quando o adapta à vida social, e intimidatório quando lhe fomenta a consciência da severidade da ameaça penal. Pune-se o criminoso por ser perigoso, independentemente da culpa. A pena é a defesa social contra a perigosidade, quer o agente seja imputável ou inimputável (Almeida, 2010). Mas as mensagens cruzam-se e procuram reforçar a ideia de adequação das pessoas aos ditames penais, priorizando o medo, que gera atitudes conformistas.

A pena é um preço a pagar pelo crime que foi cometido, e a sua severidade é a medida da gravidade do mesmo (Cusson, 2007). Sabe-se, por outro lado, que o uso indiscriminado que a justiça faz, nos crimes de violência conjugal, de penas suspensas, conversões em multa e, pior ainda, de suspensão provisória dos processos, resultam na gestação do sentimento de impunidade dos agressores e, correlativamente, de perceção de insegurança, de vulnerabilidade e de desproteção das vítimas. Os juizes, que ainda optam frequentemente pela prisão preventiva em outros ilícitos, sendo das mais severas em medidas de coação da Europa – por vezes ainda prendem, kafkianamente, para investigar – acabam por ser brandos nos crimes conjugais e afins.

A severidade punitiva sozinha não permite prevenir a criminalidade, desta forma torna-se inútil aumentar a severidade do sistema penal. Ao contrário do pensamento comum, as sanções penais não possuem um efeito de intimidação (na forma de prevenção especial ou prevenção geral). Os estudos realizados no âmbito da Criminologia vieram a demonstrar que o efeito preventivo acima referido, não aumenta linearmente com o aumento da severidade das penas. A prevenção geral depende principalmente da severidade e da certeza da pena, uma vez que não interessam as penas muito “pesadas” se os delinquentes sentirem que não correm qualquer risco de serem detidos (Agra & Kuhn, 2010; Maia, 2011).

«The lesson of these studies is that formal (legal) sanctions are effective when reinforced by informal social controls and weakened when those

informal controls are absent (Tittle and Logan, 1973). Williams and Hawkins (1989a, 1989b) suggest that deterrence of domestic violence is contingent on reciprocity of formal and informal social controls. They suggest the deterrent effects of arrest will be greater for batterers who perceive higher social costs associated with the act of violence and with arrest (Bowker, 1983, 1984). These costs include loss of job, relationship and children, social status in the neighborhood, and whatever substantive punishment they receive. Accordingly, the social and structural position of batterers, including their prior punishment experiences and the meaning they attach to them, will mediate the deterrent effects of sanctions. When batterers perceive that punishment is not a cost worth avoiding, legal sanctions alone are unlikely to induce compliance with the law» (Fagan, 1996, p.26).

Os vários estudos de *settencing* na temática da violência doméstica demonstram que os agressores que receberam penas que apenas contemplavam multas e/ou proibições têm uma maior taxa de reincidência (Gross, Cramer, Forte, Gordontt, Kunkel & Moriarty, 2000). A questão que se coloca não é apenas a da severidade punitiva, é antes a eficácia da punição. Ou seja, é necessário não ter apenas como objetivo principal a punição, mas também a reabilitação, não chega apenas a conduta no passado, é necessário ter em conta o comportamento futuro, se não existir esta preocupação corre-se o risco de agressões continuarem a repetir-se e tornarem-se mais graves. Mas já em 1764 Beccaria preconizava a adoção do princípio da certeza da punição como dissuasor do crime.

As vítimas de violência doméstica quando, finalmente, recorrem ao tribunal, fazem-no não tanto em busca de justiça mas, acima de tudo, de ajuda. Fazem-no transportando consigo todos os medos e receios de não encontrar a resposta que procuram e que, muitas vezes, nem elas próprias sabem qual é. Sabem apenas que querem acabar com o sofrimento em que vivem, conjuntamente com os filhos, em vítimas indiretas do macho, que beneficia, não raras vezes, da complacência – próxima da cumplicidade – de alguns juizes. Se o tribunal não for capaz de responder à vítima, apoiando-a e protegendo-a, para que ela entenda que a resignação e a submissão não são, certamente, os caminhos no sentido de um relacionamento saudável e gratificante; e se, por outro lado, o tribunal não conseguir identificar, perceber e intervir sobre o agressor, então o sistema não será capaz de cumprir, na íntegra, a função para com uns e outros. Poderá, até, o Tribunal

produzir despachos e sentenças condenatórias, formalmente justas, mas nas quais nem vítimas nem agressores se revêem, porque não se traduziram numa melhoria da qualidade de vida, uma vez que não se recuperou o agressor (porque não se atuou sobre ele) e não se protegeu, conseqüentemente, a vítima (Garcia, 2009). Na violência familiar a impunidade combate-se com penas justas e efetivas.

A reflexão sobre essa questão é imprescindível para quem toma tal decisões e, naturalmente há de pensar sobre o sentido profundo (*o porquê?* e *o para quê?*) do que faz. Ao castigo que representa a pena, está associada a noção do valor moral da expiação. A este respeito, temos o exemplo retratado no protagonista do célebre romance de Dostoievsky (1866), *Crime e Castigo*, que reflecte a exigência, sentida pelo criminoso e provocada pelo remorso devido à prática do crime cometido, de expiação através do sofrimento e da pena. «Le concept de personnalité, et a posteriori, celui de personnalité criminelle, est un construit, ou une élaboration faite afin d'avoir prise sur le réel» (Debuyst, 1977, p. 385). A pena deve favorecer a reinserção social do agente do crime e deverá ser concebida como apelo e convite à “reconciliação” entre esse agente e a comunidade ofendida com a prática do crime. O primeiro passo para essa “reconciliação” é a aceitação, pelo agente, da necessidade de saldar a dívida que contraíu com a prática do crime. A ressocialização, ou a “reconciliação” entre o agente do crime e a comunidade não pode ser vista como um mal que responde a outro mal (Cusson, 2007); deve existir, por parte do agressor, a interiorização do interdito, isto é, a substituição do *locus* externo atribuído ao ato pelo *locus* de controlo interno.

Estudos anteriores têm revelado que uma alteração nos pressupostos punitivos provoca alterações na punição atribuída; as características do ofensor e da vítima, assim como a subjetividade do aplicador da lei são passíveis de provocar, igualmente, alterações ao nível do ato sentencioso e, conseqüentemente, alterar a punição atribuída concernemente à sua severidade (Darley, Carlsmith & Robinson, 2006, Sporer & Goodman-Delunhnty, 2009, Ramos, 2012).

A lei confere ao juiz o direito de decidir segundo a sua livre convicção (artigo 127º do Código Processo Penal e artigo 655º do Código Processo Civil), salvo quando a lei

dispuser diferentemente; a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da autoridade competente, levando a que a decisão judicial seja uma combinação de motivações jurídicas e ajurídicas, em que a objetivação e a normatividade a estas adjacentes são ilusórias, numa perspectiva que o normativo não é mais do que a sùmula das construções sociais do sentenciador. A justiça deve ser clínica, no sentido da individualidade, visando acudir ao caso concreto, para o que deve desenhar o percurso singularizador da lei ao agente do crime.

O problema central em todo este processo é o valor da verdade, o que representa e quais as consequências que daí podem advir; mais: de onde provém a verdade, ou seja, quem profere os enunciados da verdade por entre as linhas cruzadas dos depoimentos judiciais? Falamos de um crime que, na maioria das vezes, acontece em privado, em que não há testemunhas, apenas existindo o depoimento da vítima e do agressor e, obviamente, são opostos nas suas versões.

Quando, na esfera da justiça, o subjetivo se faz objetivo, assume a designação de decisão judicial, que acede à experiência específica do objeto de litígio, trabalhando as opiniões convencionais, expressas pelas leis e decorrentes das narrativas testemunhais, e instaura a relação direta com o objeto controvertido, sendo discutida a pluralidade de perspectivas que passaram pela discussão sobre a *quaestio decidenda*. Porém, a decisão, assentando numa multiplicidade de subjetividades, não é objetiva: queda-se pela tentativa da objetivação do subjetivo. As questões formais apresentadas em tribunal mais não são do que problemas superficiais de um acontecimento vivenciado num passado, trazido ao presente num contexto formalizado e rigidificado, aludindo-se a uma prevenção geral. O edifício da prevenção apresenta, por vezes, fissuras que permitem a penetração do crime: nenhuma prevenção é totalmente eficaz e, em alguns momentos, parece prostrada, não se revelando suficientemente idónea à evitação das ilicitudes. Exercer justiça revela-se uma tarefa difícil, árdua, quiçá perigosa, também pelos danos que podem ser provocados em terceiros: atente-se no risco do erro judiciário, por vezes irreversível e irreparável. Vários elementos exteriores podem iludir o juiz mais atento e escrupuloso: uma informação inexacta, um documento fabricado, um testemunho falso,

uma peritagem com conclusões erróneas podem concorrer para a condenação de um indivíduo (Floriot, 1972): a justiça constrói-se nas entrelinhas da verdade e esta alicerça-se nas convicções dos julgadores e nas suas racionalidades intrínsecas e nas lógicas extrínsecas (Louro, 2008). A legitimação das decisões jurídicas é, acima de tudo, política, contextualizando-se nas abordagens das crenças / convicções, partindo de uma perspetiva “micro” para uma perspetiva “macro”, isto é, da decomposição do juízo do juiz para a sua contextualização social (Duarte, 2003). A dialética a que se assiste é mais do que isso, é o acervo de interesses e interpretações que resulta em contexto da expressão, fruto das aproximações (verbais e não verbais) entre os diversos atores em presença, naquilo que foi já desenhado, em sede da criminalização e da Psicologia do Testemunho, como o Sistema de Interações Discursivas (Poiares, 1999, 2001, 2005).

«O juiz é o guardião das promessas: ele aplica a lei preestabelecida a factos passados e exprime o direito no respeito pela segurança jurídica» (Ost, 1999, p.188). Às decisões elaboradas pelo juiz estão, de igual modo, inerentes fatores extrajurídicos, nomeadamente em relação à natureza e medida da pena. As disposições que se encontram na parte geral da quase totalidade dos códigos penais contêm um “programa” legislativo no qual o julgador deve inscrever a sua decisão, decisão essa que, de forma alguma, pode ocorrer num livre espaço de racionalidade e subjetividade do julgador. No entanto, “não é possível preencher o programa do legislador, sem o contributo dos concorrentes «programas» do julgador, dos seus *second codes* que prestam homenagem a estereótipos, ideologias e “teorias” (Dias & Andrade, 1997).

Essa base de valoração constituirá uma escala de preferências relativamente às possibilidades alternativas com vista à realização do fim ou objetivo pretendido: a decisão final, que não será mais do que a concreta opção por um dos dois termos opostos que consubstanciam a questão – punível/não punível, admissível/inadmissível, verdadeiro/falso. Está excluída qualquer terceira possibilidade. Daí se explica a razão pela qual a decisão não pode ser nem voluntariamente decretada, nem lógico-dedutivamente obtida, mas tem de ser juridicamente fundamentada, fundamentação essa

que se baseia na realização de uma síntese, tendo em conta a dialética entre critérios abstratos de verdade e validade e o caso concreto processual e comunicacionalmente reproduzido (Cortês, 1996, Turiel, 2011).

O juiz decide por força de diversas circunstâncias, podendo estribar-se na íntima convicção. O que é a íntima convicção? Qual o espaço de manobra que ao julgador, enquanto intérprete dos relatos – também dos personagens – é consentido? Caberão aqui as normas ínsitas nos artigos 6º e 9º do Código Civil para a interpretação das leis? No entanto, a interpretação de que o juiz cura em sede de julgamento não é apenas de normas mas, principalmente, de factos e de narrativas.

Ora, se existem motivos jurídicos para a construção da decisão, que decorrem das regras e normativos institucionais e que são, em princípio, nítidos, fruto de subsunção, outras causas do sentenciar ocorrem, no foro não jurídico (o que se designa de ajurídico). Mas, em diversas situações, o julgador decide por motivos que extravasam as razões do Direito, podendo projetar-se em planos diferenciados e, até, sucessivos (Tonry, 1997); e, em muitos casos, essa motivação emerge de depoimentos de sujeitos processuais (os atores judiciários). Tais depoimentos agilizam-se para a construção da verdade judicial – que não corresponde sempre à verdade material, aquela que é (deve ser) prosseguida pelo tribunal. Mas os depoimentos existem em função de quem os profere – e estes atores geram e vivenciam uma dinâmica específica, mas dialética, que remete para o modelo das interações discursivas formulado por Poiares (1996, 1999, 2000, 2005), em que as testemunhas e o arguido entrecruzam as suas discursividades, em íntima proximidade, disponibilizando ao julgador relatos plurais e matizados nas verdades de cada um, o que se enfatiza quando a testemunha acumula esse estatuto com o de vítima.

Sendo hoje em dia incontestável que a violência doméstica é, entre outros, um problema de Direito, cabe analisar as emergências no seu tratamento legal, procurando encontrar boas práticas e identificar caminhos tortuosos (Schneider, 2000). O agravamento da moldura penal, em 2007, bem como a introdução de uma maior diversidade de penas acessórias foram alterações legislativas saudadas pelas organizações com atuação nesta área. Quando analisamos as condenações, constatamos que o número de condenados por

violência doméstica tem vindo a aumentar significativamente. Em prisão efetiva? Ou em cosmética do punir? No entanto, apesar de significativa diminuição, a pena mais aplicada nestes casos continua a ser a pena de prisão suspensa simples (em 2000, esta pena representou 92% das penas aplicadas e, em 2009, 38%). Esta pena, por não implicar qualquer dever de sujeição ou regra de conduta por parte do arguido, conduz, para grande parte das pessoas que foram entrevistadas, a um certo sentimento de impunidade que tem consequências naquele conflito específico, com o agressor a sentir que não lhe foi aplicada qualquer pena e em termos de prevenção geral, com a difusão, via tribunais, dessa mensagem. Mas o problema relacionado com as sentenças não se cinge às estatísticas produzidas, mas ao próprio conteúdo da decisão judicial. Continuam a identificar-se sentenças e acórdãos que nem sempre valorizam a violência exercida sobre as mulheres e que reforçam certos estereótipos, como os “deveres” das mulheres ao seu companheiro na esfera familiar. Desde logo, a criação de uma tipologia aplicada às vítimas. Para Schafran (1985), os três estereótipos mais marcantes reflectidos nas decisões judiciais, são os seguintes: “Maria”, a mulher casta/doméstica, para quem a maternidade é a suprema realização, e inábil para tomar qualquer posição que implique autoridade sobre outras pessoas; “Eva”, a eterna tentadora que leva os homens a delinquir, e que é também agente da sua própria vitimização, designadamente nos crimes sexuais; e a “Super Mulher”, aquela que está no mercado de trabalho em plenas condições de igualdade salarial com os seus colegas homens, e que dispõe de recursos próprios para se sustentar, a si e aos filhos. Estes estereótipos foram encontrados nas narrativas de vários(as) magistrados(as), judiciais e do Ministério Público, entrevistados(as) (Duarte, 2011). Numa acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (2013) parece que o estereótipo “Maria” está presente quando é afirmado “O facto de o arguido ter atingido a assistente, com um murro, no nariz que ficou “ligeiramente negro de lado” e de a ter mordido na mão (sem lesões aparentes) constitui uma simples ofensa à integridade física que está longe de poder considerar-se uma conduta maltratante suscetível de configurar “violência doméstica”. É manifesto que essa conduta do arguido, mesmo tendo em conta que a assistente estava com o filho (então com 9 dias de vida) ao colo, não tem a gravidade bastante para se poder afirmar

que, com ele, foi aviltada a dignidade pessoal da recorrente e, portanto, que o seu bem-estar físico e emocional foi, intoleravelmente, lesado. [...] ². No presente caso, muito embora a conduta do arguido seja violadora da integridade física e psíquica da recorrente, então sua companheira, tendo em conta os factos dados como provados na douta sentença recorrida e que a recorrente não contesta, não traduz a prática de atos de maus tratos integradores de um crime de violência doméstica, nem é reveladora de especial censurabilidade ou perversidade exigidos para a consumação do crime de ofensa à integridade física qualificada, como pretende a recorrente.” É, por vezes, com este tipo de acórdãos que se faz uma pseudojustiça no que toca à violência doméstica, a desculpabilização do agressor e a representação da vítima como sendo exagerada, em que levar um murro faz parte do papel da esposa dedicada e inábil para tomar decisões, com esta racionalidade não previnem, antes estimulam e legitimam, a violência doméstica e envergonham a justiça portuguesa.

Outro Acórdão do Tribunal da Relação de Évora (2011) refere o seguinte: «[...] desde data não concretamente apurada, mas aproximadamente desde o ano de 2004, o arguido em diversas ocasiões desferia murros e pontapés e apelidava-a de “puta”». Esta descrição da conduta do arguido mostra-se algo indefinida, vaga e genérica, em relação ao tempo, ao lugar da prática dos factos, como relativamente aos próprios factos integradores das agressões e injúria e respetiva motivação e consequências, não se encontrando esclarecido o número de ocasiões em que tal ocorreu, a quantidade de murros e pontapés em causa ou qualquer elemento relativo à forma e intensidade como foram desferidos, ao local do corpo da ofendida atingido e suas consequências, em termos de lesões corporais e desconhece-se também a motivação da conduta em causa. [...] Os vários atos parciais cometidos pelo arguido, que justificariam o comportamento reiterado e contínuo deviam estar concretizados e não descritos, como acontece no caso em análise, de forma genérica e conclusiva [...] Perante a escassa matéria de facto provada, analisada à luz das considerações tecidas e dado que a agressão, que ocorreu

² Ac. TRL de 15-01-2013, Rel. Neto Moura, disponível em www.dgsi.pt.

no dia 6 de Julho de 2008, não foi suficientemente intensa, que justifique a aplicação do disposto no art. 152º nº 1 e 2 na redação dada pela Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro, os factos integram apenas um crime de ofensa à integridade física simples p. e p, no art. 143º nº 1 do C.Penal»³ Evidencia-se com este acórdão outra temática que se afigura a personificação do “sonho do agressor”; além de ser uma pena muito mais leve, a vítima pode desistir da queixa. A perpetuação dos padrões de discriminação e privilégios a partir do qual os homens têm o domínio no conceito familiar, pois só raramente se aplica ao agressor penas que resultam num verdadeiro afastamento da vítima, como a proibição de contatos com a vítima ou a condenação a pena de prisão, muitas vezes sob o pretexto de proteção do núcleo familiar (Mills, 2003). Assitimos também ao facto de ter que ser a vítima a demonstrar provas irrefutáveis do ato sofrido, é a revitimização do sistema; neste sentido, Feitor (2012) também se refere às consequências do facto de a violência conjugal se configurar como um crime de dano, exigindo provas documentadas das lesões provocadas, quer ao nível físico, quer psicológico ou emocional. O que leva a que não exista uma verdadeira proteção jurídica contra a violência, na medida da necessidade de prova das consequências aos níveis referidos, mesmo quando o ato violento se encontra provado. – As regras da justiça acabam a contribuir, de forma determinante, para a descrença do sistema penal e para que a vítima seja duplamente vitimizada. Muitas vezes, no campo da violência familiar, temos uma justiça que brinca ao faz-de-conta.

Com efeito, neste terreno ou são inexistentes as testemunhas – a violência passa-se habitualmente *intra muros*, no seio da sacralizada *harmonia familiar* – ou ninguém quer prestar depoimento, por cobardia, medo e ausência de solidariedade, o que complexifica a prova – o que joga a favor do agressor.

A lacuna da lei é um vazio existente no ordenamento legislativo, caracterizando-se, assim, a inexistência de uma norma jurídica aplicada no concreto, ou seja, baseia-se

³ Ac. TRE de 12-09-2011, Rel. José Maria Martins Simão, disponível em www.dgsi.pt.

num acontecido, reconstruído e subjetivo, ao qual se tem acesso por intermédio de outros que lhe contam a história dos acontecimentos, os quais são resultantes de derivações que coadunam com os interesse de quem os conta; como exemplo, as várias interpretações e representações apresentadas em tribunal; perante o mesmo facto, há pelo menos duas versões distintas, a do arguido e a da vítima. Ambos têm a sua própria verdade, e perante tal constatação, o magistrado tem que decidir qual dos dois diz a verdade. Qual o lugar da verdade? Como pode o juiz decidir? E, quando o faz, quais são as bases que determinam a pendulação para um dos lados da balança, quando não há factos comprovados, apenas histórias contadas? Neste caso, é a lógica dos argumentos, sendo a Ciência dos princípios e métodos usados para distinguir argumentos correctos daqueles que são incorrectos: a aplicação da justiça representa, por conseguinte, uma técnica, mais do que uma Ciência, que se ocupa da análise das frases ou das proposições, e das provas, atendendo, portanto na forma (Larenz, 1978).

A importância desta questão assume relevância em vários acórdãos, como, por exemplo, o Tribunal da Relação do Porto, de 2012: «[...] E foi, assim, que a ofendida, num depoimento frágil, sofrido, mas sereno, objetiva e genuíno, relatou o sofrimento porque passou em resultado do comportamento do arguido, sentimentos que conteve perante os filhos e pais que consigo viviam, cuja preocupação evidenciou em pleno julgamento, quando se decidiu pelo esclarecimento dos factos. O seu depoimento foi, de igual modo, credível e convincente, pela sua impressibilidade, certeza, e localização espacial e temporal, no que tange ao relato dos factos e as circunstâncias em que ocorriam as agressões, injúrias e ameaças, tal como se encontram, assentes, e acrescentou pormenores que da acusação não constavam. [...] Atento o discurso consistente da ofendida, mesmo quando sujeita a pedido de esclarecimento, que alicerçaram a convicção do tribunal no sentido da prática dos factos pelo arguido, cuja credibilidade do seu depoimento saiu reforçada em confronto com o depoimento das testemunhas D e

G, que demonstraram boa razão de ciência.»⁴. Fica neste acórdão presente como é determinante para a convicção do magistrado a credibilidade dos depoimentos.

Como já referido anteriormente, a lei confere ao juiz o direito de decidir segundo a sua livre convicção (art. 127º, Código Processo Penal), salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da autoridade competente, levando a que a decisão judicial seja um sentenciador. Sob as formas jurídicas e lógicas escondem-se, com efeito, os pensamentos íntimos, particularmente o pensamento do que o juiz acredita ser a solução justa para o litígio e que nem sempre se enquadra no plano jurídico. A administração da lei penal consiste em escolher os que são processados e em saber escolher, para estes eleitos, a sanção conveniente. Estas manipulações, familiares aos magistrados, transformam o fluxo indiferenciado da criminalidade aparente em criminalidade legal – onde cada delinvente se encontra etiquetado, avaliado, identificado. Assim se faz o processo de seleção (Dias & Andrade, 1997). Esta tarefa exige competências, às quais a lei, por vezes, faz alusão, mas que lhe são externas: a prática da justiça penal não é ilegal, mas a-legal (Herpin, 1978).

Será que a justiça pertence aos juizes? Ou apenas as construções e reconstruções das histórias contadas em sala de audiência? Que verdade resulta desta dialética? A verdade dos factos ou a própria verdade do juiz? A verdade narrada pelas partes ou as partes da verdade submergidas, escamoteadas? Baseada e balizada nas suas convicção e crenças, estribando-se nestas para destrinçar a verdade e a mentira, o culpado e o inocente. Como pode o magistrado chegar a tal conclusão só com base em meras afirmações de terceiros, quando sabemos que há um conjunto de fatores que podem deturpar o depoimento de uma testemunha?

Segundo Altavilla (1924-2003), a veracidade e sinceridade são dois termos que não se equivalem, pois pode ser-se sincero sem ser verídico, o que leva a distinguir entre a

⁴ Ac. TRP de 19-09-2012, Rel. Ernesto Nascimento, disponível em www.dgsi.pt.

falsidade e o erro da testemunha. Assim, o testemunho gera, em virtude deste duplo perigo, perplexidades que provocam a necessidade de uma sindicância através da multiplicidade das testemunhas; segundo Gorphe (1980), a fidelidade do testemunho não depende somente das qualidades morais do depoente, mas de numerosos fatores, relacionados com a mentalidade, com o objecto da sua declaração e com as condições do testemunho. O sentenciador, como pessoa humana que é, e falível, sendo obrigado a optar por testemunhas, regra geral contraditórias, selecciona a informação mais fiável, seguindo critérios subjetivos (os seus), que envolvem as suas crenças, representações, fantasias – sua personalidade. A fidelidade das análises das declarações refere-se à fidelidade dos critérios do conteúdo, assim como à da adequação da decisão judicial, baseada nestes critérios, sobre a verdade e a mentira (Raskin, 1994). Verdade e mentira são objectos construídos em função de longitudes e latitudes cognitivas e comportamentais.

O acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 2011 «[...]A livre apreciação da prova não se trata de uma operação puramente subjectiva, por meio da qual se chega a uma conclusão unicamente com base em impressões ou conjeturas de difícil ou impossível objetivação, mas de uma valoração racional e crítica a efectuar, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, de forma a permitir objetivar a apreciação de modo que, a convicção pessoal há-de ser objectivável e motivável, capaz de se impor aos outros. Com este princípio estão intimamente relacionados, os da oralidade e da imediação. O primeiro exige que a produção da prova e a discussão, na audiência de julgamento se realizem oralmente, de modo que todas as provas (exceto, naturalmente, aquelas cuja natureza não o permite) terão de ser apreendidas pelo julgador por forma auditiva. O segundo, o da imediação, diz respeito à proximidade que o julgador tem com os intervenientes no processo, ao contato com todos os elementos de prova, através de uma percepção direta e formal. Estes princípios da oralidade e da imediação são muito importantes para a apreciação da prova uma vez que, oferecem maiores possibilidades de certeza e da exacta compreensão dos elementos levados ao conhecimento do tribunal. Como salienta, o Professor Figueiredo Dias, in "Direito Processual Penal", Vol. I, pág. 233 e 234, " só os

princípios da oralidade e imediação (---) permitem o indispensável contato vivo e imediato com o arguido, a recolha da impressão deixada pela sua personalidade. Só eles, por outro lado, permitem avaliar o mais concretamente possível da credibilidade das declarações prestadas pelos participantes processuais»⁵.

A busca da verdade passa, no fundamental, pela narração trazida a tribunal pelos atores judiciais envolvidos (arguido, vítima e principalmente, as testemunhas), congregando-se aqui as preocupações colocadas pela Psicologia do Testemunho, núcleo da Psicologia e da Justiça, que se manifestou crucial na nova formulação prática e científica (Poiares, 2003). Todo o processo judicial tem como fim alcançar a verdade, pelo que emerge a necessidade de explorar os discursos e intradiscursos dos atores judiciais envolvidos, contribuindo para a aproximação entre os factos narrados em tribunal e o que na realidade aconteceu, despistando a falsidade e o erro da testemunha, como referiu Altavilla (1924 - 2003); ora, sendo o testemunho a parte fundamental e, por vezes, decisiva de um processo, é essencial ter em atenção duas situações distintas e não necessariamente interligadas, que contribuem para a qualidade do mesmo: a credibilidade e a fiabilidade. A subjectividade que acompanha o indivíduo depoente converge até ao juiz, assim como o relato dos factos ocorridos; estes factos nunca chegam ao conhecimento daquele ator judicial tal como aconteceram - o resultado final surge das transformações carreadas pelas versões das partes, cabendo ao juiz localizar a norma jurídica a ser aplicada (Larenz, 1978), pelo que é imprescindível uma melhor compreensão da economia do testemunho. As decisões judiciais, pelas suas consequências normativas concretas, devem ser acompanhadas por uma racionalidade que, por sua vez, seja comunicativa, harmoniosa, pragmática, no sentido em que a lei tem de se propor alcançar os fins sociais, que são também éticos (Sobral *et al.*, 1994). De facto, como explica Landreville (1990), toda a lei é um ato político e ético, demarcador de ilicitudes/licitudes, sendo que essa vertente ética ocorre na escolha da norma a criar, nas razões por que é feita e na sua produção.

⁵ Ac. TRE de 12-09-2011, Rel. José Maria Martins Simão, disponível em www.dgsi.pt.

6. Intervenção jus psicológica no âmbito da violência conjugal

Nascida do âmbito da Psicologia na Justiça, a Psicologia Forense ocupa assim um papel de destaque no contexto judiciário, procurando aceder aos discursos e aos comportamentos dos atores sociais que estão presentes no processo de criminalização e nas suas diversas fases; tem como intuito captar mensagens e descodificá-las, ou seja, compreender e explicar, de modo a contribuir para a tomada de decisão por parte do julgador, já que a Psicologia Criminal – tal como a forense – é uma grelha descodificadora dos comportamentos e das discursividades dos atores (todos) do processo de criminalização. (Poiars, 2000, 2001); é frequentemente definida como uma disciplina que pretende dar resposta às questões científicas e práticas que o sistema de justiça coloca aos psicólogos que nele trabalham (Goldstein, 2007).

Existe uma plataforma comum entre a Psicologia e o Direito, como vimos: o comportamento humano, embora a observação seja ancorada de maneira diferente por cada um dos modelos, o que não deve ser motivo de afastamento, antes de uma crescente aproximação (Poiars, 2001). Em presença de tais factos, há uma indispensabilidade na procura de novos caminhos, nos quais a Psicologia tem um papel fundamental, se não mesmo crucial, como acontece com outras Ciências Sociais e Humanas. A dimensão confluyente dos saberes disciplinares e da justiça implica, com efeito, a atribuição e reconhecimento de um papel fulcral: a Psicologia, no conceito das entidades disciplinadoras (Agra, 1986), evidenciando como o saber psicológico está afiliado na justiça, na sua génese disciplinar, e não apenas nas práticas médicas e no discurso filosófico. O traço comum entre o Direito e a Psicologia, enfatizando a construção de uma novo constructo científico, fruto dos jogos tensionais entre saberes e práticas, gera a intervenção jus psicológica, nascida deste cruzamento entre as Ciências do Comportamento e da Vida (a Psicologia) e o sistema disciplinar e gestor da ordem/desordem (o Direito): a complementaridade é a traça dominante entre ambos os vectores, coexistindo como verso e reverso do universo humano (Poiars, 2003).

O trabalho dos psicólogos forenses tem vindo a assumir relevância cada vez mais no contexto dos tribunais, nomeadamente na violência conjugal. A avaliação psicológica forense respeita normalmente a avaliação de um indivíduo, objetivando-se a tentativa de apoio aos tribunais, perante uma situação legal, mais especificamente a avaliação da personalidade em contexto penal, a perícia sobre a personalidade (artigo 159.º CPP). A perícia médico-legal é então um meio de prova que permite obter especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, aquando exigência para perceção e apreciação dos factos (art.º 151º do Código Processo Penal), uma vez que são patamares de conhecimentos específicos que não integram o plano de formação de quem tem de decidir. Existem perícias, tanto em Direito Penal como em Direito Civil, em que o objecto decorre da lei, porém, é mais vulgar a sua aplicação em sede processual penal, estando agora a expandir-se o recurso à Psicologia nas esferas civilista, laboral e rodoviária. No caso do Direito Penal, estamos perante a perícia de personalidade (Maia, 2011).

A prova pericial em contexto penal, tal como refere o artigo 151.º do CPP, “tem lugar quando a perceção ou a apreciação dos factos exigem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos”. Este artigo não refere só que as perícias são admitidas sempre que esteja em causa aquele tipo de conhecimentos, mas impõe a sua realização nesses casos. No que se refere ao valor probatório das perícias, presume-se subtraído à livre convicção do julgador o juízo técnico, científico ou artístico inerente às perícias, havendo a obrigação de fundamentação de uma eventual divergência por parte do magistrado. No entanto, esta necessidade de fundamentar a divergência, recorrendo à mesma área de especialização e conhecimento do perito só ocorre no que respeita ao juízo científico formulado (Carmo, 2005). A avaliação psicológica forense tem vindo a assumir um relevo muito grande na decisão do juiz. Como refere um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2008: «Para efeito de avaliação da personalidade e da perigosidade do arguido pode haver lugar a perícia sobre as suas características psíquicas independentes de causas patológicas, bem como sobre o seu grau de socialização». Trata-se de uma perícia sobre a personalidade que «pode relevar, nomeadamente para a decisão sobre a revogação da prisão preventiva, a culpa do agente e a determinação da

sanção»⁶. Constatase que o exercício da avaliação psicológica exige cada vez mais uma formação sólida por parte do psicólogo em termos técnicos e éticos porque, por mais perfeitos que sejam os instrumentos, nunca esta actividade pode prescindir da “sensibilidade” de quem os utiliza (Gonçalves & Machado, 2005).

Polaschek & Reynolds (2000), referem também a importância de, durante o processo de avaliação, construir com o avaliado uma imagem detalhada da ofensa típica e avaliar o leque de atos cometidos, o leque de vítimas, a duração das ofensas, os motivos e objetivos, sobretudo com o intuito de identificar situações de risco. Para determinar um padrão, estes autores recomendam que durante a avaliação se procure perceber se o avaliado tem como alvo um tipo particular de vítima, o grau de dano causado à vítima, o padrão de interação entre esta e o ofensor, e o recurso a armas. Segundo Litwack & Schlesinger (1999), estão a ser feitos progressos na definição e validação de variáveis como fatores de risco para a violência, e nos últimos anos têm sido publicados estudos empíricos cujos dados sugerem que certas variáveis devem ser consideradas como fatores de risco para a violência futura. Estes autores procederam a uma revisão da literatura sobre avaliação da perigosidade e quatro temas emergiram consistentemente. Assim, nestas avaliações deve-se: (1) dar detalhes da história passada de violência e de resposta ao tratamento da violência; (2) perguntar diretamente ao sujeito sobre a sua história de vida e inclinação para comportamentos violentos; (3) considerar a circunstância que é provável que o avaliado enfrente no futuro; (4) pedir outras opiniões em caso de dúvida. O processo judicial, no seu todo, quer-se de grande rigor e verdade, tendo-se verificado um aumento gradual da intervenção jus psicológica em tribunal, ganhando com isso a Psicologia Forense no âmbito da visibilidade, publicidade e acreditação científica. De um lado, encontramos-nos como alvo da confiança que o poder judicial nos outorga, estando, por outro, revestidos de grande responsabilidade inerentes ao facto de, em termos dos pareceres e opiniões que emitimos interferirem diretamente com a vida das pessoas sobre quem tais opiniões recaem. Por conseguinte, é necessário

⁶ Ac. TRL de 05-12-2008, Rel. Carlos Almeida, disponível em www.dgsi.pt.

apostar nas competências dos técnicos superiores e especialistas. Consequentemente, revela-se pertinente a verificação das competências e qualificações do técnico, não facilitando o exercício de determinados profissionais, os quais podem não ter especialidade apropriada. Ou seja é necessário verificar se tal técnico tem ou não competência científica e profissional para levar a cabo tais funções em tribunal (Gonçalves, 2010). O que é da maior importância, dado que há muitos psicólogos de outras áreas que, por efeitos do desemprego, “desaguam” na área forense, sem ética nem formação académica.

7. Severidade punitiva e a psychologização na violência conjugal

À luz do que foi referido, na emergência e, também, na necessidade de interpretar tudo aquilo que surge, há necessidade de contextualizar os factos, os acontecimentos e os acontecidos deles resultantes, que surgem numa sucedânea daqueles. Importa refletir agora sobre estes conceitos: factos que constituem um aspeto da realidade, sobre o qual incidem a apreciação e a valoração judiciário-forense; o facto reporta-se diretamente a questões jurídicas, uma vez que a sua apreciação requer a subsunção jus-penalista (Beleza, 1985); acontecimento e acontecido representam as duas faces do facto (em sentido jurídico): acontecimento é o que se passou, o ato ou facto sobre o qual as testemunhas devem ser chamadas a depor; acontecido é a reconstrução do acontecimento feita pela testemunha, o seu relato, já com natureza interpretativa, de acordo com as idiosincrasias e especificidades do narrador, o que remete para a ecotemporalidade; estes conceitos, como pode observar-se, assentam na noção jurídica de facto, trabalhado pelos juristas, porém, fundamental nos meandros da Psicologia das Motivações Ajurídicas (Poiães, 2008, Louro, 2008 e Poiães & Louro, 2012)).

A apreciação dos factos, seja do ponto vista jurídico ou não, resulta de uma escolha que é efectuada por aquele que os apresenta e também por aquele a quem são apresentados, pela primeira vez: por outras palavras, na exposição da história fatural há uma escolha do material ou da informação a apresentar, no sentido em que esta seleção é feita de acordo

com o que é relevante para a interpretação do mesmo, de acordo com a ancoragem ou os interesses do apresentante, para que desta forma haja uma “economia temporal”, ou seja, para que a informação veiculada caiba dentro do espaço da exposição judiciária; ocorre a filtragem dos factos importantes, ou pretensamente relevantes, na significação interpretativa de esclarecimento e encadeamento dos acontecimentos: porque o sentido desta relevância decorre também da temporalidade e do jogo de interesses em disputa. O contexto assume uma especial importância na aceção dos factos, principalmente no tocante ao âmbito jurídico, onde tudo é decidido por terceiros. Ora, estes terceiros, investidos em decisores, podem nem sempre dominar as razões dos quotidianos, nem saber que se tornam anormativos em virtude de uma normatividade, quiçá obsoleta, que existe em função de um Poder, obedecendo a uma lógica própria que depende do modo de produção, dos interesses dos dispositivos informais, que se prolongam nos formais, como se os marionetizassem, na formalização de uma conjectura funcional, mutável e temporal; campo de variação que permite, em determinadas circunstâncias, o uso alternativo do Direito, inspirado pela linguagem e pelo discurso, entidades autorreguladoras e relativamente impermeáveis às lógicas ecotemporais (Hespanha, 2007). Novamente a dinâmica cega definida por Delmas-Marty (1984).

Importa, pois, criar uma metodologia para analisar as ligações existentes entre a criminalização secundária e a severidade punitiva, e perceber de que maneira o Saber psicológico influencia o discurso do aplicador no âmbito da violência conjugal. No exercício de julgar coexistem dois tempos: o momento da captação, exógeno, em que o Aplicador recolhe a informação sobre os factos; depois, o segundo momento, endógeno, que inclui a descodificação e a compreensão, resultando num terceiro momento, que é a aplicação da lei ao caso concreto.

Há, então, que perspetivar o ser humano no espaço da averiguação criminal, procurando os tribunais alcançar a verdade dos factos e aplicar a lei ao Transgressor. Trata-se do indivíduo, da sua dupla realidade – a intrínseca e a extrínseca -, das razões por que – isto é, as motivações para o ato delinquencial ou, como refere Debuyst (1986), o significado do crime. Poiars (1999) salienta, arrancando do conceito daquele autor, a

noção de significância do ato no tempo e modo e circunstâncias em que foi cometido, quer dizer, integrado e posicionado à luz dos seus complementos circunstanciais de tempo, de modo e de lugar. Este projeto pressupõe que o aparelho judiciário se permeabilize ao conhecimento e às aproximações do Saber: tratar-se-á de fazer sobrepor o Saber ao Poder, na conjugação foucauldiana da Ciência (Foucault, 1999).

Parte B - Estudo Empírico: Método e Resultados

1. Método

1.1 - Objeto e objetivos

A presente investigação erige a indagação da severidade punitiva das decisões judiciais, erigindo como crime principal a violência conjugal e as causas justificativas patenteadas nas sentenças. Ao julgador cabe sempre optar por proposições jurídicas, descortinando se são, ou não, aplicáveis à fatural idade e, caso afirmativo, quais as consequências das mesmas resultantes (Larenz, 1978).

A violência doméstica é um tema atual, não apenas em Portugal, mas em todos os países do nosso espaço cultural, objeto de particular atenção de juristas, psicólogos, sociólogos, entre outros. Apesar disso, não se trata de um problema novo, antes de uma complexa e intrincada questão social, de todos os tempos, que o devir comunitário e a crescente consciência coletiva sobre a dimensão e efetividade dos direitos vem impondo. Esta a razão por que, ao longo das pregressas décadas, têm sido trazidas à colação novas interrogações, emergentes dos choques e contradições que vão surgindo ao nível das representações sociais, das tradições e da cultura, a muitos títulos ainda dominantes na nossa sociedade. Não obstante, por todo o lado se tem vindo a sedimentar a ideia da tolerância zero – pelo menos no plano das intenções.

O espaço inaugural onde todas estas questões assumem um papel determinante, resultando na construção de uma arquitetura normativa, de definições uniformizadas, é o processo de criminalização. O Direito é, portanto, um regulador de relações interpessoais, que procura encontrar formas de colmatar a desordem e promover o bem-estar de uma sociedade: para tanto, opera na regulamentação das situações, que divergem de país para país, como acontece nas diversas etapas da criminalização, em especial nas suas fases primárias (produção legislativa) e secundária (aplicação judicial), cada uma delas organizada segundo uma gramática específica, ainda que interligada, espelhando uma lógica própria, emergente dos seus tempos histórico-culturais e político-sociais; tais lógicas decorrem dos titulares do Poder e de quem comanda o sistema, dos seus interesses e ideologias, partindo destes para emitir juízos

de valor; segundo Larenz (1978), estes juízos constituem expressões de uma tomada de posição pessoal do Legislador e, posteriormente, do Aplicador, realizadas no respeito por um valor que se reconhece enquanto tal; para fundamentá-los, o juiz não está limitado apenas à intuição axiológica, devendo aplicar critérios que gerem os valores e desvalores considerados vinculativos na e pela comunidade sociopolítica e jurídica.

A violência conjugal é um fenómeno bastante complexo e composto por diversos fatores, sejam eles, sociais, culturais, psicológicos, ideológicos, económicos, entre outros (Costa, 2003). Atualmente o Código Penal já consagra expressamente (no art. 152º) que existe crime de violência doméstica quando ocorram "maus tratos físicos e psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais (...) a pessoa de outro ou do mesmo sexo" com quem o agressor "mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem habitação". Para além deste artigo específico, a lei também criminaliza, por exemplo, as ameaças, a coação, a difamação, as injúrias, a subtração de menor, a violação de obrigação de alimentos, a violação, o abuso sexual e o homicídio ou tentativa de homicídio (APAV, 2014). As penas criminais, a nível de moldura central, vão de 1 a 5 anos de prisão, o que permite que o juiz possa suspender a pena, dado que o seu limite máximo não ultrapassa os 5 anos; este é o eixo do problema, pois o próprio Legislador abriu a porta ao expediente da suspensão. A tipificação da violência doméstica (maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo privações da liberdade e ofensas sexuais) nas seguintes pessoas: cônjuge ou ex-cônjuge; uniões de facto heterossexuais e homossexuais (ainda que sem coabitação); progenitor de descendente comum em 1º grau; pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou a dependência económica que com ele coabite (exigindo a coabitação). No caso previsto, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos (Art. 152º).

Quanto às penas acessórias, temos as seguintes: a) proibição de contato com a vítima, nomeadamente, o afastamento da residência, o afastamento do local de trabalho e

fiscalização por meios técnicos de controlo à distância; b) proibição de uso e porte de armas e; c) obrigação de frequência de programas de prevenção da violência doméstica.

No presente trabalho apenas nos interessa a violência conjugal, entre pessoas heterossexuais que tenham uma relação análoga à dos cônjuges com habitação.

Vários estudos têm mostrado que, apesar da violência contra as mulheres não se cingir aos espaços domésticos, podendo também ocorrer na rua ou no local de trabalho, é certo que grande parte deste tipo de violência ocorre sobretudo em casa. Em Portugal, a casa, é o espaço privilegiado para a ocorrência desta violência (43%), como ficou demonstrado no relatório da APAV (2014) recentemente publicado sobre esta matéria, sendo que é nesse espaço familiar que os maridos se constituem como os principais ofensores das mulheres. Também no mesmo estudo se verificou que a violência contra as mulheres é sobretudo física e psicológica, quando ocorre no espaço doméstico; discriminação sócio-cultural, quando ocorre no local de trabalho, sendo que a violência sexual ocorre sobretudo na rua. Será caso para perguntar se em Portugal a violência sexual cometida no interior das famílias, e portanto, a que acontece nos espaços domésticos, tem uma relevância menor que a violência sexual que ocorre na rua, ou, se as mulheres não valorizam e, por isso mesmo, não denunciam os ofensores sexuais com quem vivem, deixando que mais uma vez a tradição se sobreponha ao que a lei já contempla.

A experiência da APAV, nos seus vários Gabinetes de Apoio à Vítima, que recebem e agem junto de mulheres vítimas de violência conjugal, tal como os múltiplos estudos que sobre elas têm sido realizados, confirma que a violência praticada na conjugalidade (entre pessoas que vivem em situação conjugal, casadas ou não). É um sistema é circular, ou seja: começa, processa-se e termina, iniciando-se novamente, na fase em que, primeiro, começou, designado como o ciclo da violência conjugal pode ser entendido, pois, como um círculo, no qual as dinâmicas da relação do casal se manifestam sistematicamente, passando sempre por determinadas fases. Assim, neste ciclo podem identificar-se as seguintes fases: a) a Fase de aumento da tensão; b) a Fase do ataque violento e c) a Fase do apaziguamento. O ciclo da Violência Conjugal

dificulta muito as tomadas de decisão da mulher vítima, pois esta vive nele fases muito dramáticas (a tensão e o ataque violento), mas que terminam numa fase considerada gratificante (o apaziguamento), na qual a sua esperança de ter uma conjugalidade sem violência faz acreditar e tentar novamente o projeto de vida sonhado. Entre outros aspetos, a relação com o ofensor, a história de vida anterior, os apoios que tem ou não tem, a violência implicada e todos os atos que a constituem, o impacto que têm si- e, sobretudo, o significado que ela atribui a cada um desses atos - determinam a singularidade da sua reação (APAV, 2013).

A revisão de vários estudos interculturais e antropológicos aponta que a violência conjugal é indissociável da questão do gênero (Dias & Machado, 2008). A ligação entre o gênero e a violência conjugal tem gerado, contudo, bastante discussão e controvérsia (Miller & White, 2003) havendo autores que defendem a neutralidade/simetria de gênero (Moffit, Robins, & Caspi, 2001) e outros que afirmam que o gênero e o poder constituem o processo chave da violência conjugal, não sendo apenas um mero componente desta. Embora a crescente sobreposição dos papéis na conjugalidade leve à diluição dos papéis sexuais na família, as diferenças de gênero normalmente são notadas em todas as sociedades, como refere Giddens (2010). E essas diferenças de gênero demarcam a estratificação social, notada nas diversas partes da vida social, ao nível das oportunidades e presunções que desempenham na mesma, desde a família ao Estado; o mesmo autor ressalva que, embora as mulheres em alguns países tenham feito diversos prodígios, as diferenças de gênero são ainda notáveis. Embora a família se tenha vindo a caracterizar pela sentimentalização já mencionada, a violência doméstica foi permanecendo em silêncio (Dias, 2004); as mulheres continuam a assumir a responsabilidade de educar os filhos e cuidar da casa e os homens de sustentar a família, prevalecendo a desigualdade de papéis ao nível de “(...) poder, prestígio e riqueza” (Giddens, 2010, p. 114). Como diz provocativamente Foucault (1980), na obra *Power/knowledge*, onde há poder há resistência e contudo, ou talvez por isso mesmo, esta nunca está numa posição de exterioridade em relação ao poder. Assim, se é verdade que a igualdade declarada e até promovida na lei encontra inúmeros obstáculos na sua aplicação prática, o Direito não controla definitivamente ou isoladamente a vida social e os

seus valores, mas não se limita, ao contrário dos mais cépticos, a plasmar em letra de lei as concepções socialmente dominantes. O Direito – as leis, a jurisprudência, as práticas jurídicas e judiciárias – tem tido um papel constitutivo importante na segregação discursiva de grupos de pessoas, nomeadamente as mulheres. Talvez por isso mesmo, o Direito possa ajudar a desfazer essa segregação, não só proibindo tratamentos discriminatórios, mas sobretudo obrigando as devidas instâncias a tomar medidas que contrariem a real situação de inferioridade social de algumas pessoas: transmitir, por exemplo, à sociedade que a violência doméstica é realmente um crime que ocorre no seio das desigualdades de género.

Como já referimos anteriormente o presente trabalho tem como objetivos: (i) que concepção faz o legislador deste crime?; (ii) Como absorve o Aplicador a mensagem dimanada do Legislador, entidade política? Isto é: o Aplicador adota o racional legislativo ou apropria-o, por exemplo através da memorização da sua dimensão legislativa, produzindo outros (ou diferentes) enunciados aplicativos?; e, (iii) A verificar-se tal distorção aplicativa, por menor severização o transgressor já catou tal facto? Ou seja: o delinquento doméstico já pressente uma certa impunidade? Donde, a questão epicentral: poderão os tribunais converter-se em entes desculpabilizadores do crime de violência doméstica?

1.2 Tipo de estudo

Tendo em conta os objetivos e as características do estudo e recursos disponíveis para a investigação, enveredamos por um tipo de estudo exploratório, descritivo-correlacional. Classificámo-lo como exploratório porque desconhece-se a existência de estudos desta índole. Assume também carácter descritivo-correlacional uma vez que pretendemos descrever o universo de uma determinada problemática (violência conjugal) ou fenómeno e estabelecer relação entre variáveis (refere-nos que “ no estudo descritivo-correlacional, o investigador tenta explorar e determinar a existência de relações entre variáveis, com vista a descrever essas relações. O principal objetivo do estudo

descritivo-correlacional é a descoberta de fatores ligados a um fenómeno.” (Fortin 2003, p.174)

1.3 - Procedimento de recolha

A componente prática baseia-se numa recolha de dados de processos arquivados referentes ao crime de violência conjugal e a sua análise jus psicológica, utilizando, para o efeito, o instrumento de Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária) - ISPP-CS) (Poiares, 2009) (AnexoI).

Como o Índice foi construído para análise de processos-crime sem especificação do tipo legal, houve a necessidade, de acordo com a literatura, análise do processos e pela própria especificidades do crime de violência conjugal, tendo como base o ISPP-CS, acrescentar mais variáveis e que são: relação com o arguido; dependência económica das vítimas em relação ao arguido; dependência económica dos arguidos em relação à vítima; posse de arma; outros processos relacionados com violência conjugal; número de processos de violência conjugal; informação dos processos de violência conjugal ao nível dos filhos e menores de idade (número de filhos de ambos, da vítima e do agressor; ocorrência foi presenciada por crianças (até 18 anos); Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo foi contactada); dados dos processos sobre o historial dos episódios de violência (tipos de violência, consequências físicas para as vítima; vítima observada no hospital, vítima em internamento, o arguido costuma exibir armas ou referi-las durante as ameaças ou agressões, ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar, praticadas pelo mesmo arguido); pedido relatório Social/avaliação psicológica;); medida de coação; magistrado do julgamento e; tempo que decorreu entre a queixa e a sentença. Estes dados tiveram um tratamento estatístico *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*.

O Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária) - ISPP-CS) tem como objetivo geral analisar a severidade penalizadora, assim como, permite verificar o grau de psicologização do processo judicial, ou seja, a utilização de

informação e conhecimento científico proporcionado pela Psicologia Forense e o seu acolhimento no sentenciar. Na vertente severidade, o índice pretende avaliar qual o grau de penalização, desde a nula à elevada, podendo aplicar-se a qualquer crime, uma vez que o estudo assenta nos padrões da dosimetria penal (= moldura da pena para cada tipo criminal), sendo o resultado expresso em percentagem.

Considera três eixos: Arguido, Processo Atual e Medida Final Adotada. O primeiro confere informações sobre cada arguido no processo, nomeadamente nas dimensões sociodemográfica, cultural, clínica e forense. O segundo, tal como o nome indica, reporta-se ao processo atual do indivíduo: crimes em que se encontra pronunciado e medidas de coação. Por último, a Medida Final Adotada, sugere o que foi determinado em tribunal e se foram tidas em consideração a avaliação psicológica ou a perícia de personalidade, no agravamento ou atenuação da pena.

O tipo de resposta dos itens varia entre as de escolha múltipla ou resposta específica e direta. É aplicado a processos já arquivados e o tempo de duração da aplicação do procedimento é variável com a dimensão do processo.

O primeiro eixo, o Arguido, é composto pelas dimensões sóciodemográfica, cultural e pela anamnese judicial, diferenciada pelas subdimensões clínica e forense.

O segundo eixo, o Processo Atual, referencia o (1) crime(s) por que está indiciado (resposta específica); relativamente aos crimes imputados: (2) Tipo (resposta específica); (3) Preceito Incriminador (resposta específica); (4) Dosimetria penal (colocar o valor mínimo e o valor máximo).

Finalmente o último eixo, “Medida Penal Adotada”, diz respeito à (1) Medida aplicada a cada crime (resposta específica). (2) Cúmulo jurídico (sim ou não) (b) Medida aplicada em cúmulo (resposta específica). (3) A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica (sim ou não). (4) A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade (sim ou não). (5) A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da medida (sim ou não). (6) A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da medida (sim ou não). (7) A avaliação psicológica determinou o

agravamento da medida (sim ou não); (8). A perícia determinou o agravamento da medida (sim ou não). (9) Na decisão foram invocadas razões para a atenuação da medida (resposta específica, quais). (10) Observações (resposta específica). Este eixo termina com uma sinopse geral, a ser aplicada para todos os crimes por que o sujeito foi condenado. Referencia a dosimetria, diferenciando todos os crimes do indivíduo; (11) Medida aplicada (resposta específica). (12) Medida aplicada em cúmulo (resposta específica). (13) Cotação total (resposta específica).

A folha de cotação é constituída por itens de preenchimento referentes aos limites mínimo e máximo da medida penal aplicável e à pena concreta, em meses. Tal folha de cotação contém ainda uma tabela constituída por cinco colunas, cada uma contendo quatro pontos de escala referentes à evolução do agravamento da pena; e uma linha de preenchimento, por arguido (Anexo II).

Em alternativa, pode utilizar-se uma plataforma informática construída por Branco (2013), destinada exclusivamente à habilitação do tratamento da informação obtida por este instrumento, transformando os resultados numa escala de 0-100%.

Quanto aos itens relativos com o tipo de tribunal (singular ou coletivo), número convencional, número de arguidos, decisão (absolutória ou condenatória), pena aplicada por arguido, data e identificação do assistente de investigação, o assistente de investigação tem de assinalar com uma cruz qual o tipo de tribunal e tipo de decisão; no que concerne ao número convencional (número do processo na investigação), número de arguido se penas aplicadas, o assistente de investigação aponta objetivamente a informação relativa a tais itens, informação, essa, recolhida no processo analisado. A data e a identificação do assistente devem, igualmente, ser indicadas.

Concernente à primeira secção, respeitante ao Arguido, na dimensão sócio – demográfica, deve ser assinalado apenas um dos itens relativos à naturalidade (urbana/rural) e apenas um dos itens referentes ao estado civil, assim como à situação profissional (empregado; desempregado; reformado); devem ser indicadas, por escrito, as informações recolhidas acerca da freguesia, concelho e idade; profissão; e a relativa

ao tempo que o sujeito se encontra desempregado, somente se for esse o caso. Na dimensão cultural, o assistente deve indicar por escrito a etnia e assinalar um dos pontos referentes à categoria habilitações literárias, indicando se tal se encontra completo ou incompleto, desde que seja o caso. Se, no processo analisado, outro for o item adequado, especificar, indicando qual, sempre que a informação se encontre disponibilizada. Respeitante à categoria residência urbana/rural assinalar apenas um dos itens e indicar por escrito a freguesia, concelho e tipo de alojamento. Igualmente, indicar por escrito qual a relação afectiva ou de parentesco entre os vários arguidos, sempre que tal se verificar.

Respetivamente à Anamnese Judicial, mais especificamente à dimensão clínica, no que concerne à saúde mental, indicar referência de diagnóstico e qual, assim como assinalar a existência, ou não, de acompanhamento; o mesmo procedimento no que se refere às adições; neste caso, o assistente deve indicar qual a substância e assinalar devidamente se o sujeito é toxicodependente ou consumidor. Referente às patologias físicas, indicar por escrito uma referência de diagnóstico, assinalar a existência ou não de deficiência, referindo qual. Na dimensão forense, assinalar com cruz a realização de avaliação psicológica e a perícia de personalidade, indicando o tipo de instituição responsável pelas mesmas; indicar por escrito quais as conclusões, tanto da avaliação como da perícia; da mesma forma, assinalar se existiu, ou não, decisão sobre inimputabilidade e indicar quais as conclusões. Ainda referente à decisão supracitada, indicar com cruz, se tal decisão foi fundamentada por perícia de personalidade ou por avaliação psicológica forense. O assistente de investigação deve assinalar a existência, ou não, de antecedentes criminais, indicando por escrito os crimes anteriormente cometidos e as medidas de coação sofridas. Igualmente, deve ser assinalada com sim ou não a verificação de prisão preventiva, sendo indicado por escrito o tempo da sua duração; no que concerne às medidas aplicadas, devem ser assinaladas com cruz as verificadas, tais como suspensão do processo, multa, prisão, multa com pena suspensa, prisão com pena suspensa, prestação de trabalho a favor da comunidade (PTFC), ou outros; para todas as medidas verificadas, deverá ser indicado o crime. Devem ser indicadas quais as medidas de coação no presente processo e se se verificou ou não prisão preventiva e qual o

tempo de duração. Deve ser indicado a existência de acompanhamento terapêutico durante o processo – sim/não – indicando qual e se tal foi ou não cumprido. Relativamente à revogação da suspensão da pena, deve ser assinalado se tal se verificou, em caso afirmativo, indicado por escrito qual a razão. Obedecendo ao mesmo critério, deve ser assinalado o cumprimento ou não da pena e indicado o tempo de reclusão cumprido; respeitante à liberdade condicional, deve ser assinalada a sua verificação, ou não, assim como a revogação, ou não, devendo ser indicada qual a razão. No que concerne ao processo atual, assinalar com sim ou não a verificação de acompanhamento terapêutico, especificando qual. Concernemente à segunda secção, relativa ao Processo Atual, especificar os crimes pelos quais o arguido se encontra pronunciado, assinalando a medida de coação – prisão preventiva (sim/não); se se verificar outra medida indicar qual. No caso de o arguido ter cumprido prisão preventiva, assinalar sim ou não; se tal se verificou desde o início do processo ou especificar desde quando e até quando a prisão preventiva se manteve. Para os crimes imputados, especificar o tipo, o preceito incriminador (artigo do CP ou de lei avulsa) e a dosimetria penal (medida da pena), assinalando a presença de pena de multa e o seu valor, caso tenha sido aplicada.

No tocante à terceira secção, Medida Penal Adotada, especificar a pena aplicada a cada crime, a existência ou inexistência de cúmulo jurídico e qual a pena respetiva a tal cúmulo; assinalar se houve ou não decisão de prisão efetiva, especificando qual a medida penal efetivamente decretada. No que se refere à avaliação psicológica forense e à perícia de personalidade, assinalar com sim ou não a referência à sua realização, a sua utilização para se proceder a atenuação ou agravamento da pena; indicar por se foram invocadas razões para atenuação de pena e, se sim, quais. Respetivamente à sinopse geral, levar em conta todos os crimes pelos quais o arguido foi condenado e indicar a dosimetria de cada um; assinalar com sim ou não a aplicação da Lei dos Jovens Imputáveis; especificar qual a pena aplicada, referente a cada crime; e qual a pena aplicada em cúmulo.

Relativamente à interpretação do Índice de Psicologização, este indica o grau de solicitação e o grau de importância atribuída às avaliações psicológicas forenses e às

perícias de personalidade na decisão que culmina com a atribuição de uma medida penal, o seu agravamento ou sua atenuação, tal importância baseia-se na cotação dos itens relativos à decisão integrada na secção Medida Penal Adotada. No presente caso, quanto mais elevado for o índice, maior relevo teve a presença do trabalho levado a cabo pelos técnicos de psicologia forense em contexto judicial.

1.4 – Amostra

A população compreende todos os elementos que partilham características comuns, definidas pelos critérios estabelecidos para o estudo: processos de violência conjugal, com nacionalidade portuguesa. Optou-se por uma amostra do tipo não probabilístico por julgamento. É o tipo de amostra em que os elementos que compõem o subgrupo são escolhidos em razão da sua presença num local em determinado momento. Este tipo de amostragem é ideal quando o tamanho da população é pequeno e em estudos exploratórios (Fortin, 2003). A recolha de dados realizou-se na Comarca de Lisboa, Instância Local Criminal - 1ª Secção Central de Instrução Criminal. Foi solicitado apenas.

A amostra é constituída por trinta e cinco processos (n= 35), todos no âmbito da violência doméstica (art. 152º), no que tange ao cônjuge ou ex-cônjuge ou pessoas numa relação análoga à dos cônjuges.

Resultados

2.1. Apresentação dos resultados

Após a recolha de dados, procedeu-se à análise dos mesmos, com base no Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15.0 para utilizadores do Windows.

Os resultados foram obtidos através de um tratamento estatístico simples, dado o número da amostra (n=35), que não possibilita um estudo aprofundado, sendo apenas representativo.

A idade das vítimas situa-se entre os 24 anos e os 81 anos, encontrando-se as seguintes frequências nos intervalos de idades: [24-28] – 31,5%; [31-37] – 11,6%; [41-49] – 20,1%; [50-58] - 17,3%; [60-66] – 14,4% e [80-81] – 5,8% (Anexo III)

No tocante aos dados sócio-demográficos e culturais referentes às vítimas (Anexo IV):

- Género (Masculino: 11,4 %; Feminino: 88,6 %);
- Estado civil (Solteiro: 51,4%; Casado: 34,3; Divorciado: 14,3%);
- Habilitações literárias (Analfabeto: 2,9; 1º Ciclo: 11,4%; 2º Ciclo: 11,4%; 3º Ciclo: 17,1%; Secundário: 34,3%; Ensino Superior: 5,7%);
- Situação profissional (Desempregado: 28,6%; Empregado: 60%; Aposentado: 8,6%);
- Concelho (naturalidade) da vítima (Évora: 2,9%; Góis: 2,9%; Lisboa: 82,9%; Ourém: 2,9%; Ourique: 2,9%; Ponte de Lima: 2,9%; Setúbal: 2,9%);
- Relação com o arguido (Companheiro: 37,1%; Cônjuge: 37,1%; Ex-cônjuge: 11,4%; Ex-companheiro: 14,3%);
- Dependência económica das vítimas em relação ao arguido (Não:85,7%; Sim: 14,3%).

A idade dos arguidos localiza-se entre os 24 anos e os 82 anos, com as seguintes frequências nos intervalos de idades: [24-28] – 11,6%; [30-35] – 25,7%; [41-48] – 23%; [50-59] - 16,5%; [61-65] – 17,1%; [70-71] – 5,8%; [82]-2,9% (Anexo V).

Quanto aos dados sóciodemográficos e culturais referentes aos arguidos (Anexo VI):

- Género (Masculino: 91,4%; Feminino: 8,6%);

-Estado civil (Solteiro: 51,4%; Casado: 40%; Divorciado: 8,6%);
- Habilitações literárias (1º Ciclo: 25,7%; 2º Ciclo: 8,6%; 3º Ciclo: 8,6%; Secundário: 22,9%; Ensino universitário: 2,9%; Analfabeto: 2,9%);

-Profissão (Agente Comercial: 2,9%; Auxiliar:2,9%; Canalizador:2,9%; Carpinteiro: 2,9%; Distribuidor: 2,9%; Electricista: 2,9%; Empregado de Hotelaria: 2,9%; Empregado de mesa: 2,9%; Empresário: 2,9%; Estucador: 2,9%; Estudante: 2,9%; Ladrilhador: 2,9%; Motorista: 5,7%; Motorista de táxi: 5,7%; Motorista de veículos de pesados: 2,9%; Pintor de Construção Civil: 2,9%; Pintor de Construção Civil e de Arte: 2,9%; Segurança:2,9%; Técnico Informático: 2,9%; Vigilante: 2,9%);
-Situação profissional (Desempregado: 34,3%; Activo/empregado: 45,7%; Aposentado: 14,3%; Estudante: 2,9%);

- Concelho (naturalidade) (Almada: 2,9%; Amares: 2,9%; Góis: 2,9%; Lamego: 2,9%; Lisboa: 65,7%; Loures: 5,7%; Odivelas: 2,9%; Porto: 2,9%; Setúbal: 5,7%; Vila Saraiva: 2,9%; Viseu: 2,9%);

-Dependência económica dos arguidos em relação à vítima (Não: 97,1%; Sim: 2,9).

No que concerne à anamnese judicial dos arguidos: Dimensão clínica - Consumo de álcool (Não: 42,9%; Sim: 57,1%); Consumo de estupefacientes (Não: 82,9%; Sim: 17,1%) (AnexoVII).

Dimensão forense: Posse de arma (Não: 94,3%; Sim: 5,7%); Registo Criminal (Não: 71,4%; Sim: 28,6%); Quantas condenações (zero: 71,4%; uma: 14,3%; Duas: 5,7%; Três: 5,7%; Quatro: 2,9%); Outros processos relacionados com violência conjugal

(Não: 34,3%; Sim: 65,7%); Número de processos de violência conjugal (Zero: 34,3%; Um: 37,1%; Dois: 11,4%; Três: 8,6%; Quatro: 5,7%; Seis: 2,9%) (Anexo VIII).

Referente à informação dos processos de violência conjugal ao nível dos filhos e menores de idade é a seguinte: Filhos menores (Não: 42,9%; Sim: 57,1%); Número de filhos de ambos (Nenhum: 54,3%; Um: 28,6%; Dois: 11,4%; Três: 5,7%); Número de filhos das vítimas (Nenhum: 74,3%; Um: 20%; Dois: 5,7%); Número de filhos dos arguidos: (Nenhum: 82,9%; Um: 11,4%; Dois: 2,9%; Três: 2,9%); Ocorrência foi presenciada por menores (até 18 anos) (Não: 62,9%; Sim: 37,1%); Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo foi contactada (Não: 88,6%; Sim: 11,4%) (Anexo IX).

No que diz respeito aos dados dos processos sobre o historial dos episódios de violência: Tipos de violência (Física: 8,6%; Psicológica: 5,7%; Física e psicológica: 68,6%; Física, psicológica, social e financeira: 2,9%; Psicológica e sexual: 2,9%; Física, psicológica e social: 2,9%; Psicológica e social: 2,9%; Física, psicológica e sexual: 5,7%); Tipo de violência física (Não: 11,4%; Sim: 88,6%); Tipo de violência psicológica: (Não: 8,6%; Sim: 91,4%); Tipo de violência social (Não: 91,4%; Sim: 8,6%); Tipo de violência financeira (Não: 97,1%; Sim: 2,9%); Tipo de violência sexual (Não: 91,4%; Sim: 8,6%); Consequências físicas para as vítimas (Sem ferimentos: 42,9%; Ferimentos ligeiros: 48,6%; Ferimentos graves: 8,6%); Vítimas observadas no hospital (Não: 77,1%; Sim: 22,9%); Vítimas em internamento (Não: 91,4%; Sim: 8,6%); Os arguidos costumam exibir armas ou referi-las durante as ameaças ou agressões (Não: 80%; Sim: 20%); Ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar, praticadas pelo mesmo arguido (Não: 40%; Sim: 60%) (Anexo X)

No tocante à dimensão judicial: Pedido relatório social/avaliação Psicológica (Não: 62,9%; Sim: 37,1%) (Anexo XI).

Medida de coacção da Direção de Investigação e Acção Penal (Sem medida de coacção: 5,8%; Prisão preventiva; 2,9%; Termo de identidade e residência: 91,3%; Proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio: 37,7%; Proibição de contacto com a

ofendida por qualquer meio, com recurso a pulseira electrónica a fim de monitorizar o cumprimento da medida: 11,6%; Proibição de contactos com a ofendida por qualquer meio e proibição de permanência no local da residência e de trabalho da ofendida: 17,4%; Comunicação da aplicação de tal medida ao Tribunal de Família e Menores para efeitos de regulação das responsabilidades parentais: 2,9%) (Anexo XII).

Sentenças (Absolvido: 2,9%; Absolvido por violência doméstica - Condenado por crime à integridade física simples: 5,7%; Pena de prisão: 2,9%; Pena de prisão com pena acessória: 2,9%; Pena suspensa: 8,7%; Pena suspensa com pedido de indemnização: 23,2%; Pena suspensa com pena acessória ou/e de obrigação: 65,3%).

Magistrado do julgamento (Masculino: 20%; Feminino: 80%) (Anexo XIII).

Tempo que decorreu entre a queixa e a sentença (em meses) (Quatro: 2,9%; cinco: 2,9%; seis: 8,6%; sete: 2,9%; oito: 5,7%; nove: 2,9%; onze: 5,7%; doze: 11,4%; treze: 2,9%; catorze: 2,9%; dezassete: 8,6%; dezoito: 14,3%; dezanove: 2,9%; vinte e um: 5,7%; vinte e quatro: 8,6%; vinte e oito: 2,9%; trinta e seis: 8,6%) (Anexo XIV).

Índice de Severidade Penalizadora (%) (Nulo: 11,4%; [13]: 5,7%; [24-29]: 14,4%; [31-39]: 31,4%; [41-48]: 22,9%; [53-59]: 11,5%; [66]: 2,9%) (Anexo XV).

2.2. Discussão dos resultados

1. Apreciados os resultados obtidos pela aplicação do instrumento e estudo dos processos, cumpre proceder à análise dos mesmos, devendo salientar-se que, em presença da amostra disponível, apenas se pode considerar este trabalho como exploratório ou, no fundamental, meramente indicativo, na medida em que indicia tendências que, não podem ser consideradas determinantes. Parece nítido, contudo, que podemos dar como preliminarmente assente um padrão no tocante ao índice de severidade punitiva penalizadora no âmbito da violência conjugal em articulação com as diferentes variáveis compulsadas nos processos; porém, para que se possam alcançar resultados mais esclarecedores, será necessário replicar este estudo com uma amostra de acentuada dimensão, recolhida em mais tribunais do que foi possível concretizar neste trabalho. Na verdade, a amostra a que se recorreu (processos: n=35) é exígua, razão porque deverá ser alargada, cifrando-se em número não inferior a 100 processos; acresce que o nosso estudo incidiu sobre amostra recolhida em tribunal de meio urbano, a capital do país, podendo equacionar-se se os resultados seriam os mesmos na circunstância se ter realizado a investigação em meio urbano no interior, ou numa comarca de menor dimensão, ou, ainda, em meio rural; com efeito, não só se trata de tribunal sito em Lisboa, imerso, por conseguinte, numa realidade tipicamente cosmopolita, como a esmagadora maioria das vítimas é natural deste concelho (82,9%), ao passo que os arguidos são maioritariamente naturais do concelho de Lisboa (65,7%). Mas destas dificuldades e das expectativas em relação a estudos futuros, curaremos adiante (Conclusão).

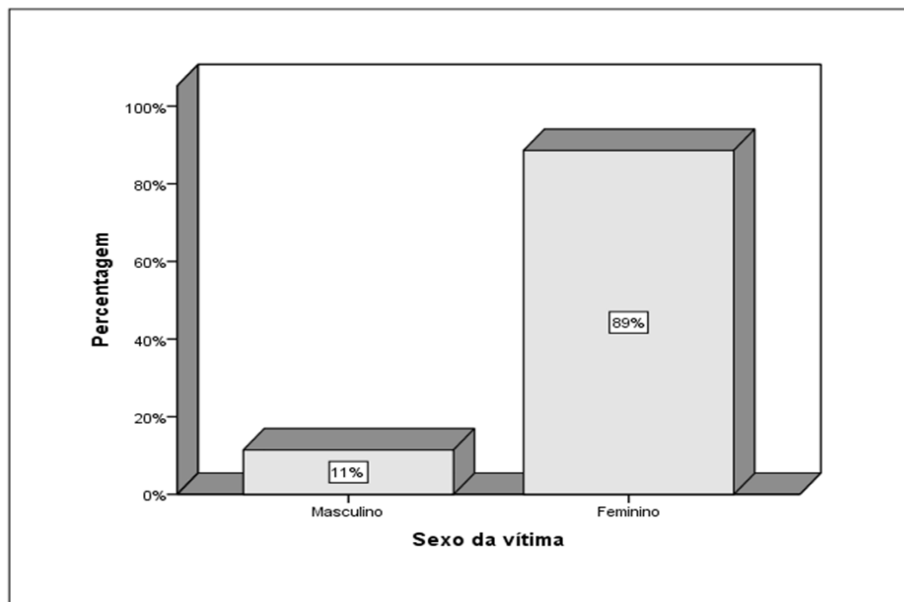
2. O Índice de Severidade Penalizadora e Psicologização (Criminalização Secundária - ISPP-CS), em articulação com a análise efectuada de acordo com os estudos e os pressupostos sóciojurídicos no que tange à violência conjugal resultou em várias dimensões, sendo a primeira a dimensão sóciodemográfica e cultural. Evidencia-se, neste domínio, o seguinte:

A) Referente às vítimas: a média de idades é 43,69, sendo a idade mínima de 24 anos e a máxima de 81 anos (Anexo XVI); no entanto há uma maior incidência no intervalo de idades [24-28] – 31,5%; esta discrepância entre a média de idades e o correspondente intervalo resulta do desvio padrão (DP=16,316), havendo uma grande disparidade de idades.

Permite extrair as seguintes ilações: a violência conjugal é transversal a todas as idades, tendo uma maior representatividade na chamada “vida ativa”, especialmente, na faixa etária dos 20/30 anos. Tal evidência vai ao encontro dos dados divulgados pela APAV¹⁷.

Acerca do gênero, a predominância absoluta das mulheres (88,6 %) acompanha a tendência que se verifica nos tribunais, embora os homens também surjam como vítimas (11,4 %):

Gráfico 1: Gênero da vítima

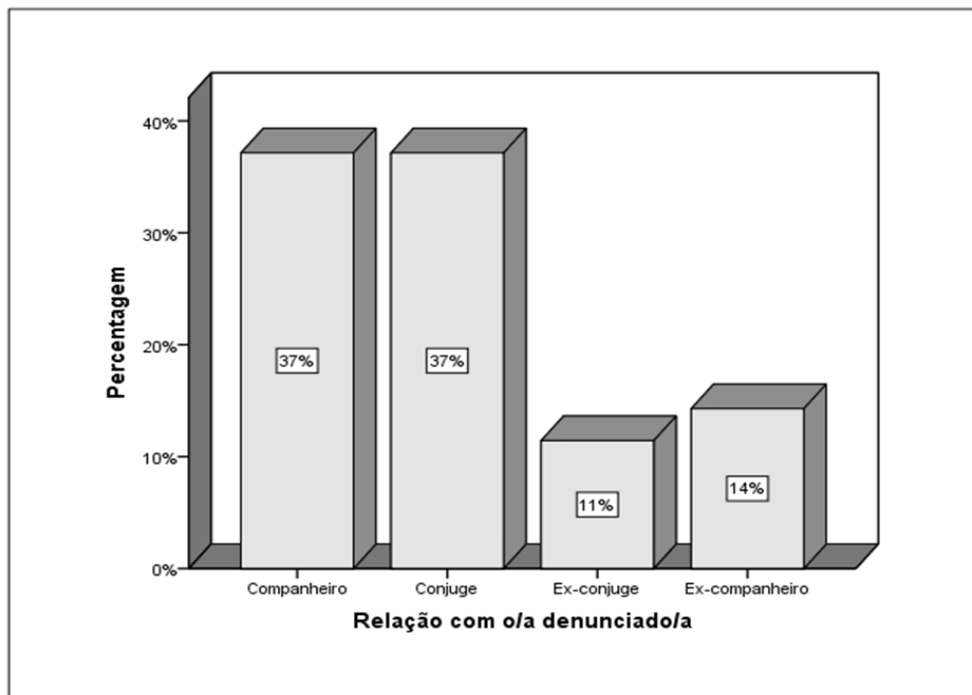


⁷ Estatística da APAV e Relatório anual 2014

Novamente, estes dados são consistentes com os obtidos pela APAV⁷; as mulheres continuam a ser as principais vítimas neste tipo de crimes. A violência contra as mulheres constitui, assim, um padrão de comportamento que ocorre sob a forma física, emocional, psicológica, sexual e económica, sendo desenvolvida pelos agressores com vista a assegurar a intimidação, o poder e o controlo (Hampton & Coner-Edwards, 1993).

O estado civil tem predomínio dos solteiros, em união de facto (51,4%), sendo que a principal relação com o arguido é de companheiro (37,5%):

Gráfico 2: Relação com o/a denunciado/a



Estes dados estão relacionados com o grupo etário com maior representatividade neste estudo, mas também com o facto de se começar a registar tendência para casamentos mais tardios. A violência doméstica é

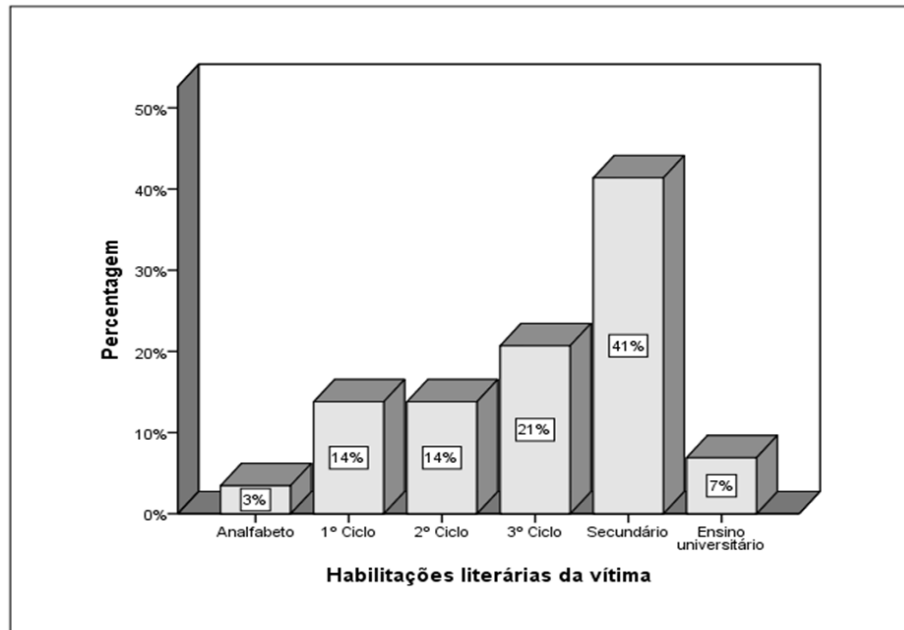
praticada, na sua maioria, pelo parceiro, conforme algumas autores; esta constatação levou até à construção da expressão “síndrome da mulher batida” (SMB), que foi aplicado para identificar e descrever as experiências severas de violência praticada sobre as mulheres. É definido como “conjunto de sintomas psicológicos, normalmente transitórios, que são frequentemente observados, num padrão reconhecível e específico, em mulheres que afirmam terem sido física, sexual e/ou psicologicamente maltratadas de uma forma grave pelos seus parceiros masculinos (e, por vezes, femininos) ”⁸.

A naturalidade incide no meio urbano, dado que só aparentemente é estranho. Efetivamente , há que registar que estes resultados decorrem de se ter recolhido a amostra em Lisboa e porque esta cidade integra, na sua população, em número considerável, naturais de outras regiões do país.

Acerca das habilitações literárias e da situação profissional das vítimas predomina o ensino secundário (34,3%), embora o 3º ciclo também apareça com relevo (17,1%); apenas 5,7% tem o nível de ensino superior. Sendo este último o predominante de acordo com a teoria: logo neste estudo os resultados obtidos não corroboram na totalidade:

⁸ Dias, I. (2010). Violência doméstica e justiça. In Sociologia: Revista do Departamento de Sociologia da FLUP, Vol. XX, p. 254

Gráfico 3: Habilitações literárias da vítima



As agredidas encontram-se maioritariamente empregadas; (60%), no entanto, é importante ressaltar os 28,6% de pessoas desempregadas, bem como as vítimas não serem dependentes economicamente dos agressores (85,7%); estes dados vão ao encontro do relatório da APAV¹:

Gráfico 4: Situação profissional da vítima

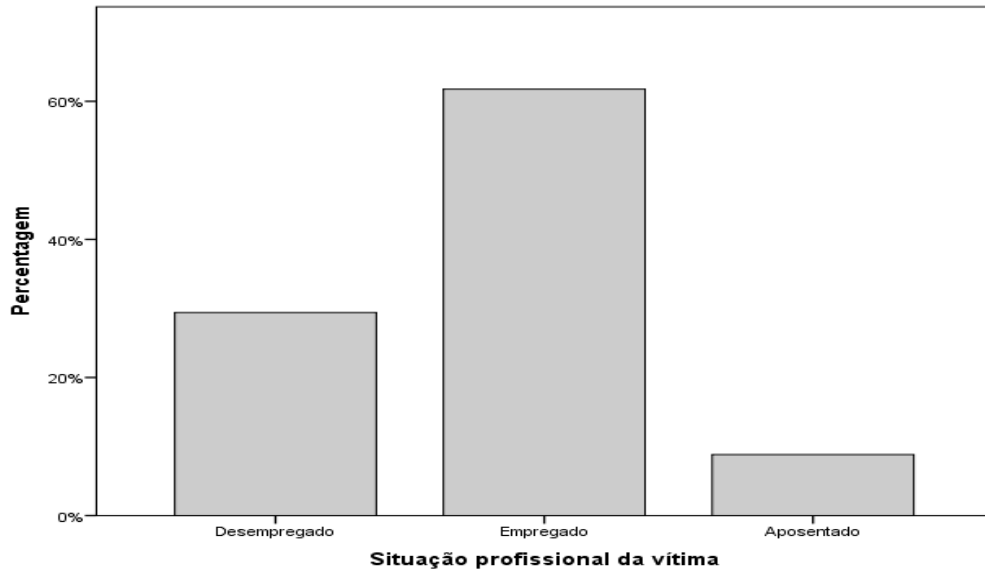
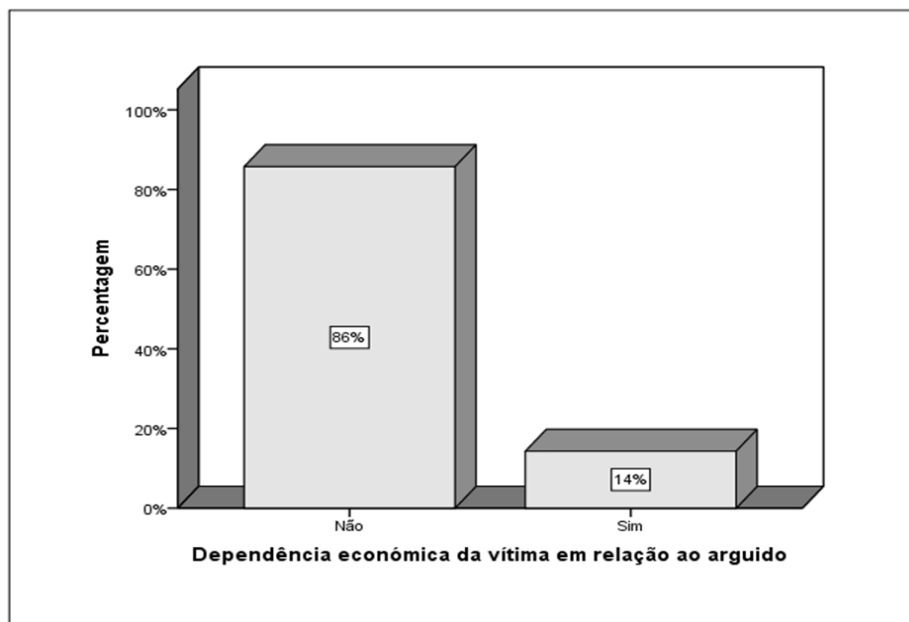


Gráfico 5: Dependência económica da vítima em relação ao arguido



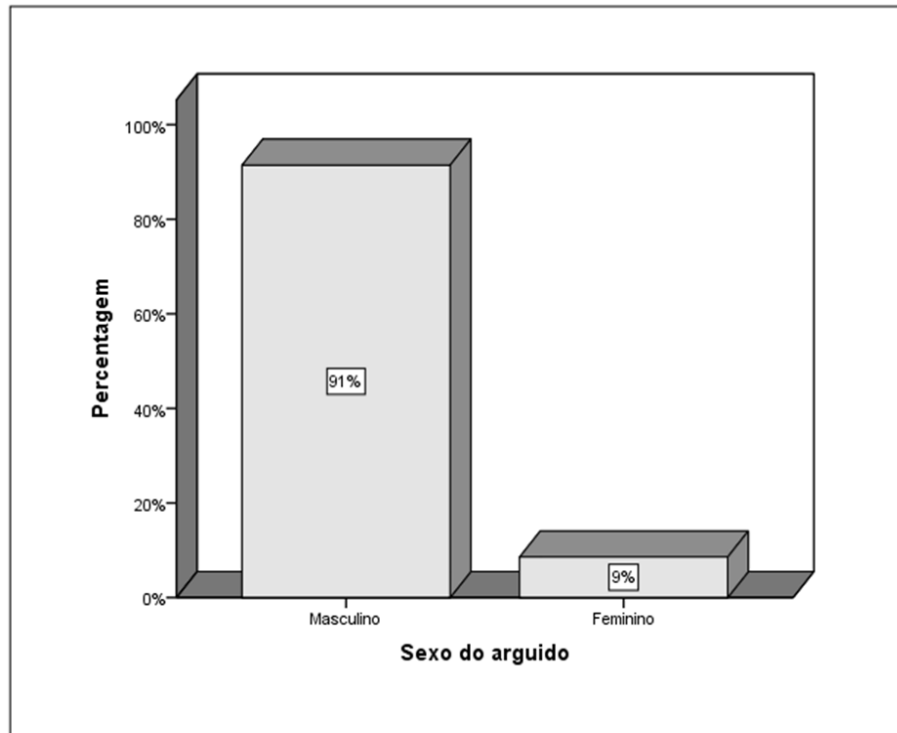
Durante muito tempo atribuiu-se como causa de manutenção da relação violenta a vítima estar desempregada e dependente; hoje, tal situação já está muito mais diluída com a inserção da mulher no mundo do trabalho. Oliveira et al. (2009) referem que, segundo vários pesquisadores, é a interação de diversos fatores pessoais, situacionais e socioculturais a causa da violência.

Segundo Vicente (1998), as causas precipitantes de violência no seio da família assentam na correlação de forças de um conjunto de razões de natureza emocional (relacionadas com a intensidade das relações familiares que, muitas vezes, combinam o ódio com o amor) com um conjunto de fatores de natureza cultural. Vários estudos têm mostrado que existe uma aceitação da violência. São considerados fatores contribuintes para a violência: o isolamento (geográfico, físico, afetivo e social), a fragmentação (como mal que consiste em considerar apenas uma parte menor do problema e que tem a ver com o rótulo que se confere à pessoa em concreto), o poder e o domínio ou a influência moral (Machado e Gonçalves, 2003).

- B) Referente aos arguidos: a média de idades é 46,23, sendo a idade mínima de 24 anos e a máxima de 82 anos (Anexo XVI); contudo há uma maior incidência no intervalo de idades [30-35] – 25,7%; esta discrepância entre a média de idades e o intervalo de idades resulta do desvio padrão (DP=15,549), havendo uma grande disparidade de idades. Estes resultados vão ao encontro dos dados apresentados pela APAV (2014)⁷.

Acerca do gênero, a predominância absoluta dos homens (91,4%) acompanha a tendência que se verifica nas estatísticas oficiais e se constata na literatura científica, embora as mulheres também figurem como arguidas (8,6%):

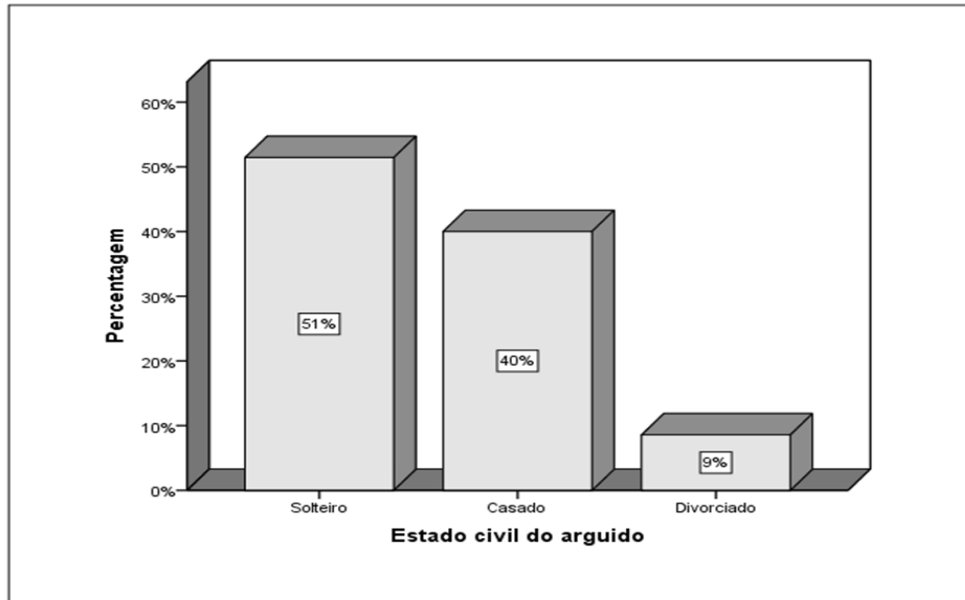
Gráfico 6: Gênero do arguido



Histórica e legalmente aos homens foi conferido o direito de controlar e exercer poder sobre as mulheres, Nas sociedades ocidentais, o homem tinha o poder económico e moral na família e o direito de castigar fisicamente mulher e filhos; apesar de atualmente se reconhecer o direito à igualdade entre sexos, é ainda, evidente o poder do homem na sociedade – e a aceitação, e até mesmo assimilação – da violência, desculpabilizada por ser reputada corretiva ou até reativa face às atitudes femininas: no fundo, a ideia de que o homem agrediu para reagir à afronta feminina ou por a mulher o levar ao limite.

No que toca ao estado civil destaca-se o Solteiro (51,4%), o que evidencia estar relacionado com a média de idades, a que já aludi, mas também com o facto de se começar a registar tendência para casamentos mais tardios e porque muitas pessoas optam pela união de facto. O estado Casado também apresenta uma percentagem expressiva (40%):

Gráfico 7: Estado civil do arguido

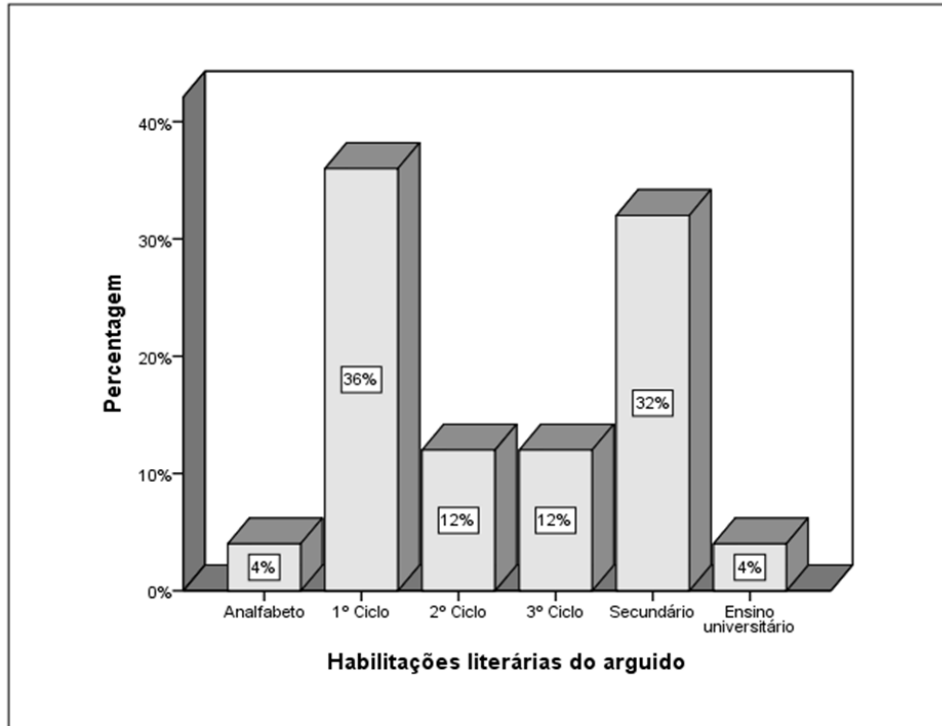


Estes resultados são consistentes com os apresentados pela APAV, relativamente ao autor do crime em 2014. Um dos fatores que leva o homem a agredir a mulher encontra-se nas raízes históricas do casamento, que desenvolveu a ideologia que a mulher e o seu corpo são propriedade do marido. A evolução da família, pode também, de algum modo, relacionar-se com a violência conjugal contra a mulher, o que se tornou um aspeto comum no casamento, desde os tempos medievais (Dias, 2010).

A diferença de percentagens de Casados e Divorciados deve-se ao facto de alguns dos sujeitos que integram ambos os grupos serem casados com terceiros, o mesmo acontecendo com os divorciados.

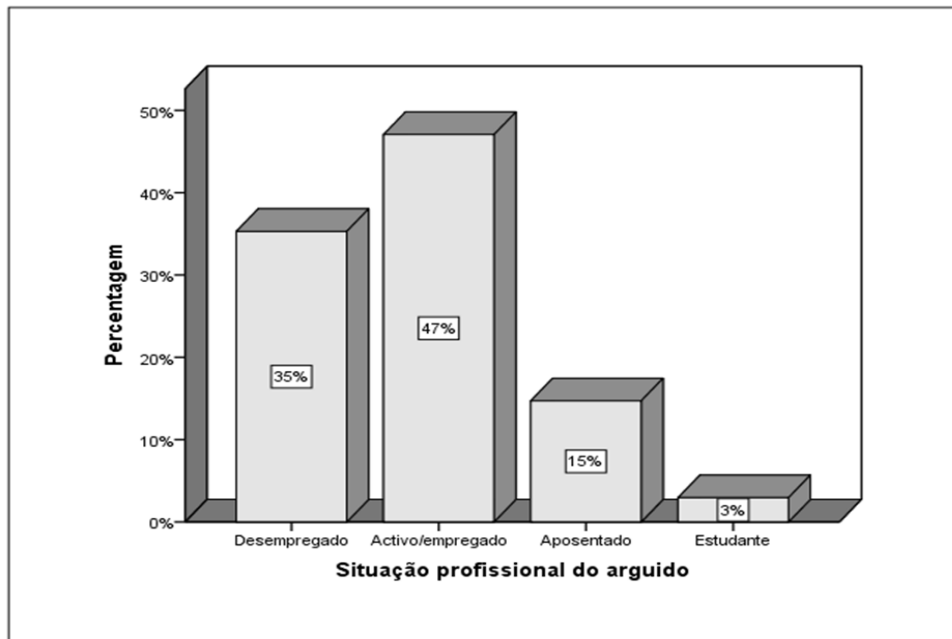
As habilitações literárias são baixas, uma vez que a maioria, possui apenas o 1º ciclo (25,7%), o que pode estar diretamente ligado à caracterização da profissão do arguido, com prevalência do trabalho pouco diferenciado, com baixas qualificações: motorista de táxi, motorista de veículos de pesados, pintor de construção civil, entre outras:

Gráfico 8: Habilitações literárias do arguido



A maioria tem uma situação profissional estável (45,7%), embora a percentagem dos desempregados seja significativa (34,3%):

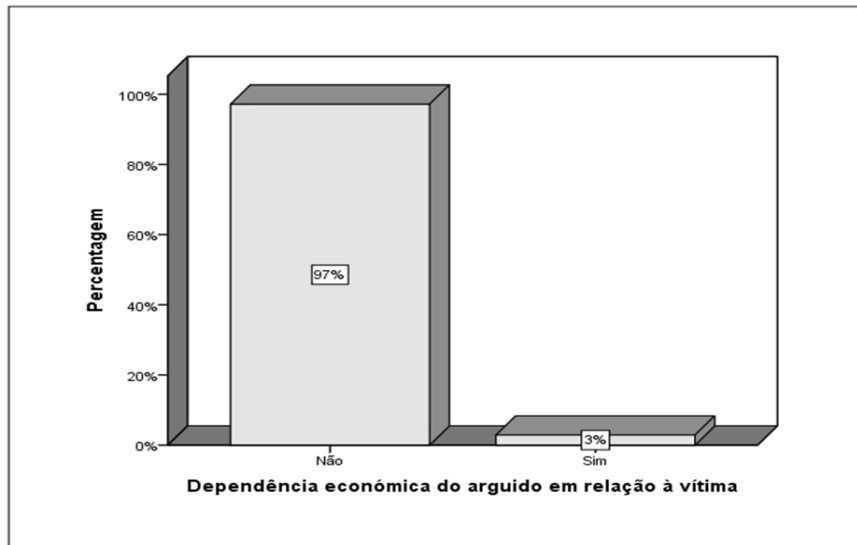
Gráfico 9: Situação profissional do arguido



Em geral, o homem violento apresenta algumas características comuns, designadamente: tem dificuldades no emprego (sendo que a insatisfação, a precariedade e o desemprego não só afectam a auto-estima do indivíduo como também a relação conjugal) (Dias, 2004). De facto, a população que é frequentemente privilegiada dos tribunais revela, historicamente, níveis elevados de profissões básicas e de não ocupados (Herpin, 1978, Wacquant, 2000), o que se verifica também neste estudo, para o que é contribuinte a tipologia de crimes acusados.

A maioria dos arguidos dos processos que foram analisados não se encontrava na dependência económica da vítima (97,1%), pois, como se constatou, dispõe de atividades profissionais regulares:

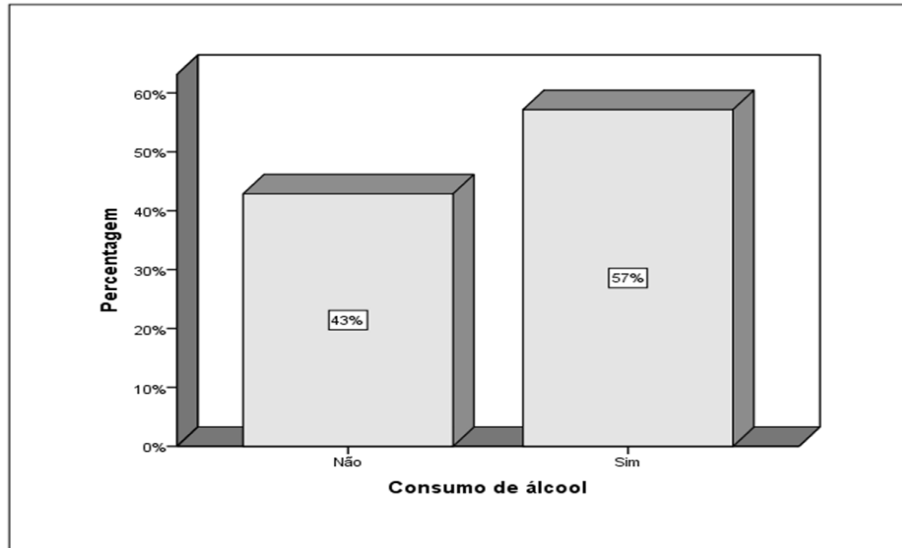
Gráfico 10: Dependência económica do arguido em relação à vítima



Tal como nas vítimas, também nos arguidos é privilegiada a naturalidade de meio urbano - Lisboa (65,7%), referido anteriormente, o que pode ocorrer devido a amostra ter sido recolhida na mesma cidade. Esta explicação deve ser complementada com outra: a malha urbana dispõe de maiores recursos de apoio à vítima e de mais esclarecimentos sobre a violência doméstica, sendo legítimo admitir que esses fatores determinam a elevação das cifras de denúncia.

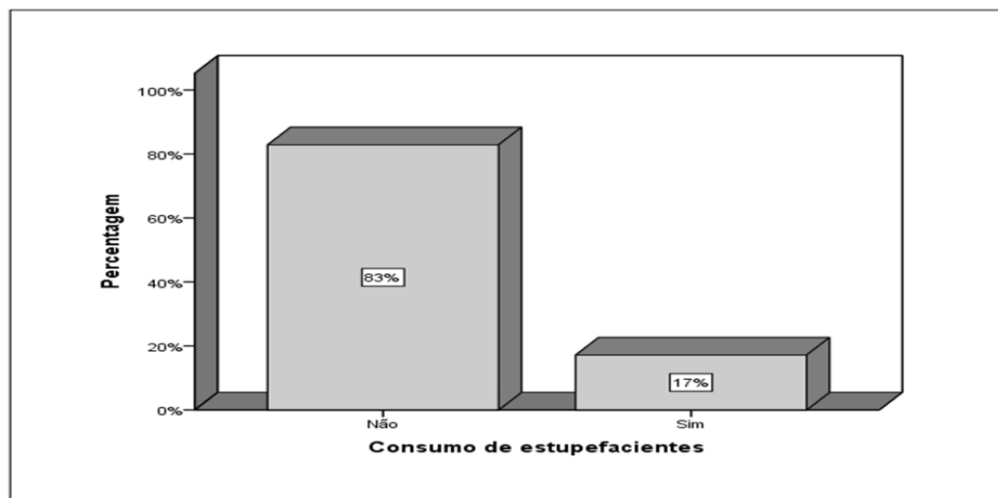
No concernente à anamnese judicial dos arguidos, na dimensão clínica - consumo de álcool: há efetivamente consumo, tendo uma representatividade de 57,1% da amostra:

Gráfico 11: Consumo de álcool do arguido



Estes resultados vão ao encontro de vários estudos que atestam que existe correlação entre os agressores conjugais e o consumo de álcool; segundo Cunha (2009), quanto ao motivo da agressão é mais realçado o consumo de álcool e/ou drogas não legais, o que vai de encontro a um dos motivos que as abordagens centradas no indivíduo defendem. No presente estudo, o consumo de estupefacientes representou 17,1%:

Gráfico 12: Consumo de estupefacientes do arguido

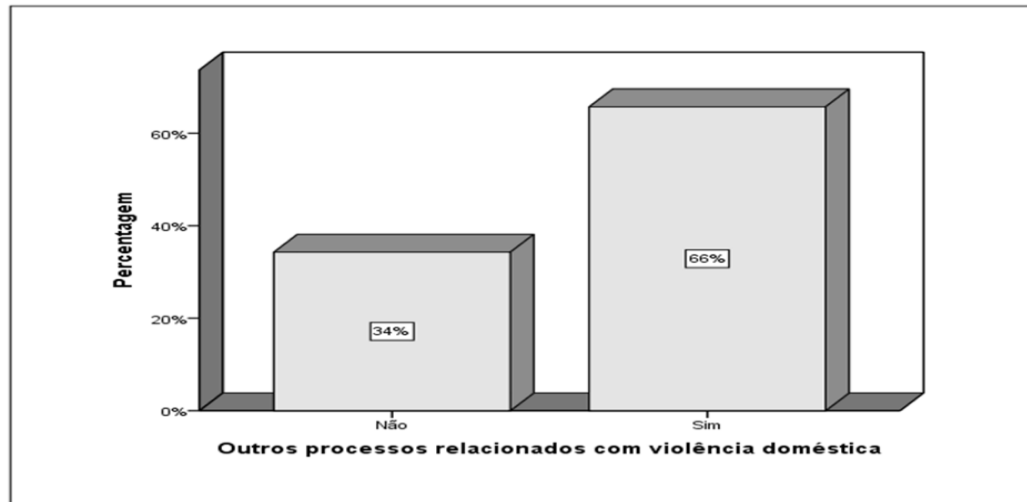


O local onde foi praticada a violência recai na residência particular do casal e o motivo da agressão esteve relacionado com o estado alterado do agressor devido ao consumo de álcool e/ou drogas. Costa e Duarte (2000) referem que as pessoas alcoólicas têm uma maior predisposição para praticar violência conjugal, verificando-se, em 56,8% da presente amostra. A APAV (2010) constatou que a probabilidade de ocorrência da violência é maior quando o agressor é dependente de substâncias (álcool, drogas); contrariamente, neste estudo apenas uma minoria das vítimas afirma que o agressor é consumidor de estupefacientes (Pinto, Varela & Vinhal, 2012).

- C) Na dimensão forense observou-se que apenas 5,7% tinha posse de arma. Alguns estudos, como o do Oliveira e Carvalho (2005), demonstram que umas das formas de exercício da violência doméstica, no âmbito da intimidação, é a exibição de armas e a inerente ameaça de uso.

A maioria não tem incidências no registo criminal (71,4%), embora tenha outros processos por violência conjugal (65,7%); o número de processos de violência conjugal é de um processo (37,1%). Verifica-se com estes dados que existe uma grande reincidência neste tipo de crime:

Gráfico 13: Outros processos relacionados com violência doméstica



A literatura refere que existem determinados fatores que estão associados ao aumento da probabilidade da reincidência da violência (Gendreau, Little, & Goggin, 1996; Palmer, 2001), tais como a história criminal (e.g., tipo e severidade da agressão, condenações anteriores), variáveis demográficas, antecedentes familiares, fatores sociais, fatores situacionais e variáveis psicológicas. É importante que os fatores de risco que predizem a reincidência sejam conhecidos e que o seu conhecimento permita o desenvolvimento de medidas de avaliação e programas de tratamento, tanto ao nível comunitário como ao nível prisional⁹.

- D) Relativamente à informação dos processos ao nível dos filhos e menores de idade, chegou-se à conclusão que a maioria tem filhos (57,1%), sendo que 37,1% presenciou os episódios de violência. Tal constatação requer preocupação e uma reflexão no âmbito desta temática, embora o presente trabalho não o tenha como

⁹ Almeida, I. & Soeiro, C. (2010). Avaliação de risco de violência conjugal: Versão para polícias (SARA: PV). In *Análise Psicológica*, v.28 n.1. Disponível em: <<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/aps/v28n1/v28n1a13.pdf>>.

objetivo, uma vez que a literatura científica tem demonstrado que as consequências para esta população (menores) tendem a ser graves. As teorias da agressão como comportamento socialmente aprendido consideram que a agressividade é um modo de comportamento adquirido; assim, a valorização ou punição levam o indivíduo a agir de forma positiva ou negativa. Estas teorias referem a importância de um modelo social agressivo, ao qual o indivíduo se expõe e que tem um papel importante sobre o seu próprio comportamento ofensivo. Esta teoria investigou a influência de modelos agressivos no desenvolvimento da agressão na criança, por exemplo, crianças expostas a um modelo de agressividade Adotavam comportamentos agressivos nas suas brincadeiras (Rodrigues,2007). Esta conclusão permite questionar a qual a razão que leva as vítimas a não protegerem os filhos e a denunciarem os agressores; Heise et al. (1999) acreditam tratar-se de um modo de auto-proteção e proteção dos filhos contra reações do agressor.

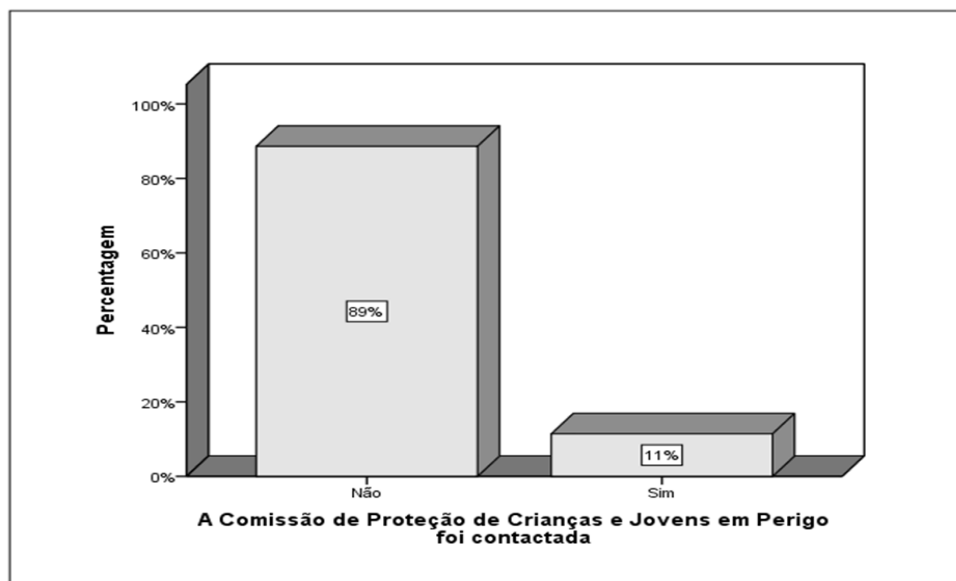
Outras das implicações que esta conclusão nos permite é que o menor, ao vivenciar a violência, de forma direta ou indireta, é vítima de maus-tratos, encontrando-se numa situação de perigo, consubstanciando-se no crime de negligência parental (art. 138º do Código Penal). Entende-se por negligência parental, segundo Faura *et. al.* (2009), como sendo uma omissão de ação necessária para orientar adequadamente o desenvolvimento e o bem estar físico e psicológico de um menor. Considera que a negligência intrafamiliar está intimamente associada ao abandono das obrigações parentais pelos cuidadores da criança.

O artigo 1878º do Código Civil, ao definir o conteúdo das responsabilidades parentais (anteriormente, poder paternal), refere que aos pais compete, entre outras obrigações, cuidar da segurança e da saúde dos filhos. Assim devem os tribunais atuar quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação do menor se encontram em perigo (artigo 1878º do Código Civil), bem como todos os dispositivos que têm conhecimento destas situações deviam acionar os meios

com competência para salvaguardar o menor, ao abrigo da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº147/99, de 1 de Setembro).

No entanto, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo foi contactada em apenas 11,4% dos casos, contra 88,6% em que não houve sinalização, o que é manifestamente insuficiente e indicia uma omissão de deveres institucionais por parte dos dispositivos formais de controlo social:

Gráfico 14: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo foi contactada



Os tribunais têm sido omissos nestas questões, embora a lei sobre a violência doméstica contemple esta problemática, a revisão penal de 2007 alargou as possibilidades de aplicação de penas acessórias no caso de crime de violência doméstica, e prevê a possibilidade de aplicação de uma pena acessória: a inibição do exercício do poder paternal por um período de um a dez anos. Contudo, nos 35 processos apenas em um processo, na fase instrutória, se contemplou na medida de coação esta injunção havendo a indicação para comunicação da aplicação da medida de coação ao Tribunal de Família e Menores para efeitos de regulação das responsabilidades parentais.

Assiste-se a uma “acomodação” por parte dos vários dispositivos formais no que toca às questões de violência dentro do seio familiar, levando à persistência do caráter normativo dos papéis sociais, o que conduz a uma maior tolerância de certo tipo de crimes (e.g., maus tratos), quando as suas vítimas não desempenham os papéis conjugais e parentais, tal como, são socialmente construídos e representados (Blackman,1989). A sorte das crianças no domínio legal ainda é mais funesta do que a das mulheres. O infanticídio, a mutilação, o abandono, a exploração financeira, o abuso físico, verbal, emocional, psicológico e sexual são práticas legais e socialmente reconhecidas desde Roma Antiga até às sociedades pré-industriais. Nos tempos romanos, o princípio do pátrio poder (*patria potestae*) legitimava todo o tipo de abusos infligidos pelos pais às crianças, que as podiam vender, sacrificar ou até matar (Dias, 2004).

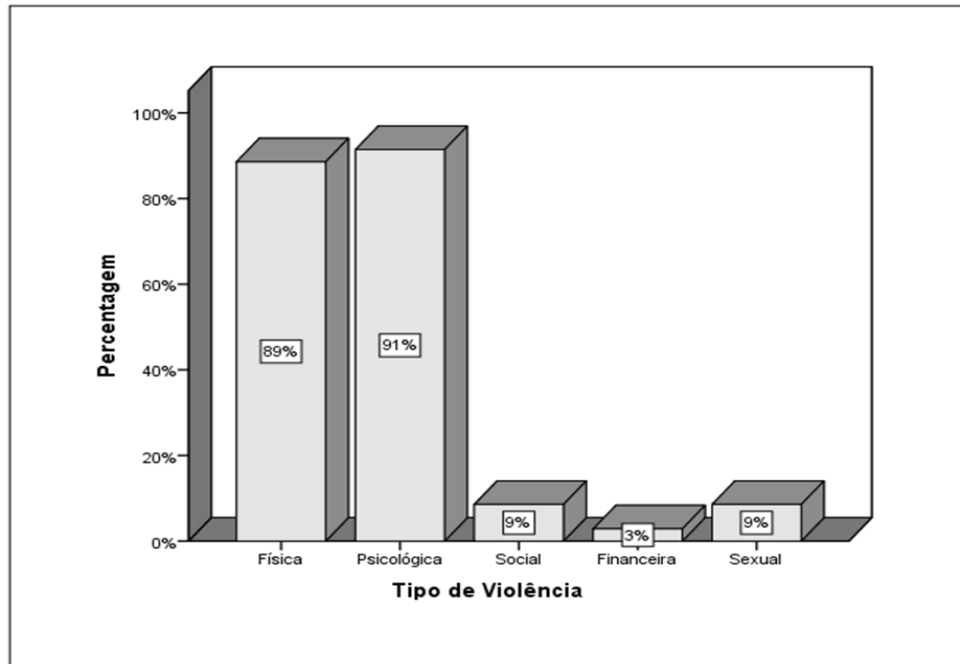
A existência de violência na família de origem (emitida pelos pais através de maus-tratos ou de uma disciplina severa; assim como terem assistido aos maus-tratos conjugais) provoca consequências diretas ou indiretas no indivíduo, podendo este vir a ser violento na conjugalidade (Fernandes, 2002). Ou a assumir comportamentos desviantes, estando documentada a ligação entre relações conjugais conflituosas e comportamentos delinquentes dos menores (Le Blanc, 2008; Herrero, 2001). Daí a relevância em se identificar se os atos violentos foram praticados na presença de menores, verificando-se que em cerca

de 59,5% dos casos os filhos assistiram à violência conjugal exercida entre os seus progenitores¹⁰. A violência interparental compreende atos de violência, mútua e bidirecional, praticados entre o casal, em regime marital ou em união de facto, que abrangem a relação pais-filhos, ainda que estes possam não ser os seus progenitores (Costa & Sani, 2007), torna-se suscetível de estar na génese de condutas desadequadas por parte dos menores (Nogueira, Fernandes & Nunes, 2014).

- E) A caracterização da tipologia da violência: em 68,6% dos casos assinalados a tipologia ocorrida foi de tipo física e Psicológica - a violência física encontrou-se em 88,6% dos processos e a violência psicológica em 91,4%. A violência sexual apesar de ser menos expressiva nos processos em análise, verificou-se em 8,6% dos casos. Estes dados são consentâneos com os da APAV¹:

Gráfico 15: Tipo de violência

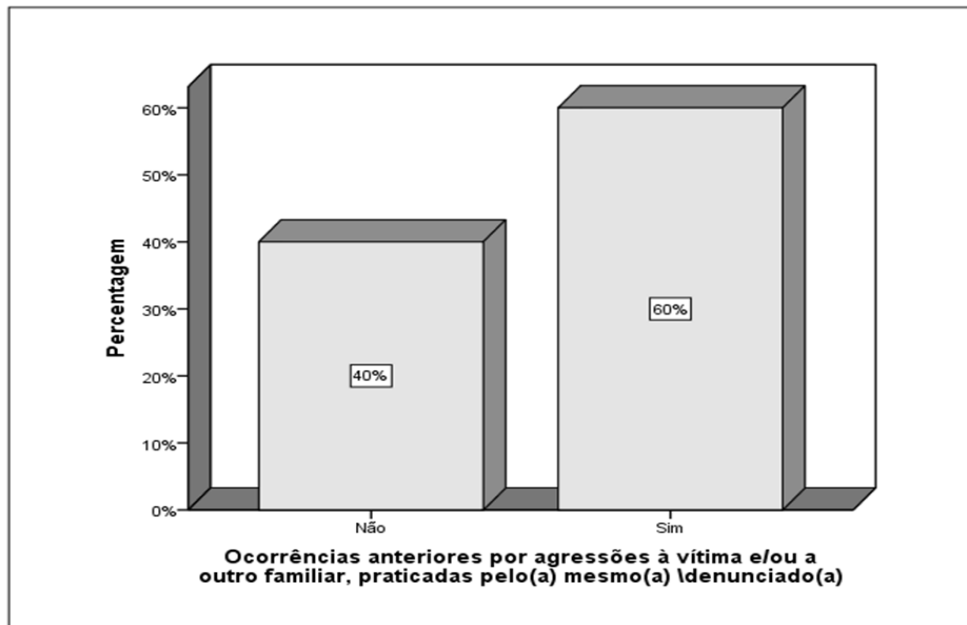
¹⁰ Pinto, M., Varela, A. e Vinhal, A. (2012). A personalidade das vítimas de violência conjugal. In Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 8, pp. 25-29



Os danos causados por este tipo de violência podem durar uma vida inteira e abranger várias gerações, com efeitos adversos na saúde, educação e emprego (Who, 2011), pois a violência é sempre um questão criminal e de saúde pública, especialmente a violência intrafamiliar. A violência conjugal encontra-se fortemente associada ao suicídio, desordens ao nível do sono e da alimentação, baixa autoestima, desordem de personalidade, disfunções sociais e tendência para o abuso de drogas (Zlotnick, Johnson, & Konh, 2006); e as disfunções sexuais são objeto recorrente de narrativas das vítimas. Interiorizar que se está a ser maltratada injustamente, reconhecer o estatuto criminal deste tipo de conduta e aceitar que tal comportamento é errado ou ilegítimo constituem condições fundamentais para que a mulher decida pôr fim ao abuso (Matos & Machado, 1999, 2002).

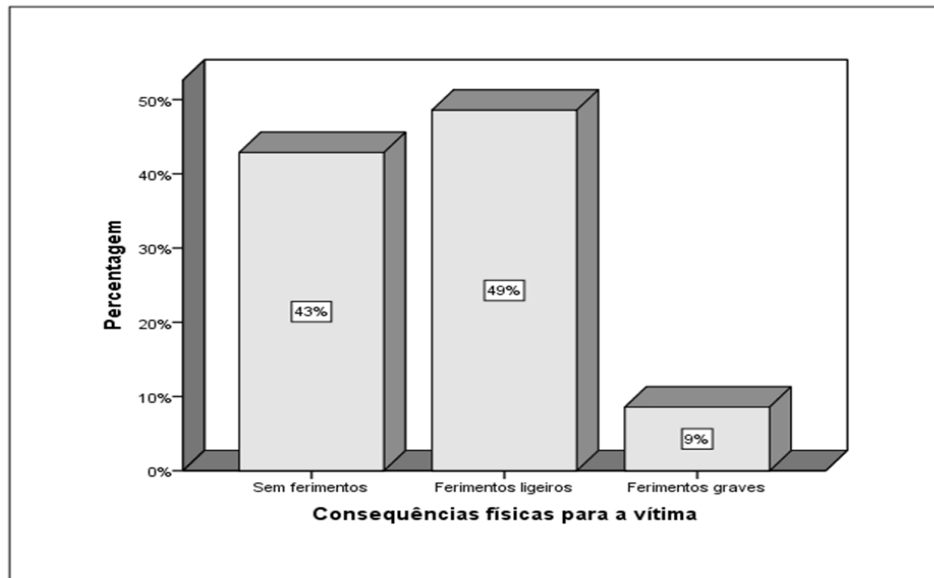
No presente estudo verificou-se tal desiderato, em casos em que já tinha havido ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar, praticadas pelo mesmo arguido (60%):

Gráfico 16: Ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar praticadas pelo(a) mesmo(a) denunciado(a)



As consequências físicas para as vítimas resultaram em ferimentos ligeiros (48,6%) e em ferimentos graves (8,6%), sendo que estes últimos levaram ao internamento (8,6%). Em 20% dos processos analisados os arguidos exibiram armas ou referiram nas durante as ameaças ou agressões:

Gráfico 17: Consequências físicas para a vítima



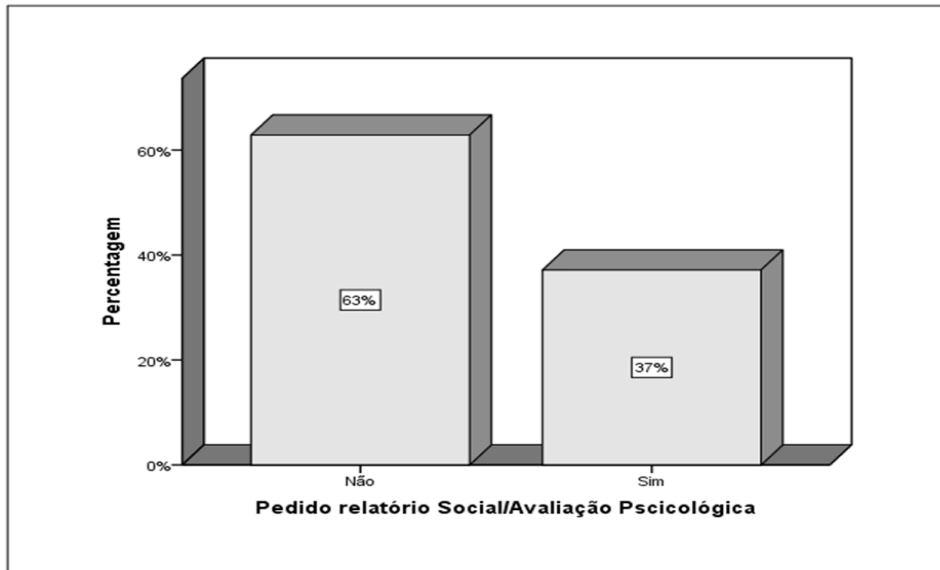
Como tal, é necessário (re)pensar o trabalho e os programas direcionados para as vítimas, que, na maioria dos casos não conseguem abandonar as relações violentas, mesmo que isso possa significar o risco da própria vida, ou dos filhos, enquadrando-se no que se pode designar por um “comportamento aditivo”, encontra-se em vários casos de dependência afetiva, que se expressa em cada indivíduo de forma particular, mas que exhibe uma impressionante semelhança entre sujeitos dependentes, além das suas circunstâncias específicas, apresentando características comuns, entre outras, persistência, rigidez, inflexibilidade, estereotipia e repetição do comportamento particular; um sistema de defesas psicológicas que, como se tratasse de uma fortaleza, protege o indivíduo de reconhecer a natureza prejudicial de seu vício e, por isso, muitas vezes, leva à ocultação da continuação do processo de dependência; dificuldades nas relações interpessoais como consequência da adição; baixa auto-estima e depressão. O comportamento da vítima de violência conjugal em muito se assemelha ao Transtorno Não Relacionados a Substância (Critério A6) (DSM V, 2014). A vítima vive neste jogo tensional de perdas, a todos os níveis

acreditando que é possível recuperar de todas elas. Claro que outros motivos para as vítimas continuarem em relações violentas, resultam do “ciclo de violência” a que as mulheres estão sujeitas, bem como os seus traços psicológicos (e.g., fraca auto-estima, sentimento de culpa pelo fracasso da relação conjugal, tendência para se responsabilizarem pela violência que as vitima, etc.), o que as conduz a verem a violência como inevitável e para sempre. O medo que elas sentem, inclusive pelos filhos e familiares próximos, a ausência de recursos financeiros são, de igual modo, fatores que se inscrevem na “síndrome da mulher batida” (SMB) e que conduzem à explicação do sentimento de incapacidade da mulher pôr termo a uma relação violenta (Dias, 2010).

A violência conjugal na perspectiva da vítima, bem como para o agressor, necessita de uma intervenção juspsicológica, onde o Direito e a Psicologia se tornam complementares para atingirem os objetivos a que se propõem, um Direito que signifique justiça e uma Psicologia que para além de explicar o comportamento, consiga também produzir as alterações endógenas com sucesso e eficácia, falamos aqui de uma intervenção psicoinclusiva. Se é certa que, como refere Debuyst (1986) todo o ato criminal tem um significado para o seu ator, também a vitimação conjugal recorrente corresponde a um significado para a vítima: aí reside a génese – multivariada – de se permanecer numa relação violenta, sem embargo da consciência dos riscos que se correm.

- F) No que concerne à dimensão judicial/severidade punitiva chegou-se à conclusão que, na maioria dos casos, não é solicitada qualquer avaliação ao agressor: apenas em 37,1% dos processos foi pedido relatório social/avaliação psicológica:

Gráfico 18: Pedido relatório social/Avaliação Psicológica

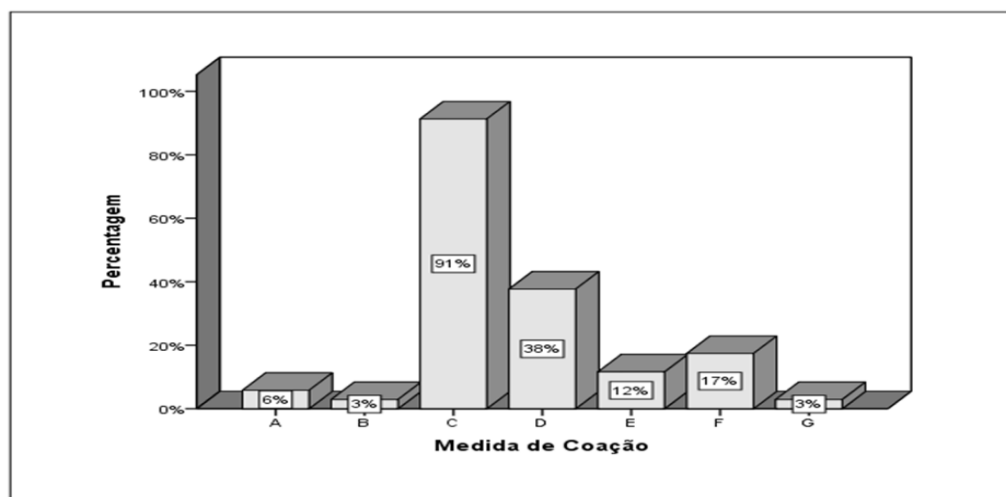


E ao realizar o T-Test entre as variáveis de relatório social e a severidade punitiva verificou-se um maior índice de severidade punitiva (numa escala de 0-100%, atestou-se 40,69%) (Anexo XVII). Embora este dado não seja significativo do ponto de vista estatístico ($t = 0,938$, $dl=33$, $Sig = ,106$) (Anexo XVII), demonstra uma tendência de que quando há uma avaliação há um aumento de penas acessórias e de obrigação adequadas ao sujeito. No entanto, há um dado que é preocupante, tendo em conta a natureza das penas aplicadas em tribunal. Dos 35 processos analisados, 31 processos resultaram em pena suspensa. Ora diz a lei que para suspender a pena é necessário, entre outros fatores, atender à personalidade do agente (artigo 50º, do Código Penal); esta permissa levanta algumas questões, nomeadamente quais os critérios em que os juizes se baseiam para avaliarem a personalidade do agressor, uma vez que são necessários psicólogos para realizarem essa tarefa e os magistrados não possuem qualquer formação nessa área. Seria o mesmo que pedir a um psicólogo para

interpretar juridicamente uma lei. O contributo da Psicologia Forense é fundamental, tendo em conta que o indivíduo representa aqui um papel indispensável, sendo o ato r principal de todo este processo e, como tal, deve valorar-se o seu comportamento em plúrimas vertentes. À Psicologia Forense cabem a análise, a interpretação e a dissecação dos comportamentos e dos atores que os corporizam, já que de uma Ciência do Comportamento se trata (Poiares, 2001). Versando esta investigação sobre a severidade penalizadora no âmbito da violência conjugal, há que distinguir a severidade legal, prevista na lei, ou seja, na criminalização primária, da severidade real, isto é, as medidas penais efetivamente aplicadas na fase da criminalização secundária (Cusson, 1983).

As medidas de coação com maior expressividade foram o termo de identidade e residência (TIR) (91,3%) e a proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio (37,7%):

Gráfico 19: Medida de coação



Legenda. A: Sem medida de coação; B: Prisão preventiva; C: Termo de identidade e residência; D: Proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio; E: Proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio, com recurso a pulseira eletrónica a fim de monitorizar o cumprimento da medida; F: Proibição de contactos com a ofendida por qualquer meio e proibição de permanência no local da residência e de trabalho da ofendida; G: Comunicação da aplicação de tal medida ao Tribunal de Família e Menores para efeitos de regulação das responsabilidades parentais.

Esta medida só por si não chega, uma vez que estamos a falar de um crime continuado e com características muito próprias; falamos de sujeitos violentos, impulsivos e sem qualquer respeito pela vítima, além estas formas coativas não permitem securizar a vítima, como é atestado pela continuação da atividade criminosa, sem prejuízo de terem sido decretadas. O termo de identidade e residência não confere qualquer proteção às vítimas e frustra-as naquelas que são as suas expetativas mais imediatas relativamente aos tribunais. Estes dados, sugerem, assim, que mesmo quando os desenhos legislativos são genuinamente concebidos ao encontro de agendas emancipatórias, a fraca capacidade das suas instituições para os impor gora a conceção original (Rosenberg, 1991).

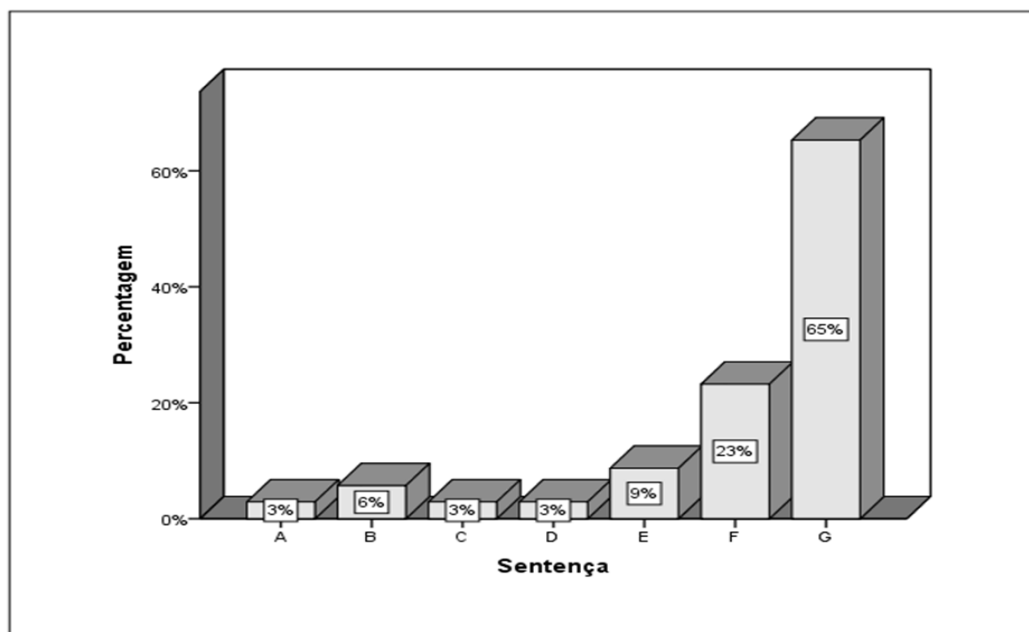
- G) No tocante às penas aplicadas no crime de violência conjugal tiram-se as seguintes conclusões: o magistrado do julgamento é, em grande maioria, do género feminino (80%) e quando se relaciona o magistrado do processo com índice de severidade punitiva para perceber qual dos dois géneros é mais severo, constatou-se que os homens são mais severos nas penas, embora estejam em menor número, embora este dado não seja estatisticamente significativo ($t=0,612$, $dl=33$, $Sig=,545$) (Anexo XVIII); no entanto estes, dados colocam algumas questões; sendo este um crime que predominantemente atinge as mulheres, o que leva as magistradas, em comparação com o juizes, a serem mais benevolentes com os agressores? A resposta a esta questão deveria levar à realização de um estudo no âmbito da Psicologia das Motivações Ajurídicas do Sentenciar, mediante a aplicação de um instrumento específico.

Outro dado que nos parece interessante é o tempo decorrido entre a denúncia criminal e a sentença, que é, em média, de 16 meses (Anexo XIX). A Constituição da República Portuguesa estabelece que todos têm direito a que uma causa seja julgada em prazo razoável, direito fundamental que é também assegurado pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e que, desde de Beccaria (1764) é erigido em valor fundamental da punição, a par da certeza de

aplicação de uma pena (Cusson, 1983). Embora seja demasiado tempo, as estatísticas revelam que os tribunais portugueses demoram, em média, três anos a concluir os processos, quatro vezes mais que a média dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), segundo revela um relatório da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ, 2013).

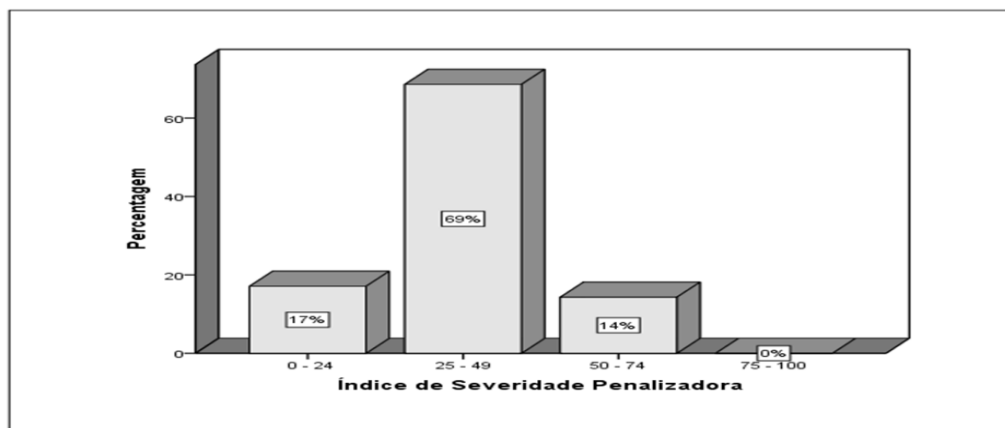
Na questão epicentral deste trabalho sobre o índice de severidade penalizadora no âmbito da violência conjugal determinou-se que é baixa. Numa escala de 0 a 100%, o índice encontra-se na percentagem de 34,5% (Anexo XIX), em que a medida menos severa foi a absolvição e a mais severa a pena de prisão com pena acessória; estamos a falar de extremos, uma vez que a sentença que predominou foi a pena suspensa (Anexo XIII)

Gráfico 20: Sentença



Legenda. A: Absolvido; B: Absolvido por violência doméstica - Condenado por crime à integridade física simples; C: Pena de prisão; D: Pena de prisão com pena acessória; E: Pena suspensa; F: Pena suspensa com pedido de indemnização; G: Pena suspensa com pena acessória ou/e de obrigação.

Gráfico 21: Índice de Severidade Punitiva



Verificou-se que a penalização aumentava em articulação com as seguintes variáveis: a existência de outros processos relacionados com violência doméstica, passando para 37,39%, embora esta diferença não seja estatisticamente significativa ($t = -0,950$, $dl=33$, $Sig = ,349$) (Anexo XX). Outra das variáveis que se analisou foi qual o tipo de relação entre a vítima e o agressor que poderia levar a uma maior severidade, chegando-se à conclusão que a relação cônjuge/companheiro sensibiliza os magistrados a elevarem a penalização (42,44%) contrariamente com o que se passa com os ex-parceiros; novamente, não é significativo do ponto de vista estatístico ($t = 0,789$, $dl=22$, $Sig = ,439$) (Anexo XXI).

Outro factor que leva a um aumento das penas, ainda que ligeiro, é a ocorrência (violência conjugal) ter sido presenciada por menores (39,3%); também este resultado não é significativo estatisticamente ($t = -1,070$, $dl=33$, $Sig = ,292$) (Anexo XXII).

Apesar dos resultados não serem estatisticamente significativos, o que é normal tendo em conta o número da amostra, demonstram que a severidade punitiva é baixa, apesar de haver ligeiras subidas percentuais; de uma forma geral, são sentenças bastante sintomáticas. Estes dados vão ao encontro do relatório anual (2013) do Ministério da Administração Interna, já que em 60% dos casos criminais as penas foram prisão entre 2 a 3 anos, geralmente suspensas, por igual

período de tempo. Em mais de metade dos casos de condenação estava assinalada a existência de penas acessórias (62%), surgindo frequentemente a indicação de que a pena suspensa era acompanhada de regime de prova que terá por base um plano de reinserção a elaborar pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Do total de resultados de inquéritos de violência doméstica (relativos a 2012 e 2013), comunicados à DGAI até 9/7/2014 (n=15311), observou-se que 76% referiam-se a arquivamento, 18% a acusação e 5,5% a suspensão provisória do processo. Entre os inquéritos arquivados, a grande maioria (72%) decorreu de falta de prova (art.º 277.º n.º 2, do Código do Processo Penal).

Impor que o tipo legal de crime de violência doméstica configure crime de dano implica a prova de factos que muitas vezes é impossível, tendo em conta a natureza contextual deste crime. Uma vez demonstrada a prática do ato violento, tal deveria bastar para a condenação, pois fazer depender esta das consequências ou sequelas que a vítima haja sofrido em resultado da prática do ato violento não é mais do que validar a violência, pois que só se pune em função do seu dano e não da violência praticada. Ou seja, provada a agressão (física, psicológica, económica ou sexual), o tipo legal estaria preenchido independentemente das efetivas lesões que tivessem ocorrido, como resultado do ato violento, pelo que deveria bastar, enquanto crime de perigo concreto, a susceptibilidade de causar aqueles danos, mesmo que estes não se verifiquem no caso sub judice, de modo a proteger igualmente as vítimas sem lesões. Assim deveria ser, porque o que se deve proteger é a dignidade da pessoa humana e o respeito que todos merecem na relação conjugal – e que o Direito Penal tem por imperativo acautelar.

Numa dos processos que foram analisados, a violência doméstica não ficou provada, embora verificada e provada a violência física reiterada, com antecedentes de condenação e reincidência. Acentuava o dita sentença o seguinte: «[...] não resulta da matéria de facto provada que o arguido tenha praticado o crime que lhe é imputado. Ou, pelo menos, com o grau de

consistência necessário a uma condenação penal não se provou que o tenha praticado, uma vez que a ofendida se recusou a prestar depoimento, nunca comparecendo em audiência. Quando as vítimas se calam ou não comparecem em audiência de julgamento, assumindo posição contrária à que assumiram em sede de inquérito, depois de todo um processo com carácter de urgência tramitado, pouco pode a Justiça fazer para as ajudar.» Vejamos: o ato violento foi dado como provado, bem como a sua reiteração em episódios anteriores, pelo que isto deveria ser o bastante para considerar preenchido o tipo criminal. Sabemos bem que este género de violência é habitualmente silenciado (pela vítima, com medo e vergonha, ou porque se sente de alguma forma culpada pela vitimação; pelo agressor como forma de intimidação; pelos familiares e vizinhos porque «não querem problemas» ...). Segundo Dias (2004), um dos fatores que leva à violência conjugal é o desenvolvimento de uma “cultura de violência” que legitima a violência, convertida em fenómeno socialmente aprendido, razão pela qual estes comportamentos podem ser (re)educados; a história das sociedades evidencia o estatuto social de submissão que a mulher sempre teve, em quase todas as sociedades, em relação aos homens.

Independentemente das discussões teóricas geradas entre os defensores desta perspectiva (“*family violence researchers*”) e as perspectivas feministas, parece que o sistema jurídico-legal e criminal continua a trivializar o problema da violência conjugal. Embora se tenha procedido a algumas reformas ao nível da legislação recente sobre a violência doméstica; à implementação de acções de formação/sensibilização dos agentes da justiça e das forças de segurança pública; à criação de linhas de apoio e de assessoria legal às vítimas, entre outras medidas de intervenção, as respostas do referido sistema ainda estão longe de ser completas. Tal pode estar associado às dificuldades de resposta por parte do sistema jurídico-legal e criminal face ao avolumar da criminalidade em geral, e não só da violência doméstica; à complexidade do fenómeno ou mesmo à negação, pela sociedade, de existência de violência entre indivíduos que fazem

parte da mesma família, pondo em causa o mito desta enquanto lugar seguro e dos afectos (Mckie, 2005)

O que se assiste nos tribunais, bem como na sociedade em geral no tocante à violência doméstica de uma forma em geral e, particularmente, na violência conjugal é o que, na expressão de Sellin (1938), se designa como híbridos culturais, o que significa uma registo atitudinal ambivalente, em que há a interiorização de duas séries normativas contraditórias, não se refutando totalmente os padrões, ou seja, a violência não é permitida mas é aceite, tanto na comunidade como na aplicação da lei (criminalização secundária. Por outras palavras: o desfasamento entre a fabricação legislativa (criminalização primária) e a aplicação (criminalização secundária), mas em que o ator principal daquela, o Legislador, embora preveja a punição, o faz de maneira a enviar ao aplicador a mensagem da não penalização. Penas de faz-de-conta?

A violência conjugal é uma grave violação dos direitos humanos, a comunidade científica, os governos e a justiça não se podem demitir deste combate.

Conclusão Geral

Ao longo das páginas antecedentes viajámos pelos territórios da violência conjugal. Trata-se, como vimos, de uma problemática que constitui não apenas um drama dos quotidianos de todos os tempos, transversalmente representado nos palcos da vida, mas também – diremos principalmente – nas preocupações dos cientistas do comportamento e dos técnicos do Direito. A vitimação produzida por este tipo de violência abrange as vítimas diretas e indiretas, especialmente os menores, convertidos em objeto de disputas e agressões interparentais, provocando, não raramente, ruturas da parentalidade onde tudo principia nos comportamentos de ofensa física, psicológica, económica e sexual (Sani & Almeida, 2011; Almeida & Sani, 2014) – por vezes, aquelas ruturas precedem as da conjugalidade.

A violência é, antes de tudo, uma questão grave de saúde pública e como tal deve ser equacionada pelos poderes nas políticas que constroem. A nosso ver esta é a dimensão que tem faltado; com efeito toda a violência e, de modo muito particular, a que se desenha em contexto de relações de intimidade, independentemente da existência ou ausência de vínculo jurídico, remete para uma multipolaridade de eixos, designadamente, o educativo, o sanitário, o jurídico-familiar, o jus penalista, o social, o económico, o laboral e, naturalmente, o psicológico. Se se contabilizarem os dias de trabalho perdidos, direta e indiretamente, por decorrência de atos de violência afetiva, a expressão financeira será, porventura, assustadora: talvez seja esse o momento em que os poderes encararão frontalmente o problema, esboçando políticas adequadas.

Verificamos neste trabalho, que a legislação abunda: poderemos estar inclusivamente perante uma crise de abundância, porém com requintes de inutilidade; já referimos que tem sido omissa a perceção de Beccaria há mais de 250 anos – não basta prever penas para dissuadir o crime, sendo necessário incutir na comunidade a convicção da certeza da penalização (Beccaria, 1764). Mais: como referem os clássicos do século XX no domínio da severidade punitiva (Tittle, 1980 *in* Cusson, 1983), há que determinar, além da duração da pena, a forma como ela afeta o transgressor – o que apenas pode ser dissecado em estudos de follow up e investigações sobre a reincidência. A conexão entre a moral e a lei, em cujo vértice emerge a justiça, constitui a díade primordial da

penalização, porquanto não basta punir, sendo necessário assegurar a justiça da punição e o convencimento do agressor. Quando a justiça se limita a vencer sem convencer está a abrir portas à lei da selva e o sentido moral da proibição não produz efeito no infrator, ou seja: não existe interiorização dos interditos, mas apenas o receio de recair nas malhas penais; por outras palavras transpondo para um plano estritamente psicológico, há uma incidência na ansiedade neurótica em detrimento da ansiedade moral. O agressor doméstico é um delinquente, em termos comportamentais, e face ao desvalor penal cometido; a sua condenação, como a de qualquer outro agente transgressivo, visa garantir o primado da prevenção especial e o da prevenção geral (Correia, 2008). Ora, como refere Cusson (1983, p. 318) «[...] c'est précisément parce que ces règles sont perçues comme justes qu'il est très souvent possible de faire l'économie des sanctions morales ou pénales».

Constata-se, pois, que neste domínio como em todos os outros em que a penalidade assoma, legislar é insuficiente, quiçá inútil, se a legislação for subvertida no momento da aplicação. As etapas do processo de criminalização têm que estar ligadas pelo mesmo fio condutor, não podendo surgir fragmentadas, atomizadas do todo a que pertencem. Queremos significar com esta afirmação que a criminalização secundária (a aplicação da lei) joga um papel fundamental na validade ou não da criminalização primária (produção normativa), pois se a etapa aplicadora for negligenciada desencadeará a invalidade da criminalização primária - poder-se-á dizer que a criminalização primária deverá instituir “ válvulas de segurança”, de molde a obstar que o aplicador possa distorcer a ratio legis.

A análise de resultados a que procedemos permite-nos concluir que o défice do combate à violência conjugal está situado em duas fases do processo criminalizador: na primária, porque as penas aplicadas têm uma dosimetria cabível no requisito de duração para suspensão da pena (artigo 50º do CP); e na secundária, dado que, como resulta da investigação empírica, os juizes usam de forma quase perdulária a suspensão da pena, conjugando-se ambos os patamares para a transmissão de uma mensagem de impunidade que é a principal amiga da reprodução dos comportamentos violentos.

Refira-se, portanto, que o legislador e o aplicador emitem mensagens paradoxais no chamado combate à violência conjugal; com efeito, enquanto os titulares do poder político que revestem de legisladores, no governo ou no parlamento, organizam campanhas em que peroram os comportamentos violentos na conjugalidade, permitem, por outro lado, que os agressores possam beneficiar de penas suspensas que, genericamente, não potenciam a interiorização dos interditos e, cumulativamente, deixam sobressair a ideia de impunidade - o nada aconteceu com que se referem à decisão judicial. De certa forma, é uma atitude política ambivalente e paradoxal, embora não inédita no nosso sistema penal, onde persistem contradições que decorrem também da oposição entre a ideologia real e a ideologia aparente. O campo das drogas foi, de resto, espelho de situações idênticas, por indefinição e desarticulação entre legislador e aplicador (Poiares, 1999): esta discrepância entre a ideologia aparente e a ideologia real desvirtua a política criminal e abre brechas na construção da prevenção.

Na vertente da violência em contexto de conjugalidade, com e sem vínculos jurídicos, importa viabilizar medidas de punição e de apoio psicológico, que possam reprogramar o sujeito delinvente - este é o espaço da criminalização terciária (onde se consagram a execução da pena e a reinserção); e o tempo de punição deve, neste como nas outras expressões da criminalidade, coincidir com o tempo ressocializador, deixando bem clara a ilicitude do comportamento. Na verdade, a violência é sempre um exercício abusivo do poder contra o outro, arrastando outras vítimas que não apenas os menores, a que já aludimos, mas por vezes os grupos de pertença, progenitores da vítima, também envolvidos nas agressões. A violência domina a arte do travestimento, como decorre de Sartre, que proclamou “ a violência faz-se passar sempre por uma contra-violência, quer dizer, por uma resposta à violência alheia”. Afinal, a construção social da violência burila-se em significâncias várias, prevelecendo compassos de desarmonia onde se pressupunha a harmonia.

A análise dos resultados demonstra a incoerência entre o Direito dito e o Direito feito e, do mesmo passo, a linha de incoerência entre a psicologização que se impõe, quer em relação ao agressor quer no que toca à vítima, e a psicologização praticada.

Um dos objetivos do instrumento que aplicamos reside na indagação do contributo que a Psicologia carrega ao espaço judiciário: detetou-se uma incidência mínima, mesmo considerando os chamados relatórios sociais, cuja dimensão psicológica é muitas vezes exígua.

Nesta conformidade, importa adotar estratégias de Psicologia Forense e de intervenção juspsicológica, que passaremos a elencar, alavancando nos dados recolhidos.

Assim, definimos como prioridades as seguintes:

- 1- A questão da violência conjugal e, de resto, toda a problemática dos comportamentos violentos, deverão ser incluídos nos currículos dos ensinos básico, secundário e superior percorrendo a formação dos alunos de forma transversal, e integrando-se no projeto de educação para a cidadania plena.
- 2- Esta medida visará consubstanciar a prevenção precoce dos comportamentos violentos em todos os seus graus e qualidades.
- 3- Além do apoio psicoterapêutico a vítimas e agressores, que é da maior pertinência, e cumulativamente, sempre que se justifique, com o apoio médico, deverão ser dispensados cuidados a ambas as partes no sentido da reprogramação, ou seja, da mudança endógena de atitudes, de uns e outros, elegendo com objeto central a construção de um projeto de vida.
- 4- Com efeito, há que prevenir as recidivas de vitimantes e vitimados e, por arrasto, prevenir a exposição de terceiros, sejam menores ou idosos, à conflitualidade e à violência em meio conjugal.
- 5- Para tanto, deverão concorrer os dispositivos formais de educação, da saúde e da justiça, numa triangulação estratégica que permita habilitar uma nova ordem no plano das relacionalidades.
- 6- Ora, sendo a violência, como já dissemos, um problema de saúde pública, a convocatória aos respetivos dispositivos é inadiável, já que as agressões em

contexto de conjugalidade e as inerências que se refletem na parentalidade põem em causa a saúde física e mental das pessoas expostas a tais atitudes.

7- Dever-se-á reforçar a prevenção psicoinclusiva, traduzindo-se esta na contribuição da Psicologia para a promoção da inclusão social: porque, reconheça-se, agressores e agredidos perfilam-se habitualmente nos segmentos excluídos gerados pela violência praticada ou sofrida.

8- Acresce que as campanhas institucionais contra a violência, que devem ser dinamizadas, não podem limitar-se à pacificidade de *posters* ou de frases transmitidas pelos media: porque a transversalidade é uma constante nesta problemática, requerem-se evidentemente estratégias diferenciadas, que afastem estereótipos e preconceitos.

9- Inclusivamente, não nos podemos esquecer que apesar da prevalência do violento masculino também ocorrem violências conjugadas no feminino.

10 - A justiça – atores, aparelho, sistema – desempenha aqui uma função premente na prevenção e na punição – e este dois tópicos não podem ser dissociados, na medida em que a punição efetiva – e não meramente ameaçada – deve surgir em coabitação com a prevenção e com as políticas de saúde.

11- A geometria de gestão do fenómeno deve articular várias forças e procurar o correspondente ponto ótimo: o tribunal quando julga deve ter em conta que está pronunciar-se sobre um problema que é também da esfera sanitária e que a exposição à vitimação, direta ou indireta, produz danos na saúde das pessoas, com sequelas que se arrastam por muitos anos, mesmo depois de cessar a exposição, em alguns casos perdurando por toda a vida.

12- Aqui radica o espaço para a intervenção juspsicológica, cabendo à lei vincular o aplicador a escutar os psicólogos, especialmente os que têm formação em forense, sobre as trajetórias e estilos de vida das partes envolvidas de modo a

conhecer bem as respetivas personalidades e a tomar decisões que observem as suas idiossincrasias.

13- A intervenção juspsicológica, situando-se na contiguidade da Psicologia Forense e da intervenção psicoinclusiva, permite integrar as respostas judiciais com o saber, as metodologias e as práticas psicológicas, tornando viável a adequação da decisão aos casos concretos.

14- Para que se possa trabalhar seriamente na prevenção da violência em contexto conjugal torna-se necessário adotar mecanismos jurídicos e institucionais idóneos, o que não acontece atualmente, quando é certo que há uma predominância de decisões que privilegiam a não aplicação de medidas efetivas, mesmo em casos de reincidência, ou a multa, não raramente paga pela vítima.

15- Caso o poder queira resolver o problema e obstar à sua autorreprodução terá que assumir outra postura legisferante, que seja motor de uma mudança da racionalidade aplicativa.

16- Dir-se-á, porventura, que estamos a preconizar uma overdose represiva. Nem tanto, apenas o fim da impunidade, através do que já foi chamado tolerância zero.

17- Nesta linha de pensamento defendemos também que a lei fixe a impossibilidade legal de conversão da pena reclusiva em qualquer outra medida não detentiva, sempre que sejam provados os crimes de violência doméstica.

18- Quando as pessoas estiverem casadas entre si, o tribunal que profere a condenação deve ter competência para decretar o divórcio, a pedido da vítima, sem necessidade de esta ter de intentar a ação competente noutro tribunal, carecendo de requerer certidões do tribunal criminal comprovando o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que implica sempre gastos imensos em tempo e dinheiro.

19- Havendo filhos comuns, o tribunal que pronuncia a condenação criminal deve dispor de poderes para, oficiosamente, regular o exercício das responsabilidades parentais, desde que o divórcio seja decretado.

20- Estas ideias que aqui referimos têm sido defendidas em consequência do trabalho desenvolvido em sede de violência doméstica, como políticas proativas e que têm como pretensão atenuar grandemente o problema e demonstrar à sociedade que: (i) a impunidade cessou; (ii) há segurança e certeza sobre a aplicação da pena; e, (iii) que a lei impede o retardamento desadequado das situações de violência com recidivas durante a pendência processual, acabando muitas vezes por terminar com mortes de mulheres, e até de filhos, ou com as vítima no casulo de uma casa abrigo, enquanto os agressores se mantêm na romanticamente designada pela lei “casa de morada de família”.

21- Há muito que partilhamos desta lógica, o que tem resultado essencialmente da captação e da descodificação das narrativas de inúmeras vítimas num dispositivo que integramos (Serviço de Atendimento e Avaliação Psicológicos – valência de Psicologia Forense e da intervenção juspsicológica), na unidade orgânica de Psicologia da Universidade Lusófona (Lisboa); esta perspectiva assenta também na presente investigação, nomeadamente na análise dos processos e da constatação do número das vítimas letais da violência doméstica – sem embargo de eventuais cifras negras ou de suicídios das mais variadas formas, incluindo sinistros rodoviários inexplicáveis: porque o suicídio serve-se de diversas maneiras. Ora, este leque de propostas apareceu já publicado em texto (Poiars, 2012).

22- Consideramos que se mantem os pressupostos para se preconizar a opção por penas efetivas: aliás, os dados anualmente divulgados pelos serviços competentes não permitem que se continue a coabitar com o modelo que ameaça punir mas que, tantas e tantas vezes não passa da ameaça e que deixa de forma recorrente termo de identidade e residência como que se tornando cúmplice da recidivas.

23- Prevenção precoce, prevenção permanente, intervenção juspsicológica: estas as colunas sobre as quais se deverá construir uma nova gramática judicial, suportada na dimensão e nas práticas da Psicologia, para que o saber ocupe o lugar necessário das normas e nas práticas institucionais.

Referências bibliográficas

Adler, F. (1975). *Sisters in Crime: The Rise of the New Female Criminal*. New York: McGraw-Hill.

Aguiar, N. (1997). Perspetivas feministas e conceito de patriarcado na sociologia clássica e no pensamento sociopolítico brasileiro. In *Género e ciências humanas: desafio às ciências desde a perspetiva das mulheres*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.

Almeida, I. & Soeiro, C. (2010). Avaliação de risco de violência conjugal: Versão para polícias (SARA: PV). In *Análise Psicológica*, v.28 n.1.

Almeida, T. & Sani, A. (2014). Violência interparental: Efeitos e transmissão entre gerações. In Paulino, M. & Almeida, F. (Coord) (2014). *Psicologia, justiça & Ciências forense. Perspetivas atuais*. Lisboa: Edição Pactor

APAV (2013). *Estatística APAV – Relatório anual*.

APAV (2014). *Estatística APAV – Relatório anual*.

Ascensão, O. (1999). *O Direito. Introdução e teoria Geral*. Coimbra: Almedina.

Asendorpf, J. (2004). *Psychologie der Persönlichkeit*. Berlin: Springer.

Agra, C. (1982). Epistemologia, ciência e patologia mental – Desviância juvenil e toxicomania: um analisador epistémico. In *Análise Psicológica*, 4 (II): pp. 529-545.

Agra, C. (1986). Projecto da Psicologia transdisciplinar do comportamentodesviante e auto-organizado. In *Análise Psicológica 3-4 (IV)*: pp. 311-318.

Agra, C. (1990). Sujet autopoïétique et transgression. In F. Digneffe (Ed.). *Acteur social et délinquance – Une grille de lecture du système de justice pénale*. Bruxelles: Pierre Mardaga, pp.415-425.

Agra, C. & Matos, A (1998). *Trajetórias Desviantes (Ed)*. Gabinete de Planeamento e Coordenação de Combate à Droga. Lisboa.

- Borges, H. (2005). *Vida, Razão e Justiça. Racionalidade Argumentativa na Motivação Judiciária*. Coimbra: Minerva Coimbra.
- Agra, C. & Kuhn, A. (2010). *Somos todos criminosos? Lisboa*: Casa das Letras.
- Agra, C. (2000). O cientista e o juiz. Meditação sobre o sentenciar das drogas. In I.P.D.T. (ed.). *Droga - Decisões de tribunais de primeira instância – 1997, Comentários*. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros: 295-303.
- Altavilla, E. (2003). *Psicologia Judiciária II: Personagens do Processo Penal* (2 ed.). Coimbra: Almedina.
- American Psychiatric Association (2014). *DSM-V- Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais*. Lisboa: Climepsi Editores.
- Baratta, A. (1999). *Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal* (2ª ed). Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
- Bergeret, J. (2006). *A Personalidade Normal e Patológica*. Lisboa: Climepsi Editores
- Beccaria, C. (2003). *Dos delitos e das penas*. São Paulo: Martin Claret.
- Becker, H. (1963). *Outsiders*. New York: Free Press
- Beleza, M. (1990). *Mulheres, Direito, Crime ou a Perplexidade de Cassandra*. Lisboa: Faculdade de Direito de Lisboa.
- Beleza, T. (1985). *Direito Penal – 1º volume*. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Psicologia.
- Bensaid, D. (2000). *Quem é o juiz? Para acabar com o tribunal da história*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Bernal, T. (2002). El psicólogo y la mediación. In Urra, J. y Comp (2002). *En tratado de Psicología Forense*. Madrid: Editora Siglo XXI de España Editores, S.A.

- Blackman, Julie (1989). *Intimate Violence. A Study of Injustice*. New York, Columbia University Press.
- Blumer, H. (2007). *Symbolic interactionism: perspective and method* (10ª. Ed) Berkley: University of California Press.
- Borges, H. (2005). *Vida, Razão e Justiça. Racionalidade Argumentativa na Motivação Judiciária*. Coimbra: Minerva Coimbra.
- Campus, V. (1992). Comunicação, Democracia e Conflito. Comunicação e Linguagens. In *Éticas e Comunicação* 15/16: pp. 35-46.
- Canotilho, J. (1998). *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. Coimbra: Almedina
- Canto, D. (2000). *Regime Inicial de Cumprimento de Pena Reclusiva ao Reincidente. Dissertação* (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).
- Carlsmith, K. (2006). The Roles of retribution and utility in Determining Punishment. In *Journal of Experimental Social Psychology*, 42, pp.437–451.
- Carver, C. & Scheier, M. (2000). *Perspectives on personality*. Boston: Allyn and Bacon.
- Carmo, R. (2005). A prova pericial: Enquadramento legal. In Gonçalves, R. & Machado, C. (2005) (Coords.). *Psicologia Forense*. Coimbra: Quarteto.
- Casimiro, C. (2008). Representações sociais da violência conjugal. In *Análise Social*. Lisboa. ISCTE, Volume XXXVII, Nº 163, pp. 603-630.
- Clemente, M. & Rios, J. (Coords.) (1995). *Guia Jurídica del psicólogo. Compendio básico de legislación para el psicólogo jurídico*. Madrid: Pirâmide.
- Clemente, M. (Coord.) (1998). *Psicología jurídica? A modo de introducción*. In *Fundamentos de la Psicología Jurídica*. Madrid: Pirâmide.

Cisneros, M. (2010). Violência Doméstica, La experiencia española». In *Revista Julgar, n° 12*, 2010, pp. 81-140

Código Penal (5ª Ed) (2015). Coimbra: Almedina

Correia, E. (2008). *Direito Criminal. Volume I*. Coimbra: Edições Almedina, S.A.

Cortês, A. (1996). *A Fundamentação das decisões no Processo Penal. Dissertação de Mestrado*. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

Coser, L. (1956). *The functions of social conflict*. New York: Free Press.

Costa, M. & Duarte, C. (2000). *Violência Familiar*. Porto: Edições Afrontamento.

Costa, V., & Sani, A. (2007). *Sintomatologia de pós-stress traumático em menores expostos a violência interparental*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Porto, Portugal.

Cunha, D. (2009). *Impacto da Violência Conjugal nas Práticas Educativas Parentais: Olhar da Mãe*. Porto: Universidade Fernando Pessoa.

Cusson, M. (2007). *Criminologia*. Cruz Quebrada: Casa das Letras.

Cusson, M. (1983). *Le contrôle social du crime*. Paris: Les Presses Universitaires de France.

Debuyst, C.; Digneffe, F. Labaide, J. & Pires, A. (1998). *Histoire des saviors sur le crime e la peine.1. Des savoirs diffus à la notion de criminel-né*. Montréal: Les presses de l'Université de Montréal, 1995. Collection Perspectives Criminologiques.

Debuyst, C.; Digneffe, F. Labaide, J. & Pires, A. (1998). *Histoire des saviors sur le crime e la peine.2. La rationalité pinale et la naissance de la criminologie*. Montréal: Les presses de l'Université de Montréal, 1995. Collection Perspectives Criminologiques.

- Debuyst, Ch. (1986). Representação da justiça e reacção social. In *Análise Psicológica*, IV. pp. 369-376.
- Debuyst, Ch. (1977). Le concept de dangerosité et un de ses éléments constitutifs: la personnalité (criminelle). In *Déviance et Société*, 1/4, pp.363-388.
- Decamps, Ch. (1994). *Normal/Anormal*. In *Enciclopedia Einandi*, (vol. 23). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, pp.379-389.
- Delmas-Marty, M. (1984). A criação das leis e a sua recepção pela sociedade. In IX *Congresso Internacional de Criminologia*. Lisboa: Ministério da Justiça, pp. 99-126.
- Dias, J (2001). *Temas básicos da doutrina penal sobre os fundamentos da doutrina penal sobre a doutrina geral do crime*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Dias, J. & Andrade, C. (1997). *Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Dias, J. (2007). *Direito Penal - Parte Geral - Tomo I - Questões Fundamentais: A Doutrina Geral do Crime*. (2ª ed). Coimbra: Editora Coimbra.
- Dias, I. (2004). *Violência na Família – uma abordagem sociológica*. Lisboa: Edições Afrontamento.
- Dias, I. (2010). Violência doméstica e justiça. In *Sociologia: Revista do Departamento de Sociologia da FLUP*, Vol. XX, pp. 245-262.
- Dias, A. & Machado, C. (2008). Género e violência conjugal – Uma relação cultural. In *Análise Psicológica* (2008), 4 (XXVI): pp.571-586.
- Diges, M. & Quecuty, M. (1993). *Psicologia forense experimental*. Valência: Promolibro.

- Dinitz, S. (1975). The concept of deviation. In Dinitz et al. (Org). *Deviance, Studies in Definition, Management, and Treatment*. Nova Iorque: Oxford University Press, p. 3-20.
- Duarte, M. (2011). Violência doméstica e sua criminalização em Portugal: Obstáculos à aplicação da lei. In *Sistema Penal & Violência*, v. 3, n. 2, pp. 1-12.
- Duarte, M. (2011). *Movimentos na Justiça - O Direito e o movimento ambientalista em Portugal*. Lisboa: Edições Almedina.
- Duarte, M. (2011). Contributos para a construção de um sistema integrado de proteção às vítimas de violência doméstica: georreferenciação do perigo. In *Revista do Ministério Público*, nº126, p. 199-218.
- Duarte, R. (2003). Algumas notas acerca do papel da “convicção-crença” nas decisões judiciais. In *Themis*, IV, nº 6, pp. 5-17.
- Dutton, D. (1995). *The Domestic Assault of Women* (2ªed). Boston: Allyn-Bacon.
- Durkheim, E. (2007). *As regras do método sociológico*. Barcarena: Editorial Presença.
- Durkheim, E.(1996). *O Suicídio: Estudo Sociológico*. Lisboa: Editorial Presença.
- English, K. (2004). *Introdução ao pensamento jurídico* (9ª Ed). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Eysenck, H. & Eysenck, S. (1970). Crime and personality: An empirical study of the three factor theory. In *British Journal of Criminology*, 10, pp. 225-239.
- Fagan, J. (1996). The Criminalization of Domestic Violence: Promises and Limits. In *Presentation at the 1995 conference on criminal justice research and evaluation*. USA: National Institute of Justice - Research Report.
- Feitor, S. (2012). *Análise Crítica do Crime de Violência Doméstica*. Universidade Nova de Lisboa.

- Finkelhor, D.; Yllo, K. (1983). Rape in marriage: a sociological view. In David Finkelhor et al. (eds.) (1983). *The Dark Side of Families. Current Family Violence Research*. California: Sage Publications.
- Floriot, R. (1972). *Erros judiciais*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- Fortin, M. (2003). *O processo de Investigação: da conceção à realização*. Lisboa: Lusociência.
- Foucault, M. (2005). *As palavras e as coisas*. Lisboa: Edições 70.
- Foucault, M. (1999). *Vigiar e punir. Nascimento da prisão*. Petrópolis: Editora Vozes.
- Foucault, M. (1997). *A ordem do discurso*. Lisboa: Relógio D' Água Editores.
- Foucault, M. (1993). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.
- Frank, R. (1983). Significação social da psicologia. III- Porque se pratica a psicologia clínica? In *Análise Psicológica*, III, pp. 327- 352.
- Freitas do Amaral, D. (2004). *Manual de Introdução ao Direito*. Coimbra: Almedina.
- Garcia, M. (2009). Violência doméstica/Familiar: Enquadramento Judicial - da legislação à intervenção. Comunicação apresentada nas Acções de Sensibilização Projeto de Intervenção em Rede - Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
- Garrity, R. (1998). Mediation and Domestic Violence. http://www.biscmi.org/documents/MEDIATION_AND_DOMESTIC_VIOLENCE.html
- Gelles, R. (1993). Family violence. In Hampton, R. et al. (eds.). *Family Violence – Preventing and Treatment*. California: Sage Publications.
- Giddens, A. (2010). *Sociologia* (8ªed). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

- Giddens, A. (1998). Desvio e Criminalidade. In *Sub Judice*, 13, pp.9-28. Coimbra: DocJuris.
- Gill, J.(2004). *Beyond the Great Divide: Single Sex Or Coeducation?* Australia: University of New South Wales Press.
- Gilissen, J. (1995). *Introdução histórica ao Direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Goldstein, A (2007). *Forensic Psychology. Emerging topics and expanding roles*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Gonçalves, R. (2010). Psicologia Forense em Portugal: Uma história de responsabilidades e desafios. In *Análise Psicológica*, 1, 28, pp.107-115.
- Gonçalves, R. & Machado, C. (2005). *Psicologia Forense*. Coimbra: Quarteto.
- Gorphe, F. (1980). *La Crítica del Testimonio* (6º ed). Madrid: Instituto Editorial Réus, S.A.
- Gross, M., Cramer, E., Forte, J., Gordontt,J., Kunkel, T. Moriarty, I. (2000). The impact of sentencing options on recidivism among domestic violence offenders. A case study. In *American Journal of Criminal Justice*, 24, pp. 301-312
- Habermas, J.(1998). *Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos del discurso*. Madrid: Editorial Trotta.
- Hampton, R.; Coner-Edwards, A.(1993), “Physical and sexual violence in marriage”, in Robert L. Hampton et al. (eds.).(1993). *Family Violence – Prevention and Treatment*. Newbury park: Sage Publications.
- Hart, H. (1995). *O conceito do Direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Hegel, G. (2000). *Princípios da Filosofia do Direito*.São Paulo: Martins Fontes.

- Heise, L.; Ellsberg, M.; Gottemoeller, M. (1999) Como acabar com a violência contra as mulheres. Baltimore: Johns Hopkins School of Public Health, Population Information Program, 1999. (Population Reports, Série L, nº 1). Disponível em: <<http://db.jhuccp.org/popinform/docs/146921POR.pdf>>.
- Herpin, N. (1978). *Aplicação da lei*. Lisboa: Iniciativas editoriais.
- Herrero, C. (2001). *Criminología: Parte General y Especial*. Madrid: Dykinson.
- Hespanha, A. (1978). *A História do Direito na História Social*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Hespanha, A. (2007). *O Caleidoscópio do Direito*. Coimbra: Almedina.
- Hines, D., Brown, J., & Dunning, E. (2007). Characteristics of callers to the Domestic Abuse Helpline for Men. In *Journal of Family Violence*, 22, pp.63-72.
- Jakobs, G (2003). *Ciência do direito e ciência do direito penal. Estudos de Direito Penal*. v. 1. São Paulo: Manole.
- Johnston, C., & Alozie, N. (2001). The effect of age on criminal processing: Is there an advantage in being “older”? In *Journal of Gerontological Social Work*, 34, 4, pp. 65-82.
- Kant, I. (1997). *Critica da razão pura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Kendler, H. (1989). *Introdução à Psicologia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Kundera, M. (1986). *A Brincadeira*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira
- Landreville, P. (1990). *Acteur Social et Delinquance: Une grille de lecture du système de justice pénale*. Bruxelles: Pierre Mardaga, Editeur.
- Larenz, K. (1978). *Metodologias da ciência do Direito*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

- Le Blanc, M. (2008). O comportamento delinquente dos adolescents. O seu desenvolvimento e a sua explicação. In Le Blanc, M., Ouimet, M. & Szabo, D. (2008). *Tratado de Criminologia Empírica*. Lisboa: Climepsi.
- Leal, J. (2007). *Crime no Feminino, Trajetórias Delinquentiais de Mulheres*. Coimbra: Almedina.
- Leyens, J. (1986). Representações sociais e justiça. In *Análise Psicológica*, IV, pp. 359-368.
- Lewin, K. (1935). *A dynamic theory of personality. Selected papers*. USA: Mcgraw Hill Custom Publishing.
- Lima, S. (1958). *Introdução à Psicologia*. Coimbra: Ed. de A.J. Machado Gonçalves.
- Lipovetsky, G. (1989). *O Império do Efémero*. São Paulo: Companhia das Letras
- Lipovetsky, G. (1983). *A Era do Vazio. Ensaio sobre o individualismo contemporâneo*. Lisboa: Relógio D' Água Editores.
- .
- Litwack, T. & Schlesinger, L. (1999). Dangerousness Assessments: Research, Legal, and Clinical Considerations. In Hess, A. K. & Weiner, I. B. 148 (Eds.). *In The Handbook Of Forensic Psychology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Lourenço, N., Lisboa, M. & Pais, E. (1997). *Violência contra as Mulheres*. Lisboa: Comissão Para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres.
- Lúcio, L. (1986). Psiquiatria forense e o novo Código Penal. In *Análise Psicológica*, IV, pp. 489-494.
- Louro, M. (2008). *Psicologia das motivações ajurídicas do sentenciar: a emergência do saber em detrimento do poder*. Dissertação de Mestrado em Psicologia Criminal e do Comportamento Desviante, apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa: UHTL.

- Machado, J. (2007). *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*. Coimbra: Almedina.
- Machado, C. (2005). Evoluções paradigmáticas na avaliação forense. In *Teoria, investigação e prática*, 10(1), pp. 45-63.
- Machado, C. e Gonçalves, R. (2003). *Violência e Vítimas de Crimes*. Coimbra: Quarteto.
- Maia, M. (2011). *Severidade punitiva – Penas severas: Um factor de dissuasão do crime?* Dissertação de Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa: UHTL.
- Manita, C. (2001). Evolução das significações em trajetórias de droga-crime (II): Novos sentidos para a intervenção psicológica com toxicodependentes? In *Toxicodependências*, nº3, pp. 34-42.
- Manita, C. (2004). Uma outra via para a não violência: a intervenção psicológica em agressores. In *Polícia e Justiça, nº Número especial*, pp.169-187.
- Manheim, M. (1984). *Criminologia Comparada, Vol. I e II*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Marx, K. (1991). *Miséria da Filosofia*. Lisboa: Edições Avante.
- Matos, M. (2002). Violência conjugal. In R. Abrunhosa Gonçalves, & C. Machado(2002). *Violência e vítimas de crimes (Vols. I – Adultos)*. Coimbra: Quarteto.
- Matos, M. (2011). *Violência doméstica: Intervenção em grupo com mulheres vítimas – Manual para profissionais*. Porto: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

- Matos, M., & Machado, C. (1999). Violência conjugal e o modelo de intervenção em crise. In *Psicologia: Teoria, Investigação e Prática*, 2, pp. 373-388.
- Mesquita, M.,(2003). *O Quarto Equívoco: O Poder dos Media na Sociedade Contemporânea*. Coimbra: Minerva.
- Miaille, M. (1979). *Uma introdução crítica ao Direito*. Lisboa: Moraes Edições
- Mckie, L. (2005). *Families, Violence and Social Change*. London: Open University Press.
- Miller, J., & White, N. A. (2003). Gender and adolescent relationship violence: A contextual examination. In *Criminology*, 41, pp.1207-1248.
- Miranda, J. (2012). *Manual de Direito Constitucional - Tomo IV - Direitos Fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Moffit, T., Robins, R & Caspi, A. (2001). Acouples analysis of partner abuse with implications for abuse prevention policy. In *Criminology and Public Policy*, 1, pp.5-36.
- Monteiro, M. e Santos, M. (1998). *Psicologia*. Porto: Porto Editora.
- Moreira, V. (1978). *A Ordem Jurídica do Capitalismo (3ª ed)*. Coimbra: Centelha.
- Neves, A. (2003). *O atual problema metodológico da interpretação jurídica*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Neves, J. (2010). *Violência Doméstica: Sobre a lei de prevenção, Proteção e assistência às vítimas*. www.verbojuridico.net.
- Nogueira, C., Fernandes, H. & Nunes, L. (2014). Contexto familiar e desenvolvimento de conduta criminal. In Sani, A. & Nunes, L. (Coord.) (2014). *Crime, Justiça e Sociedade*. Porto: Edições CRIAP.

- Nunes, L. (2010). *Crime e Comportamentos Criminosos*. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa.
- Oliveira, A., Schraiber, L., França-Junior, I., Ludemir, A., Portella, A., Diniz, C., Couto, M. *et al.* (2009). Fatores associados à violência por parceiro íntimo. In *Revista de Saúde Pública*, 43 (2), pp.299-310.
- Pasukanis, E. (1972). *A teoria geral do Direito e o Marxismo*. Coimbra: Centelha.
- Piñero, M. & Lopez, M.(1986). *Iguaddad y Discriminacion*. Madrid: Tecnos.
- Pinto, M., Varela, A. e Vinhal, A. (2012). A personalidade das vítimas de violência conjugal. In *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, 8, pp. 25-29.
- Poiares, C. (2012). (Des) Convivências & Violências. In Poiares, C. (2012). In *Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social, vol.1*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
- Poiares, C & Louro, M.(2012). Psicologia do Testemunho e Psicologia das Motivações Ajurídicas do Sentenciar: da gramática teórica à investigação empírica. In *Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social, vol.1*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
- Poiares, C. e Louro, M. (2009). *Mediação Penal – da Justiça tradicional à intervenção juspsicológica*. Porto: Universidade Fernando Pessoa.
- Poiares, C.(2008^a). Justiça, exclusão social e psicologia ou estranhas formas devida. In *ARS IV DINCANDI - Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, volume 1, do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Coimbra Editora, 967-981.
- Poiares, C. (2005). Psicologia do Testemunho: Contribuição para a aproximação da verdade judicial à verdade. In *Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos*

- Advogados – Direitos do Homem. Dignidade e Justiça.* Lisboa: Principia:pp.143-160.
- Poiars, C. (2004). Droga. *Objecto de Saber: Uma Abordagem Juspsicológica.* In *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.* Coimbra: Coimbra Editora.
- Poiars, C. (2003). Droga: Deambulação em torno da investigação científica. In *Revista Toxicodependências.* Vol. 9, nº3, pp. 75-86.
- Poiars, C. (2001). Da justiça à psicologia: razões & trajetórias. In *Sub Júdice – justiça e sociedade (ed).* *Psicologia e Justiça: razões e trajetos,* nº22/23, pp.25-35.
- Poiars, C. (2000). Descriminalização construtiva e intervenção juspsicológica no consumo das drogas ou Recuperar o tempo perdido... In *Revista Toxicodependências* Vol. 6, nº2, pp. 7-16.
- Poiars, C. (1999). *Análise psicocriminal das drogas – O discurso do legislador.* Porto: Almeida & Leitão, Lda.
- Poiars, C. (1993) Filosofias de Criminalização Primária. Criminalização e Comportamento Desviante. In *Textos (2).* Lisboa: Centro de Estudos Judiciários. pp. 331-338
- Popper, K. (1986). *Objective Knowledge. An Evolutionary Approach.* Oxford: Oxford University Press.
- Polaschek, D. & Reynolds, N. (2000). Assessment and Treatment: Violent Offenders. In Holling, C. (Ed.) (2001) *Handbook of Offender Assessment and Treatment.* England: John Willey & Sons, Ltd.
- Pratt, T. (1998). Race and sentencing: A meta-analyses of conflicting empirical research results. In *Journal of Criminal Justice,* 26, 6, pp. 513-523.

- Quintas, J. (2011). *Regulação legal do consumo de drogas: Impactos da experiência portuguesa da descriminalização*. Porto: Fronteira do Caos Editores, Lda.
- Oliveira, P. e Carvalho, M. (2005). Violência contra a mulher: tipos de agressão e auto-percepção como vítima. In *UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde, Londrina*, v. 7, n. 1, p. 43-48.
- Oliveira, M.; Teixeira, K.; Santana, M.; Oliveira, P.; Lélis C.; Freitas, M. e Linhares, A. (2009). Marcas Psicológicas da Violência Doméstica: análise de histórias de vida de mulheres de comunidades populares urbanas. In *Revista Textos e Contextos* v. 8, pp. 123- 139.
- Oliverio, A. (1986). *Como Nasce um Conformista*. São Paulo: Moraes.
- Ost, F. & Kerchove, M. (1990). *Acteur Social et Delinquance: Une grille de lecture du système de justice pénale*. Bruxelles: Pierre Mardaga, Editeur.
- Radbruch, G. (1979). *Filosofia do Direito*. Coimbra: Arménio Amado – Editor.
- Raine, J. (2001). *Modernisation and Criminal Justice in Working for Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Ramos, M. (2012). *Psicologia em tribunal: O caso da severidade punitiva*. Dissertação de Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa: UHTL.
- Raskin, D. (1994). *Metodos psicologicos en la investigacion y pruebas criminales*. Madrid:Desdée de Brouwer.
- Ricoeur, P. (1995). *O justo ou a essência da justiça*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Robert, Ph. (2007). *Sociologia do crime*. Petrópolis: Editora Vozes.
- Rodrigues, A. (1987). Os menores. In Oliveira, G., Rodrigues, A., Dunen, F., Carvalho, M., Ferreira, Santos J., Ribeiro, J., Ferreira, M. S., Sampaio, C.,

- Santos, A., Faria P., Mesquita, J. & Ribeiro, A. (Eds.) (1987). *Enciclopédia Legal* (pp. 76-92). Porto: Readers Digest.
- Rodrigues, M. (2007). *Corpo, Sexualidade e Violência Conjugal – Análise e Intervenção Social*. Lisboa: CPITHS/VERAS
- Rodríguez, E. (2000). *Psicología Forense y tratamiento jurídico-legal de la discapacidad*. Madrid: Edisofer.
- Roxin, C. (1993). *Problemas fundamentais de direito penal (2ª. ed.)*. Lisboa: Veja.
- Szabo, D. (1988). Drogues, criminalité et culture: Essai de criminologie comparée. In *Perspectives in drug abuse, I*. Canadá: Université de Montréal, 109-139.
- Santos, A. (1986). Piaget e a teoria do Direito. In *Análise Psicológica*, IV, pp. 319-358.
- Santos, D. (1977). Psicologia e Direito. In Teixeira, A. (1992). *Filosofia Jurídica portuguesa contemporânea*. Porto: Coleção Resjuridica
- Sacau, A. & Rodrigues, A. (2006). Reflexões sobre o papel da experiência do juiz na tomada de decisões judiciais. In *Julgar*, nº 8, pp. 155-160. Coimbra Editora.
- Sacau, A., Jóluskin, G., Sani, A., Rodrigues, A e Gonçalves, S. (2012). A tomada de decisão judicial em contexto criminal: A construção teórica e o debate empírico em torno do objecto. In Poiares, C. (2012)(Ed). *Manual de Psicologia Forense e da Exclusão Social. Rotas de Investigação e de Intervenção – Volume I*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
- Salem, P. & Milne, A. (1995). Making mediation work in a domestic violence case. In *Family Advocate*, 17 ,3, pp.34-38.
- Sani, A. & Almeida, T. (2011). Violência interparental: A vitimação indireta de crianças. In Sani, A. (Coord).(2011). *Temas de Vitimologia – Realidades emergentes da vitimação e respostas sociais*. Coimbra: Almedina.

- Schafran, L.(1985). Eve, Mary, superwoman - How stereotypes about women influence judges. *In Judges Journal*, v. 24, 1, pp. 12-17.
- Schneider, E.(2000). *Battered women and feminist lawmaking*. USA: Yale University Press.
- Sherman, I., Gottfredson, D., Mackenzie, D., Eck, J., Reuter, P., Bushway, S. (1998). *Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising*. Annapolis: University of Maryland.
- Smart, C.(1999). *Law, crime and sexuality*. California: Sage.
- Sobral, J., Arce, R. & Prieto, Á. (1994). *Manual de Psicologia Jurídica*. Barcelona: Edições PAIDOS.
- Sporer, S. & Goodman-Delahunty, J. (2009). *Disparities in Sentencing Decisions. Social Psychology of Punishment of Crime*. USA: John Wiley & Sons.
- Tavares, M.(2011). *Feminismos, percursos e desafios*. Lisboa: Texto Editora.
- Tonry, M. (1997). *Sentencing Matters*. New York: Oxford University Press.
- Touraine, A. (1982). *Pela Sociologia*. Lisboa: D. Quixote.
- Tulkens, F. & Kerchove, M. (1996). “La justice pénale: justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée?”. In *Revue de Droit Pénal et de Criminologie*, pp. 443 - 468.
- Tulkens, F. (1986). Un Chapitre de l’histoire des réformateurs – Adolphe Prins et la défense sociale. In Prins, A. (1986). *La Défense Sociale et Les transformations du droit pénal*. Editions Médecine et Hygiène.
- Turiel, A. (2011). *A influência da Psicologia no discurso do sentenciador: Severidade «Punitiva» e psicologização na justiça de menores em Portugal*. Dissertação de Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão Social, apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa: UHTL.

- Urra, J. (Comp. (2002). *Tratado de Psicología Forense*. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
- Vicente, Ana (1998). *As Mulheres em Portugal na Transição do Milénio*. Coimbra:Multinova.
- Wagner, P.(2011). Violence and justice in global modernity: Reflections on South Africa with world-sociological intent. In *Sage publications: Social Science Information*, 50, pp. 483-504.
- Wacquant, L. (2000). *Prisões da miséria*. Oeiras: Celta.
- Walgrave L. (1992). *Délinquance systématisée des jeunes et vulnérabilité sociétale : essai de construction d'une théorie integrative*. Geneve: Edições Médecine et hygiène, Méridiens-Klincksieck.
- Walker, L. (1989). *Terrified Love: Why Battered Women Kill and How Society Responds*. New York: Harper & Row.
- WHO (2011). World Health Organization. web site: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html>
- Zaffaroni, E., Batista, N.; Alagia, A. & S. (2003). *Diriето penal brasileiro: teoria geral do direito penal*. Rio de Janeiro: Ed. Revan.
- Zlotnick, C., Johnson, D., & Konh, R. (2006). Intimate partner violence and long-term psychosocial functioning in a national sample of American women. In *Journal Interpersonnel Violence*, 21(2), pp. 262-275.

Apêndices

Anexo I

**ÍNDICE DE SEVERIDADE
PENALIZADORA
E PSICOLOGIZAÇÃO
(CRIMINALIZAÇÃO
SECUNDÁRIA - ISPP-CS)**

Carlos Alberto Poiares
2009

ISPP-(CS)

Tribunal de	_____
Singular <input type="checkbox"/>	Colectivo <input type="checkbox"/>
Nº convencional	_____
Número de arguidos	_____
Decisão	
Absolutória <input type="checkbox"/>	_____
Condenatória <input type="checkbox"/>	_____
Pena(s) Aplicada(s)	

Data: _____

A(O) Assistente de Investigação,

ARGUIDO 1

DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Naturalidade: Urbana

Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Idade _____

Género: Masculino Feminino

Profissão _____

Empregado (a)

Desempregado(a) Há quanto tempo? _____

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

- Casado(a)
- União de facto
- Divorciado(a)
- Separado(a) de facto
- Em processo de separação
- Viúvo(a)

DIMENSÃO CULTURAL

Etnia _____

- Habilitações literárias. Iltrado
- Ensino primário completo incompleto
- Preparatório completo incompleto
- Secundário último ano concluído _____
- Licenciatura
- Outro Qual? _____

- Residência: Urbana Rural
- Freguesia _____
- Concelho _____
- Tipo de alojamento: _____

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: _____

ANAMNESE JUDICIAL

DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico _____

Acompanhamento Sim Não

Adicções Substância(s) _____

Toxicodependente Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico _____

Deficiência Sim Não

Qual? _____

DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Realizada perícia de personalidade Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Decisão sobre inimputabilidade Sim Não

Conclusões _____

A decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade

b) avaliação psicológica forense

Antecedentes criminais Sim Não

Crimes anteriormente cometidos _____

Medidas de coacção sofridas _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo _____

Multa _____

Prisão _____

Multa com pena suspensa _____

Prisão com pena suspensa _____

P T F C _____

Outras _____

Medidas de coacção neste processo _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

Cumpriu? Sim Não _____

Revogação da suspensão da pena Sim Não

Razão _____

Cumpriu a pena Sim Não _____

Tempo de reclusão cumprido _____

Liberdade condicional Sim Não

Revogação da liberdade condicional Sim Não

Razão _____

PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

ARGUIDO 2

DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Naturalidade: Urbana

Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Idade _____

Género: Masculino Feminino

Profissão _____

Empregado (a)

Desempregado(a) Há quanto tempo? _____

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

Casado(a)

União de facto

Divorciado(a)

Separado(a) de facto

Em processo de separação

Viúvo(a)

DIMENSÃO CULTURAL

Etnia _____

Habilitações literárias.

Iletrado

Ensino primário completo incompleto

Preparatório completo incompleto

Secundário último ano concluído _____

Licenciatura

Outro Qual? _____

Residência: Urbana Rural
 Freguesia _____
 Concelho _____
 Tipo de alojamento: _____

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: _____

ANAMNESE JUDICIAL

DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico

Acompanhamento Sim Não

Adicções Substância(s) _____

Toxicodependente Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico _____

Deficiência Sim Não

Qual? _____

DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Realizada perícia de personalidade Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Decisão sobre inimputabilidade Sim Não

Conclusões _____

A decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade

b) avaliação psicológica forense

Antecedentes criminais Sim Não

Crimes anteriormente cometidos _____

Medidas de coacção sofridas _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo _____

Multa _____

Prisão _____

Multa com pena suspensa _____

Prisão com pena suspensa _____

P T F C _____

Outras _____

Medidas de coacção neste processo _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

Cumpriu? Sim Não _____

Revogação da suspensão da pena Sim Não

Razão _____

Cumpriu a pena Sim Não _____

Tempo de reclusão cumprido _____

Liberdade condicional Sim Não

Revogação da liberdade condicional Sim Não

Razão _____

PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

ARGUIDO 3

DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Naturalidade: Urbana
Rural
Freguesia _____
Concelho _____
Idade _____

Género: Masculino Feminino

Profissão _____

Empregado (a)

Desempregado(a) Há quanto tempo? _____

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

Casado(a)

União de facto

Divorciado(a)

Separado(a) de facto

Em processo de separação

Viúvo(a)

DIMENSÃO CULTURAL

Etnia _____

Habilitações literárias. Iltrado

 Ensino primário completo incompleto

 Preparatório completo incompleto

 Secundário último ano concluído _____

 Licenciatura

 Outro Qual? _____

Residência: Urbana Rural

 Freguesia _____

 Concelho _____

 Tipo de alojamento: _____

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: _____

ANAMNESE JUDICIAL

DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico

Acompanhamento Sim Não

Adicções Substância(s) _____

 Toxicodependente Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico _____

Deficiência Sim Não

Qual? _____

DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Realizada perícia de personalidade Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Decisão sobre imputabilidade Sim Não

Conclusões _____

A decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade

b) avaliação psicológica forense

Antecedentes criminais Sim Não

Crimes anteriormente cometidos _____

Medidas de coacção sofridas _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo _____

Multa _____

Prisão _____

Multa com pena suspensa _____

Prisão com pena suspensa _____

P T F C _____

Outras _____

Medidas de coacção neste processo _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

Cumpriu? Sim Não _____

Revogação da suspensão da pena Sim Não

Razão _____

Cumpriu a pena Sim Não _____

Tempo de reclusão cumprido _____

Liberdade condicional Sim Não

Revogação da liberdade condicional Sim Não

Razão _____

PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

ARGUIDO 4

DIMENSÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Naturalidade: Urbana

Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Idade _____

Género: Masculino Feminino

Profissão _____

Empregado (a)

Desempregado(a) Há quanto tempo? _____

Reformado(a)

Estado civil: Solteiro(a)

Casado(a)

União de facto

Divorciado(a)

Separado(a) de facto

Em processo de separação

Viúvo(a)

DIMENSÃO CULTURAL

Etnia _____

Habilitações literárias.

Iletrado

Ensino primário completo incompleto

Preparatório completo incompleto

Secundário último ano concluído _____

Licenciatura

Outro Qual? _____

Residência: Urbana Rural

Freguesia _____

Concelho _____

Tipo de alojamento: _____

Relação afectiva ou de parentesco com os co-arguidos: _____

ANAMNESE JUDICIAL

DIMENSÃO CLÍNICA

Saúde mental: referência de diagnóstico

Acompanhamento Sim Não

Adicções Substância(s) _____

Toxicodependente Consumidor

Patologias físicas

Saúde física: referência de diagnóstico _____

Deficiência Sim Não

Qual? _____

DIMENSÃO FORENSE

Realizada avaliação psicológica forense Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Realizada perícia de personalidade Sim Não

Instituição Pública

Instituição Privada

Conclusões _____

Decisão sobre inimputabilidade Sim Não

Conclusões _____

A decisão foi fundamentada em:

a) perícia de personalidade

b) avaliação psicológica forense

Antecedentes criminais Sim Não

Crimes anteriormente cometidos _____

Medidas de coacção sofridas _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Medidas aplicadas:

Suspensão do processo _____

Multa _____

Prisão _____

Multa com pena suspensa _____

Prisão com pena suspensa _____

P T F C _____

Outras _____

Medidas de coacção neste processo _____

Prisão preventiva Sim Não Tempo _____

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

Cumpriu? Sim Não _____

Revogação da suspensão da pena Sim Não

Razão _____

Cumpriu a pena Sim Não _____

Tempo de reclusão cumprido _____

Liberdade condicional Sim Não

Revogação da liberdade condicional Sim Não

Razão _____

PROCESSO ACTUAL

Acompanhamento terapêutico durante o(s) processo(s) Sim Não

Qual? _____

PROCESSO ACTUAL

ARGUIDO 1

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

Medida de coação

Prisão Preventiva Sim Não Outro Qual? _____

Se o arguido está preso preventivamente, registre a seguinte informação:

a) preso desde o início do processo Sim Não ;

b) preso a partir de ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____

CRIMES IMPUTADOS

1. Tipo: _____

2. Preceito incriminador: _____

3. Dosimetria penal: de _____ a _____,

Com multa até _____

Sem multa

PROCESSO ACTUAL

ARGUIDO 2

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

Medida de coação

Prisão Preventiva Sim Não Outro Qual? _____

Se o arguido está preso preventivamente, registe a seguinte informação:

a) preso desde o início do processo Sim Não ;

b) preso a partir de ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____

CRIMES IMPUTADOS

4. Tipo: _____

5. Preceito incriminador: _____

6. Dosimetria penal: de _____ a _____,

Com multa até _____

Sem multa

PROCESSO ACTUAL

ARGUIDO 3

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

Medida de coação

Prisão Preventiva Sim Não Outro Qual? _____

Se o arguido está preso preventivamente, registe a seguinte informação:

a) preso desde o início do processo Sim Não ;

b) preso a partir de ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____

CRIMES IMPUTADOS

7. Tipo: _____

8. Preceito incriminador: _____

9. Dosimetria penal: de _____ a _____,

Com multa até _____

Sem multa

PROCESSO ACTUAL

ARGUIDO 4

Crime(s) por que está pronunciado(a) (indicar um por cada linha):

Medida de coação

Prisão Preventiva Sim Não Outro Qual? _____

Se o arguido está preso preventivamente, registe a seguinte informação:

a) preso desde o início do processo Sim Não ;

b) preso a partir de ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____

CRIMES IMPUTADOS

10. Tipo: _____

11. Preceito incriminador: _____

12. Dosimetria penal: de _____ a _____,

Com multa até _____

Sem multa

MEDIDA PENAL ADOPTADA

ARGUIDO 1

Pena aplicada a cada crime:

Cúmulo jurídico Sim Não

Pena em cúmulo jurídico _____

Prisão efectiva Sim Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? _____

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim Não

A perícia determinou o agravamento da pena? Sim Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? _____

Quais? _____

SINOPSE GERAL

(para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)

Dosimetria: 1º crime - de _____ a _____

2º crime - de _____ a _____

3º crime - de _____ a _____

4º crime - de _____ a _____

5º crime - de _____ a _____

6º crime - de _____ a _____

7º crime - de _____ a _____

8º crime - de _____ a _____

9º crime - de _____ a _____

Aplicada a lei dos Jovens Imputáveis: Sim Não

Pena aplicada: _____

Pena aplicada em cúmulo: _____

Cotação Total

MEDIDA PENAL ADOPTADA
ARGUIDO 2

Pena aplicada a cada crime:

Cúmulo jurídico Sim Não

Pena em cúmulo jurídico _____

Prisão efectiva Sim Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? _____

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim Não

A perícia determinou o agravamento da pena? Sim Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? _____

Quais? _____

SINOPSE GERAL

(para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)

Dosimetria: 1º crime - de _____ a _____

2º crime - de _____ a _____

3º crime - de _____ a _____

4º crime - de _____ a _____

5º crime - de _____ a _____

6º crime - de _____ a _____

7º crime - de _____ a _____

8º crime - de _____ a _____

9º crime - de _____ a _____

Aplicada a lei dos Jovens Imputáveis: Sim Não

Pena aplicada: _____

Pena aplicada em cúmulo: _____

Cotação Total

MEDIDA PENAL ADOPTADA
ARGUIDO 3

Pena aplicada a cada crime:

Cúmulo jurídico Sim Não

Pena em cúmulo jurídico _____

Prisão efectiva Sim Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? _____

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim Não

A perícia determinou o agravamento da pena? Sim Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? _____

Quais? _____

SINOPSE GERAL

(para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)

Dosimetria: 1º crime - de _____ a _____

2º crime - de _____ a _____

3º crime - de _____ a _____

4º crime - de _____ a _____

5º crime - de _____ a _____

6º crime - de _____ a _____

7º crime - de _____ a _____

8º crime - de _____ a _____

9º crime - de _____ a _____

Aplicada a lei dos Jovens Imputáveis: Sim Não

Pena aplicada: _____

Pena aplicada em cúmulo: _____

Cotação Total

MEDIDA PENAL ADOPTADA

ARGUIDO 4

Pena aplicada a cada crime:

Cúmulo jurídico Sim Não

Pena em cúmulo jurídico _____

Prisão efectiva Sim Não

Qual a medida penal efectivamente decretada? _____

A decisão referenciou a realização de avaliação psicológica? Sim Não

A decisão referenciou a realização de perícia de personalidade? Sim Não

A avaliação psicológica foi utilizada para suportar a atenuação da pena? Sim Não

A perícia de personalidade serviu de fundamento à atenuação da pena? Sim Não

A avaliação psicológica determinou o agravamento da pena? Sim Não

A perícia determinou o agravamento da pena? Sim Não

Na decisão foram invocadas razões para atenuação da pena? _____

Quais? _____

SINOPSE GERAL

(para aplicar face a todos os crimes por que o arguido foi condenado)

Dosimetria: 1º crime - de _____ a _____
2º crime - de _____ a _____
3º crime - de _____ a _____
4º crime - de _____ a _____
5º crime - de _____ a _____
6º crime - de _____ a _____
7º crime - de _____ a _____
8º crime - de _____ a _____
9º crime - de _____ a _____

Aplicada a lei dos Jovens Imputáveis: Sim Não

Pena aplicada: _____

Pena aplicada em cúmulo: _____

Cotação Total

Anexo II

CADERNO DE INSTRUÇÕES
&
COTAÇÃO
ÍNDICE DE SEVERIDADE
PENALIZADORA E
PSICOLOGIZAÇÃO
(CRIMINALIZAÇÃO
SECUNDÁRIA - ISPP-CS)

Carlos Alberto Poiares

2009

A) PENA RECLUSIVA**COTAÇÃO**

1. Insira, na folha de cotação, no ponto 1, o limite mínimo abstractamente previsto (em meses).
2. No ponto 2, inscreva os valores entre o mínimo previsto e o produto da divisão do limite máximo da pena por 4 (=25%).
3. No ponto 3, coloque as penas entre o máximo previsto no ponto 2 e o produto da divisão do limite máximo da pena por 2 (=50%).
4. Na coluna 4, anote os valores da pena entre o máximo do ponto 3 e 3/4 da pena máxima (=75%).
5. No ponto 5, inscreva o valor entre o máximo de 4 e o limite máximo da pena abstracta.
6. Nos pontos 2, 3, 4 e 5, proceda à divisão do intervalo máximo de meses por 4, anotando na folha de cotação os respectivos valores por ordem crescente.
7. Em cada ponto da escala, proceda à divisão do número de meses previsto por 4, sendo classificados como (i), (ii), (iii) e (iv), evoluindo o agravamento da pena abstracta de forma crescente: (i) corresponde a 25% do intervalo; (ii) a 50%; (iii) a 75% e (iv) a 100%.
8. Estabeleça a cotação da seguinte forma:
 - a. Pena inferior ao limite mínimo _____
0
 - b. Pena situada no limite mínimo _____ 1
 - c. Se a pena recair no ponto 2 _____ 2
 - d. Se a pena incidir no ponto 3 _____ 3
 - e. Se a pena se situar no intervalo do ponto 4 _____ 4
 - f. Se a pena aplicada atingir o ponto 5 _____ 5
9. Se a pena aplicada se situar na alínea i), desconte _____
0,5
10. Caso a pena recaia na alínea iv), adicione _____ 0,5
11. Se a pena for exactamente igual ao limite máximo, adicione _____ 0,5

Cotação Parcial =

**B) PENA RECLUSIVA COM OBRIGAÇÕES
COTAÇÃO**

Na circunstância de à pena reclusiva terem sido fixadas quaisquer obrigações, indique quais _____

e atribua _____ 0,5

Se não se verificar a fixação de obrigações atribua _____
0

Cotação Parcial =

C) PENA NÃO RECLUSIVA

COTAÇÃO

Observe o elenco das medidas indicadas e atribua a cotação fixada:

- i. Dispensa da pena _____ -1
- ii. Multa _____ 0

- iii. Suspensão da execução da pena (simples) _____ 1
 iv. Suspensão da execução da pena (com multa) _____ 2
 v. Suspensão da execução da pena (com obrigações) _____ 3

Indique quais as obrigações _____

- vi. Suspensão da execução da pena (com multa e obrigações) _____ 4
 Indique quais as obrigações _____

Cotação Parcial =

D) PENA ACESSÓRIA

COTAÇÃO

Indique qual _____
 Se ocorrer condenação em pena acessória atribua _____ 0,5

Cotação Parcial =

COTAÇÃO TOTAL

1. Estabeleça a cotação total utilizando a seguinte fórmula:

$$SP = A+B + D=,$$

sendo

- A) cotação parcial da alínea A) (pena reclusiva); e,
 B) cotação parcial da alínea B) (pena reclusiva com obrigações)
 D) cotação parcial da alínea D) (pena acessória)

COTAÇÃO TOTAL=

2. Caso seja aplicada pena não reclusiva, anotada em C), utilize a seguinte fórmula:

$$SP = (A+B+D) - C=,$$

sendo

E) cotação parcial da alínea C) (pena não reclusiva).

3. Na circunstância de a pena aplicada ser directamente uma pena não reclusiva - as medidas previstas em C) PENA NÃO RECLUSIVA, nas alíneas i) ou ii) – atribua a cotação correspondente pela aplicação da fórmula

$$SP = C$$

COTAÇÃO TOTAL EM CASO DE CÚMULO JURÍDICO

Caso a pena tenha sido aplicada em cúmulo jurídico, deverá estabelecer o índice de severidade da pena reclusiva em função dos limites mínimo e máximo em cúmulo jurídico, fixando a respectiva cotação na alínea A).

ÍNDICE DE SEVERIDADE

< 1 – MEDIDA BRANDA

1 OU 2 – SEVERIDADE MÍNIMA

3 – SEVERIDADE MÉDIA

= OU > 4 – SEVERIDADE ELEVADA

= OU > 5 – SEVERIDADE MÁXIMA

ÍNDICE DE SEVERIDADE PENALIZADORA E PSICOLOGIZAÇÃO (CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA - ISPP-CS)

CAP.2009

Medida Abstracta Aplicável: De _____ a _____

Pena concreta: _____

(Nota: em meses)

1				2 (=25%)				3 (=50%)				4 (=75%)				5 (=100%)			
i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)
i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)
i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)
i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)	i)	ii)	iii)	iv)

COTAÇÃO DA DIMENSÃO PSICOLOGIZAÇÃO

Atribua as cotações indicadas quando se verificarem as seguintes situações:

- a) Realizada avaliação psicológica forense _____
_____2
- b) Realizada perícia de personalidade _____
_____2
- c) Se não existir avaliação psicológica forense ou perícia de personalidade _____
_____0
- d) Se constar informação psicológica (por exemplo, parecer) _____
1
- e) Se constar informação psiquiátrica (por exemplo, parecer) _____
1
- f) Se não constar qualquer informação psicológica ou psiquiátrica _____
_____0
- g) Se as avaliações, perícias ou outras diligências psicológicas serviram de fundamento à decisão _____2
- h) Se as avaliações, perícias ou outras diligências psiquiátricas serviram de fundamento à decisão _____2
- i) Se os procedimentos elencados nas alíneas g) e h) não serviram de fundamento à decisão ou não foram referenciados _____
_____0

ÍNDICE PSICOLOGIZAÇÃO

0 – PSICOLOGIZAÇÃO NULA

1 – PSICOLOGIZAÇÃO MÍNIMA

2 a 3 – PSICOLOGIZAÇÃO MÉDIA

4 – PSICOLOGIZAÇÃO ELEVADA

5 – PSICOLOGIZAÇÃO MÁXIMA

Anexo III

Idade da vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
24	2	5,7	5,7	5,7
25	1	2,9	2,9	8,6
26	1	2,9	2,9	11,4
27	4	11,4	11,4	22,9
28	3	8,6	8,6	31,4
31	1	2,9	2,9	34,3
32	1	2,9	2,9	37,1
34	1	2,9	2,9	40,0
37	1	2,9	2,9	42,9
41	2	5,7	5,7	48,6
Valid 43	2	5,7	5,7	54,3
44	1	2,9	2,9	57,1
46	1	2,9	2,9	60,0
49	1	2,9	2,9	62,9
50	3	8,6	8,6	71,4
55	1	2,9	2,9	74,3
56	1	2,9	2,9	77,1
58	1	2,9	2,9	80,0
60	1	2,9	2,9	82,9
63	1	2,9	2,9	85,7
64	2	5,7	5,7	91,4

66	1	2,9	2,9	94,3
80	1	2,9	2,9	97,1
81	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo IV

Género da vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Masculino	4	11,4	11,4
Valid	Feminino	31	88,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Estado civil da vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Solteiro	18	51,4	51,4
	Casado	12	34,3	85,7
Valid	Divorciado	5	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Habilitações literárias da vítima

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1º Ciclo	4	11,4	13,8	13,8
	2º Ciclo	4	11,4	13,8	27,6
	3º Ciclo	6	17,1	20,7	48,3
Valid	Secundário	12	34,3	41,4	89,7
	Ensino universitário	2	5,7	6,9	96,6
	Analfabeto	1	2,9	3,4	100,0
	Total	29	82,9	100,0	
Missing	SI	6	17,1		
Total		35	100,0		

Situação profissional da vítima

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Desempregado	10	28,6	29,4	29,4
Valid	Empregado	21	60,0	61,8	91,2
	Aposentado	3	8,6	8,8	100,0
	Total	34	97,1	100,0	
Missing	SI	1	2,9		
Total		35	100,0		

Concelho (naturalidade) da vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Évora	1	2,9	2,9	2,9
Góis	1	2,9	2,9	5,7
Lisboa	29	82,9	82,9	88,6
Ourém	1	2,9	2,9	91,4
Ourique	1	2,9	2,9	94,3
Ponte de lima	1	2,9	2,9	97,1
Setúbal	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Relação com o/a denunciado/a

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Companheiro	13	37,1	37,1	37,1
Cônjuge	13	37,1	37,1	74,3
Valid Ex-cônjuge	4	11,4	11,4	85,7
Ex-companheiro	5	14,3	14,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Dependência económica da vítima em relação ao arguido

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	30	85,7	85,7
Valid	Sim	5	14,3	100,0
	Total	35	100,0	

Anexo V

Idade do arguido

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	24	1	2,9	2,9
	25	1	2,9	5,7
	27	1	2,9	8,6
	28	1	2,9	11,4
	30	2	5,7	17,1
	31	2	5,7	22,9
	32	2	5,7	28,6
	34	2	5,7	34,3
	35	1	2,9	37,1
	41	3	8,6	45,7
Valid	42	1	2,9	48,6
	43	2	5,7	54,3
	47	1	2,9	57,1
	48	1	2,9	60,0
	50	1	2,9	62,9
	55	1	2,9	65,7
	58	2	5,7	71,4
	59	1	2,9	74,3
	61	2	5,7	80,0
	62	2	5,7	85,7
	65	2	5,7	91,4

70	1	2,9	2,9	94,3
71	1	2,9	2,9	97,1
82	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo VI

Género do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Masculino	32	91,4	91,4	91,4
Valid	Feminino	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Estado civil do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Solteiro	18	51,4	51,4	51,4
	Casado	14	40,0	40,0	91,4
Valid	Divorciado	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

Habilitações literárias do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	1º Ciclo	9	25,7	36,0	36,0
	2º Ciclo	3	8,6	12,0	48,0
	3º Ciclo	3	8,6	12,0	60,0
Valid	Secundário	8	22,9	32,0	92,0
	Ensino universitário	1	2,9	4,0	96,0
	Analfabeto	1	2,9	4,0	100,0
	Total	25	71,4	100,0	
Missing	SI	10	28,6		
Total		35	100,0		

Profissão do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Agente Comercial	1	2,9	4,5	4,5
	Auxiliar	1	2,9	4,5	9,1
	Canalizador	1	2,9	4,5	13,6
Valid	Carpinteiro	1	2,9	4,5	18,2
	Distribuidor	1	2,9	4,5	22,7
	Electricista	1	2,9	4,5	27,3

	Empregado de Hotelaria	1	2,9	4,5	31,8
	Empregado de mesa	1	2,9	4,5	36,4
	Empresário	1	2,9	4,5	40,9
	Estucador	1	2,9	4,5	45,5
	Estudante	1	2,9	4,5	50,0
	Ladrilhador	1	2,9	4,5	54,5
	Motorista	2	5,7	9,1	63,6
	Motorista de táxi	2	5,7	9,1	72,7
	Motorista de veículos de pesados	1	2,9	4,5	77,3
	Pintor de Construção Civil	1	2,9	4,5	81,8
	Pintor de Construção Civil e de Arte	1	2,9	4,5	86,4
	Segurança	1	2,9	4,5	90,9
	Técnico Informático	1	2,9	4,5	95,5
	Vigilante	1	2,9	4,5	100,0
	Total	22	62,9	100,0	
Missing	SI	13	37,1		
Total		35	100,0		

Situação profissional do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Desempregado	12	34,3	35,3	35,3
	Activo/empregado	16	45,7	47,1	82,4
Valid	Aposentado	5	14,3	14,7	97,1
	Estudante	1	2,9	2,9	100,0
	Total	34	97,1	100,0	
Missing	SI	1	2,9		
Total		35	100,0		

Concelho (naturalidade) do arguido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Almada	1	2,9	2,9	2,9
	Amares	1	2,9	2,9	5,7
	Góis	1	2,9	2,9	8,6
	Lamego	1	2,9	2,9	11,4
Valid	Lisboa	23	65,7	65,7	77,1
	Loures	2	5,7	5,7	82,9
	Odivelas	1	2,9	2,9	85,7
	Porto	1	2,9	2,9	88,6
	Setúbal	2	5,7	5,7	94,3

Vila Saraiva	1	2,9	2,9	97,1
Viseu	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Dependência económica do arguido em relação à vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	34	97,1	97,1	97,1
Valid Sim	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo VII

Consumo de álcool

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	15	42,9	42,9	42,9
Valid Sim	20	57,1	57,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Consumo de estupefacientes

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	29	82,9	82,9	82,9
Valid Sim	6	17,1	17,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo VIII

Posse de arma

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	33	94,3	94,3	94,3
Valid Sim	2	5,7	5,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Registo Criminal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	25	71,4	71,4	71,4
Valid Sim	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Quantas condenações

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	25	71,4	71,4	71,4
1	5	14,3	14,3	85,7
2	2	5,7	5,7	91,4
Valid 3	2	5,7	5,7	97,1
4	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Outros processos relacionados com violência conjugal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	12	34,3	34,3	34,3
Valid Sim	23	65,7	65,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Número de processos de violência conjugal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	12	34,3	34,3	34,3
1	13	37,1	37,1	71,4
2	4	11,4	11,4	82,9
Valid 3	3	8,6	8,6	91,4
4	2	5,7	5,7	97,1
6	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo IX

Filhos menores

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	15	42,9	42,9
Valid	Sim	20	57,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Número de filhos de ambos

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	0	19	54,3	54,3
	1	10	28,6	82,9
Valid	2	4	11,4	94,3
	3	2	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Número de filhos da vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	0	26	74,3	74,3
	1	7	20,0	94,3
Valid	2	2	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Número de filhos do denunciado

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	0	29	82,9	82,9
	1	4	11,4	94,3
Valid	2	1	2,9	97,1
	3	1	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

A ocorrência foi presenciada por crianças (até 18 anos)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	22	62,9	62,9
Valid	Sim	13	37,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

CPCJ foi contactada

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	31	88,6	88,6
Valid	Sim	4	11,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo X

Tipo de violência

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Física	3	8,6	8,6	8,6
Psicológica	2	5,7	5,7	14,3
Física e psicológica	24	68,6	68,6	82,9
Física, psicológica, social e financeira	1	2,9	2,9	85,7
Valid Psicológica e sexual	1	2,9	2,9	88,6
Física, psicológica e social	1	2,9	2,9	91,4
Psicológica e social	1	2,9	2,9	94,3
Física, psicológica e sexual	2	5,7	5,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

TV: Física

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Não	4	11,4	11,4	11,4
Valid Sim	31	88,6	88,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

TV: Psicológica

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	3	8,6	8,6	8,6
Valid	Sim	32	91,4	91,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

TV: Social

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	32	91,4	91,4	91,4
Valid	Sim	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

TV: Financeira

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	34	97,1	97,1	97,1
Valid	Sim	1	2,9	2,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

TV: Sexual

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	32	91,4	91,4
Valid	Sim	3	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Consequências físicas para a vítima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Sem ferimentos	15	42,9	42,9
	Ferimentos ligeiros	17	48,6	91,4
Valid	Ferimentos graves	3	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Vítima observada no hospital

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	27	77,1	77,1
Valid	Sim	8	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Vítima em Internamento

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	32	91,4	91,4
Valid	Sim	3	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Os arguidos costumam exibir armas ou referi-las durante as ameaças ou agressões

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	28	80,0	80,0
Valid	Sim	7	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Ocorrências anteriores por agressões à vítima e/ou a outro familiar, praticadas pelo mesmo arguido

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	14	40,0	40,0
Valid	Sim	21	60,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Anexo XI

Pedido relatório Social/Avaliação Psicológica

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Não	22	62,9	62,9
Valid	Sim	13	37,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0

Anexo XII

Medida de coacção do DIAP

	Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Sem medida de coacção	1	2,9	2,9	2,9
Prisão preventiva	1	2,9	2,9	5,7
Sem medida de coacção	1	2,9	2,9	8,6
Termo de identidade - medida de coacção de proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio, com recurso a pulseira electrónica a fim de monitorizar o cumprimento da medida	1	2,9	2,9	11,4
Termo de identidade - medida de coacção de proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio, com recurso a pulseira electrónica a fim de monitorizar o cumprimento da medida. Mais se requer se efectue comunicação da aplicação de tal medida ao TFM para efeitos de regulação das responsabilidades parentais.	1	2,9	2,9	14,3
Valid d Termo de identidade - obrigação de não contactar a ofendida por qualquer meio - proibido de permanecer na residência onde ocorreram os factos	1	2,9	2,9	17,1
Termo de identidade e residência	14	40,0	40,0	57,1
Termo de Identidade e Residência	3	8,6	8,6	65,7
Termo de identidade e residência - Afastamento da residência	1	2,9	2,9	68,6
Termo de identidade e residência - afastamento da sua residência e proibição de contactos com a ofendida	1	2,9	2,9	71,4
Termo de Identidade e Residência - afastamento e proibição de contacto da vítima	1	2,9	2,9	74,3
Termo de identidade e residência - obrigação de não contactar, por qualquer meio, bem como de não permanecer junto da residência - medida de coacção seja fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância.	1	2,9	2,9	77,1

Termo de identidade e residência - proibição de contactar com a ofendida por qualquer meios	1	2,9	2,9	80,0
Termo de identidade e residência - proibição de contacto com o ofendido por qualquer meio	1	2,9	2,9	82,9
Termo de identidade e residência - proibição de contactos com a ofendida	1	2,9	2,9	85,7
Termo de identidade e residência e proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio , com recurso a pulseira electrónica	1	2,9	2,9	88,6
Termo de identidade e residência- proibição de contactos, por qualquer forma, com a ofendida - proibição de permanência no local da residência e de trabalho da ofendida	1	2,9	2,9	91,4
Termo de Indentidade e Residência	1	2,9	2,9	94,3
Termo de indentidade e Residência - Total proibição de contactos com a ofendida - Proibição de contactos por telefone. sms ou email, com a ofendida, com a excepção daqueles que se revelem essenciais ao ajustamento das questões relacionadas com o filho de ambos - Não pemanecer no perímetro de 300 metros face às áreas de residência e emprego da ofendida.	1	2,9	2,9	97,1
Termo de Indentidade e Residência (TIR)	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo XIII

Sentença

	Freque ncy	Perce nt	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Absolvido	1	2,9	2,9	2,9
Absolvido - Condenado por crime à integridade física simples	2	5,7	5,7	8,6
Pena de prisão (TRÊS) ANOS	1	2,9	2,9	11,4
Pena de prisão um ano e seis meses - pena acessória de proibição de aproximação ou contactos por qualquer meio - o que inclui meios telefónicos e informáticos - com a vítima ou desta se aproximar mais de cinquenta metros, pelo período de cinco anos	1	2,9	2,9	14,3
Pena suspensa - 1 (um) ano e 10 (dez) meses - Autor, de um crime de detenção I de arma proibida, na pena de 140 (cento e quarenta) dias de multa	1	2,9	2,9	17,1
Pena suspensa - 1 (um) ano e 2 (dois) meses	1	2,9	2,9	20,0
Valid d Pena suspensa - 1 (um) ano e 3 (três) meses - regime de prova plano individual de readaptação social a elaborar- sob condição de não contactar o assistente, por qualquer meio, seja presencial. por telemóvel. incluindo-se SMS e MMS ou correio electrónico.	1	2,9	2,9	22,9
Pena suspensa - 2 (dois) ano e 2 (dois) meses - um regime de prova, a ssente em plano individual de readaptação social, com a obrigação de responder a todas as convocatórias do tribunal e dos técnicos de reinserção social.	1	2,9	2,9	25,7
Pena Suspensa - 2 (dois) anos e 4 (qua tro) meses - pedido de indemnização civil (147 euros)	1	2,9	2,9	28,6
Pena Suspensa - 3 anos - Acompanhamento pscofarmacológico pelo Centro Hospitalar psiquiátrico de Lisboa	1	2,9	2,9	31,4
Pena suspensa 1 (um) ano e 2 (dois) meses - Pedido de indemnização civil €1.500 (mil e quinhentoseuros)	1	2,9	2,9	34,3

Pena suspensa 2 (Dois) anos - Indemnização civil 2.000 (dois mil euros)	1	2,9	2,9	37,1
Pena suspensa 2 (dois) anos - o regime de prova assenta na restrição dos contactos com a vítima aos estritamente necessários para o cumprimento das responsabilidades parentais - o local da sua residência ou local de trabalho, senão quando acordado entre arguido e vítima e no contexto do cumprimento das responsabilidades parentais - Proibição de insultar, denegrir ou agredir fisicamente a ofendida	1	2,9	2,9	40,0
Pena suspensa 2 (Dois) anos - sujeição a regime de prova - prova assentará num plano individual de readaptação social, executado com vigilância e apoio do Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Equipa competente	2	5,7	5,7	45,7
Pena suspensa 2 (dois) anos e 2 (dois) - subordinada à condição de se submeter a tratamento ao alcoolismo, com o apoio e fiscalização dos serviços de reinserção social - assente em plano individual de readaptação social	1	2,9	2,9	48,6
Pena suspensa 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses - regime de prova plano individual de reinserção social com incidência na vertente de adopção de comportamento socialmente adequado, a elaborar e executar sob vigilância - se necessário com apoio psicológico, devendo ser dado conhecimento semestral ao tribunal relativamente à forma de execução do plano e adesão do arguido ao mesmo.	1	2,9	2,9	51,4
Pena suspensa 2 (dois) anos e 6 (seis) meses - o regime de prova assenta não contactar a vítima por qualquer meio; não frequentar o local da sua residência ou local de trabalho - Indemnização civil 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) a título de danos não patrimoniais	1	2,9	2,9	54,3

<p>Pena suspensa 2 (dois) anos e 6 (seis) meses - o regime de prova assentará num plano individual de readaptação social -</p> <p>a) Responder às convocatórias do técnico de reinserção social ou do Tribunal; b) Receber visitas do técnico de reinserção social e comunicar-lhe ou colocar à sua disposição informações e documentos comprovativos pertinentes que lhe sejam solicitados; c) Informar o técnico de reinserção social e o Tribunal sobre alterações de residência ou emprego, bem como sobre qualquer deslocação superior a oito dias e sobre a data do previsível regresso; d) Colaborar com as intervenções propostas pela Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - o pedido de indemnização civil formulado pelo demandante CHLN e, conseqüentemente, condena o arguido/demandado a pagar-lhe: _ A quantia global de €141,00</p>	1	2,9	2,9	57,1
<p>Pena suspensa 2 (dois) anos e 6 (seis) meses - o regime de prova assentará num plano individual de readaptação social executado com vigilância e apoio da Direcção-Geral de Reinserção Social Equipa competente - pedido de indemnização civil 36,056,30 (trinta e seis mil, cinquenta e seis euros, trinta cêntimos)</p>	1	2,9	2,9	60,0
<p>Pena suspensa 2 anos e 6 meses</p>	1	2,9	2,9	62,9
<p>Pena suspensa 2 anos e 6 meses - Pedido de indemnização civil €1.000 (mil euros)</p>	1	2,9	2,9	65,7
<p>Pena suspensa 2 anos e 8 meses - Obrigação de o arguido não contactar, por qualquer meio, com a ofendida - a condição deste se sujeitar a Regime de Prova, mediante Plano Individual de Readaptação que lhe vier a ser definido pela DGRS - Pedido civil € 865,68</p>	1	2,9	2,9	68,6
<p>Pena suspensa 3 (três) anos - sujeição a regime de prova. o regime de prova assentará num plano individual de readaptação social</p>	1	2,9	2,9	71,4
<p>Pena suspensa 3 (três) anos - a regime de prova assente num plano individual de reinserção social - dar conhecimento semestral ao tribunal relativamente à forma de execução do plano</p>	1	2,9	2,9	74,3

<p>Pena suspensa 3 (três) anos - regime de prova de acordo com o Plano Individual de Readaptação Social - proibição de contactos com a ofendida por qualquer meio - proibição de se aproximar da residência da queixosa e do local de trabalho desta, proibição de ter em seu poder objectos capazes de facilitar a prática de crimes.</p>	1	2,9	2,9	77,1
<p>Pena suspensa 3 (três) anos e 6 (seis) meses - pena acessória de proibição de contactos com a ofendida, COM EXCEÇÃO DOS CONTACTOS POR TELEFONE, SMS OU EMAIL. QUE SE REVELEM ESSENCIAIS AO AJUSTAMENTO DAS QUESTÕES RELACIONADAS COM O FILHO DE AMBOS. - frequência, pelo período mínimo de 18 meses, do PAVD - Programa para Agressores de violência Doméstica, frequência esta que será acompanhada pela Direção Geral de Reinserção Social no âmbito do regime de prova</p>	1	2,9	2,9	80,0
<p>Pena suspensa 3 (três) anos e 6 (seis) meses - regime de prova, assente em plano individual de readaptação social, com a obrigação de responder a todas as convocatórias que para' o efeito lhe vierem a ser feitas pelo Tribunal e pelos técnicos de reinserção social - subordinada ao dever de proceder no prazo de 1 (um) ano ao depósito de € 112,07 (cento e doze euros e sete cêntimos) à ordem do Instituto de Gestão Financeira, quantia que será entregue, na sua totalidade, ao Centro Hospitalar de Lisboa Central - sanção acessória de proibição de contactos com a vítima, incluindo o afastamento da residência e do local de trabalho do(a) mesma(s), pelo período de 3 (três) anos e 6 (seis) meses</p>	1	2,9	2,9	82,9
<p>Pena suspensa de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses</p>	1	2,9	2,9	85,7
<p>Pena suspensa de 2 anos e 4 meses - Regime de Prova, mediante Plano Individual de Readaptação . pedido de indemnização cível (3000 euros)</p>	1	2,9	2,9	88,6
<p>Pena suspensa de 3 (três) anos - sujeição a regime de prova - prova assentará num plano individual de readaptação social, executado com vigilância e apoio do Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Equipa competente</p>	1	2,9	2,9	91,4

Pensa Suspensa - 2 anos e 6 meses - - Proibição de contactos com a vítima por qualquer meio - Não frequentar o local da sua residência ou local de trabalho	1	2,9	2,9	94,3
Pensa suspensa 2 (dois) anos e na pena acessória de proibição de contacto com a ofendida sujeita a monitorização electrónica - regime de prova assentará num plano individual de readaptação social, executado com vigilância e apoio do Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Equipa competente.	1	2,9	2,9	97,1
Pensa suspensa 4 (quatro) anos - Regime de prova assente Proibição do arguido de voltar a insultar, ameaçar ou agredir a vítima - Frequentarum programa para reabilitação de agressores em espaço doméstico - acompanhamento de todo o agregado familiar durante o período de suspensão e concertação com o Processo de promoção e protecção instalado relativamente à filha do casal, no sentido de partilha de informações colhidas, relativamente à dinâmica do agregado familiar.	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Magistrado do julgamento

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Masculino	7	20,0	20,0	20,0
Valid Feminino	28	80,0	80,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo XIV

Tempo que decorreu entre a queixa e a sentença (em meses)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	4	1	2,9	2,9
	5	1	2,9	5,7
	6	3	8,6	14,3
	7	1	2,9	17,1
	8	2	5,7	22,9
	9	1	2,9	25,7
	11	2	5,7	31,4
	12	4	11,4	42,9
Valid	13	1	2,9	45,7
	14	1	2,9	48,6
	17	3	8,6	57,1
	18	5	14,3	71,4
	19	1	2,9	74,3
	21	2	5,7	80,0
	24	3	8,6	88,6
	28	1	2,9	91,4
	36	3	8,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo XV

Índice de Severidade Penalizadora (%)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
0	4	11,4	11,4	11,4
13	2	5,7	5,7	17,1
24	1	2,9	2,9	20,0
27	1	2,9	2,9	22,9
28	1	2,9	2,9	25,7
29	2	5,7	5,7	31,4
31	2	5,7	5,7	37,1
34	2	5,7	5,7	42,9
36	4	11,4	11,4	54,3
38	2	5,7	5,7	60,0
Valid 39	1	2,9	2,9	62,9
41	2	5,7	5,7	68,6
44	1	2,9	2,9	71,4
47	4	11,4	11,4	82,9
48	1	2,9	2,9	85,7
53	1	2,9	2,9	88,6
58	1	2,9	2,9	91,4
59	2	5,7	5,7	97,1
66	1	2,9	2,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Anexo XVI

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade da vítima	35	24	81	43,69	16,316
Valid N (listwise)	35				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade do arguido	35	24	82	46,23	15,549
Valid N (listwise)	35				

Anexo XVII

Group Statistics

	Pedido relatório Social/Avaliação Psicológica	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Índice de Severidade	Não	22	30,91	17,054	3,636
Penalizadora	Sim	13	40,69	16,362	4,538

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Índice de Severidade	Equal variances assumed	,006	,938	-1,664	33	,106	-9,783	5,879	-21,744	2,178
	Equal variances not assumed			-1,682	26,18	,104	-9,783	5,815	-21,732	2,166

Anexo XVIII

Group Statistics

	Magistrado do processo	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Índice de Severidade	Masculino	7	38,14	7,493	2,832
Penalizadora	Feminino	28	33,64	18,908	3,573

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Índice de Severidade	Equal variances assumed	3,496	,070	,612	33	,545	4,500	7,352	-10,458	19,458
	Equal variances not assumed			,987	25,78	,333	4,500	4,559	-4,876	13,876

Anexo XIX

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tempo que decorreu entre a queixa e a sentença (em meses)	35	4	36	16,17	8,689
Valid N (listwise)	35				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Índice de Severidade Penalizadora	35	0	66	34,54	17,238
Valid N (listwise)	35				

Anexo XX

Group Statistics

	Outros processos relacionados com violência doméstica	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Índice de Severidade Penalizadora	Não	12	31,92	11,180	3,227
	Sim	23	37,39	18,173	3,789

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Índice de Severidade Penalizadora	Equal variances assumed	1,351	,253	-,950	33	,349	-5,475	5,762	-17,198	6,249
	Equal variances not assumed			-1,100	31,91	,280	-5,475	4,977	-15,614	4,665

Anexo XXI

Group Statistics

	RD_COD	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Índice de Severidade Penalizadora	Companheiro/conjuge	18	42,44	11,952	2,817
	Ex companheiro/conjuge	6	37,83	13,834	5,648

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Índice de Severidade Penalizadora	Equal variances assumed	,007	,936	,789	22	,439	4,611	5,848	-7,516	16,738
	Equal variances not assumed			,731	7,658	,487	4,611	6,311	-10,056	19,278

Anexo XXII

Group Statistics

	A ocorrência foi presenciada por crianças (até 18 anos)	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Índice de Severidade Penalizadora	Não	22	33,27	14,623	3,118
	Sim	13	39,31	18,459	5,120

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower		Upper
Índice de Severidade Penalizadora	Equal variances assumed	,950	,337	-1,070	33	,292	-6,035	5,640	-17,511	5,441
	Equal variances not assumed			-1,007	20,90	,326	-6,035	5,994	-18,504	6,434